MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO RV: Exp. 11001310301020190026701 H.M. Dra. Aida Victoria Lozano Sustentación por escrito recurso de apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/08/2023 17:01

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (895 KB)
Exp. 2019-00267 Sustentación de la parte demandada del Recurso de Apelación contra la sentencia de 1a instancia.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: andrescastilloabogado@gmail.com <andrescastilloabogado@gmail.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 16:58
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Exp. 11001310301020190026701 H.M. Dra. Aida Victoria Lozano Sustentación por escrito recurso de apelación

Respetados señores, con el fin de poder eventualmente demostrar la presentación oportuna de la sustentación del asunto, adjunto al presente mensaje la sustentación por escrito del Recurso de Apelación contra la sentencia de primera instancia. Los datos del proceso son:

Expediente: 11001310301020190026701
Despacho: H.M. AIDA VICTORIA LOZANO SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Demandantes: DIANA CAROLINA RIVEROS MARÍN Y OTRO
Demandado: IVÁN SALAZAR DE FRANCISCO
Asunto: Sustentación por escrito del Recurso de Apelación contra la sentencia de 1a instancia

Atentamente,

Andrés Mauricio Castillo Lozano
C.C. 79.781.386
T.P. 121.825

Honorable Magistrada

AIDA VICTORIA LOZANO RICO

SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

Ref.: 11001310301020190026701
Despacho: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Demandantes: DIANA CAROLINA RIVEROS MARÍN, VICTOR MANUEL
Demandado: IVÁN SALAZAR DE FRANCISCO

Asunto: Sustentación por escrito de la parte demandada del Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia de primera instancia

Respetada Sra. Magistrada

Obrando en mi calidad de apoderado de la parte demandada en el proceso de la referencia, mediante el presente escrito respetuosamente me dirijo al despacho para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 28 de julio de 2023, **notificado en el estado de fecha 31 del mismo mes año,** y en consecuencia, proceder a **SUSTENTAR por escrito el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de 1ª instancia**, a lo cual procedo en los siguientes términos:

SUSTENTACIÓN

1.CONCRECIÓN DE LOS REPAROS A LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Del protuberante error de hecho derivado de la ostensiblemente errónea apreciación de las pruebas

Para concretar lo expuesto en la interposición del recurso, resulta necesario señalar que el Sr. Juez Décimo (10) Civil del Circuito de Bogotá, incurrió en unos protuberantes errores de hecho, que lo condujeron a la violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política.

DEMOSTRACIÓN DE LOS ERRORES DE HECHO

El Sr. Juez de primera instancia supuso la existencia de unas pruebas, omitió la apreciación de otras y apreciación erróneamente las que sustenta el fallo.

1. DE LA SUPOSICIÓN DE UNAS INEXISTENTES PRUEBAS

El fallo está fundamentado en dos párrafos, en los que el honorable tribunal podrá verificar que se configuraron los errores de hecho expuestos al momento de interponer el recurso. En efecto, en el párrafo contenido en el título: "CASO CONCRETO" que está en la página 7 de la sentencia, el despacho sostuvo:

> *"…En el caso de marras,* ***se concreta la resolución del contrato en el incumplimiento por parte del demandado de la cláusula séptima, la cual señala: entrega: el prometiente vendedor hará la entrega real y material de los inmuebles prometidos en venta a los prometientes compradores,*** *con sus anexidades, usos, servidumbres el día de la firma de la promesa de compraventa es decir el 8 de marzo de 2019 a las 4:00 pm.*
>
> *Dicha obligación se defraudó con el escrito aportado al plenario a folio 18 del cuaderno principal, en donde el demandado informa a la administración del Conjunto Plaza San Joaquín, que ingresa el señor Víctor Manuel Sánchez Buitrago en* ***calidad de arrendatario****, es*

> *decir no hizo entrega material de los inmuebles como propietarios,* ***generando una incertidumbre respecto de las obligaciones posteriores por parte de la parte compradora y acá demandante…"***

Al leer el precitado aparte del fallo se preguntará el Honorable Tribunal ¿Con base en cuál prueba, el Sr. Juez de primera instancia arribó a la conclusión de que existía una incertidumbre en la parte demanda? Y la respuesta es: En ninguna, porque sencillamente no existe prueba alguna de la tal incertidumbre.

Y es que el Sr. Juez, supuso que los demandantes no habían cumplido el contrato de promesa de compraventa justificando que no se presentaron a firmar la Escritura Pública el día convenido en la Cláusula 6 del mismo, porque según el despacho, tuvieron una "incertidumbre" respecto de si el Sr. demandado sí cumpliría, sin embargo, el Sr. Juez no motiva tal conclusión en ninguna prueba obrante en el expediente, es decir, ¿Cómo tuvo conocimiento el Sr. Juez de la tal incertidumbre? ¿Pueden las personas incumplir los contratos -no solo el de promesa aquí debatido- ante la incertidumbre de si la otra parte cumplirá? Peligroso, inconstitucional e ilegal precedente se asentaría con tan ilógica conclusión.

De manera que la suposición del Sr. Juez de ese tal estado mental de "incertidumbre", deja en evidencia el error de hecho, consistente en concluir un hecho que por lo demás ni siquiera fue alegado por los demandantes, con base en una prueba inexistente, que, según el despacho, los eximió de presentarse a firmar la Escritura Pública, de conformidad con lo pactado en la promesa.

2. DE LAS PRUEBAS ERRÓNEAMENTE APRECIADAS

La prohibición de ingresar al inmueble que refiere el Sr. Juez, fue impartida por el Sr. demandado en virtud del **contrato de tenencia de bien inmueble**, **celebrado con los demandantes y no el contrato de promesa,** por tanto, el Sr. Juez de primera instancia se extravió respecto del contrato que debía declarar o no incumplido.

En efecto, en el ya citado numeral 6 de la sentencia, el honorable Tribunal podrá verificar que el Sr. Juez se refiere a los demandantes como "arrendatarios", ¿por qué? Porque además del contrato de promesa, las partes suscribieron un contrato de tenencia del inmueble prometido en venta, razón por la cual, bastará que se verifique, pero en la promesa de compraventa, que las partes no pactaron el ingreso previo al inmueble, ni condicionaron el cumplimiento de sus obligaciones contractuales al mismo, ni mucho menos a lo pactado en otro contrato.

Por lo anterior, brilla al ojo la protuberantemente errónea apreciación de las pruebas, pues el Sr. Juez debía circunscribir su análisis al contrato de promesa, y no al de tenencia, pues al interior del proceso, solamente se debatía el contrato de promesa, con lo cual resultó vulnerado el derecho fundamental al Debido Proceso del Sr. demandado, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, pues justificar el incumplimiento de los demandados en otro contrato que no era objeto de debate, implica que el demandado fue sorprendido durante el proceso, ya no solo por la contraparte, sino por el despacho mismo.

Aunado a lo anterior, sustentar la sentencia en otro contrato que no era objeto de debate, implica también implica la violación del artículo 83 de la Constitución Política, que consagra el principio de buena fe, y de buena fe el Sr. demandado, sí se presentó a firmar la Escritura Pública pactada en la promesa, mientras que fueron los demandantes quienes se abstuvieron de presentarse en la fecha acordada, con lo cual, el Sr. Juez de primera instancia, en palabras de la Sala Civil de la Corte Suprema "alteró" el contenido de la misma:

> ***"El juzgador ad quem extractó que estaba justificada la falta del prometiente comprador, porque pago íntegramente el precio, como si esta prestación lo inhibiera de asistir a signar el contrato de compraventa***.

> ***En tal orden de ideas, no cabe duda de que el juez colegiado alteró el contenido de la promesa, por cuanto extractó de ella una conclusión ajena a la misma"***
>
> ***Lo anterior porque el desacuerdo de las partes en relación con el proyecto de otro si elaborado por la constructora, así como el pago del precio de forma anticipada no justificaba el incumplimiento dela promesa; Por el contrario, denotaba el deber, para los extremos negociantes, de cumplir las prestaciones en la forma inicialmente convenida..."*** ***(Negrilla, Cursiva y Subraya no son del texto)***
> Corte Suprema de Justicia Sentencia SC2307 del 25 de Julio de 2018 Radicación 11OO12018—31—03-024—2003—00690—01

Bastará entonces la verificación del Contrato de Promesa y de la constancia de comparecencia, para que el Honorable Tribunal arribe a la conclusión de que desafortunadamente el Sr. Juez de primera instancia -tal como lo sostiene la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el precitado precedente vinculante- "alteró" el contenido de lapromesa, lo cual lo condujo a justificar el incumplimiento de la parte demandante, en un contrato completamente ajeno a la Litis.

3. PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR

En la página 8 de la sentencia el Sr. Juez fundamentó el fallo en unos contraevidentes incumplimientos del Sr. demandado, en cuanto a la demostración de su **"estado civil"**, sin advertir que en el expediente obra prueba documental que da cuenta de que el Sr. demandado ***sin estar obligado a ello***, les facilitó a los demandantes los documentos para la obtención del crédito para pagar el precio, que dejan evidencia que al absolver el interrogatorio de parte decretado por el despacho, los demandantes faltaron a la verdad

En efecto, sostuvo el despacho:

> ***"Ahora bien, es cierto que la parte vendedora acudió el día 25 de abril de 2019 a protocolizar la escritura pública que formalizaría el negocio jurídico celebrado entre las partes, lo cierto es que; el día 02 de abril de 2019, el banco BBVA realizó estudio de títulos de los inmuebles en cita haciendo unas recomendaciones respecto del estado civil del demandado y dichas recomendaciones no fueron atendidas por el vendedor, en esa medida se puso en riesgo el otorgamiento del crédito con el que se sufragarían los demás pagos para completar el precio de los inmuebles."***

Bastará entonces que el Honorable Tribunal verifique las conversaciones de *WhatsApp* obrantes en el expediente, que fueron aportadas por el Sr. demandado para demostrar la veracidad de la declaración que rindió durante el interrogatorio de parte, en la que con fecha 2 de abril de 2019, dice textualmente:

> **"Hola Carolina te envío la escritura de Divorcio-Liquidación de Sociedad Conyugal"**

Por lo anterior, **resulta a todas luces contraevidente la conclusión del despacho, por falta de apreciación de la precitada conversación, de que supuestamente fue el Sr. demandado quien: "no atendió las recomendaciones del banco para demostrar su estado civil"**, y por el contrario, quedó demostrado que los demandantes faltaron a la verdad, tanto en la demanda, como al absolver el interrogatorio de parte, pues fue debido a su propia culpa y mala fe, que no obtuvieron el crédito para pagar el precio pactado en el contrato de promesa de compraventa, y que debido a ello,

contrario a lo concluido por el despacho, fueron ellos quienes lo incumplieron.

4. El contrato de promesa fue celebrado entre las partes y no entre el Sr demandado y el banco

El ostensible yerro del despacho queda en evidencia, **pues la obligación de obtener el crédito para pagar el precio pactado no era del Sr. demandado, sino de los demandantes,** toda vez que el banco no es parte en el contrato, por tanto, ni le son oponibles las obligaciones de los contratantes, ni este puede exigírselas.

A pesar de lo anterior, el Sr. demandante obrando de buena fe, les facilitó a los demandantes los documentos necesarios para la obtención del crédito para pagar el precio del inmueble prometido en venta, y fueron ellos, quienes, debido a su propia culpa, no los entregaron y además decidieron unilateralmente no presentarse en la fecha y hora pactadas en le promesa a firmar la escritura pública.

5. La suposición de pruebas inexistentes, la errónea apreciación de las obrantes en el expediente y la falta de apreciación de otras, condujo a la aplicación indebida de los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio y a la violación directa del artículo 1602 del Código Civil

En la parte motiva de la sentencia, el Sr. Juez sustenta su decisión de declarar el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa por parte del Sr. demandado, en la supuesta ocurrencia de condición resolutoria tácita prevista en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, debido a la supuesta "incertidumbre" que generó en la parte demandante la prohibición de ingreso al inmueble que les había sido conferida por el Sr. demandado ¡**pero en virtud de un contrato de tenencia del bien prometido en venta!**, muy a pesar de que tal y como el mismo Sr Juez de primera instancia declaró probado en la sentencia, el Sr. demandado sí cumplió el contrato de promesa.

Por lo anterior, el despacho aplicó indebidamente los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, pues en palabras de la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ***alteró el contenido de la promesa***, aplicando la condición resolutoria tácita y justificando el incumplimiento de los demandantes en una supuesta "incertidumbre" que nada tuvo que ver con el contrato de promesa de compraventa celebrado, sino con un contrato de tenencia celebrado entre las partes, al punto de que el mismo Sr. Juez, en el antecitado aparte de la sentencia, califica a los demandantes como "arrendatarios".

Así, lo que correspondía, era que el Sr. Juez con base en el artículo 1602 del Código Civil que consagra que "**el contrato es ley para las partes",** declarara incumplido por parte de los demandantes lo pactado en la promesa, norma infringida de manera directa por el despacho en el fallo, por falta de aplicación, pero a la parte demandante.

En este orden, bastará que el Honorable Tribunal contraste los interrogatorios de parte rendidos tanto por los demandantes como por el Sr. demandado con los documentos aportados por el Sr. demandado que fueron dejados de apreciar, para que concluya que lo que correspondía era que el Sr. Juez declarara incumplido el contrato de promesa de compraventa, pero por parte de los demandantes.

6. INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

En aras de la brevedad, baste con concretar que existe una incongruencia entre lo pretendido y lo fallado, pues el litigio versó respecto del Contrato de Promesa de Compraventa celebrado entre las partes, y por las razones ya expuestas, el Sr. demandado resultó condenado por una decisión

tomada con base en un contrato de tenencia, cuando la supuesta “incertidumbre” de los demandantes, ni siquiera fue alegada por ellos en la demanda ni a lo largo del proceso, de manera que resulta inexplicable que el Sr. Juez de primera instancia haya motivado la sentencia en una situación de hecho que ni siquiera fue alegada por los demandantes.

7. VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DEL DEMANDADO

Por las razones ya expuestas, la sentencia vulneró el debido proceso del Sr. demandado, pues contrario a lo sostenido por el Sr. Juez de primera instancia, el Sr. demandado sí cumplió con lo pactado en la Cláusula 6 de la promesa, a pesar de lo cual, fue condenado de manera contraevidente a las pruebas practicadas y con base en suposiciones del Sr. Juez de primera instancia carentes de todo sustento fáctico.

PETICIÓN

Por las razones expuestas, respetuosamente solicito al Honorable Tribunal se sirva revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, proferir una en la que absuelva al Sr. demandado de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Del Honorable Tribunal,

Andrés Mauricio Castillo Lozano
C.C. 79.781.386
T.P. 121.825

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZAMUDIO MORA RV: Rad. 2021-00060 03 RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO DE APLEACION- LUZ MARINA MORALES DE SOACHA - JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 10/08/2023 15:26

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (143 KB)
230810.RECURSO.AUTO.ADMITE.RECURSO.APELACION.VF.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZAMUDIO MORA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Edward Cristancho <edwardcristancho@crabogados.co>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 15:21
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Edward Cristancho <ecristancho@bonillacristancho.com>; Lorena Cifuentes <lorenacifuentes@crabogados.co>; Angela Viviana Velasquez Lesmes <vivianavelasquez@crabogados.co>
Asunto: Rad. 2021-00060 03 RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO DE APLEACION- LUZ MARINA MORALES DE SOACHA - JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA CINCO CIVIL
Mag. Ponente MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Clase	**:**	**EJECUTIVO SINGULAR**
Proceso No.	**:**	**11001310301120210006003**
Demandante	**:**	**LUZ MARINA MORALES DE SOACHA**
Demandados	**:**	**JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**
Asunto	**:**	**Recurso de Reposición contra Auto que Admite Recurso de Apelación contra sentencia escrita que el 9 de junio de 2023 profirió el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá**

EDWARD ALBERTO CRISTANCHO MENDIETA, identificado personal y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., actuando en calidad de apoderado judicial de la sociedad **JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S**., con fundamento en el artículo 318 y 319 del Código General del Proceso, presento Recurso de Reposición en contra del auto de fecha 4 de agosto de 2023, mediante el cual se admitió el Recurso de Apelación contra sentencia escrita que el 9 de junio de 2023 profirió el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá. de conformidad al documento adjunto.

Mi representada, así como el suscrito apoderado, recibiremos notificaciones en el correo electrónico edwardcristancho@crabogados.co.

Cordialmente,



Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA CINCO CIVIL
Mag. Ponente MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Clase	:	**EJECUTIVO SINGULAR**
Proceso No.	:	**11001310301120210006003**
Demandante	:	**LUZ MARINA MORALES DE SOACHA**
Demandados	:	**JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**
Asunto	:	**Recurso de Reposición contra Auto que Admite Recurso de Apelación contra sentencia escrita que el 9 de junio de 2023 profirió el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá**

EDWARD ALBERTO CRISTANCHO MENDIETA, identificado personal y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., actuando en calidad de apoderado judicial de la sociedad **JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**, con fundamento en el artículo 318 y 319 del Código General del Proceso, presento Recurso de Reposición en contra del auto de fecha 4 de agosto de 2023, mediante el cual se admitió el Recurso de Apelación contra sentencia escrita que el 9 de junio de 2023 profirió el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, con base a los siguientes:

I. OPORTUNIDAD

El Código General del Proceso en sus artículos 318 y 319 establece que las providencias son susceptibles del recurso de reposición, salvo que la norma establezca expresamente que un determinado auto no es susceptible de ningún recurso. Tratándose de providencias proferidas fuera de audiencia, el recurso debe ser interpuesto y sustentado en el término de su ejecutoria, esto es, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.

Teniendo en cuenta que la providencia que se recurre fue notificada por estado el día 4 de agosto de 2023, el presente escrito resulta oportuno.

II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA

En la providencia proferida el 4 de agosto de 2023, el Despacho admitió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto contra sentencia escrita que el 9 de junio de 2023 profirió el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá; sin embargo, en el último inciso de la providencia el Despacho determinó:

> *"So pena de los efectos procesales correspondientes, la* ***sustentación de las alzadas admitidas versará, únicamente, sobre los reparos concretos que se presentaron contra el fallo de primer grado****, conforme lo regula el inciso final del artículo 237 del CGP y la jurisprudencia (CSJ. SC3148-2021 y STC12927-2022)".* (negrilla y subraya fuera de texto)

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO

De manera respetuosa se manifiesta al Despacho que a la luz del segundo inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, cuando ambas partes hayan recurrido la sentencia, el superior podrá resolver el recurso de apelación sin limitaciones, tal cómo se expone a continuación:

> *"**ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR**. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.*
>
> *Sin embargo,* ***cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia*** *o la que no apeló hubiere adherido al recurso,* ***el superior resolverá sin limitaciones*** *(…)".* (subraya en negrilla fuera de texto)

En tal sentido, la interpretación racional de este artículo permite inferir que en el caso concreto el Despacho tiene competencia panorámica para revisar todos los asuntos relativos al proceso, en especial para revisar de oficio el mandamiento de pago.

ESPACIO EN BLANCO

IV. SOLICITUD

Atendiendo a las consideraciones previamente expuestas, solicito de manera respetuosa al Despacho: Conceder el recurso de reposición interpuesto y, en consecuencia, REVOCAR DE MANERA PARCIAL el auto admisorio del Recurso de Apelación contra sentencia escrita que el 9 de junio de 2023 profirió el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá y adecúe para que el Despacho tenga competencia panorámica de todos los argumentos del proceso en el momento de proferir la sentencia.

Del señor Juez,



EDWARD ALBERTO CRISTANCHO MENDIETA
C.C. 1.022.326.787
T.P. 193.563 del C. S. de la J.
CEL: **3186378144**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO RV: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RAD. 2019 - 00433-03

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 04/08/2023 16:02

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (606 KB)

SUSTENTACIÓN RECURSO APELACIÓN FERNANDO VALBUENA VS CONSORCIO RIOSECO 2019-00433-01.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Vergara Rueda <vergararueda.abogados@gmail.com>
Enviado: viernes, 4 de agosto de 2023 15:40
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RAD. 2019 - 00433-03

Señores
MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Magistrada Dra. AÍDA VICTORIA LOZANO RICO
Bogotá D.C.

ASUNTO:	**SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**
PROCESO:	**EJECUTIVO SINGULAR**
RADICADO:	**2019-00433-03**
DEMANDANTE:	**FERNANDO VALBUENA BARRIOS**
DEMANDADOS:	**CONSORCIO RIO SECO Y OTROS**

ANDERSON VERGARA BUSTOS, mayor de edad e identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, con domicilio principal en el municipio de Honda – Tolima, correo electrónico judicial@vergarayrueda.com y vergararueda.abogados@gmail.com, actuando en calidad de apoderado judicial del señor FERNANDO VALBUENA BARRIOS, demandante dentro del proceso de la referencia y atendiendo a lo ordenado en el Auto de fecha 28 de julio de 2023 proferido por la Magistrada Dra. Aída Victoria Lozano Rico, por medio del presente escrito me permito presentar a su despacho **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN** los cuales se sujetan, ratifican y amplia con base en los reparos concretos expuestos

ante el *ad quo* allegado al juez de primera instancia mediante correo electrónico de fecha 22 de junio de 2023.

Cordialmente,

ANDERSON VERGARA
Abogado

"El que hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito"
F. Cabral

Señores
MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Magistrada Dra. AÍDA VICTORIA LOZANO RICO
Bogotá D.C.

ASUNTO:	**SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**
PROCESO:	**EJECUTIVO SINGULAR**
RADICADO:	**2019-00433-03**
DEMANDANTE:	**FERNANDO VALBUENA BARRIOS**
DEMANDADOS:	**CONSORCIO RIO SECO Y OTROS**

ANDERSON VERGARA BUSTOS, mayor de edad e identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, con domicilio principal en el municipio de Honda – Tolima, correo electrónico judicial@vergarayrueda.com y vergararueda.abogados@gmail.com, actuando en calidad de apoderado judicial del señor FERNANDO VALBUENA BARRIOS, demandante dentro del proceso de la referencia y atendiendo a lo ordenado en el Auto de fecha 28 de julio de 2023 proferido por la Magistrada Dra. Aída Victoria Lozano Rico, por medio del presente escrito me permito presentar a su despacho **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN** los cuales se sujetan, ratifican y amplia con base en los reparos concretos expuestos ante el *ad quo* allegado al juez de primera instancia mediante correo electrónico de fecha 22 de junio de 2023, tal como se evidencia en la siguientes imagen



4/8/23, 11:25 Gmail - AMPLIACIÓN DE LOS REPAROS CONCRETOS (RECURSO DE APELACIÓN) SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA RAD 20...

Gmail Vergara Rueda <vergararueda.abogados@gmail.com>

AMPLIACIÓN DE LOS REPAROS CONCRETOS (RECURSO DE APELACIÓN) SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA RAD 2019-00433

1 mensaje

Vergara Rueda Abogados <judicial@vergarayrueda.com> 22 de junio de 2023, 14:49
Para: cctc12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, aabeltran@bpconstructores.com, edificando@telmex.net.co, notificaciones-judiciales-wspcolombia@wspgroup.com, vergararueda.abogados@gmail.com, consorcioriosseco@gmail.com, co.notificacionesjud@wsp.com, juanferespinosa@yahoo.com

Doctor

JUEZ DOCE (12) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá D.C.

ASUNTO:	**AMPLIACIÓN REPAROS CONCRETOS SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA**
PROCESO:	**EJECUTIVO SINGULAR**
RADICADO:	**2019-00433**
DEMANDANTE:	**FERNANDO VALBUENA BARRIOS**
DEMANDADOS:	**CONSORCIO RIO SECO Y OTROS**

ANDERSON VERGARA BUSTOS, mayor de edad e identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, con domicilio principal en el municipio de Honda – Tolima, correo electrónico judicial@vergarayrueda.com y vergararueda.abogados@gmail.com, atendiendo a lo dispuesto en el numeral tercero del art. 322 del CGP y lo ordenado por el señor Juez en la audiencia de alegatos finales y fallo proferida dentro del presente proceso ejecutivo singular el pasado 16 de junio de 2023, y encontrándonos en términos legales, por medio del presente escrito me permito presentar a su despacho **AMPLIACIÓN DE LOS REPAROS CONCRETOS (RECURSO DE APELACIÓN)** que se realiza en contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá el 16/06/2023, en los siguientes términos que se exponen en el documento que se adjunta.

Cordialmente,

--
Anderson Vergara
Abogado
Telefono 313 862 3790
judicial@vergarayrueda.com
www.vergarayrueda.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=50f291a952&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1769433611246297681&simpl=msg-f:1769433611246297681 1/2



4/8/23, 11:25 Gmail - AMPLIACIÓN DE LOS REPAROS CONCRETOS (RECURSO DE APELACIÓN) SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA RAD 20...

VERGARA & RUEDA ABOGADOS

"El que hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito"

F. Cabral

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de VERGARA & RUEDA ABOGADOS S.A.S.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of VERGARA & RUEDA ABOGADOS S.A.S.

2 adjuntos

AMPLIACIÓN DE LOS REPAROS CONCRETOS (RECURSO DE APELACIÓN) RAD 2019-00433.pdf 458K

judicial.vcf 1K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=50f291a952&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1769433611246297681&simpl=msg-f:1769433611246297681 2/2

Los reparos concretos presentados como Recurso de Apelación se basan concretamente en los siguientes que hemos denominado REPAROS Y Sub reparos, a saber:

1. **ERROR DE HECHO POR VÍA INDIRECTA, DERIVADO DEL ERROR EN LA VALORACIÓN OBJETIVA DEL MATERIAL PROBATORIO**
    1.1. Interpretación errónea, que se le dio al Laudo Arbitral y al Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017 expedida por el Tribunal de Arbitramento.
    1.2. Ausencia de interpretación adecuada que debió realizar el juez de primera instancia a las pruebas en conjunto, especialmente al Laudo Arbitral, sus Actas, etc y todo el proceso arbitral que fue aportado como prueba en el escrito de demanda y de su reforma.
    1.3. Omisión del ad quo al considerar en el fallo de primera instancia lo que en materia probatoria ya estaba probado.
    1.4. Cumplimiento de todas las condiciones suspensivas del título ejecutivo el cual emerge la exigibilidad del mismo como requisito esencial

2. **VIOLACIÓN DE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ART. 430 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO**

    2.1. Error de hecho por parte del juez de primer grado en la construcción del problema jurídico e inadecuado ejercicio de administración de justicia por quebranto normativo, en especial a lo dispuesto en el inciso segundo art. 430 del Código General del Proceso.
    2.2. Requisitos formales del título ejecutivo ya habían sido estudiados en múltiples ocasiones por distintos jueces de la república de Colombia que han conocido del presente proceso.
    2.3. Violación a la igualdad de las partes, y vulneración en las disposiciones contenidas en el artículo 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º del Código General del Proceso

Teniendo en cuenta la identificación plena de los reparos concretos señalados en la apelación presentada ante el *ad quo,* a continuación me permito presentar la sustentación del recurso de apelación en los siguientes términos:

SUSTENTACIÓN:

1. **ERROR DE HECHO POR VÍA INDIRECTA, DERIVADO DEL ERROR EN LA VALORACIÓN OBJETIVA DEL MATERIAL PROBATORIO**

1.1. Interpretación errónea, que se le dio al Laudo Arbitral y al Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017 expedida por el Tribunal de Arbitramento.

La sentencia proferida por el Juez de Primera Instancia es una clara constitución de un error en la valoración objetiva del material probatorio por parte del ad quo, a saber, por las siguientes razones:

Argumenta el juez de primera instancia, erróneamente, que al ejecutante en el Laudo Arbitral (documento que hace parte del título ejecutivo complejo) no le fue reconocido el valor de los $360.000.000 por concepto de Mayor Permanencia en Obra, teniendo como base, la interpretación errónea, que se le dio al Laudo Arbitral y al Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017 expedida por el Tribunal de Arbitramento.

En primera medida es errónea la interpretación y argumentación del ad quo en el fallo de primera instancia debido a que el ejecutante No era parte en el pleito que resolvió el Tribunal de Arbitramento, pues allí las únicas partes fueron el Consorcio Rio Seco y FONADE, razón por la cual, no le era permitido si quiera al Tribunal de Arbitramento valorar o decidir frente a los perjuicios del señor Valbuena Barrios en calidad de subcontratista, ya que la pretensión de reconocimiento de perjuicios por Mayor Permanencia solicitada por el Consorcio Rio Seco en la demanda arbitral, se trataba del perjuicio de un todo por este concepto derivado de los incumplimientos del Contrato de Obra No. 2071120 en general, incluidos en estos, los derivados del sub contratista Fernando Valbuena Barrios.

El Ad quo manifestó erróneamente en la sentencia objeto de este recurso que el Tribunal de Arbitramento había considerado en el Laudo Arbitral que no se contaba con comprobantes, soportes y demás información que permitiera realizar el cálculo del perjuicio solicitado por Fernando Valbuena Barrios en calidad de subcontratista y que, en suma, la reclamación formulada por el demandante en este proceso ejecutivo no fue considerada en el Laudo Arbitral y por consiguiente generó la desestimación de la demanda ejecutiva.

Esta estimación de la sentencia de primera instancia es errónea y constituye un error en la valoración objetiva de las pruebas aportada al plenario, pruebas tales como *audo Arbitral y al Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017 expedida por el Tribunal de Arbitramento,* pues se puede evidenciar en el documento Acta No. 42 del 6 de marzo de 2017 que el Tribunal de Arbitramento en el acápite 2.4. de dicho documento, procedió a trascribir las preguntas y respuestas formuladas y generadas respectivamente al Perito dentro de la experticia decretada y practicada en la controversia arbitral entre FONADE y el CONSORCIO RIO SECO, y en la página 18 del mismo documento (Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017) es donde el Tribunal se citó así mismo con el Acta 34 del 7 de junio de 2016 manifestando que dichas preguntas y respuestas (preguntas y respuestas de la 42 a la 46 del Peritaje) no resultaron procedentes para el proceso arbitral en la medida en que el Perito excedió con estas respuestas el objeto de la experticia decretada por el Tribunal, el cual era una experticia financiera y contable.

Adicionalmente argumentó en este acápite el Tribunal de Arbitramento, que esas respuestas generadas por el Perito correspondió más a asuntos propios de la interventoría del contrato que del dictamen pericial solicitado, por lo que el Tribunal entendió que dicha experticia con relación a las preguntas y respuestas No. 42 a la 46 no serían estimadas o valoradas en el proceso arbitral, tal como ocurrió y como debe de estimarse y valorarse en

la presente litis, pues si en su momento dicho contenido de la prueba pericial se extralimitó y no fue considerada en el Laudo Arbitral.

Es por esta razón que mal realiza el fallador de primera instancia darle valor probatorio en este proceso ejecutivo singular en la forma en que se le dio en el sentido del fallo de primera instancia, Pues el Laudo Arbitral y Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017 expedida por el Tribunal de Arbitramento, nos da claridad sobre el sentido en que se deben interpretar y no en la forma en que lo determinó el fallador de primera instancia, pues como se explico en líneas anteriores, la interpretación y consideración de estas pruebas en el fallo de primera instancia se realizó de manera errónea por el ad quo, especialmente con las pruebas documentales al Laudo Arbitral y al Acta No. 42 del 06 de marzo de 2017 expedida por el Tribunal de Arbitramento

1.2. *Ausencia de interpretación adecuada que debió realizar el juez de primera instancia a las pruebas en conjunto, especialmente al Laudo Arbitral, sus Actas, etc y todo el proceso arbitral que fue aportado como prueba en el escrito de demanda y de su reforma*

En el fallo de primera instancia brilló por su ausencia la interpretación adecuada que debió realizar el juez de primera instancia a las pruebas en conjunto, especialmente al Laudo Arbitral, sus Actas, etc y todo el proceso arbitral que fue aportado como prueba en el escrito de demanda y de su reforma, pues **una valoración e interpretación adecuada y que en derecho corresponde de las pruebas, es que dichas preguntas (42 a 46) y respuestas del perito donde responde, entre otras:** *"No es posible determinar con toda precisión los perjuicios que afecten las ofertas mercantiles y/o contratos de los subcontratistas, dado que no se cuentan con los comprobantes, soportes y demás información que permitan realizar el cálculo solicitado"* **no fue tenida en cuenta finalmente en la parte considerativa del Laudo Arbitral por parte del Tribunal para la tasación del perjuicio de Mayor Permanencia en Obra a favor del Consorcio Rio Seco ya que i) Fueron excluidas de valoración por parte del Tribunal por ser exceder la experticia solicitada y ii) Haberse determinado la tasación del perjuicio de Mayor Permanencia con una fórmula distinta a la aplicada y determinada por el Perito en la controversia arbitral,** esto quiere decir que, si el Tribunal de Arbitramento no consideró estas respuestas del Perito en el Laudo Arbitral**,** no debe ser considerada ahora en el presente proceso ejecutivo, porque, se insiste, el Tribunal de arbitramento NUNCA aseguró y determinó que no existieran dichos documentos para tasar los perjuicios de los subcontratistas (en especial el subcontratista Fernando Valbuena Barrios), por el contrario, estas manifestaciones se dieron a conocer en el conflicto arbitral por preguntas formuladas al Perito y respondidas por este, que en suma, no fueron tenidas en cuenta al momento de proferir el fallo arbitral ni para determinar la formula final para conocer y calcular el perjuicio de Mayor Permanencia a favor del Consorcio Rio Seco, por lo que darle un valor considerativo probatorio determinante a estas manifestaciones del Perito en el presente proceso ejecutivo singular, es una anomalía y suposición del ad quo por la indebida interpretación y valoración del material probatorio que finalmente influyó en la forma en

cómo se desató el debate en este proceso ejecutivo en primera instancia, pues de no haber ocurrido esto, el resultado fuese el de seguir adelante con la ejecución.

Adicionalmente, no le era permitido al juez de primera instancia argumentar que el valor o partida del concepto de Mayor Permanencia de Fernando Valbuena Barrios debía ser estimada en la sentencia Laudo Arbitral, y que al no haberse estimado dicha partida en el Laudo Arbitral, no le era permitido solicitar el reclamo que por la vía ejecutiva se realiza en el presente proceso; con dicha suposición o argumento el ad quo realiza una errónea valoración probatoria debido a que, se insiste, el señor Fernando Valbuena no tenía vinculo contractual con FONADE y por ende no le era permitido ser parte en la controversia Arbitral y mucho menos que se le reconociera a su favor los perjuicios independientes derivados por la Mayor Permanencia de la Obra, por lo que el Consorcio Rio Seco, como parte de la controversia arbitral, fue quien asumió el valor del perjuicio de Mayor Permanencia a favor del ejecutante ante la controversia arbitral.

Es el consorcio Rio Seco quien asumió reconocer y pagar el perjuicio de Mayor Permanencia a favor de Fernando Valbuena Barrios y es esta la interpretación adecuada que se debe generar de la lectura del documento de intención, especialmente en lo que atañe a las consideraciones número 6 y 8 de dicho documento, y a la cláusula 3 ibidem, pues el sólo reconocimiento del concepto de Mayor Permanencia a favor del Consorcio Rio Seco por causas imputables a Fonade en el Laudo Arbitral, está incorporado en dicho concepto el valor de la Mayor Permanencia de Fernando Valbuena Barrios, pues así lo aceptó el Consorcio Rio Seco tal como se evidencia de la lectura que se realiza a estas consideraciones:

> *CONSIDERACIÓN 6: (…) "El riesgo derivado de la mayor permanencia en obra por razones atribuibles a FONADE debe ser asumido de manera exclusiva por el CONSORCIO RIO SECO dentro del Tribunal de Arbitramento que se solicitará ante la Cámara de Comercio de Bogotá, Demanda que incluirá el valor antes mencionado"*
>
> *CONSIDERACIÓN 8: (…) "El consorcio Rio Seco ha iniciado una convocatoria arbitral contra FONADE dentro de la cual presentará como una pretensión el resarcimiento de los perjuicios del señor FERNANDO VALBUENA BARRIOS"*

No se debe predicar ni aceptar que Fernando Valbuena Barrios debía ser quien reclamara su perjuicio de Mayor Permanencia ante el Tribunal de Arbitramento, pues la posición de este sub contratista frente a FONADE y en lo relativo a los incumplimientos generados en el Contrato de Obra No. 2071120 y alegados en la controversia arbitral, la obtuvo el Consorcio Rio Seco en su representación, quien fue el Contratista Global de la obra, pues así lo aceptó y admitió el Consorcio Rio Seco en el Contrato de Transacción y Documento de Intención suscrito entre el ejecutante y el consorcio ejecutado.

1.3. Omisión del ad quo al considerar en el fallo de primera instancia lo que en materia probatoria ya estaba probado.

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el contrato de transacción y las consideraciones del documento de intención suscrito entre las partes ejecutante y ejecutada, omitió el ad quo considerar en el fallo de primera instancia lo que en materia probatoria ya estaba probado, a saber;

i) Que ya existía una reclamación de Fernando Valbuena Barrios al Consorcio Rio Seco por los perjuicios derivados de la Mayor Permanencia en Obra.

ii) Que teniendo en cuenta la reclamación presentada por Fernando Valbuena Barrios, las partes ejecutante y ejecutada suscribieron contrato de transacción frente al perjuicio de Mayor Permanencia a cargo del Consorcio Rio Seco y a favor de Fernando Valbuena Barrios.

iii) Que el consorcio Rio Seco asumió el riesgo o perjuicio de la Mayor Permanencia del sub contratista Fernando Valbuena Barrios en la controversia arbitral que generó aquel con la entidad FONADE, frente a los incumplimientos del contrato de Obra No. 2071120, riesgo asumido y del cual se desprende de la lectura del documento de intención.

iv) Que el consorcio Rio Seco en la demanda arbitral incorporó el perjuicio de la Mayor Permanencia de Fernando Valbuena Barrios, con base en la reclamación presentada por el ejecutante previamente al mismo Consorcio, tal como quedó plasmado en las consideraciones del documento de intención.

v) Que el Consorcio Rio Seco, asumió la posición de cobro frente a FONADE de los perjuicios de la Mayor Permanencia de Fernando Valbuena Barrios, en la controversia arbitral.

vi) Que el consorcio Rio Seco, en las pretensiones de la demanda arbitral, incorporó el perjuicio de la Mayor Permanencia de Fernando Valbuena Barrios.

vii) Que el Tribunal de arbitramento reconoció el perjuicio de LA MAYOR PERMANENCIA en la sentencia Laudo Arbitral.

viii) Que FONADE pagó al Consorcio Rio Seco la suma de $1.489”639.051,36 por concepto de “Mayor Permanencia en obra en ejecución del contrato de obra No. 2071120, de cuyo pago se dan cuenta los comprobantes de egresos aportados en la reforma de la demanda.

1.4. Cumplimiento de todas las condiciones suspensivas del título ejecutivo el cual emerge la exigibilidad del mismo como requisito esencial

Ahora bien, si a gracia de discusión se tiene por parte del *ad quem,* en el presente caso se debe entender que se cumplió con todas las condiciones suspensivas del título ejecutivo el cual emerge la exigibilidad del mismo como requisito esencial, tal como se expone a continuación.

CONDICION DE CUMPLIMIENTO	A CARGO DE	FORMA DE CUMPLIMIENTO	¿SE CUMPLIÓ?
Reclamación que debía presentar el Consorcio Rio Seco frente al Tribunal de Arbitramento que se solicitaría.	Consorcio Río Seco	Demanda Arbitral presentada ante Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.	SÍ
En la demanda arbitral, deberá incluir el valor de los $360.000.000 (perjuicio de Fernando Valbuena Barrios por concepto de Mayor Permanencia)	Consorcio Río Seco	La Demanda Arbitral incorporó el concepto de Mayor Permanencia en Obra como una pretensión, en la cual está incorporado el perjuicio de Mayor Permanencia de Fernando Valbuena Barrios	SÍ
El pago condicionado a que fuese reconocida la Mayor Permanencia a favor del Consorcio Rio Seco y a cargo de FONADE	Resultas del Proceso Arbitral	Laudo Arbitral	SÍ
Pagada la pretensión de la Mayor Permanencia al Consorcio Rio Seco	FONADE	Comprobantes de Pago 15620 y 15622	SÍ
Cuantificación de la Mayor Permanencia de FVB se sometió a condiciones según lo que se decidiera en el Laudo Arbitral	Resultas del Proceso. Se reconoció el valor total de la pretensión de Mayor Permanencia en Obra.	Laudo Arbitral	SÍ
Atender todas las solicitudes que sean necesarias dentro	Fernando Valbuena Barrios	Testimonio en Proceso Ejecutivo, manifestó bajo la gravedad de juramento haber atendido la única	SÍ

del Tribunal de Arbitramento		solicitud que le hicieron en el Tribunal de Arbitramento	

Entonces mal realiza el juez de primera instancia a determinar en el sentido del fallo que las condiciones suspensivas del titulo ejecutivo no fueron cumplidas por el accionante, pues dichas condiciones fueron cumplidas tal como se desprende del análisis adecuado de las pruebas aportadas al plenario.

De modo que, el error de hecho en la valoración objetiva de las pruebas radica asimismo en que el Juez de primera instancia pasó por alto lo ya estudiado, evaluado y considerado por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, quien ha evaluado los requisitos esenciales del título ejecutivo en el presente caso, a saber los siguientes pronunciamientos: i) Sentencia de fecha 14 de septiembre de 2018 Magistrada Ponente Dra. NUBIA ESPERANZA SABOGAL En el proceso ejecutivo con radicado 2017-00267-01 ii) Auto de fecha 13 de Mayo de 2020 expedido por Sala Civil MP NUBIA ESPERANZA SABOGAL en el proceso ejecutivo singular con radicado 2019-00433-00 que ordenó revocar el auto que negó el mandamiento de pagó y ordeno librar mandamiento ejecutivo.

Teniendo en cuenta el error en la valoración objetiva del material probatorio por parte del ad quo, se solicita al juez de segunda instancia REVOCAR la sentencia de primer grado y en su defecto, ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en la forma solicitada en los alegatos finales del apoderado del ejecutante.

2. VIOLACIÓN DE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ART. 430 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

2.1. Error de hecho por parte del juez de primer grado en la construcción del problema jurídico e inadecuado ejercicio de administración de justicia por quebranto normativo, en especial a lo dispuesto en el inciso segundo art. 430 del Código General del Proceso.

Para sustentar el presente argumentó, es menester traer a colación que El juez de primera instancia constituyó el problema jurídico a resolver en el caso sub examine, de la siguiente manera:

> *(…) La controversia puesta en conocimiento al despacho principalmente se contrae en determinar si los documentos traídos por el ejecutante conforman un verdadero título ejecutivo complejo, aspecto cuestionado por la demandada en varias de sus excepciones y solo ante una respuesta positiva se entrará a examinar las excepciones de mérito restantes que fueron propuestas.*

De la construcción del problema jurídico por parte del *ad quo* se puede determinar que el mismo fue construido atendiendo las alegaciones

planteadas por las demandadas en las excepciones de mérito, especialmente en lo que atañe al incumplimiento de los requisitos esenciales del título ejecutivo u omisión de los requisitos formales del título ejecutivo, situación que a toda luz se vislumbra un error de hecho por parte del juez de primer grado y por ende se constituye un inadecuado ejercicio de administración de justicia, pues se puede concluir la materialización de un quebranto normativo, en especial a lo dispuesto en el inciso segundo art. 430 del Código General del Proceso, a saber;

ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. *Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.*

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

La interpretación normativa que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil ha dado sobre la norma señalada anteriormente es el dispuesto en la sentencia CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, la saber;

(...) Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempló en el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso fue que la parte ejecutada no podía promover defensa respecto del título ejecutivo sino por la vía de la reposición contra el mandamiento de pago, cerrándole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a través de excepciones de fondo, en aras de propender por la economía procesal (...)

Con base en lo anterior, se puede determinar que el *ad quo* llegó a la construcción del problema jurídico y al sentido del fallo por las alegaciones que la parte demandada presentó en las excepciones de mérito, las cuales se basaron en el incumplimiento de los requisitos esenciales del título ejecutivo u omisión de los requisitos formales del título ejecutivo, alegaciones que valoró el juez no solo para la construcción del problema jurídico, sino que le dio valoración legal que constituyó erróneamente el sentido del fallo de primera instancia, pues con este error de interpretación y valoración normativa y probatoria, el *ad quo* llegó a la equivocación de determinar que el requisito de exigibilidad del título ejecutivo no se cumplía en este caso.

Tenemos entonces que las alegaciones sobre el incumplimiento de los requisitos esenciales del título ejecutivo u omisión de los requisitos formales del título ejecutivo **YA HABÍAN SIDO PLANTEADAS** por la parte demandada **MEDIANTE RECURSO DE REPOSICIÓN AL AUTO QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO EN ESTE PROCESO JUDICIAL**, lo que generó una controversia inicial en determinar si se cumplían o no los requisitos de Claridad, Expresividad y Exigibilidad del título ejecutivo, **SITUACIÓN QUE CONCLUYÓ CON LO FALLADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA**

CIVIL, **MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 13 DE MAYO DE 2020** que revocó el Auto que negó el Mandamiento de Pago, a saber:

> En efecto, ese título lo componen el "documento de intención" fechado 3 de mayo de 2012, suscrito por Fernando Valbuena Barrios y el Consorcio Río Seco (folios 7 a 11, C.I – Tomo I), el laudo arbitral proferido el 20 de febrero de 2017 (folios 76 y s.s., C.I – Tomo I) y los comprobantes de egreso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.

(…)

> Tampoco es factible predicar la ausencia de exigibilidad de la obligación cobrada en este juicio, porque si bien la cláusula tercera del "documento de intención" señala que "el pago de la reclamación a que se refiere la cláusula anterior estará sujeto a que el Tribunal de Arbitramento reconozca la pretensión, ordene el pago y la entidad que lo efectué", lo cierto es que esas condiciones acordadas para la exigibilidad de la obligación se encuentran satisfechas, tal como lo acredita el laudo arbitral y los comprobantes de egreso expedidos por FONADE, documentos adosados a la demanda ejecutiva.
>
> Ciertamente, el laudo arbitral de 20 de febrero de 2017 condenó a FONADE a pagar al consorcio convocante la cantidad de $1.489'639.051,36, por concepto de "mayor permanencia en obra en ejecución del contrato de obra No.2071120 de 2007" (folios 78 a 174, C.1, T.1), de cuyo pago dan cuenta los comprobantes de egreso visibles a folios 23 y 24, C.1, T.3.
>
> Entendiéndose, por consiguiente, satisfecha la condición prevista en la estipulación tercera del mentado documento de intención, esto es, el pago de la pretensión reconocida en el laudo arbitral, a favor del consorcio referenciado y a cargo de la prenombrada entidad, requisito éste, que en la oportunidad primigenia en que acudió el interesado no se hallaba satisfecho, lo que devino en la negativa del mandamiento de pago en aquella oportunidad.

4.2. Requisitos formales del título ejecutivo ya habían sido estudiados en múltiples ocasiones por distintos jueces de la república de Colombia que han conocido del presente proceso.

Para sustentar este argumento es menester aclarar al despacho que NO LE ERA DABLE a la parte demandada formular excepciones de mérito basadas en el incumplimiento de los requisitos esenciales del título ejecutivo u omisión de los requisitos formales del título ejecutivo, pues esta puerta para la parte

demandada estaba cerrada por vía legal y jurisprudencial teniendo en cuenta que **LOS REQUISITOS FORMALES DEL TÍTULO EJECUTIVO YA HABÍAN SIDO ESTUDIADOS EN MÚLTIPLES OCASIONES POR DISTINTOS JUECES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA QUE HAN CONOCIDO DEL PRESENTE PROCESO** (para esto debe el *ad quem* considerar lo dispuesto en las documentales aportadas en la demanda.), tal como lo manifestó la Magistrada Ponente Dra. NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARON en la providencia que ordenó revocar la negativa de librar mandamiento de pago al juez de primera instancia en este proceso y le ordenó al *ad quo* librar mandamiento de pago (Providencia del 13 de mayo de 2020).

La Corte Suprema de Justicia determinó en la interpretación que debe hacérsele al inciso segundo del art. 430 del código general del proceso, que la razón por la cual se ordena en esta norma a la demandadas la prohibición de no formular como excepción de fondo la falta de los requisitos del título ejecutivo, lo que se logra con esto es propender por la economía procesal, situación que en el caso en concreto no sucedió debido al error de hecho acaecido por el juez de primera instancia, pues en vez de fallar ordenando seguir adelante con la ejecución en la forma solicitada en la reforma de la demanda y en los alegatos finales del ejecutante, el *ad quo* procedió a valorar los argumentos planteados por la demandada en lo ateniente a los requisitos esenciales del título ejecutivo, situación a toda luz que estaba impedido hacer el juez de primer grado máxime cuando fue solicitado y alegado por la parte demandada cuando estaba prohibido hacerse.

4.3. Violación a la igualdad de las partes, y vulneración en las disposiciones contenidas en el artículo 4°, 11, 42-2° y 430 inciso 1° del Código General del Proceso

En el presente caso existe una violación a la igualdad de las partes, y por ende existe una vulneración en las disposiciones contenidas en el artículo 4°, 11, 42-2° y 430 inciso 1° del Código General del Proceso, pues a pesar de existir un impedimento legal, la parte demandada alegó como excepción de Fondo la relativa a la falta de los requisitos esenciales del título ejecutivo y fueron argumento base de otras excepciones de fondo planteadas en la contestación de la demanda, tal como lo argumentó el juez de primera instancia al manifestar el problema jurídico a resolver.

Teniendo en cuenta que el ad quo en el caso sub examine sustenta la construcción del problema jurídico y el sentido del fallo en la falta de los requisitos esenciales del título ejecutivo, dicho fallo de primera instancia constituye una vía de hecho por parte del juez de primera instancia, por dar aplicabilidad a la evaluación de los requisitos formales del título por alegación o petición de la demandada mediante excepciones de mérito, aún cuando se encontraba prohibida dicha alegación conforme al inciso segundo del art. 430 del código general del proceso, distinto fuese si el juez de primer grado en su sentido del fallo, manifiesta o argumenta que, la evaluación o el nuevo estudio de los requisitos esenciales del título ejecutivo

se realiza de manera oficiosa por el "deber legal" del juez de evaluar en cualquier momento dichos documentos que constituyen el titulo ejecutivo complejo, pero no, el sustento que el *ad quo* da para evaluar nuevamente los requisitos del título ejecutivo se basó en las alegaciones que la demandada realizó sobre la ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo en las excepciones de fondo planteadas.

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que no debieron declararse probadas las excepciones de i)Incumplimiento de los requisitos materiales del título u omisión de los requisitos formales del titulo ejecutivo, ii) Incumplimiento a cargo del demandante del documento de intención que presenta para conformar el título ejecutivo, iii) Cobro de lo no debido, falta de cumplimiento de la condición, teniendo en cuenta que el fallo proferido se basó en la ausencia del requisito de exigibilidad de la obligación por alegaciones planteadas por la parte demandada como excepciones de fondo.

Aunado a lo anterior y bajo el mismo argumento, se vienen al traste las demás excepciones que la demandada alegó en su contestación de la demanda, pues el sentido del fallo de primer grado se basó única y exclusivamente en la ausencia del requisito de exigibilidad derivado de la alegación que de la falta de los requisitos esenciales o formales del título ejecutivo cuando no debía si quiera ventilarse dicha discusión por parte de la demandada como excepción de fondo.

Así las cosas, es menester concluir que el fallo de primera instancia es violatorio a las normas legales expuestas anteriormente y es contitutiva de errores de hecho por parte del *ad quo*, pues el fallo se aparta de la sentada jurisprudencia de los distintos jueces de la República que han conocido del presente caso y que fueron aportados como prueba en la reforma de la demanda, a saber, por las siguientes razones:

1. Los documentos conforman el título ejecutivo complejo, tales como el contrato de transacción, contrato de intención, el Laudo Arbitral y los comprobantes de pago, dan prueba del cumplimiento del *requisito sine qua non*, a saber, el reconocimiento del rubro de la MAYOR PERMANENCIA dentro del fallo arbitral.

2. Se dejó plasmado y se indicaron los folios en los cuales el Tribunal de arbitramento, de conformidad con el acuerdo suscrito entre FONADE y CONSORCIO RIO SECO (pág. 42 ,43 del tribunal arbitral y folio 116, 117 de la demanda) – partes del proceso arbitral – efectuaron un acuerdo de pago de fecha 9 de septiembre de 2.015, en la cual se reconoció por parte de FONADE cancelar la MAYOR PERMANENCIA al CONSORCIO RIO SECO. Acuerdo conciliatorio del CONSORCIO RIOSECO – FONADE de fecha septiembre 9 de 2015, el cual fue ratificado por el Laudo arbitral; dicho concepto se reconoció indexación e intereses y finalmente FONADE pagó al Consorcio Rio Seco,

razón fundamental para que el mismo concepto de MAYOR PERMANENCIA los solicitemos por la vía ejecutiva en favor de FERNANDO VALBUENA BARRIOS, toda vez que fue pactada de manera escrita en el contrato de transacción y documento de intención.

3. FERNANDO VALBUENA BARRIOS era el único contratista que tenía derecho al rubro MAYOR PERMANENCIA por los incumplimientos en el contrato de Obra No. 2071120, pero que, teniendo en cuenta la relación contractual directa del contrato de Obra No. 2071120 el CONSORCIO RIO SECO fue quien la pacto con FONADE y no le correspondía al ingeniero VALBUENA alegar su reconocimiento en la controversia arbitral, toda vez que ya estaba pactada y reconocida su responsabilidad a cargo del Consorcio en el contrato de transacción y el documento de intención.

4. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sala Civil, ha sido clara al indicar que, cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada "vía de hecho", desafuero que consiste en apartarse de los argumentos y solicitudes planteadas por el suscrito o de valorar erronemanete las pruebas aportadas al plenario, situación que se constituye en este caso con el fallo de primera instancia que vislumbró un aparente omisión en los requisitos formales del título ejecutivo complejo que nunca se ha avizorado en las evaluaciones que del mismo ha realizado distintos jueces de la República, incluido el superior jerárquico del fallador de primera instancia.

5. El proceder del ad quo, es un proceder ilegitimo, tal como se expone en la jurisprudencia descrita a continuación:

"AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4781—2017 Radicaciann. 011001—02—03—000—2017—00802—00 (Aprobado en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete)

Por lineamiento Jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho , Cuando el proceder ilegitimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley" (CSJ STC, ll mayo • 2001, rad. 2001—00183—01) y Por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. 2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, Por arbitrario o antojadizo, Puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden Jurídico si la afectada no cuenta con otro medio de protección judicial.

Al respecto, la Corte ha manifestado que,

"El Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo solo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebramiento de la función judicial en suma, cuando se presenta una vía de hecho

, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado.

Así pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada "vía de hecho".

Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enunciado cometió un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ REVOCAR el fallo de primera instancia en sus numerales primero al sexto proferido por el Juzgado 12 civil del circuito de Bogotá, y en sede de segunda instancia DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA y en consecuencia SE ORDENE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en las sumas solicitadas en la Reforma de la Demanda y confirmadas en los alegatos finales de la parte ejecutante.

Cordialmente,



ANDERSON VERGARA BUSTOS
CC: 1.105.788.251 DE HONDA
TP: 303.103 del C.S. DE LA J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO RV: SUSTENTACIÓN APELACIÓN - RADICADO 11001310301620100030804 - COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIA Y MINERA DE SANTA ROSA DEL SUR LTDA VS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 03/08/2023 10:26

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (120 KB)
SUSTENTACIÓN RECURSO.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Laura Natalia Diaz Moreno <la_lis92@hotmail.com>
Enviado: jueves, 3 de agosto de 2023 10:04
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Sarita Alexandra Serna Bohorquez <sarita.serna@bancoagrario.gov.co>; germandrodriguezp@gmail.com <germandrodriguezp@gmail.com>
Asunto: SUSTENTACIÓN APELACIÓN - RADICADO 11001310301620100030804 - COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIA Y MINERA DE SANTA ROSA DEL SUR LTDA VS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Honorable Magistrado
RICARDO ACOSTA BUITRAGO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
E. S.
D.

RADICADO: 11001310301620100030804
PROCESO: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIA Y MINERA DE SANTAROSA DEL SUR LTDA
DEMANDADO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
REFERENCIA: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

LAURA NATALIA DÍAZ MORENO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.026.278.161 de Bogotá, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 267.556 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada del **BANCO AGRARIO DE**

COLOMBIA S.A., identificado con NIT. 800037800-8, sociedad de economía mixta de orden nacional, sujeta al régimen de Empresa Industrial y Comercialdel Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, autorizada para usar la sigla BANAGRARIO, por medio del presente documento y encontrándome dentro del término legal, me permito presentar la sustentación del recurso de apelación.

De acuerdo con lo establecido en la ley 2213 de 2022 el presente memorial se remite con copia al apoderado de la parte demandante.

Solicito se acuse recibo de la presente comunicación.

Señor Juez,

LAURA NATALIA DIAZ MORENO
Cedula de ciudadanía número 1.026.278.161 de Bogotá.
Tarjeta Profesional número 267.556 del Consejo Superior de la Judicatura.
Celular 3057065913

Honorable Magistrado
RICARDO ACOSTA BUITRAGO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
E. S. D.

RADICADO: 11001310301620100030804
PROCESO: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIA Y MINERA DE SANTA ROSA DEL SUR LTDA
DEMANDADO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
REFERENCIA: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

LAURA NATALIA DÍAZ MORENO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.026.278.161 de Bogotá, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 267.556 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada del **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT. 800037800-8, sociedad de economía mixta de orden nacional, sujeta al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, autorizada para usar la sigla BANAGRARIO, por medio del presente documento y encontrándome dentro del término legal, me permito presentar la sustentación del recurso de apelación, teniendo en cuenta lo siguiente:

Diferimos de la decisión de instancia por las siguientes razones:

1. **Frente al denominado incumplimiento del contrato por inejecución, cumplimiento tardío o defectuoso**

El a quo considera que el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA incumplió sus obligaciones respecto de las cuentas de ahorros y corriente de los demandantes, al haberse presentado algunos ilícitos en la oficina que manejaba estos productos financieros, tomando como base de la decisión, los procesos disciplinarios y penales que cursaron respecto de algunos exfuncionarios del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

Estas consideraciones olvidan que en el marco de las actuaciones disciplinarias y penales se dejó constancia de las cuentas y los clientes que se vieron afectados por dichos ilícitos, sin que en ellos exista prueba o si quiera mención de la **COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIA Y MINERA DE SANTA ROSA DEL SUR LTDA** como afectada por la actuación delictiva. Deja de lado el juzgador de primera instancia que el **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** a raíz de estas circunstancias procedió a atender cada una de las reclamaciones presentadas y determino respecto de la solicitud presentada por los aquí demandantes que no procedía devolución de dineros, previo a realizar una conciliación y comparación de los movimientos de las cuentas corrientes y de ahorros registrados en el BANCO con la información provista por los representantes de la sociedad.

Además de lo anterior olvida el a quo que la responsabilidad de las entidades bancarias, en este caso del **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** no es objetiva, ni mucho menos en el presente asunto puede aplicarse la culpa presunta, sino que debe realizarse un análisis de caso concreto, lo anterior fue indicado por la Corte Suprema de Justicia en sentenciade 3 de agosto de 2004 quien consideró que:

«Ha sido pródiga la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que la profesión bancaria envuelve una actividad riesgosa, motivo por el cual a quienes la ejercen se les exige la diligencia y cuidado necesarios para este tipo de actividades, lo que genera una presunción de culpa en su contra, diciendo al respecto esta Corte que: "Hay una presunción de culpa -dice la Corte- en quien no las satisface (las obligaciones) en el modo y tiempo debidos, porque el incumplimiento es un hecho o una omisión que afecta el derecho ajeno. El deudor puede destruir esa presunción probando que su incumplimiento obedeció a fuerza mayor, o caso fortuito que sobrevino sin culpa (...). Pero la culpa proviene de no obrar con la diligencia o cuidado que la ley gradúa según la naturaleza del contrato (arts. &3y 1604), resulta que el deudor, para exonerarse de responsabilidad no le basta probar el caso fortuito, sirio también que empleó la diligencia, o cuidado debido para hacer posible la ejecución de su obligación' (Cas. 7 junio de 1951, DUX 6880 (CSJ SC de 7 de abril de 1967).

Con relación a esa presunción de culpa en el caso particular de las entidades bancarias apuntó lo siguiente: "...deriva del «Ibídem» (referencia propia del texto citado) ejercicio y del beneficio que reporta de su especializada actividad financiera, como así lo tiene definido la jurisprudencia cuando asevera que una entidad crediticia es una empresa comercial que, dado el movimiento masivo de operaciones, 'asume los riegos inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja' (Cas. Civil 24 de octubre de 1994)" (CSJ SC976-2004 del 3 de agosto de 2004, rad. 7447).

Empero, de manera correlativa ha señalado que esa responsabilidad que se predica de las entidades bancarias no puede establecerse con un carácter objetivo, siendo necesario examinar, en cada caso, tanto la conducta de la entidad bancaria como la del girador, para evaluar la eventual concurrencia de causas, sean anteriores, coincidentes, concomitantes, recíprocas o posteriores, pues con ocasión de una eventual concausalidad en la ocurrencia del daño podría llegar a disminuirse la indemnización, o incluso exonerar a la entidad de toda responsabilidad; escrutinio que habrá de realizarse no a partir de la mera confrontación de conductas sino evaluando la causa jurídica del daño para definir en qué medida una u otra fue la determinante en la ocurrencia del hecho dañoso.

En efecto, esta Corporación en relación con la coparticipación en la ocurrencia del daño ha anotado lo siguiente: "(...) para que opere la compensación de culpas de que trata el artículo 2357 del Código civil no basta que la víctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producción del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la víctima efectivamente contribuyó con su comportamiento a la producción del daño", pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fenómeno es que para deducir responsabilidad en tales supuestos 'la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre los concurrentes ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio. De lo cual resulta que sí, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpa, que para los efectos de la gradación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil. En la hipótesis indicada solo es responsable, por tanto, la parte que, en últimas, tuvo oportunidad de evitar el daño y sin embargo

no lo hizo' (CLII, 109 -Cas. 17 de abril de 1991)" (CSJ SC de 6 de may. de 1998, exp. 4972)0 (CSJ SC1697-2019, 14 may.).

Teniendo en cuenta las circunstancias indicadas es claro que el **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** cumplió con todas las obligaciones a su cargo y estuvo presto a resolver las inquietudes de los aquí demandantes quienes no estuvieron prontos a entregar el libro de bancos de los periodos 2003 a 2008, ni los soportes de las conciliaciones bancarias realizadas, lo que configura culpa de la sociedad demandante, la cual debió ser valorada por el Juez de Primera instancia, pues es elemento necesario e indispensable para este tipo de eventos, la demostración del daño de manera real y concreta y no con apreciaciones sin soporte fáctico, como en el presente asunto se advierte, pues como se desprende del acervo probatorio el demandante no demostró fehacientemente el daño, ni su cuantía, elemento necesario e indispensable para este tipo de procesos.

Sobre esta causal eximente de responsabilidad la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que:

> Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que la "culpa de la 'víctima'" corresponde -más precisamente- a un conjunto heterogéneo de supuestos de 'hecho', en los que se incluyen no sólo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del Código Civil, aun cuando allí se aluda a "imprudencia" de la 'víctima', pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son "capaces de cometer delito o culpa" (art. 2346 ibídem) o a comportamientos de los que la propia 'víctima' no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr., aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre el daño)

2. Frente al nexo causal y la producción del daño

Respecto de este apartado el a quo considera que se encuentra probado que los aquí demandantes fueron sujetos de los actos delictivos que desarrollaron algunos ex empleados del **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** sin que esta situación se encuentre debidamente acreditada en el expediente, tampoco las investigaciones penales y disciplinarias realizadas determinaron que **la COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIAY MINERA DE SANTA ROSA DEL SUR LTDA** hubiese sido víctima de los delitos que pudieron presentarse.

Como puede corroborarse no obra en el expediente, prueba idónea que demuestre la responsabilidad endilgada al **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.** En este punto debe recordarse que nuestro ordenamiento jurídico establece de forma clara que cuando se acude a la administración de justicia, es obligatorio probar los hechos que sirven de sustento factico para ejercer el derecho de acción en contra de determinado demandado, so pena de atenerse a los efectos negativos en caso de no hacerlo (Art. 177 del C.P.C., norma aplicable para el presente asunto).

En sentencia C-086 de 2016 la Corte Constitucional enseño al respecto:

> 6.1.- Una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, en general, y a la jurisdicción civil, en particular, es la concerniente a

la prueba de los hechos que se alegan. La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio "onus probandi", el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo.

De acuerdo con la doctrina, esta carga procesal se refiere a "la obligación de 'probar', de presentar la prueba o de suministrarla, cuando no el deber procesalde una parte, de probar la (existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesalque el juez del proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero". En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha explicado cómo en el sistema procesal se exige, en mayor o menor grado, que cada uno de los contendientes contribuyacon el juez al esclarecimiento de la verdad:

"En las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acudeal juez con su propia versión de los hechos, esto es, que presenta enunciados descriptivos o proposiciones fácticas a partir de las cuales pretende generar un grado de convencimiento tal, que sea suficiente para que se emita un pronunciamiento favorable al ruego que se eleva ante la jurisdicción. Dicho de otro modo, en el punto de partida de toda controversia procesal, cada uno de los extremos del litigio intenta convencer al juez de que las descripciones que presenta coinciden con la realidad y, a partir de aquéllas, justamente, propicia el litigio.

De esa manera, cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado respecto de las excepciones.

Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciarla controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que seinvocan".

Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, "las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes".

Igualmente, no se acredito por parte de los demandantes el valor que debía estar depositado en las cuentas de ahorros y corriente, y se pretende tener como demostrados los valores a través de los testimonios de los señores LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO y HERNANDO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, quienes se desempeñaron como revisor fiscal y

contador de la COOPERATIVA INTERGRAL AGROPECUARIA Y MINERA DE SANTA ROSA DEL SUR LTDA, a pesar de que las declaraciones fueron disimiles e indicaron sumas diferentes.

A demás de lo anterior, la supuesta pérdida de las sumas de dinero a la que alude la demanda, no tiene como causa directa la ocurrencia de los hechos delictuales ocurridos en la sucursal Santa Rosa, dado que como ya se indicó **no existe pronunciamiento al respecto, ni se acreditó que la discordancia en las sumas correspondiera a esta situación**,en cambio, sí se demostró por parte del BANCO que las actuaciones y movimientos bancarios adelantados por el cuentacorrentista, originaron un saldo a cargo del cliente, el cual fue respaldado con los soportes de los movimientos realizados, además de la revisión conjunta que adelanto el BANCO con funcionarios de la sociedad demandante.

En ese contexto, el nexo causal requerido para fijar la responsabilidad contractual del BANCO, es decir, que la consecuencia haya sido determinada por la conducta de la entidad financiera, se diluye dado que fue el comportamiento del actor el percutor de los movimientos en las cuentas de ahorros y corrientes y quien no logró probar ningún procedimiento irregular, incumpliendo con lo establecido en el artículo 1757 del Código Civil sobre la carga de la prueba.

Siendo pertinente insistir la inexistencia de presunción de culpa en el caso particular de las entidades bancarias. La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de la Sala Civil en Radicación n.0 11001-31-03-028-2006-00466-01, reiteró que:

> La responsabilidad que se predica de las entidades bancarias **no puede establecerse con un carácter objetivo**, siendo necesario examinar, en cada caso, tanto la conducta de la entidad bancaria como la del girador o cuentahabiente, para evaluar la eventual concurrencia de causas, sean anteriores, coincidentes, concomitantes, recíprocas o posteriores, pues con ocasión de una eventual concausalidad en la ocurrencia del daño podría llegar a disminuirse la indemnización, o incluso exonerar a la entidad de toda responsabilidad; escrutinio que habrá de realizarse no a partir de la mera confrontación de conductas sino evaluando la causa jurídica del daño para definir en qué medida una u otra fue la determinante en la ocurrencia del hecho dañoso.
>
> En efecto, esa Corporación en relación con la coparticipación en la ocurrencia del daño ha anotado lo siguiente:
>
> "(...) [P]ara que opere la compensación de culpas de que trata el artículo 2357 del Código civil no basta que la víctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producción del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la víctima efectivamente contribuyó con su comportamiento a la producción del daño", pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fenómeno es que para deducir responsabilidad en tales supuestos 'la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre los concurrentes ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio. De lo cual resulta que sí, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el queno habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpa, que para los efectos de la gradación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil. En la hipótesis indicada solo es responsable, por tanto, la parte que, en

últimas, tuvo oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo' (CLII, 109 - Cas. 17 de abril de 1991)" (CSJ SC de 6 de may. de 1998, exp. 4972)0 (CSJ SC1697-2019, 14 may.).

Por esto, es que la Corte Suprema resalta que frente a las entidades bancarias no puede asumirse una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el BANCO podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como en efecto lo hizo y como se resalta en el presente escrito, corresponden a situaciones únicamente endilgables a los cuenta correntistas, en este caso respecto de la sociedad demandante quien era la única autorizada para realizar movimientos en sus cuentas bancarias y como se acredito con la revisión realizada por el BANCO fueron estos movimientos los que ocasionaron una variación en los estados de cuenta y no la actuación de terceros.

Por ello es claro que la decisión que por esta vía se apela no tuvo en cuenta que el daño alegado no fue demostrado por quien tenía la carga legal de hacerlo, pues nótese que no se probó que existieran esos saldos en las cuentas, lo que trae como consecuencia que no pueda tenerse verificada la cuantía del mismo, además de que como ya se ha reiterado, no se demostró que las inconsistencias en las cuentas de ahorro y corrientes tuviera como causa directa la ocurrencia de los hechos delictuales ocurridos en la sucursal Santa Rosa, dado que como ya se explicó no existe pronunciamiento al respecto, ni se acreditó que la discordancia en las sumas correspondiera a esta situación, en cambio sí se demostró por parte del BANCO que las actuaciones y movimientos bancarios adelantados por el cuentacorrentista, originaron un saldo a cargo del cliente, el cual fue respaldado con los soportes de los movimientos realizados, además de la revisión conjunta que adelanto el BANCO con funcionarios de la sociedad demandante, por ello debe ser revocada la decisión y fallar en sintonía a la apelación aquí propuesta.

Pues, como es sabido, uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, es el daño, entendido como todo detrimento o menoscabo de bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio material o moral, cuyo resarcimiento le incumbe al autor o al legalmente vinculado con éste, a la luz de lo establecido en los artículos 1612 y siguientes del Código Civil.

Por ello esa configuración temporal no permite asignar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, responsabilidad alguna en el acaecimiento del evento dañoso, pues el orden natural impide que las consecuencias antecedan a las causas, pues sin duda, todas las actividades de las personas que conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden al mundo de lo jurídico, imponen a las personas que actúan -sentido positivo- o que se abstienen de hacerlo -sentido negativo- parámetros que denotan honradez, probidad, lealtad y transparencia, en el campo negocial, que la actitud que asuman, satisfaga la confianza depositada por cada contratante en el otro, de modo que ella no resulte defraudada.

3. Indebida apreciación de dictamen pericial.

Además, el fallo de primera instancia hace una indebida apreciación del dictamen pericial, al haberle atribuido un poder demostrativo del cual carece, pues éste se limitó a calcular el monto total de los dineros retirados de las cuentas y el valor de unos intereses, pero de él no se desprende que la demandante haya sufrido menoscabo, por actividades

realizadas por el BANCO o que los recursos formarán parte de los dineros extraviados, dado que como se ha recalcado no existe pronunciamiento de la autoridad penal que haya considerado a la sociedad demandante como víctima de la actividad delictiva. En concreto, el Juez de primera instancia yerra pues le atribuye a ese medio probatorio eficacia demostrativa respecto del perjuicio, de la cual carece, además de que este se fundamentó en las cifras entregadas por la entidad demandante las cuales no se encontraban acreditadas por encontrarse en discusión en el marco del proceso, por lo que la estructuración de este se encuentra errada, como se manifestó en la objeción oportunamente presentada por parte del BANCO.

4. Indebida cuantificación del daño

Finalmente consideramos también que existe una indebida cuantificación del daño, pues habrá lugar a la reparación de perjuicios siempre que el demandante acredite su ocurrencia y extensión, pudiendo comprender tanto el menoscabo material como el incorporal. Tratándose del detrimento patrimonial, en el marco de la responsabilidad civil contractual, el afectado tendrá derecho al resarcimiento pleno del daño emergente constituido por los gastos incurridos como secuela del hecho perjudicial y, del lucro cesante, es decir, lo correspondiente a la ganancia o provecho dejado de obtener y como se ha señalado, no se encuentra demostrado el daño y en consecuencia tampoco su perjuicio.

Además, en gracia de discusión, su hubiese lugar a condenar, que tomo ya se dijo no es así dado que no existe prueba del fallo, el a quo no tenia la posibilidad de decretar la indexación y de decretar intereses remuneratorios, toda vez que la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos ha indicado que los intereses remuneratorios contienen el riesgo de la operación y la depreciación monetaria o inflación, por lo cual, el interés remuneratorio comercial sirve al designio simultáneo de retribuir el capital debido a título de préstamo o precio de un bien o servicio, el riesgo de la operación y la desvalorización de la moneda[1].

Por lo que ha sido enfática en establecer que:

> [C]uando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, **no pueden los Jueces, con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base para su cuantificación** (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida corrección.
>
> Sobre este particular la Sala ya ha precisado que, "la inclusión de la depreciación monetaria como componente de la tasa corriente de intereses, independientemente de que la obligación de pagarlos sea legal o convencional, puede verificarse en forma práctica observando cómo las entidades financieras en el país, buscando competir con las tasas de interés a nivel internacional, y evitar que se produzca la fuga de capitales…, fijan una tasa de interés que comprende, …,

[1] Sentencia de 27 de agosto de 2008 [SC-084-2008], exp. 11001-3103-022-1997-14171-01, Corte Suprema de Justicia – Sala de casación Civil.

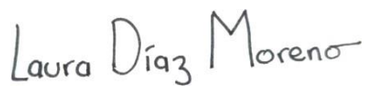
> tanto un valor por concepto de interés puro, como una compensación a la inflación y la devaluación del peso colombiano (…)

Por lo anterior, es claro que el juez de instancia no puede desconocer que el legislador fijó un mecanismo de indexación indirecta, a través de la obligación que fijo en cabeza de los deudores, en este caso del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de reconocer a su acreedor una tasa de interés, que cubría la desvalorización de la moneda, por lo que debe revocarse la decisión de primera instancia respecto de la condena frente a la actualización monetaria dado que la misma de acuerdo con la ley y la jurisprudencia citada se encuentra cubierta por los intereses remuneratorios.

Adicionalmente el juez de instancia desconoció, a pesar de que se encontraba acreditado en el proceso y no se presentó prueba en contrario, que las cuentas corrientes no generan intereses de ningún tipo dado que por su naturaleza únicamente se encuentra destinada a realizar el manejo de capital y a mantener el flujo de caja, por lo que no tiene la virtud de general intereses. En ese orden de ideas no le era posible al a quo ordenar el pago de intereses remuneratorio frente a la cuenta corriente No. 0-1270-000049-5 dado que frente a ella no se pactaron intereses.

Bajo estos términos presento la sustentación del recurso de apelación solicitando se tengan en cuenta los argumentos esgrimidos y se modifique la decisión de primera instancia.

Señor Juez,



LAURA NATALIA DIAZ MORENO
Cedula de ciudadanía número 1.026.278.161 de Bogotá.
Tarjeta Profesional número 267.556 del Consejo Superior de la Judicatura.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: SUSTENTACION APELACION 110013103 018 2020 00138 01 POLYBLEND vs INDESUELAS

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 11/08/2023 8:46 AM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

4 archivos adjuntos (961 KB)

SUSTENTACION RECURSO APELACIÓN INDESUELAS POLYBLEND.pdf; REPORTE DE PAGOS POR FACTURA POLYBLEND.pdf; Certificado Vigencia TP 256197 con Direccion Agosto 2023.pdf; NO antecedentes disciplinarios TP256197 Agosto 2023.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Andres Giovanny Rincon Gonzalez <giovannyrinconjuridico@gmail.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 8:06
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION APELACION 110013103 018 2020 00138 01 POLYBLEND vs INDESUELAS

Buen Día Honorable Magistrado Zuluaga Cardona

En mi calidad de apoderado de la sociedad ***Indesuelas*** me permito radicar sustentación del recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia el pasado 27 de abril de 2023 por el Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado ***110013103 018 2020 00138 01***

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes de acuerdo a su admisión del pasado 28 de julio del año en curso notificada por estado el 31 de julio de 2023.

Cordialmente,

ANDRES GIOVANNY RINCÓN GONZÁLEZ
Abogado
CALLE 97 A NO 10 - 67 OFICINAS 403 Y 404 CHICO NORTE BOGOTA
3202424028



Remitente notificado con
Mailtrack

Honorable Magistrado:

Dr.
IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
E. S. D.

ASUNTO: SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
Proceso Ejecutivo
Polyblend SAS vs Indesuelas SAS
Radicado *110013103 018 2020 00138 01*
Segunda Instancia

Andrés Giovanny Rincón González identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional no. 256.197 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado reconocido de la sociedad INDESUELAS S.A.S., dentro del término de ley concurro ante su Despacho para **SUSTENTAR** recurso de **APELACIÓN** contra la sentencia adoptada por el Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito de Bogotá el pasado 27 de abril de 2023, dentro del proceso ejecutivo citado en la referencia.

DE LA ACTUACIÓN APELADA

Se trata de la decisión adoptada por el Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito de Bogotá en el proceso citado en el que textualmente señaló "… *DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE PRUEBAS PARA EL COBRO, INCONSISTENCIA EN LA CONTABILIDAD DE LA DTE, RESPECTO DE LAS FACTURAS CONTENIDAS EN EL MANDAMIENTO EJECUTIVO PROFERIDO EN ESTE ASUNTO EL 6 DE OCTUBRE DE 2020, RESPECTO DE LAS FACTURAS:*
N. 1.1 ***A2048*** */N. 1.2* ***A2075****/N.1.3* ***A2091****/N. 1.4* ***A2116*** */N.1.5* ***A2117****/ N.1.6* ***A2145****/N. 1.7* ***A2172*** */N. 1.8* ***A2176*** */N. 1.9* ***A2191*** */N. 1.10* ***A2245*** */N. 1.11* ***A2251****/N. 1.12* ***A 2261*** */N. 1.13* ***A2301****/N. 1.14* ***A2310*** */N.1.15* ***A2313****/N.1.16* ***A2354*** */N.1.17* ***A2373*** */N.1.18* ***A2399****/N.1.19* ***A2401*** */N 1.20* ***A2447****/N 1.21* ***A2465****/N 1.22* ***A2483****/1.23* ***A2484*** */N 1.24* ***A2531****/N 1.25* ***A2603****/N 1.26* ***A2611****/N 1.27* ***A 2621*** */N. 1.28* ***A2626****/N 1.29* ***A266****0 /N 1.30* ***A2682*** */N 1.33* ***A2848*** */N 1.37* ***A3184****. Por las razones fácticas y probatorias analizadas enantelación…* "

De igual manera el operador judicial señaló en su sentencia lo siguiente:

"*…****CUARTO:*** *Declarar que existieron abonos en relación con las facturas: 1.21* ***A2706****/1.31* ***A2726****/1.34* ***A2926****/ 1.35* ***A3041****/ 1.36* ***A3120****/1.39* ***A3263*** */ 1.40* ***A3283****/1.41* ***A3315****/1.46* ***3449****…"*

1) ***Introducción de los hechos que sustentan la apelación***

Si bien es cierto el juzgado de primera instancia ordenó *", DECLARAR PROBADA la excepción de mérito denominadas:* ***Cobro de lo no debido, alegada por el demandado, por las razones fácticas analizadas en la parte considerativa de esta decisión,*** *en relación con las facturas:*
No: 1.38 ***No A3224*** */No 1.43* ***No A3384*** */No 1.44* ***No A3429****/No 1.45* ***No 3437*** */No 1.47* ***No A3494*** */No 1.42* ***No A3330****…"*

Es decir, la primera instancia le otorgó valor probatorio solo a las facturas que fueron canceladas por mi mandante en consignación o transferencia, pero las que fueron canceladas en efectivo las rechazó de plano con el argumento en las consideraciones de la sentencia que dichos pagos no fueron probados durante el proceso ni el debate probatorio y la carga argumentativa no la convenció conforme lo ordena el estatuto procesal.

Tanto en los interrogatorios de parte como en las pruebas testimoniales se logró establecer y concordar con las pruebas documentales que los pagos en efectivo si ingresaron a las arcas y contabilidad de Polyblend, luego entonces, no se puede desconocer las altas sumas que mi mandante cancelo por las facturas en efectivo.

No se puede pasar desapercibido las altas sumas de dinero en una línea de tiempo que fueron entregadas a la sociedad demandante factura por factura para un mejor análisis del honorable Sala Civil de la siguiente manera:

- **Factura A2048** por valor de $10.039.452 Mediante remisión no. 576 del 25 de septiembre de 2018 mi mandante abonó a esta factura en efectivo la suma de ***$4.175.216.*** De igual manera, mediante remisión no. 580 del 28 de septiembre de 2018 mi mandante abonó a esta factura en efectivo la suma de ***$4.000.000.*** Por último, mediante remisión no. 589 del 4 de octubre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.864.016.***

- **Factura A2075** por valor de $3.473. Mediante remisión no. 589 del 4 de octubre de 2018 mi mandante abonó a esta factura en efectivo la suma de ***$3.135.964.*** Por último, mediante remisión no. 598 del 16 de octubre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura la suma de ***$337.456.***

- **Factura A2116** por valor de $7.681.716**.** Mediante remisión no. 598 del 16 de octubre de 2018 mi mandante abonó a esta factura en efectivo la suma de ***$1.189.124.*** De igual manera, mediante remisión no. 603 del 19 de octubre de 2018 mi mandante abonó a esta factura en efectivo la suma de ***$2.000.000.*** Por último, mediante remisión no. 611 del 4 de octubre de 2018 mi mandante abonó en efectivo para el pago total a esta factura la suma de ***$4.492.592.***

- **Factura A2117** por valor de $5.007.956. Mediante remisión no. 611 del 24 de octubre de 2018 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$507.408.*** De igual manera, mediante remisión no. 616 del 26 de octubre de 2018 mi mandante en efectivo abonó a esta factura la suma de ***$2.000.000.*** Por último, mediante remisión no. 622 del 1 de noviembre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$2.500.548.***

- **Factura A2145** por valor de $1.857.876**.** Mediante remisión no. 622 del 1 de noviembre de 2018 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$1.499.452.*** Por último, mediante remisión no. 629 del 8 de noviembre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$358.424***

- **Factura A2172** por valor de $1.736.710. Mediante remisión no. 629 del 8 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.736.710***

- **Factura A2176** por valor de $2.381.773**.** Mediante remisión no. 629 del 8 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$2.381.773***

- **Factura A2191** por valor de $3.715.751**.** Mediante remisión no. 629 del 8 de noviembre de 2018 mi mandante abonó a esta factura la suma de ***$3.523.593.*** Por último, mediante remisión no. 632 del 10 de noviembre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$192.658***

- **Factura A2245** por valor de $2.123.286**.** Mediante remisión no. 642 del 20 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$2.123.286***

- **Factura A2251** por supuestamente valor de $1.857.876. Mediante remisión no. 642 del 20 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo el pago a esta factura en efectivo la suma de ***$1.826.180***

- **Factura A2261** por valor de $5.192.820**.** Mediante remisión no. 649 del 22 de noviembre de 2018 mi mandante abonó a esta factura en efectivo la suma de ***$4.700.000.*** Por último, mediante remisión no. 662 del 27 de noviembre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$492.820***

- **Factura A2301** por valor de $3.594.585**.** Mediante remisión no. 662 del 27 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$3.594.585***

- **Factura A2310** por valor de $1.918.459. Mediante remisión no. 662 del 27 de noviembre de 2018 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$912.595.*** Por último, mediante remisión no. 669 del 30 de noviembre de 2018 mi mandante en efectivo abonó para el pago total a esta factura la suma de ***$1.005.863***

- **Factura A2313** por valor de $1.918.459. Mediante remisión no. 669 del 30 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo en efectivo el pago total a esta factura la suma de ***$1.918.459***

- **Factura A2354** por valor de $1.096.262. Mediante remisión no. 669 del 30 de noviembre de 2018 mi mandante efectúo en efectivo el pago total a esta factura la suma de ***$1.096.262***

- **Factura A2373** por valor de $1.119.341. Mediante remisión no. 669 del 30 de noviembre de 2018 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$979.417.*** Por último, mediante remisión no. 680 del 6 de diciembre de 2018 mi mandante abonó para el pago total a esta factura la suma de ***$139.924***

- **Factura A2399** por valor de $1.918.459. Mediante remisión no. 680 del 6 de diciembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.918.459***

- **Factura A2401** por valor de $1.918.459. Mediante remisión no. 680 del 6 de diciembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.918.459***

- **Factura A2447** por valor de $1.797.293. Mediante remisión no. 680 del 6 de diciembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.797.293***

- **Factura A2465** por valor de $2.192.524. Mediante remisión no. 680 del 6 de diciembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$2.192.524***

- **Factura A2483** por valor de $7.673.834. Mediante remisión no. 680 del 6 de diciembre de 2018 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$2.033.344.*** Por último, mediante remisión no. 689 del 12 de diciembre de 2018 mi mandante en efectivo abonó para el pago total a esta factura la suma de ***$5.640.490***

- **Factura A2484** por valor de $931.823. Mediante remisión no. 689 del 12 de diciembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$931.823***

- **Factura A2531** por valor de $1.958.847. Mediante remisión no. 689 del 12 de diciembre de 2018 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.958.847***

- **Factura A2603** por supuestamente valor de $2.140.596. Mediante remisión no. 689 del 12 de diciembre de 2018 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$1.468.841.*** Por último, mediante remisión no. 713 del 23 de enero de 2019 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$671.755***

- **Factura A2611** por valor de $3.836.917. Mediante remisión no. 713 del 23 de enero de 2019 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$1.328.345.*** Por último, mediante remisión no. 732 del 12 de febrero de 2019 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$2.508.672***

- **Factura A2621** por valor de $1.918.459. mediante remisión no. 732 del 12 de febrero de 2019 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.918.459***

- **Factura A2626** por valor de $2.121.959. mediante remisión no. 732 del 12 de febrero de 2019 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$572.870.*** Por último, mediante remisión no. 739 del 25 de febrero de 2019 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.549.090***

- **Factura A2660** por valor de $1.918.459. mediante remisión no. 739 del 25 de febrero de 2019 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$1.450.910.*** Por último, mediante remisión no. 748 del 6 de marzo de 2019 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$467.548***

- **Factura A2682** por valor de $1.027.024. mediante remisión no. 748 del 6 de marzo de 2019 mi mandante efectúo el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$1.027.024***

- **Factura A2848** por valor de $1.958.847. Mediante remisión no. 779 del 25 de abril de 2019 mi mandante abonó en efectivo a esta factura la suma de ***$998.837.*** Por último, mediante remisión no. 784 del 3 de mayo de 2019 mi mandante abonó para el pago total a esta factura en efectivo la suma de ***$960.010***

- **Factura 3184** por valor de $1.119.341. Mediante consignación bancaria en Bancolombia con registro de operación no. 9303694069 sin fecha legible por el deterioro normal del documento mi mandante efectúo el pago total a esta factura la suma de ***$1.119.341***

2) ***Fundamentos de la Apelación***

Bajo las siguientes premisas deberá revocarse el numeral primero de la sentencia número 11 del pasado 27 de abril de 2023 proferida por el Juzgado Dieciocho (18) del Circuito de Bogotá dentro del ejecutivo identificado con el radicado 2020-138 y declarar probadas las excepciones propuestas oportunamente:

a. *Error jurídico*

El argumento jurídico de la honorable de la juez se centró en el inciso 3 del artículo 763 del código comercio modificado por la ley 1673 de 2013, y es que precisamente eso no era el verdadero problema jurídico, por cuanto las facturas si fueron aceptadas por mi mandante. El debate recae en que las excepciones y acervo probatorio desvirtuó que supuestamente los pagos no se habían efectuado.

Las excepciones se analizaron en conjunto y no por separado y esto hizo una sentencia que fraccionada de manera irrisoria en rechazar de plano pagos en efectivo y solo tener como validos los pagos en consignaciones o algunas transferencias bancarias.

En ningún momento se hizo uso de los tres (3) días que otorga el Código de Comercio para rechazar el contenido de las facturas, por cuanto estas ya habían sido canceladas en su totalidad.

La consideración de la operadora judicial para fallar en contra de Indesuelas frente a las mencionadas facturas no debió ser que en ese término debió rechazarlas, precisamente al presentarse un pleito en el momento procesal oportuno por vía de excepción se allegaron pruebas documentales como las remisiones que no fueron tachadas de falsas.

De igual manera, la honorable juez en los argumentos de la sentencia indicó que supuestamente este togado no allegó medios de prueba que validarán mis excepciones por falta de carga probatoria en los alegatos conforme lo ordena el artículo 167 del Código General del Proceso.

Supuestamente el demandante si cumplió con esta carga, pero solo frente a las facturas, pero esto jamás fue el punto de discusión.

Esto falta a la realidad sustancial y procesal del radicado por cuanto todas las pruebas documentales como remisiones fueron aceptadas por la parte demandante, en sus interrogatorios y testimonios y de igual manera, no fueron tachadas de falsa como lo ordena el Código General del Proceso. Lo irónico es que el operador judicial si valió las consignaciones efectuadas en entidades bancarias más no el pago en efectivo como una forma de extinguir obligaciones de acuerdo a la norma sustancial.

Ahora bien, según la juez en el interrogatorio de la contadora de Polyblend la misma confesó que "Juan Carlos" y "Jesus Diosa" ***si*** recibieron los dineros en efectivo, también es cierto, que según la juez no confesó nada sobre las remisiones, pero se puede inferir de manera lógica y razonable que, si aceptó y confesó el ingreso de dineros en efectivo, de manera residual y consecuente están dándole valor legal a las remisiones que reflejan los montos entregados en efectivo.

Nótese como las excepciones denominadas por esta bancada "EXTINCIÓN DE LA SUPUESTA DEUDA", "COBRO DE LO NO DEBIDO" y "DEFICIENCIA CONTABLE DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE" están llamadas a prosperar frente a las facturas ***A2048, A2075, A2091, A2116, A2117, A2145, A2172, A2176, A2191, A2245, A2251, A 2261, A2301, A2310, A2313, A2354, A2373, A2399 A2401, A2447, A2465, A2483, A2484, A2531, A2603, A2611, A 2621, A2626, A2660, A2682, A2848*** y finalmente ***A3184***¸ habida cuenta que con la confesión de la contadora representante legal de Polyblend se logró establecer que los dineros incorporados en las distintas remisiones que fueron aceptadas como pruebas documentales (así se hubiera incurrido en el error legal de su presunción de veracidad) si ingresaron en efectivo y recibidos por los mencionados colaboradores, así por negligencia de ellos no fueron adicionados a su sistema contable por la deficiencia, por la deuda quedó extinguida.

Por último, habrá de tenerse en cuenta y ser valorado el testimonio del Revisor Fiscal de Polyblend quien tuvo serias contradicciones en las personas encargadas de recibir dinero en la compañía, pero que si fue enfático textualmente en su testimonio donde expresó que *"Polyblend acepta que entró la plata"* y luego sin fundamento legal ni tributario alguno aludió que las remisiones no eran el documento legal idóneo para demostrar pagos en efectivo, sino, según él lo eran los recibos de caja.

Lógicamente esta afirmación como contador revisor fiscal le convenía para tapar anomalías y deficiencias contables de la compañía Polyblend SAS (que fueron confesadas por las partes en el interrogatorio) a la que asesora; cuando el representante legal principal de la misma el señor RUBELIO ANTONIO CUARTAS HERRERA mantiene en el exterior de manera constante (USA; también confesado en el interrogatorio) con facturaciones anuales de más de cinco mil millones de pesos mcte ($5.000´000.000) de acuerdo al ingreso por actividad ordinaria del certificado de existencia y representación legal cámara de comercio.

Lo valioso jurídicamente acá para nuestra defensa y sustentación es que el revisor fiscal en su testimonio aceptó que el dinero entregado en efectivo por Indesuelas si ingresó a Polyblend con las ya mencionadas remisiones, aunque denoten y aluden por su negligencia a donde fue parar finalmente los mismos; situación que no es imputable a mi mandante, pero que no fue tenida en cuenta al momento de dictar sentencia por la honorable juez de primera instancia.

b. Principio de Legalidad.

La honorable juez de primera instancia no tuvo en cuenta que de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil una forma de extinguir las obligaciones es el pago en efectivo.

Bajo el raciocinio y deducción de acuerdo al debate probatorio; que el dinero plasmado en las remisiones si fue recibido por trabajadores de la sociedad Polyblend (confesado en interrogatorio) (rectificado en testimonio), no se puede desconocer que las obligaciones se cancelaron en lo debido mediante el pago en efectivo, independientemente si en el debate probatorio se aceptara o no el formalismo de las remisiones, que según la juez no eran documentos idóneos como los recibos de caja, sin ningún sustento legal a tal premisa; sino obedeciendo a opiniones subjetivas.

También, habrá de atenerse a lo establecido en los artículos 1634 y 1635 del Código Civil que establece que para el que pago sea válido debe hacerse directamente al acreedor o a persona diversa cuando el acreedor lo ratifique, aunque sea de manera expresa o tácita.

Polyblend de manera continua ya venía aceptando que los pagos se hicieran en efectivo, no importa a cuál de sus funcionarios o el cargo que desempeñaran, así hubiera sido mediante remisiones. Quedo probado en los interrogatorios y testimonios que hasta choferes recibían el dinero en efectivo entregado por Indesuelas SAS a la sociedad Polyblend.

Así las cosas, lo sustancial debe primar sobre lo procesal y el principio de legalidad establece que todos los operadores judiciales deberán llegar no importa el tipo de proceso a la verdad material.

La verdad material del presente ejecutivo es que Indesuelas SAS ya había cancelado en su totalidad las facturas de las cuales se ordenaron seguir adelante ejecución en la sentencia a favor de Polyblend.

De igual manera, si las remisiones no fueron tachadas de falsas, no se pueden rechazar por no ser supuestamente pruebas conducentes, pertinentes ni “eficaz” tal como lo expresó de manera taxativa el operador judicial de primera instancia en las consideraciones y fundamentos de la sentencia.

Al respecto se debe tener en cuenta que la conducción de una prueba se refiere a la obligación de las partes de presentar las pruebas que considere pertinentes y útiles para demostrar sus afirmaciones. En caso de las pruebas documentales establece la norma ibídem que las partes deben presentar los documentos relevantes que respalden sus alegaciones. La falta de presentación de una prueba documental puede llevar a su exclusión y a que no sea tenida en cuenta en el proceso.

Las remisiones como pruebas documentales fueron presentadas en la contestación de la demanda y la proposición y sustentación de excepciones y en su término procesal, de descorrer traslado no fueron tachadas de falsas.

Por su parte, conforme a lo reglado en el artículo 167 del C.G.P. en conexidad con la carga de la prueba la pertinencia se refiere a la relación directa entre la prueba y los hechos en disputa en el proceso. En el caso de las pruebas documentales, debe estar directamente relacionadas con los hechos que se discuten en el proceso y ser capaces de aportar información relevante para resolver la controversia.

Luego entonces, si existió en el proceso la pertinencia de las remisiones que se afianzaron y consolidaron con las confesiones del interrogatorio y declaración de los testigos. La pertinencia de estas pruebas fue demostrar que los pagos ya se habían realizado incluso aunque fuera en dinero entregado en efectivo, presumiendo de la buena de la sociedad Polyblend que era quien lo recibía.

Por último, basándose en el artículo 165 del C.G.P. en conexidad con los medios de prueba la utilidad de una prueba se refiere a su capacidad para esclarecer los hechos y contribuir a la resolución del caso. Así las cosas, las remisiones junto con los interrogatorios y testimonios aportaron información relevante y fiable que contribuyó a probar las excepciones propuestas básicamente en la extinción de la deuda y cobro de lo no debido.

Conforme a lo esbozado, los pagos en efectivo deben ser admitidos y validados como pruebas documentales denominadas "remisiones" ya que así como la operadora judicial valoró las excepciones en conjunto y no por separado, luego entonces, también debe hacerse con todo el material probatorio a luz del Ius racionalismo.

3) Valoración de pruebas

Existe confusión en la valoración de pruebas errónea por cuanto existió ponderación judicial solo de las pruebas documentales, pero de manera acomodada, se extrajo de los interrogatorios lo que convenía para la sociedad demandante y no para la sociedad demandada cuando hubo confesiones taxativas tan importantes como que el dinero en efectivo si ingresó; como que no se tenía control alguno contable de los montos recibidos hasta por choferes de camión de la sociedad demandante.

La valoración de pruebas por parte del juez es un proceso crucial para llegar a una decisión conforme a Derecho debidamente fundamentada. La operadora judicial de primera instancia tendría que haber tenido en cuenta principios y pautas para la valoración de las pruebas, valorándolas de manera objetiva y prudente, conforme a los siguientes principios de libre convicción, sana critica, valor probatorio de las pruebas, testimonios, pericias y valoración de pruebas documentales.

Para comenzar el principio de libre convicción no puede ser ilimitado y arbitrario. Por el contrario, si bien es cierto permite al juez valorar las pruebas de acuerdo con su conciencia y razonamiento lógico, también es cierto, que tiene la facultad de evaluar las pruebas de manera independiente o en conjunto (como sucedió en el presente caso) y decidir cual tiene mayor peso en el proceso, basándose en la lógica, razón y experiencia.

Frente al principio de sana critica le implicaba a la honorable Juez Dra. Edilma Cardona Pinto evaluarlas de manera razonable, objetiva y prudente, considerando tanto su contenido como las circunstancias en las que fueron obtenidas. El operador judicial no podía basarse en suposiciones, prejuicios o conjeturas; por eso, en su momento procesal oportuno de la contestación de demanda y proposición de excepciones, este togado solicitó la prueba pericial de revisión de libros contables de la sociedad demandante, pero fue negada suponiendo que con solo los testigos

contables de cada parte se podía llegar a la verdad material del derecho de defensa. Lo que influenció bastante para no tener una sentencia con evidencia sólida y coherente.

Ahora bien, el principio de valor probatorio de las pruebas establece que las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto, considerando su número, calidad, concordancia y relación con los hechos y controversias en disputa. La juez debió evaluar la consistencia y coherencia de las pruebas presentadas en la contestación de la demanda y proposición de excepciones con la congruencia de las afirmaciones realizadas.

De la misma forma, los testigos debieron ser valorados de acuerdo a su idoneidad y credibilidad ponderando competencia y coherencia para emitir opiniones técnicas. En el presente caso, el testimonio del revisor fiscal de Polyblend mostró varias falencias del manejo de dineros en efectivo, así como de no enviar un estado de cuenta solicitado por mi mandante desde antes de la radicación de la demanda.

En cuanto a la valoración de las pruebas documentales la operadora judicial de primera instancia no verificó de manera adecuada la ya explicada conducencia, pertinencia y utilidad para llegar a evaluar si son verificables o no, y si podían contribuir de manera significativa a la resolución del caso.

Al no ser tachadas de falsas, las remisiones gozan de todo control de legalidad y en conexidad con las confesiones de los interrogatorios se logró con las mismas en el momento procesal oportuno demostrar y probar las excepciones propuestas.

4) <u>Conclusiones</u>

- Los pagos en efectivo son modos de extinguir obligaciones conforme al Código Civil.
- Si existió cobro de lo no debido y por lo tanto esta excepción debe prosperar en todas las facturas.
- Si existió deficiencia contable de la sociedad demandante y por lo tanto esta excepción debe prosperar en todas las facturas.
- Existió una errónea ponderación de pruebas en los argumentos y consideraciones de la juez de primera instancia para dictar sentencia.
- Se logró la confesión y testimonio de que los dineros en efectivo si fueron recibidos por Polyblend así hubiese sido por los documentos denominados “remisión”.
- Nunca la sociedad Polyblend envío un estado de cuenta a Indesuelas ni al juzgado, demostrando su mala fe y deficiencia contable frente a una supuesta cartera vencida.

- Al no ser tachados de falsos los documentos presentados en la contestación de demanda como remisiones se presumen auténticos y validos con valor probatorio idóneo para comprobar las excepciones propuestas.

- Lo que se pretende con las remisiones no es desvirtuar el titulo valor como factura al no haber sido rechazada conforme lo ordena el Código de Comercio para su aceptación; lo que se pretende con las mismas es comprobar que los dineros incorporados en las facturas ya fueron cancelados en su totalidad dentro su periodo de vencimiento.

- Los mal manejos contables de la empresa Polyblend que obtiene ingresos al año por más un millón de dólares no pueden afectar a una pyme como lo es Indesuelas que genera empleo por lo menos a veinte (20) personas y que no recibe ingresos de más de $200.0000.000 al año, pero que paga en su totalidad a cada uno de sus proveedores y colaboradores.

SOLICITUD

Así las cosas, honorable Magistrado solicito que el numeral primero de la sentencia número 11 del pasado 27 de abril de 2023 proferida por el Juzgado Dieciocho (18) del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 2020-0138 sea revocado y en su defecto sean probadas las excepciones de extinción de la deuda, cobro de lo no debido y deficiencia contable respecto de las facturas ***A2048, A2075, A2091, A2116, A2117, A2145, A2172, A2176, A2191, A2245, A2251, A 2261, A2301, A2310, A2313, A2354, A2373, A2399 A2401, A2447, A2465, A2483, A2484, A2531, A2603, A2611, A 2621, A2626, A2660, A2682, A2848***, y por consiguiente se termine el proceso en contra de la sociedad Indesuelas ordenando levantar todas las medidas cautelares decretadas, conforme a los argumentos de hecho y de derechos sustentados en esta apelación.

Cordialmente,



ANDRÉS GIOVANNY RINCÓN GONZÁLEZ.
C.C No. 1.032.403.758 de Bogotá.
T.P. 256.197 del C.S.J.

DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	02/08/2018	FC 2048 - 1261	10,039,452	-	
PAGOS	2018	25/09/2018	576	-	10,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	28/09/2018	580	-	4,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	04/10/2018	589	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	09/08/2018	FC 2075 - 1262	3,473,420	-	
PAGOS	2018	04/10/2018	589	-	5,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	16/10/2018	598	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	13/08/2018	FC 2091 - 1263	3,473,420	-	
PAGOS	2018	16/10/2018	598	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	17/08/2018	FC 2116 - 1264	7,681,716	-	
PAGOS	2018	16/10/2018	598	-	5,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	19/10/2018	603	-	2,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	24/10/2018	611	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	17/08/2018	FC 2117 - 1265	5,007,956	-	
PAGOS	2018	24/10/2018	611	-	5,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	26/10/2018	616	-	2,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	01/11/2018	622	-	4,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	24/08/2018	FC 2145 - 1269	1,857,876	-	
PAGOS	2018	01/11/2018	622	-	4,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	08/11/2018	629	-	8,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	30/08/2018	FC 2172 - 1270	1,736,710	-	
PAGOS	2018	08/11/2018	629	-	8,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	30/08/2018	FC 2176 - 1271	2,381,773	-	
PAGOS	2018	08/11/2018	629	-	8,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	04/09/2018	FC 2191 - 1274	3,715,751	-	
PAGOS	2018	08/11/2018	629	-	8,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	10/11/2018	632	-	2,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	07/09/2018	FC 2214 - 1275	1,857,876	-	
PAGOS	2018	10/11/2018	632	-	2,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	20/11/2018	642	-	4,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	13/09/2018	FC 2245 - 1276	2,123,286	-	
PAGOS	2018	20/11/2018	642	-	4,000,000	EFECTIVO

DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	13/09/2018	FC 2251 - 1277	1,857,876	-	
PAGOS	2018	20/11/2018	642	-	4,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	18/09/2018	FC 2261 - 1278	5,192,820	-	
PAGOS	2018	22/11/2018	649	-	4,700,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	27/11/2018	662	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	27/09/2018	FC 2301 - 1280	3,594,585	-	
PAGOS	2018	27/11/2018	662	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	28/09/2018	FC 2310 - 1281	1,918,458	-	
PAGOS	2018	27/11/2018	662	-	5,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	30/11/2018	669	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	29/09/2018	FC 2313 - 1282	1,918,458	-	
PAGOS	2018	30/11/2018	669	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	08/10/2018	FC 2354 - 1284	1,096,262	-	
PAGOS	2018	30/11/2018	669	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	11/10/2018	FC 2373 - 1286	1,119,341	-	
PAGOS	2018	30/11/2018	669	-	5,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	06/12/2018	680	-	10,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	19/10/2018	FC 2399 - 1288	1,918,458	-	
PAGOS	2018	06/12/2018	680	-	10,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	19/10/2018	FC 2401 - 1289	1,918,458	-	
PAGOS	2018	06/12/2018	680	-	10,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	26/10/2018	FC 2447 - 1290	1,797,292	-	
PAGOS	2018	06/12/2018	680	-	10,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	30/10/2018	FC 2465 - 1291	2,192,524	-	
PAGOS	2018	06/12/2018	680	-	10,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	02/11/2018	FC 2483 - 1292	7,673,834	-	
PAGOS	2018	06/12/2018	680	-	10,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2018	12/12/2018	689	-	10,000,000	EFECTIVO

DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	02/11/2018	FC 2484 - 1293	931,822	-	
PAGOS	2018	12/12/2018	689	-	10,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	27/11/2018	FC 2603 - 1298	2,140,596	-	
PAGOS	2018	12/12/2018	689	-	10,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2019	23/01/2019	713	-	2,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	28/11/2018	FC 2611 - 1299	3,836,917	-	
PAGOS	2019	23/01/2019	713	-	2,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2019	12/02/2019	732	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	29/11/2018	FC 2621 - 1300	1,918,458	-	
PAGOS	2019	12/02/2019	732	-	5,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	29/11/2018	FC 2626 - 1301	2,121,960	-	
PAGOS	2019	12/02/2019	732	-	5,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2019	25/02/2019	739	-	3,000,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	05/12/2018	FC 2660 - 1302	1,918,458	-	
PAGOS	2019	25/02/2019	739	-	3,000,000	EFECTIVO
PAGOS	2019	06/03/2019	748	-	1,500,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	07/12/2018	FC 2682 - 1303	1,027,024	-	
PAGOS	2019	06/03/2019	748	-	1,500,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	11/12/2018	FC 2701 - 1304	1,958,847	-	
PAGOS	2019	06/03/2019	748	-	1,500,000	EFECTIVO
PAGOS	2019	21/03/2019	703	-	3,000,000	CONSIGNACION
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2018	14/12/2018	FC 2736 - 1308	1,958,847	-	
PAGOS	2019	13/04/2019	4439	-	1,500,000	CONSIGNACION
PAGOS	2019	25/04/2019	779	-	1,500,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2019	28/01/2019	FC2848 - 1309	1,958,847	-	
PAGOS	2019	25/04/2019	779	-	1,500,000	EFECTIVO
PAGOS	2019	03/05/2019	784	-	1,500,000	EFECTIVO
DETALLE	AÑO	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	PAGO	TIPO DE PAGO
FACTURAS	2019	09/04/2019	FC 3184 - 1325	1,119,341	-	
PAGOS	2019	31/05/2019	4069	-	1,500,000	CONSIGNACION

SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		10,039,452	2048
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	4,175,416	5,864,036	2048
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	4,000,000	1,864,036	2048
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,864,036	-	2048
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		3,473,420	2075
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	3,135,964	337,456	2075
RECIBIDO JESES DIOSA	337,456	-	2075
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		3,473,420	2091
RECIBIDO JESES DIOSA	3,473,420	-	2091
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		7,681,716	2116
RECIBIDO JESES DIOSA	1,189,124	6,492,592	2116
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	2,000,000	4,492,592	2116
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	4,492,592	-	2116
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		5,007,956	2117
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	507,408	4,500,548	2117
RECIBIDO JESES DIOSA	2,000,000	2,500,548	2117
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	2,500,548	-	2117
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,857,876	2145
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,499,452	358,424	2145
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	358,424	-	2145
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,736,710	2172
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,736,710	-	2172
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		2,381,773	2176
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	2,381,773	-	2176
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	5864036	FACTURA
		3,715,751	2191
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	3,523,093	192,658	2191
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	192,658	-	2191
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,857,876	2214
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,807,342	50,534	2214
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	50,534	-	2214
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		2,123,286	2245
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	2,123,286	-	2245

SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,857,876	2251
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,826,180	31,696	2251
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		5,192,820	2261
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	4,700,000	492,820	2261
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	492,820	-	2261
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		3,594,585	2301
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	3,594,585	-	2301
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,918,458	2310
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	912,595	1,005,863	2310
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,005,863	5864036	2310
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,918,458	2313
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,918,458	-	2313
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,096,262	2354
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,096,262	-	2354
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,119,341	2373
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	979,417	139,924	2373
RECIBIDO FABIO RODRIGUEZ CC. 79,997,657	139,924	-	2373
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,918,458	2399
RECIBIDO FABIO RODRIGUEZ CC. 79,997,657	1,918,458	-	2399
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,918,458	2401
RECIBIDO FABIO RODRIGUEZ CC. 79,997,657	1,918,458	-	2401
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,797,292	2447
RECIBIDO FABIO RODRIGUEZ CC. 79,997,657	1,797,292	-	2447
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		2,192,524	2465
RECIBIDO FABIO RODRIGUEZ CC. 79,997,657	2,192,524	-	2465
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		7,673,834	2483
RECIBIDO FABIO RODRIGUEZ CC. 79,997,657	2,033,344	5,640,490	2483
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	5,640,490	-	2483

SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		931,822	2484
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	931,822	-	2484
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		2,140,596	2603
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,468,841	671,755	2603
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	671,755	-	2603
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		3,836,917	2611
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,328,245	2,508,672	2611
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	2,508,672	-	2611
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,918,458	2621
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,918,458	-	2621
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		2,121,960	2626
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	572,870	1,549,090	2626
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,549,090	-	2736
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,918,458	2660
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,450,910	467,548	2660
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	467,548	-	2660
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,027,024	2682
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	1,027,024	-	2682
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	5864036	FACTURA
		1,958,847	2701
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	5,428	1,953,419	2701
BANCOLOMBIA CORRIENTE 131-145619-58 RUBELIO CUARTAS	1,953,419	-	2701
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,958,847	2736
BANCOLOMBIA CORRIENTE 131-145619-58 RUBELIO CUARTAS	1,457,684	501,163	2736
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	501,163	-	2848
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,958,847	2848
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	998,837	960,010	2848
RECIBIDO JUAN CARLOS CC. 18,387,363	960,010	-	2848
SOPORTE DEL PAGO O RECIBIDO	ABONO FACTURA	SALDO FACTURA	FACTURA
		1,119,341	3184
BANCOLOMBIA CORRIENTE 131-145619-58 RUBELIO CUARTAS	1,119,341	-	3184

90,804,509

VENCE	SALDO	PAGO	PAGO	MORA	1.97%
01/09/2018	10,039,452	25/09/2018	4,175,416	24	158,222
9/25/2018	5,864,036	28/09/2018	4,000,000	3	11,552
28/09/2018	1,864,036	04/10/2018	1,864,036	6	7,344
	TOTAL INTERESES MORA FC 2048 - 1261				**177,118**
08/09/2018	3,473,420	04/10/2018	3,135,964	26	59,303
10/4/2018	337,456	16/10/2018	337,456	12	2,659
	TOTAL INTERESES MORA FC 2075 - 1262				**61,962**
12/09/2018	3,473,420	16/10/2018	3,473,420	34	77,550
	TOTAL INTERESES MORA FC 2091 - 1263				**77,550**
16/09/2018	7,681,716	16/10/2018	1,189,124	30	151,330
10/16/2018	6,492,592	19/10/2018	2,000,000	3	12,790
19/10/2018	4,492,592	24/10/2018	4,492,592	5	14,751
	TOTAL INTERESES MORA FC 2116 - 1264				**178,871**
16/09/2018	5,007,956	24/10/2018	507,408	38	124,965
10/24/2018	4,500,548	26/10/2018	2,000,000	2	5,911
26/10/2018	2,500,548	01/11/2018	2,500,548	6	9,852
	TOTAL INTERESES MORA FC 2117 - 1265				**140,728**
23/09/2018	1,857,876	01/11/2018	1,499,452	39	47,580
11/1/2018	358,424	08/11/2018	358,424	7	1,648
	TOTAL INTERESES MORA FC 2145 - 1269				**49,228**
29/09/2018	1,736,710	08/11/2018	1,736,710	40	45,618
	TOTAL INTERESES MORA FC 2172 - 1270				**45,618**
29/09/2018	2,381,773	08/11/2018	2,381,773	40	62,561
	TOTAL INTERESES MORA FC 2176 - 1271				**62,561**
04/10/2018	3,715,751	08/11/2018	3,523,093	35	85,400
11/8/2018	192,658	10/11/2018	192,658	2	253
	TOTAL INTERESES MORA FC 2191 - 1274				**85,653**
07/10/2018	1,857,876	10/11/2018	1,807,342	34	41,480
11/10/2018	50,534	20/11/2018	50,534	10	332
	TOTAL INTERESES MORA FC 2214 - 1275				**41,812**
13/10/2018	2,123,286	20/11/2018	2,123,286	38	52,983

	TOTAL INTERESES MORA FC 2245 - 1276				**52,983**
13/10/2018	1,857,876	20/11/2018	1,826,180	38	46,360
	TOTAL INTERESES MORA FC 2251 - 1277				**46,360**
18/10/2018	5,192,820	22/11/2018	4,700,000	35	119,348
11/22/2018	492,820	27/11/2018	492,820	5	1,618
	TOTAL INTERESES MORA FC 2261 - 1278				**120,966**
27/10/2018	3,594,585	27/11/2018	3,594,585	31	73,174
	TOTAL INTERESES MORA FC 2301 - 1280				**73,174**
28/10/2018	1,918,458	27/11/2018	912,595	30	37,794
11/27/2018	1,005,863	30/11/2018	1,005,863	3	1,982
	TOTAL INTERESES MORA FC 2310 - 1281				**39,775**
29/10/2018	1,918,458	30/11/2018	1,918,458	32	40,313
	TOTAL INTERESES MORA FC 2313 - 1282				**40,313**
07/11/2018	1,096,262	30/11/2018	1,096,262	23	16,557
	TOTAL INTERESES MORA FC 2354 - 1284				**16,557**
10/11/2018	1,119,341	30/11/2018	979,417	20	14,701
11/30/2018	139,924	06/12/2018	139,924	6	551
	TOTAL INTERESES MORA FC 2373 - 1286				**15,252**
18/11/2018	1,918,458	06/12/2018	1,918,458	18	22,676
	TOTAL INTERESES MORA FC 2399 - 1288				**22,676**
18/11/2018	1,918,458	06/12/2018	1,918,458	18	22,676
	TOTAL INTERESES MORA FC 2401 - 1289				**22,676**
25/11/2018	1,797,292	06/12/2018	1,797,292	11	12,982
	TOTAL INTERESES MORA FC 2447 - 1290				**12,982**
29/11/2018	2,192,524	06/12/2018	2,192,524	7	10,078
	TOTAL INTERESES MORA FC 2465 - 1291				**10,078**
02/12/2018	7,673,834	06/12/2018	2,033,344	4	20,157
12/6/2018	5,640,490	12/12/2018	5,640,490	6	22,224
	TOTAL INTERESES MORA FC 2483 - 1292				**42,380**

02/12/2018	931,822	12/12/2018	931,822	10	6,119
	TOTAL INTERESES MORA FC 2484 - 1293				**6,119**
27/12/2018	2,140,596	12/12/2018	1,468,841	- 15	- 21,085
12/12/2018	671,755	23/01/2019	671,755	42	18,527
	TOTAL INTERESES MORA FC 2603 - 1298				**- 2,558**
28/12/2018	3,836,917	23/01/2019	1,328,245	26	65,509
1/23/2019	2,508,672	12/02/2019	2,508,672	20	32,947
	TOTAL INTERESES MORA FC 2611 - 1299				**98,456**
29/12/2018	1,918,458	12/02/2019	1,918,458	45	56,690
	TOTAL INTERESES MORA FC 2621 - 1300				**56,690**
29/12/2018	2,121,960	12/02/2019	572,870	45	62,704
2/12/2019	1,549,090	25/02/2019	1,549,090	13	13,224
	TOTAL INTERESES MORA FC 2626 - 1301				**75,928**
04/01/2019	1,918,458	25/02/2019	1,450,910	52	65,509
2/25/2019	467,548	06/03/2019	467,548	9	2,763
	TOTAL INTERESES MORA FC 2660 - 1302				**68,272**
06/01/2019	1,027,024	06/03/2019	1,027,024	59	39,790
	TOTAL INTERESES MORA FC 2682 - 1303				**39,790**
10/01/2019	1,958,847	06/03/2019	5,428	55	70,747
3/6/2019	1,953,419	21/03/2019	1,953,419	15	19,241
	TOTAL INTERESES MORA FC 2701 - 1304				**89,988**
13/01/2019	1,958,847	13/04/2019	1,457,684	90	115,768
4/13/2019	501,163	25/04/2019	501,163	12	3,949
	TOTAL INTERESES MORA FC 2736 - 1308				**119,717**
27/02/2019	1,958,847	25/04/2019	998,837	57	73,320
4/25/2019	960,010	03/05/2019	960,010	8	5,043
	TOTAL INTERESES MORA FC2848 - 1309				**78,363**
09/05/2019	1,119,341	31/05/2019	1,119,341	22	16,171
	TOTAL INTERESES MORA FC 3184 - 1325				**16,171**

L INTERESES POR MORA DE TODAS LAS FACT **2,084,212**

A POR LA SUPERFINANCIERA EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DI

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

C E R T I F I C A

Certificado de Vigencia N.: 1438177

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la) señor (a) **ANDRES GIOVANNY RINCON GONZALEZ**, identificado(a) con la **cédula de ciudadanía** No. **1032403758**., registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado	256197	22/04/2015	Vigente

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO	CIUDAD	TELEFONO
Oficina	**CALLE 97A NO 10 67 OF 404 CHICO NORTE**	BOGOTA D.C.	BOGOTA	3202424028 - 3202424028
Residencia	**CALLE 97A NO 10 67 APTO 403 CHICO NORTE**	BOGOTA D.C.	BOGOTA	0317513120 - 3202424028
Correo	GIOVANNYRINCONJURIDICO@GMAIL.COM			

Se expide la presente certificación, a los **4** días del mes de **agosto** de **2023**.



ANDRÉS CONRADO PARRA RÍOS
Director

Buscar por: ○ Funcionario Judicial ◉ Abogado ○ Licencia temporal abogado

Número Documento: 1032403758 Buscar Imprimir Certificado

Main Report

República de Colombia
Rama Judicial

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS

EL SUSCRITO SECRETARIO JUDICIAL
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICADO No. **3512894**

CERTIFICA :

Que revisados los archivos de Antecedentes Disciplinarios de la Comisión, así como los del Tribunal Disciplinario y los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no aparecen registradas sanciones contra el (la) doctor (a) **ANDRES GIOVANNY RINCON GONZALEZ** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1032403758** y la tarjeta de abogado (a) **No. 256197**

Este Certificado no acredita la calidad de Abogado

Nota: Si el No. de la Cédula, el de la Tarjeta Profesional ó los nombres y/o apellidos, presentan errores, favor dirigirse al Registro Nacional de Abogados.

La veracidad de este antecedente puede ser consultado en la página de la Rama Judicial **www.ramajudicial.gov.co** en el link
https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial.
.

Bogotá, D.C., DADO A LOS CUATRO (4) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)

ANTONIO EMILIANO RIVERA BRAVO
SECRETARIO JUDICIAL

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO RV: REIVINDICATORIO (2018-451-01)

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 08/08/2023 16:58

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (446 KB)
2023.08.08 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN (VF).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 16:43
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: asistentejuridicojbconsultores@gmail.com <asistentejuridicojbconsultores@gmail.com>
Asunto: RV: REIVINDICATORIO (2018-451-01)

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: asistentejuridico jbconsultores <asistentejuridicojbconsultores@gmail.com>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 16:42

Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: marina rodriguez <jaimebravo@jbconsultoresjuridicos.com>; jaime.bravo@iq-atro.com <jaime.bravo@iq-atro.com>; andres.medina@iq-atro.com <andres.medina@iq-atro.com>; jessica.romero@iq-atro.com <jessica.romero@iq-atro.com>; samuel.urrego@iq-atro.com <samuel.urrego@iq-atro.com>; juanquinteroabogados@gmail.com <juanquinteroabogados@gmail.com>
Asunto: REIVINDICATORIO (2018-451-01)

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sala Civil
H.M. Ricardo Acosta Buitrago
E. S. D.

PROCESO:	REIVINDICATORIO
DEMANDANTE:	ADELA ROMERO RODRÍGUEZ
DEMANDADA:	MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL
RADICADO:	2018-451-01

Cordial saludo,

Por medio del presente correo electrónico nos dirigimos a ustedes con el fin de allegar ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN en los términos de la documental adjunta.

Así mismo, con observancia de lo dispuesto en el Artículo 3o de la Ley 2213 de 2022, se copia en este correo al extremo pasivo correspondiente.

Sin otro particular,
Cordialmente,

AMMR

ASISTENTE JURÍDICO JB CONSULTORES
Móvil: 3115145194 - WhatsApp: 3152581643
Bogotá - Calle 80 No. 12 - 55
Villavicencio - Meta / Calle 46 No. 27-48. La Grama.



Telefóno : +57 315 2581643
jaimebravo@jbconsultoresjuridicos.com
Bogotá - Carrera 11A No 69 - 35, Piso 3
Villavicencio - Meta / Centro Comercial Villacentro, Torre B oficina 509

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sala Civil
H.M. Ricardo Acosta Buitrago
E. S. D.

PROCESO:	REIVINDICATORIO
DEMANDANTE:	ADELA ROMERO RODRÍGUEZ
DEMANDADA:	MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL
RADICADO:	2018-451-01
ASUNTO:	SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

El suscrito **JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS**, mayor de edad identificado cédula de ciudadanía número 80.134.713, Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional número 234.547 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderado Especial de la señora **ADELA ROMERO BERNAL**, demandante dentro del presente proceso, por medio del presente escrito, y encontrándome dentro del término legalmente concedido, me dirijo respetuosamente a su Despacho con el fin de allegar **ESCRITO DE SUSTENTACIÓN** al **RECURSO DE APELACIÓN** formulado en contra de la Sentencia proferida dentro del presente asunto en primera instancia por parte del Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá.

El medio de impugnación en comento se sustenta, a más de los dichos expuestos ante el Juzgador de primer grado, en los siguientes términos:

PRIMERO. Como se expuso en la audiencia respectiva en la cual se anunció la formulación del presente recurso, la inconformidad que se suscita en relación con la Sentencia proferida en primera instancia, en la cual se negaron las pretensiones incoadas en la demanda, atiende a la falta de valoración probatoria que existió respecto sendas documentales y declaraciones vertidas en el proceso en relación con la legitimación en la causa, por pasiva, de la señora **MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL** respecto la relación contractual que se intentó entre los señores **ADELA ROMERO RODRÍGUEZ** y el señor **VICTOR HUGO ALOMIA RESTREPO (Q.E.P.D.)**, y de la que el Juez Veinticinco (25) Civil del Circuito intuyó la entrega de la posesión material del bien por parte de la aquí demandante, mismo argumento que sirvió de base para denegar la concesión de las pretensiones que se formularon en contra de la señora **MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL.**

Sobre este punto debe anotarse que en momento alguno la posesión se le entregó, por parte de la señora **ADELA ROMERO RODRÍGUEZ**, respecto del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 50S-026179, objeto de controversia, a la señora **MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL**, la cual, además, en nada hizo parte dentro del intento de compraventa que sobre el mismo bien se procurara, en la medida que el único documento que da cuenta de dicho intento de negocio jurídico es aquel denominado *"PROMESA DE VENTA"* que obra a vista del folio 05 del archivo *"001C1Folios1a28EscritoDemanda.pdf"* correspondiente al expediente digital de este proceso, pues

Telefóno : +57 315 2581643
jaimebravo@jbconsultoresjuridicos.com
Bogotá - Carrera 11A No 69 - 35, Piso 3
Villavicencio - Meta / Centro Comercial Villacentro, Torre B oficina 509

de tal documento sólo se escinde que las Partes fueron, en su orden, la señora ADELA ROMERO RODRÍGUEZ, como *"Vendedor",* y el señor VICTOR HUGO ALOMIA RESTREPO (Q.E.P.D.), como *"Comprador".*

De allí que se alegue la falta de legitimación en la causa por pasiva de la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL, no en relación con el proceso reivindicatorio que fue iniciado y que motiva este proceso, sino respecto la relación negocial inconclusa que se intentó respecto el bien inmueble mentado en este proceso, como pasará a explicarse.

La falta de legitimación alegada encuentra asidero en la total ausencia de relación que guarda la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL respecto las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la señora ADELA ROMERO RODRÍGUEZ y el señor VICTOR HUGO ALOMIA (Q.E.P.D.) intentaron efectuar la compraventa del bien inmueble identificado con folio de matrícula 50S-026179, el cual nunca se llevó a cabo, ni desplegaron las Partes involucradas ningún acto tratativo válido tendiente a materializar dicha compraventa, pues como se expuso al interior del proceso, el documento que se pretendió aducir como un Contrato de Promesa de Compraventa no es dable tenerlo como tal, y en dicho sentido carece el mismo de eficacia alguna, en la medida que adolece de uno de los requisitos esenciales del Contrato de Promesa como lo es el delimitar y establecer con claridad la fecha o el momento en que se llevará a cabo la celebración del contrato o negocio prometido, carencia que salta a la vista con la mera revisión del documento que se denominó como *"PROMESA DE VENTA"* y que obra, como se dijo, al interior del proceso.

Así las cosas, si la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL no hizo parte de dicha fallida negociación, mal se haría al tenerla como parte de la misma, o acreedora o cesionaria de derecho alguno sobre dicho particular, pues ninguna calidad acreditó la misma para tales menesteres, en la medida que no se adosó al proceso ningún elemento determinante de calidad de Cónyuge o Compañera Permanente del fallecido VICTOR HUGO ALOMIA (Q.E.P.D.) que le hiciese acreedora de tales derechos y obligaciones.

De dicha situación deviene la inconformidad con el fallo de primer grado, en la medida que el Juez de instancia concluyó que la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL era compañera permanente del señor VICTOR ALOMIA (Q.E.P.D.), y que en tal virtud, sobre la misma recaían derechos que hubiese podido reclamar o siquiera alegar en su favor el señor ALOMIA RESTREPO (Q.E.P.D.) en relación con el fallido negocio de compraventa del bien sobre el que se reclama la reivindicación, pues contrario a lo dicho por tal autoridad, lo cierto es que en momento alguno se acreditó, por los medios que la ley tiene previstos para tal fin, que la señora CONCEPCIÓN BERNAL fuese, en efecto, Compañera Permanente del fallecido, asumiendo, no obstante, que la misma ostentaba dicha calidad por algunas someras declaraciones vertidas en el curso de las diligencias correspondientes.

En este punto conviene advertir que dicha presunción también atiende a la falta de valoración probatoria que se endilga en este Recurso, en la medida que el Juez de Primera Instancia omitió hacer mención al Fallo de Tutela proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 11001220300020120137001, por el cual confirma la negación de amparo a los derechos fundamentales de KEVIN MAYCOL ALOMIA BERNAL, quien por conducto de la señora

Telefóno : +57 315 2581643
jaimebravo@jbconsultoresjuridicos.com
Bogotá - Carrera 11A No 69 - 35, Piso 3
Villavicencio - Meta / Centro Comercial Villacentro, Torre B oficina 509

CONCEPCIÓN BERNAL procuró iniciar un proceso ejecutivo en contra de mi mandante, el cuál no prosperó, precisamente, porque en su momento el señor KEVIN ALOMIA, como ahora la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL, carecía de legitimación para proceder de conformidad.

Es así que si de manera alguna se acreditó mediante los medios idóneos, conducentes, pertinentes y útiles que la señora CONCEPCIÓN BERNAL fuese, en efecto, Compañera Permanente del señor VICTOR HUGO ALOMIA (Q.E.P.D.), no se entiende como al interior del proceso se le dotó de tal calidad, máxime cuando en ningún momento se arrimó al plenario acta de conciliación, manifestación conjunta de voluntades o Sentencia Judicial proferida por autoridad competente (Juez de Familia) que determinara la existencia de una Unión Marital de Hecho, donde igualmente se advierte que el Juez de Primer Grado no estaba facultado para reconocerla oficiosamente y mucho menos presumirla, y en tal sentido, si al interior del proceso se echaba en falta tal acreditación, lo suyo era despachar desfavorablemente cualquier manifestación de la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL tendiente a que se le tuviese como Compañera Permanente del señor VICTOR ALOMIA (Q.E.P.D.).

Dado el caso que se hubiese obrado de tal modo, esto es, que se hubiese determinado que la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL no ostentaba calidad de Compañera Permanente alguna, lo propio, en consecuencia, era determinar que la misma no era acreedora de ningún derecho atinente al señor VICTOR ALOMIA (Q.E.P.D.) respecto el bien inmueble de folio de matrícula 50S-026179, y en tal sentido, que no guardaba respecto aquél ninguna relación respecto la forma en la que accedió y tomó posesión del bien inmueble objeto de la pretensión de reivindicación.

Es por ello que se advirtió al Juez de Primera Instancia que no era propio decir que la señora ADELA ROMERO RODRÍGUEZ había entregado de manera voluntaria la posesión a la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL del bien reclamado, o interpretar que así había sido por tener esta última una presunta Unión Marital de Hecho con el señor VICTOR ALOMIA (Q.E.P.D.), pues lo cierto es que cualquier relación negocial que se hubiere intentado sobre el inmueble objeto de controversia se había suscrito entre ADELA ROMERO y VICTOR ALOMIA (Q.E.P.D.), lo que de ninguna manera hace acreedora de derechos a la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL pues, como se iterado acá, en momento alguno ella acreditó válidamente ser compañera permanente del causante en los términos consagrados en la Ley 54 de 1990 y demás normas aplicables.

Con todo, la conclusión a la que ha de arribarse es que no es propio afirmar que la señora ADELA ROMERO entregó voluntariamente la posesión del bien identificado con folio de matrícula 50S-026179 a la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL para aducir bajo dicha errada conclusión que allí resulta entonces improcedente reclamar la reivindicación del bien, pues como queda demostrado en el proceso, nunca se entregó la posesión a la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL pues ella nunca tuvo o guardó con mi prohijada una relación civil o comercial negocial tendiente a entregar dicha posesión ni el derecho de propiedad y dominio sobre dicho inmueble, y en fue por ausencia de dicha relación que se incoo el proceso reivindicatorio en contra de CONCEPCIÓN BERNAL, quien de manera deliberada y sin derecho a proceder de conformidad despojó de la posesión a mi mandante, verdadera y actual titular del derecho de dominio del mismo predio.

Telefóno : +57 315 2581643
jaimebravo@jbconsultoresjuridicos.com
Bogotá - Carrera 11A No 69 - 35, Piso 3
Villavicencio - Meta / Centro Comercial Villacentro, Torre B oficina 509

Por último recálquese que si bien la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL carece de legitimación en la causa por pasiva respecto cualquier relación negocial relativa a la fallida compraventa del bien inmueble relacionado en este proceso, no carece de dicha legitimación para actuar como demandada en el proceso reivindicatorio que nos convoca, como quiera que lo que sí se encuentra demostrado es que la señora CONCEPCIÓN BERNAL tomó posesión del bien inmueble de número de matrícula inmobiliaria 50S-026179, y en tal virtud era suyo iniciar el proceso reivindicatorio en contra suya, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 946 y siguientes del Código Civil Colombiano, y en especial, conforme lo indicado en el Artículo 952 de la misma obra, que bien señala que *"la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor"*.

Así las cosas, siendo la señora ADELA ROMERO RODRÍGUEZ la titular del derecho de dominio del bien alegado, y reconociendo a la señora MARÍA CONCEPCIÓN BERNAL como poseedora del mismo, sin que pueda aducirse que aquella posesión fue entregada voluntariamente a la señora CONCEPCIÓN BERNAL por mi mandante, se encuentran, entonces, acreditados los requisitos para tener como prósperas las pretensiones de la demanda, y en tal virtud, ordenar la reivindicación del bien en favor de la señora ADELA ROMERO RODRÍGUEZ, lo que implica, entonces, la revocatoria de la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de Bogotá, revocatoria que se procura con la formulación del Recurso de Apelación que acá se sustenta.

En los anteriores términos dejo sustentada la alzada correspondiente, para su resolución conforme lo que en derecho corresponda.

MEDIOS DE PRUEBA

Como medios de prueba respetuosamente solicito se valoren, en relación con los dichos acá vertidos, la totalidad del plenario, incluidas aquellas documentales que se valoraron como pruebas documentales en el trámite de primera instancia, así como las declaraciones que se recepcionaron en las audiencias correspondientes.

Sin otro particular,
Para su conocimiento y trámite Honorable Magistrado,



JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS
C.C. No. 80.134.713
T.P. No. 234.547 del Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA PELAEZ ARENAS RV: 2020-00415-01 Sustentación Apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 11/08/2023 14:47

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (256 KB)

2020-00415-01-TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ- sustentacion apelacion-reparos.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA PELAEZ ARENAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Felipe Ortiz <felipe.ortiz@diazbradford.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 14:18
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; patriciacabieles@gmail.com <patriciacabieles@gmail.com>
Cc: erick.diaz@diazbradford.com <erick.diaz@diazbradford.com>
Asunto: 2020-00415-01 Sustentación Apelación

Respetados Magistrados,

Me permito remitir la sustentación de la apelación para el radicado 11001-31-030-27-2020-00415-01. Copio a la contraparte para los fines pertinentes.

Muy cordialmente,

Felipe Ortiz Beltrán
Partner | Socio

T 0057 315 896 64 75
E felipe.ortiz@dbolegal.com.co
felipe.ortiz@diazbradford.com
W www.dbolegal.com.co
O Calle 84a No. 10-33 of. 701 | Ed. Torre la Cabrera

Información confidencial - attorney client privilege

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.- SALA CIVIL-
Mag. JUAN PABLO SUAREZ OROZCO
E. S. D.

Ref.: **PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR SALAMANCA NEW START SAS Y OTROS CONTRA JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO.**

Rad. 11001-31-030-27-2020-00415-01

REF. **Sustentación** dentro del trámite de apelación contra la sentencia de primera instancia.

El suscrito, **FELIPE ORTIZ BELTRAN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.073.065 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional número 214.837 del C.S de la Judicatura, obrando como apoderado de la parte demandante **SALAMANCA NEW START SAS y OTROS**, comedidamente me dirijo a ustedes, dentro del término legal con el fin de presentar la sustentación de la apelación.

OPORTUNIDAD

De conformidad con el art. 12 de la ley 2213 de 2022, los cinco días empiezan a contar a partir de la ejecutoria del auto que admitió el recurso, el cual quedó ejecutoriado el día el 3 de agosto de 2023, quedando como plazo el 11 de agosto del año 2023, por lo que estoy en término.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Teniendo en cuenta que la sustentación debe mantener la coherencia de los reparos a la sentencia de primera instancia, nos permitimos desarrollar en el mismo orden los reparos que se propusieron en primera instancia:

1. **PRIMER REPARO:** La sentencia proferida no se pronunció sobre los aspectos que de oficio le correspondía abordar al juzgador de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso.

Desarrollo de la argumentación:

- El principio de congruencia se estructura en una importante garantía del derecho fundamental al debido y al acceso a la justicia en el sentido que el Juez que conozca la causa tiene el deber de fallar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, de allí que el juez también pueda percibir cualquier hecho modificativo del derecho sustancial, siempre que haya sido probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar su alegato de conclusión o que la ley permita que sea decretado de oficio.

- En el presente caso, estamos en presencia de una demanda verbal en la cual se pretende declarar el incumplimiento del señor JOSE MIGUEL CRISTANCHO en calidad de arrendatario, de un local comercial donde funcionaba la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, al terminar de forma anticipada el contrato, de allí que se solicite el pago de los meses restantes del canon y la cláusula penal.

- De esta forma, las partes reconocen la existencia del contrato, pero las únicas excepciones planteadas por la parte demandada fueron **I)**¨INEXISTENCIA DE LA MULTA PACTADA EN LA CLAUSULA QUNTA DEL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES POR INEXISTENCIA EXPRESA DE PRORROGA AUTOMATICA DEL CONTRATO¨ ; **II)** FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO COMO CAUSA QUE HIZO IMPOSIBLE LA CONTINUACION DE LA RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD; **III)** MALA FE DE LOS ARRENDADORES EN LA ENTREGA DE LOS INMUEBLES ARRENDADOS, CONFORME A LO PACTADO. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR ESTA CAUSA; y **IV)** LA GENERICA**.**

- De esta forma, el fallo de primera instancia desborda el alcance del principio de congruencia, dado que el Aquo en su fallo comete el error de negar las pretensiones, bajo otro concepto diferente a alguna de las excepciones propuestas y en particular cuando la apoderada de la parte demandada a minuto 1:12:26 del video11001310302720200041500_L110013103027CSJVirtual_01_20230628_093000_V 06/28/2023 05:20 PM UTC, insiste que reconoce ¨la terminación anticipada¨ pero que esta terminación estuvo justificada por la ¨excesiva

onerosidad¨, y la ¨fuerza mayor o caso fortuito¨, lo cual era su deber procesal probarlo y no simplemente alegarlo.

- Resulta que el Juez de primera instancia con el presente fallo deja un precedente peligroso, en la medida que el fallo "¨***autoriza***"´´ a cualquier arrendatario que lleve más de 2 años en un local comercial, de poder terminar el contrato y entregar o peor aún, abandonar o entregar el inmueble arrendado sin necesidad de aviso, ni pago de ninguna sanción, lo cual es algo que el derecho no puede patrocinar ni permitir, pues para el Juez de primera instancia el demandado Cristancho estaba autorizado para terminar el contrato en cualquier momento sin el pago de ningún concepto, bajo un concepto de "renovación" bastante discutible. Bajo su argumentación el derecho de renovación le permitía al arrendatario demandado terminar el contrato de esta manera, lo cual es un error garrafal como se explicará en otro reparo, pues denominó la excepción de oficio como ¨*no demostración del incumplimiento contractual*¨.

- No es razonable lo anterior, y se pone de presente al honorable Tribunal que en Colombia funciona la justicia rogada. Al ser la justicia rogada ello significa que la actividad del juez se desarrolla dentro del ámbito de actuación de las partes del proceso, donde las partes deben iniciar, impulsar y tramitar las actuaciones judiciales que les permitan defender sus pretensiones, en este sentido, era una carga procesal del señor Cristancho, demostrar la fuerza mayor o caso fortuito, y/o la teoría de la imprevisión que alegaba, pues resulta claro que confunde ambas figuras jurídicas y las entremezcla tanto en la contestación de la demanda, como en su interrogatorio y finalmente en sus alegatos de conclusión.

  La Corte Suprema de Justicia ha señalado que, al ser la justicia rogada, las partes deben impulsar sus solicitudes en aras de conseguir lo pretendido y que, para beneficiarse de los efectos de la norma jurídica solicitada, las partes deben precisar los supuestos de hecho que los activan.

  Así las cosas, las actuaciones oficiosas del juez deben limitarse únicamente a aquellas expresamente consagradas en la ley pues, de lo contrario, se estaría violentando la igualdad de armas y el debido proceso, como en efecto ocurrió en el caso *subexamine*, pues el Juez de primera instancia pasó por alto que, la fuerza mayor y caso fortuito, debe probarse por quien lo alega:

¨(…) Es claro que a quien corresponde demostrar la concurrencia de los requisitos que caracterizan la fuerza mayor o caso fortuito en razón a un suceso en específico, es al deudor que pretenda alegarlo para exonerarse de la ejecución de determinada obligación contractual, y así, lo que debe resultar de esa confrontación entre el hecho o acontecimiento y la clase de obligación, es que la imposibilidad de cumplimiento debe ser absoluta y permanente, más no una situación de mera dificultad, por grave que esta sea, del deudor a la hora de cumplir. Lo anterior, respondiendo a la norma general de responsabilidad contractual, consagrada en el artículo 1604 del Código Civil colombiano.¨

Art. 1604 CC: ¨La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; **la prueba del caso fortuito al que lo alega**.¨

- Precisamente, haciendo eco de lo comentado líneas atrás, en torno a que las altas cortes señalan los designios de las normas adoptadas, propicio resulta traer a la memoria lo que lLa Corte Suprema de Justicia, en el año 2005, al analizar el tema expuso, pronunciamiento que dada su vigencia y lo ilustrativo que resulta, lo reproduzco en sus apartes más importantes.

"Uno de los temas más sistemáticamente tratados por la jurisprudencia de la Corte, es el de la fuerza mayor o caso fortuito, en torno al cual ha delineado lo que –de antaño- constituye doctrina probable, edificada a partir de una definición legislativa que concibe ese fenómeno como "el imprevisto a que no es posible resistir" (art. 1º, Ley 95 de 1890).

"Según esa doctrina de la Sala, para que un hecho pueda ser considerado como evento de fuerza mayor o caso fortuito –fenómenos simétricos en sus efectos-, es necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de súbito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto de determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, queda sometido irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora.

"Imprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situación invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categoría genérica de causa extraña, puede ser considera como tal.

"En torno a tales requisitos, la Corte ha puntualizado que si "el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor…" (G. J. Tomos. LIV, página, 377, y CLVIII, página 63)", siendo necesario, claro está, "examinar cada situación de manera específica y, por contera, individual", desde la perspectiva de los tres criterios que permiten, en concreto, establecer si el hecho es imprevisible, a saber: "1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo" (Sentencia de 23 de junio de 2000; exp.: 5475). Y en relación con

la irresistibilidad, ha predicado la Sala que un hecho "es irresistible, "en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente –sojuzgado por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito" (Se subraya. Sentencia de 26 de noviembre de 1999; exp.: 5220).

"Conviene ahora, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido al escrutinio de la Sala, destacar que un hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales –o personales- del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas. Ello sirve de fundamento para pregonar que la imposibilidad requerida para la liberación del deudor, en casos como el que ocupa la atención de la Corte, es únicamente la absoluta, cerrándosele entonces el camino a cualquier otra.

*"**La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar un hecho de irresistible, pues las dificultades de índole personal que se ciernan sobre el deudor para atender sus compromisos contractuales, o aquellas situaciones que, pese a ser generalizadas y gravosas, no frustran –in radice- la posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, correlativamente reclaman la asunción de ciertas cargas o medidas racionales por parte del deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que la mayor onerosidad que ellas representen, de por sí, inequívocamente tenga la entidad suficiente de tornar insuperable lo que por esencia es resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, entonces, aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser superados con un mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que los soporta, no pueden ser considerados, en forma invariable, como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, en sentido estricto.***

"Sobre este particular, ha precisado diáfanamente la Sala que la fuerza mayor "Implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos" (Sentencia del 31 de mayo de 1965, G.J. CXI y CXII pág. 126), lo que será suficiente para excusar al deudor, sobre la base de que nadie es obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur). Por tanto, si irresistible es algo "inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias" (sent. del 26 de enero de 1982, G.J. CLXV, pág. 21), debe aceptarse que el hecho superable mediante la adopción de medidas que permitan contener, conjurar o eludir sus consecuencias, no puede ser invocado como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, frente al cual, se insiste, el ser humano debe quedar o permanecer impotente.

- De esta forma, y dado el debate que alcanzó la fuerza mayor o caso fortuito en la pandemia COVID 19 en los contratos de arrendamiento, quedó claro que la pandemia *per se*, no es un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, sumado a que la obligación dineraria es fungible, de allí que ni el

COVID, ni los decretos reglamentarios pueden exonerar al deudor, que era lo que debía haber demostrado la parte demandante, lo que no ocurrió.

Conclusión: Si el Juez de primera instancia hubiera realizado una debida valoración del principio de congruencia, hubiera determinado que en quien estaba la carga de demostrar la fuerza mayor o caso fortuito, así como la excesiva onerosidad del contrato de arrendamiento era a la parte demandada y, por el contrario, desbordó el principio de congruencia declarando una excepción de oficio, sacando completamente de contexto el concepto de renovación, vulnerando la igualdad de armas de las partes involucradas, por lo que este error no puede ser tenido como un arbitrio judicial, ya que no puede ser objeto de interpretación.

2. SEGUNDO y TECER REPARO (se dejan juntos dada su conexidad): En la sentencia apelada no se realizó una debida valoración probatoria sobre los distintos medios de prueba que se aportaron al expediente y que dan cuenta del incumplimiento del contrato de arrendamiento.

Desarrollo de la argumentación:

- El Juez de primera instancia, asume de la documental aportada que no se pactó una prórroga automática del contrato y, por ello, concluye que el derecho de renovación le permitía al demandado Cristancho poder terminar de forma unilateral el contrato sin ninguna consecuencia monetaria.

- Resulta que, en nuestro criterio este error del Juez es relevante, pues si hubiera observado bien el contrato y el actuar de las partes, hubiera determinado claramente que las partes fueron prorrogando y/o renovando el contrato en los mismos términos y condiciones, como se acredita en los años 2017 a 2020, previo a la pandemia.

- Nuestra insistencia que el juez califica de "´´contable"¨ consideramos que es transcendental, pues si las partes fueron prorrogando y/o renovando el contrato en iguales condiciones, hacían el incremento o reajuste del IPC como estaba pactado en el contrato allegado a la demanda (cláusula tercera), lo que demuestra que las partes recorrieron el contrato en su integridad, a tal

punto que el señor Cristancho en su interrogatorio reconoce el aumento o reajuste del canon año a año, con base en el contrato firmado por las partes.

- De esta forma, si bien un local comercial que lleva más de 2 años goza de protección, no es menos cierto, que las partes iban prorrogándolo y/o renovándolo de forma tácita todas las condiciones pactadas, a tal punto que el arrendatario reconoció el reajuste o aumento del canon conforme al IPC. de allí que el 1 de abril de 2020 el señor Cristancho pagó el canon con el incremento del IPC respectivo.

- En este punto el Juez y la parte demandada se enfrascan en un análisis de PRÓRROGA Y RENOVACIÓN que desborda la verdadera realidad y el problema jurídico y es que la razón por la cual el demandado Cristancho termina de forma unilateral el contrato, se basa en la supuesta facultad que se encontraba en la etapa de renovación y por la pandemia. Veamos, es claro que próorroga indica que el contrato se extiende en iguales condiciones de precio y plazo y, por el contrario, renovación es un derecho que surge luego de los 2 años, como protección al arrendatario del local comercial.

  Sin embargo, renovación no indica que el arrendatario pueda tomar decisiones unilaterales y caprichosas, en cualquier tiempo, como en efecto acá ocurrió, pues motu proprio, como no se le condonaron los cánones en la pandemia, decidió terminar el contrato de forma unilateral sin pagar los cánones restantes el día 28 de junio de 2020.

  Renovación indica que las partes, mediante un proceso verbal, cosa que acá no ocurrió buscan que un perito regule el nuevo canon y condiciones, conforme al art. 519 CCo, lo que normalmente genera un valor de canon más alto, bajo el entendido que este derecho pretende proteger al arrendatario para que no puede ser sacado de dicho local, con el fin de proteger la fama y la clientela del establecimiento de comercio. Señores Magistrados, obra por su ausencia, que el demandante haya iniciado dicho proceso de renovación, pues las normas de los artículos 518 y siguientes del CCo son de orden público, pero resulta que en este caso el demandado y el Juez de instancia, le dan el aval a su peculiar forma de terminación. Sumado a esto y como agravante, quedó claro que el servicio público de Notaría siguió funcionando y el señor Cristancho decidió mudarse a otros locales en el mismo centro comercial, a tal punto que el derecho de renovación justamente protege el

local comercial y acá, el demandado en claro abuso de la figura decide mudarse a otro local a pocos metros.

En gracia de discusión, ya en abril de 2020 el contrato se había renovado en iguales términos y condiciones, por lo que no puede ser que el arrendatario en junio 28 de 2020, dos meses después de su renovación, pudiera atribuirse terminarlo, sin ninguna consecuencia monetaria al respecto. El derecho de renovación -si además se entendiera se hubiera ejercido de forma extrajudicial- demuestra claramente que el contrato se había renovado por el mismo termino de 1 año, conforme al contrato inicial, por lo que no puede ser que la facultad de renovación se haya extendido en el tiempo y que el arrendatario goce de dicha prerrogativa de forma extendida en cualquier tiempo, pues es claro que es al momento del vencimiento.

Esto tiene relación con la fecha en la que se generó la controversia y era el COVID 19, donde las partes se generaron correspondencia cruzada, donde el punto de debate no era la renovación propiamente sino el COVID 19, de allí que el señor Cristancho pretendía terminar el contrato con base en los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional, pero al ser revisados por la Corte Constitucional, quedó clarísimo que ni el Gobierno puede inmiscuirse en la libertad contractual, pues darle ese tipo de prerrogativas a los arrendatarios era extralimitar el principio de que los contratos son ley para las partes, pues al dotar solo a una parte de la posibilidad de terminar el contrato de arrendamiento, la Corte considera que se creaba una asimetría injustificada en los derechos de las partes contractuales:

"***La falta de proporcionalidad en comento, se hace manifiesta y llega al extremo de la arbitrariedad cuando se considera que el arrendatario, además de estar facultado para terminar unilateralmente el contrato, queda exonerado, por virtud de la norma que fue declarada inexequible, de "cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes***"." *(Sentencia C-409 de 2020 Corte Constitucional de Colombia M.P Luis Javier Moreno Ortiz)*

- Bajo este entendido, no puede el Juez de primera instancia aducir que no hubo incumplimiento, porque entender que el derecho de renovación le permite al arrendatario terminar el contrato sin ninguna consecuencia, sería justamente avalar lo que la Corte declaró inexequible, y es que los arrendatarios se tomen atribuciones por fuera de la ley, el contrato y su actuar

contractual. Si esto fuera así, todos los contratos de arrendamiento de local comercial que llevan más de 2 años, tendrían una inseguridad jurídica latente y es que, si el arrendatario no se le cumplen sus peticiones de renovación, este puede de forma unilateral terminar el contrato, sin ninguna consecuencia, penalidad o sanción. Es una conclusión ilógica y que el derecho no puede avalar, pues está claro que el dolo futuro no es legalmente permitido (artículo 1522 del Código Civil).

Conclusión: Con independencia de si estábamos en prórroga o renovación del contrato, lo cierto es que el Juez de primera instancia valoró indebidamente la definición de renovación, para darle un alcance que supera el equilibrio contractual y la seguridad jurídica, pues el derecho de renovación debe ejercerse mediante un proceso y una cuerda procesal definida en la ley, y además la renovación no indica que el arrendatario que lleva más de 2 años, pueda terminar el contrato de forma unilateral, sin pagar sanción o cláusula penal, en cualquier tiempo.

3. CUARTO y QUINTO REPARO (Se dejan juntos dada su conexidad): El Juzgado nada le mereció y nada tuvo en cuenta su pronunciamiento respecto a la cláusula penal, en la medida que la entrega del local, en la forma como ocurrió, **es un abandono y entrega injustificada para hábilmente mudarse a unos pocos metros.**

Desarrollo de la argumentación:

- Erradamente para el Juez de primera instancia, el hecho de que las partes hayan cruzado información y correspondencia (cartas) donde los arrendadores le dicen que debe entregar en iguales condiciones en que lo recibió, es prueba suficiente de la entrega y aceptación de la entrega, sumado a que atendiendo a que la señora Esperanza Alicia Jiménez Giraldo se acercó a la notaría del día de la supuesta entrega y que, por ello, entonces se entiende que cumplió su obligación.

- Con el debido respeto, nos permitimos disentir de dicha conclusión que además fue una pequeña referencia en la sentencia, en la medida que si se mira con detenimiento el escrito de demanda, la parte demandante no era una sola, sino varias personas naturales y jurídicas en calidad de

Arrendadores, de allí que en la carta a que se hace referencia y que obra en el plenario, queda claro que los Arrendadores aceptarían la entrega, **siempre que el Arrendatario procediera a pagar los cánones faltantes al periodo, conforme a la cláusula quinta del contrato y sumado a la cláusula penal de 100 millones de pesos, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato**.

- En efecto, ninguna de las partes autorizó a un tercero o a la señora Esperanza Alicia Jiménez Giraldo para que recibiera el local, así como ella tampoco nunca lo recibió pues simplemente pasó al medio día por la notaría para ver si seguía en funcionamiento en el día que pretendían unilateralmente e injustificadamente entregar, advirtiendo que este negocio funcionaba con completa normalidad por lo cual se fue inmediatamente. De allí que como está probado el señor Cristancho, procedió a inventarse temerariamente una entrega de forma unilateral y con la presencia de 2 testigos en un acta que no está firmada por ninguno de los demandantes arrendadores, lo cual, señores Magistrados no corresponde a una entrega real y material, pues justamente amparándose en el COVID 19, el señor Cristancho pretendió hacer una entrega sin el lleno de requisitos, pues recuérdese el contrato es bilateral.

- ¿De nuevo nos preguntamos, el derecho a la renovación y el COVID 19 le facultaban al arrendatario a decidir la fecha y hora de la entrega sin presencia de la parte demandante y abandonar el local comercial? Como en efecto ocurrió. Creemos respetuosamente que el fallo de primera instancia nada le mereció este comportamiento, sumado a que estamos hablando de un Notario que da fe pública, para lo cual este acto unilateral activa de forma inmediata el pago de la cláusula penal, como mínimo, lo cual brilla por su ausencia en el fallo apelado, y que nada le mereció al juez de instancia, pues su referencia a este punto fue insuficiente.

- Que no se diga que la señora Esperanza Alicia Jiménez Giraldo estaba autorizada para recibir o que esto se presume, en la medida que en su dicho la referida señora fue clara en indicar que se acercó a verificar al medio día para ver si se iba a entregar o no como afirmaba el señor Cristancho en su carta. Fíjese que se presentó al medio día y no a la hora avisada por el arrendatario, sumado a que no tenía ningún documento, poder o autorización

de los otros arrendadores, para que el Juez presuma que dicha asistencia fuera en señal de aceptación de la entrega.

Conclusión: De nuevo el fallo de primera instancia desborda el alcance de una obligación formal, para lo cual el superior deberá revocar y encontrar que, respecto a la entrega, el arrendatario incumplió con sus obligaciones y, por ende, se debe hacer acreedor de dicha sanción pecuniaria por estarlo así pactado.

Yerra flagrantemente el juez de primera instancia con la sentencia proferida porque no solo vulnera las normas sobre el contrato de arrendamiento y arrendamiento de las cosas sino que arremete en contra de la buena fe y la seguridad jurídica en los negocios jurídicos.

De conformidad con todo lo anterior, el Aquo, realizó una indebida valoración de las pruebas, realizó una indebida interpretación del contrato y el derecho de renovación, lo cual no se compadece con la documental y lo explicado renglones arriba, motivo por el cual solicitamos respetuosamente al Tribunal revocar la decisión reprochada y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

De los Honorables Magistrados,



FELIPE ORTIZ BELTRÁN
CC. 80.073.065 de Bogotá
T.P. 214.837 del C.S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR SUAREZ GONZALEZ RV: Sustentación recurso de apelación. REF.: Proceso Ordinario de HERNANDO SARMIENTO PALACIOS Y OTRO contra PEÑALISA ENTRE RIOS S.A. -EN LIQUIDACIÓN- Y OTROS. RAD: 1100131030-29-2014-00679-05

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 10/08/2023 16:18

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (235 KB)
20230810 sustentación recurso apelación.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR SUAREZ GONZALEZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Gallo Medina Abogados <gallomedina@gallomedinaabogados.com>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 15:45
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Santiago Acuña <uruenaramirezabogados@gmail.com>; Segundo galindo rangel <segundogalindo@hotmail.com>
Asunto: Sustentación recurso de apelación. REF.: Proceso Ordinario de HERNANDO SARMIENTO PALACIOS Y OTRO contra PEÑALISA ENTRE RIOS S.A. -EN LIQUIDACIÓN- Y OTROS. RAD: 1100131030-29-2014-00679-05

Señor
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ -SALA CIVIL-.
Mag. Pte. Dr. Luis Roberto Suárez González
E. S. D.

REF.: Proceso Ordinario de **HERNANDO SARMIENTO PALACIOS Y OTRO** contra **PEÑALISA ENTRE RIOS S.A. -EN LIQUIDACIÓN- Y OTROS.**

RAD: 1100131030-29-2014-00679-05

LUIS ALEJANDO GALLO GÓMEZ, en mi condición de apoderado judicial de la sociedad **FERNANDO MAZUERA & CIA S.A.,** respetuosamente manifiesto que por medio del presente **SUSTENTO EL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto en contra de la sentencia anticipada de primera instancia, proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022, el presente memorial se remite con copia a las demás partes del proceso.

Cordialmente,

GALLO MEDINA ABOGADOS

Luis Alejandro Gallo Gómez
Carrera 7 #76-35 oficina 502
(601) 3218101
www.gallomedinaabogados.com

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, **GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S**., garantiza la confidencialidad de los datos personales. Sus datos forman y/o formarán parte de una base de datos gestionada bajo la responsabilidad de **GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S**., con la única finalidad de prestarle los servicios comprendidos en nuestro objeto social. En caso de que usted no manifieste expresamente que no autoriza el tratamiento de sus datos personales ni haya solicitado la supresión de los mismos de nuestras bases de datos, se entenderá que nos autoriza para continuar con el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo a la "Política de Tratamiento de Datos Personales" adoptada por la Compañía y que se encuentra disponible para su consulta en la Av. Calle 72 No. 6-30 Piso 18.

Señor
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ -SALA CIVIL-.
Mag. Pte. Dr. Luis Roberto Suárez González
E. S. D.

REF.: Proceso Ordinario de **HERNANDO SARMIENTO PALACIOS Y OTRO** contra **PEÑALISA ENTRE RIOS S.A. -EN LIQUIDACIÓN- Y OTROS.**

RAD: 1100131030-29-2014-00679-05

LUIS ALEJANDO GALLO GÓMEZ, en mi condición de apoderado judicial de la sociedad **FERNANDO MAZUERA & CIA S.A.,** respetuosamente manifiesto que **SUSTENTO EL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto en contra de la sentencia anticipada de primera instancia, proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, notificada por anotación en el estado electrónico del 13 del mismo mes y año, que declaró prospera la excepción previa de cosa juzgada y ordenó la terminación del proceso respecto de mi representada, conforme a lo siguiente:

I. OPORTUNIDAD PARA SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, norma vigente al momento de la interposición del presente recurso, señala que, ejecutoriado el auto que admite el recurso, en nuestro caso, el apelante debe sustentar la apelación, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Ahora bien, el Tribunal admitió el recurso de apelación mediante providencia del 27 de julio de 2023, notificada por anotación en el estado electrónico del 31 del mismo mes y año. De acuerdo con el artículo 302 del Código General del Proceso, las providencia que se profieren fueran de audiencia cobran ejecutoria transcurridos tres (3) días después de su notificación.

Así las cosas, el auto que admitió el recurso de apelación cobró ejecutoria el 3 de agosto de 2023 y los cinco (5) días con los que se cuenta para sustentar el recurso de apelación transcurren del 4 al 11 de agosto de 2023, por lo que esta sustentación se presenta dentro de la oportunidad legal.

II. OBJETO DEL RECURSO.

El presente recurso tiene por objeto que se **REVOQUE** el numeral 3° de la sentencia anticipada del 12 de octubre de 2022, y en su lugar se condene en costas y perjuicios a la parte demandada por haber resultado vencida dentro del presente proceso.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

En la providencia impugnada, el juzgado de primera instancia no condenó en costas, aduciendo que la ley no preveía la condena en costas en estos casos.

Contrario a lo que afirma el juez *a quo*, se debe precisar que la norma procesal si prevé la condena en costas para el evento en que la parte resulte vencida.

Al respecto, lo primero que se debe señalar es que, conforme el inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue modificado por la Ley 1395 de 2010, la decisión judicial que declara probada la excepción de cosa juzgada, tal y como sucede en el presente caso, corresponde a una sentencia anticipada que, en relación con mi representada, puso fin al proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester referirse a la norma general que regula la condena en costas, siendo que el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, legislación aplicable al presente caso, establece lo siguiente:

> *"1.* ***Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso****, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.*
>
> *(…).*
>
> *2.* ***La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho*** *a ser incluidas en la respectiva liquidación. (…)."* (Subrayado fuera del texto)

Con base en la norma anterior, es claro que, **siempre que una parte resulte vencida en el proceso, hay lugar a imponerle la condena en costas y la codena se debe imponer en la sentencia, señalando, en esa misma providencia el valor de las agencias en derecho.**

Frente al punto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que:

> "***La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto****, según el artículo 365, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra*". (resaltado fuera del texto original)[1]

[1] Corte Constitucional. Sentencia C- 157 DEL 21 DE MARZO DE 2013. M.P. Mauricio González Cuervo

Conforme con la jurisprudencia mencionada, el criterio para la imposición de la condena en costas es un criterio objetivo, por lo tanto, cumplida la condición que da lugar a su configuración, esto es, que la parte procesal resulte vencida, deviene como consecuencia automática la imposición de la condena.

Téngase en cuenta que, en el presente caso, no solo se declaró la prosperidad de la excepción previa presentada por mi poderdante, sino que se decretó la terminación del proceso respecto del mismo, por lo que, no hay lugar a dudas que se está dentro del supuesto del numeral 1° artículo 392 atrás mencionado, esto es, que la demandante resultó vencida dentro del proceso, y por ende, se reitera, hay lugar a imponerle la condena en costas.

Si lo anterior no fuera suficiente, en todo caso se debe tener en cuenta que, en la norma en comento, se estipula que hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable la formulación de excepciones, por lo que, en aplicación del principio de igualdad, si se condena en costas a quién se le niegan unas excepciones previas, no hay razón alguna para no condenar en costas a la demandante, cuando prosperan las excepciones previas que formuló la demandada y se declaró la terminación del proceso, tal y como sucedió en el presente caso, esto es, cuando no prosperaron sus pretensiones.
Al respecto, la doctrina nacional ha señalado que:

> *"Los incidentes, trámites de amparo de pobreza,* ***excepciones previas*** *y nulidades que se adelantan coetáneamente con el proceso en el cual se promueven,* ***también permiten que quien los ha promovido y los gana o pierde, se le favorezca o condene a pagar las costas correspondientes.*** *En los incidentes se puede incurrir en numerosos gastos, por lo cual, quien es desfavorecido con el auto interlocutorio en que se falla el incidente, debe ser condenado en costas."*[2] (Resaltado fuera del texto)

Si bien, la cita doctrinal se refiere al Código General del Proceso, nótese que, respecto de la condena en costas, la regulación es la misma tanto en dicha norma procesal como la que consagraba el Código de Procedimiento Civil, por lo que, resulta aplicable al caso en concreto.

Conforme a lo expuesto, y dado que la providencia impugnada pone fin al proceso en contra de mi representada, resulta totalmente procedente imponer la condena.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que, conforme a las normas legales, las costas comprenden dos rubros a saber:

- Las agencias en derecho y
- Los costos y gastos en que incurrió la parte favorecida con la condena.

En este sentido, puede darse el supuesto que dentro del proceso no se hayan causado gastos, por ejemplo, no se incurrió en el pago de honorarios de auxiliares de la justicia, pago de copias para surtir recursos ante el superior, gastos de notificación u otros, no obstante lo cual, ello no implica que no se condene en costas o, no se condene al pago de las agencias en derecho que se causaron dentro del proceso y/o el trámite procesal correspondiente.

---

[2] López Blanco, Hernan Fabio. Código General del Proceso Parte General. Dupre Editores. Bogotá, Colombia. 2016. Pag. 1053-1054

En este punto la doctrina ha señalado que:

> *"Se ha destacado que dentro del concepto de costas está incluido el de agencias en derecho, que constituye la cantidad que debe el juez ordenar para el favorecido con la condena en costas con el fin de resarcirle de los gastos que tuvo que afrontar para pagar los honorarios de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzos dedicados a esta actividad."*[3].

Conforme lo expuesto, al imponer condena en costas se debe fijar el valor de las agencias en derecho, para lo cual se deberán aplicar las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y los criterios mencionados en el numeral 3° del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto de los gastos, el otro rubro los gastos que se causaron dentro del proceso y que se deben reconocer en la medida en que se encuentren debidamente acreditados y hayan sido útiles y necesarios para la defensa de los intereses de la parte favorecida con la condena.

C. SOLICITUD

De conformidad con lo anterior, respetuosamente solicito al Honorable Tribunal que se sirva **REVOCAR** el numeral 3° de la sentencia anticipada de primera instancia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar, se sirva condenar en costas y perjuicios a la parte demandante y a favor de mi mandante, por haber resultado aquella vencida en el trámite de primera instancia.

Señor Juez,



LUIS ALEJANDRO GALLO GÓMEZ
C.C. No. 80.873.718 de Bogotá D.C.
T.P. No. 174.216 del C. S. de la J.

[3] López Blanco, Hernan Fabio. Código General del Proceso Parte General. Dupre Editores. Bogotá, Colombia. 2016. Pag. 1058

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO RV: Proceso 20200034903 - AMCOIN Vs. Alan González y otra - Recurso de súplica contra auto del 3 de agosto de 2023

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 11/08/2023 15:38

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

4 archivos adjuntos (470 KB)

PE - 20200034903 - AMCOIN - Recurso de suplica contra auto del 3.8.23 - 11.8.2023.pdf; PEXT - 202100571 - AMCOIN - Auto fija fecha para interrogatorio - 20.10.21.pdf; PE - 202000349 - AMCOIN - Estado - 3.12.2021.pdf; PE - 202000349 - AMCOIN - Auto resuelve reposición contra MP - 2.12.2021.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Carlos Vera <carlosveralegal@gmail.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 15:26
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Andres Cortes <andres.cortes@cortesasociados.com.co>; presidencia@cortesasociados.com.co <presidencia@cortesasociados.com.co>
Asunto: Proceso 20200034903 - AMCOIN Vs. Alan González y otra - Recurso de súplica contra auto del 3 de agosto de 2023

Honorable Magistrado
Ricardo Acosta Buitrago
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil
E S D

Proceso.	110013103029**20200034903**
Demandante	AMCOIN SAS
Demandado.	Alan González VITALUM IPS
Asunto.	**Recurso de súplica contra auto del 3 de agosto de 2023**

Carlos Román Vera Medina, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado sustituto del señor **Alan Albeiro González Varela**, demandado dentro de las presentes diligencias, por medio del presente escrito

me permito presentar **recurso de súplica contra el auto del 3 de agosto de 2023**, proferido por su Despacho, de acuerdo con los documentos adjuntos.

Cordialmente,

Carlos Román Vera Medina
CC. 1.026.290.117 de Bogotá
TP. 301.648 del CS de la J

Honorable Magistrado
Ricardo Acosta Buitrago
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil
E S D

Proceso.	**11001310302920200034903**
Demandante	**AMCOIN SAS**
Demandado.	**Alan González** **VITALUM IPS**
Asunto.	**Recurso de súplica contra auto del 3 de agosto de 2023**

Carlos Román Vera Medina, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado sustituto del señor **Alan Albeiro González Varela**, demandado dentro de las presentes diligencias, por medio del presente escrito me permito presentar **recurso de súplica contra el auto del 3 de agosto de 2023**, proferido por su Despacho, de acuerdo con los siguientes:

I. Fundamentos jurídicos

1. Procedencia del decreto y práctica de la prueba trasladada

Contrario a lo indicado por el Magistrado Sustanciador, no se puede afirmar que no exista causal en la cual se fundamente la petición de la prueba trasladada de las resultas del proceso con radicado 11001310304620210057100, adelantado en el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, como a continuación se expone.

De acuerdo con el artículo 327 del Código General del Proceso, el juez deberá decretar las pruebas que se soliciten dentro del trámite de segunda instancia, en los siguientes casos:

- Cuando las partes las pidan de común acuerdo.

- Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.

- **Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.**

- Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.

- Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la prueba trasladada que se solicita se decrete en la segunda instancia, solo se obtuvo a través de la audiencia llevada a cabo el 27 de enero de 2022, presidida por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, tal y como se confirma con la providencia referida en el numeral 3 del título de Anexos. Si se tiene en cuenta que la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia del proceso de la referencia feneció el 12 de enero de 2022, se

debe afirmar que, para tal fecha, la prueba en cuestión corresponde a un hecho posterior al término para presentar excepciones de mérito.

Para ofrecer claridad del término para presentar excepciones de mérito dentro del proceso de la referencia, debe indicarse que el mandamiento de pago fue objeto de reposición, el cual fue resuelta a través de auto del 2 de diciembre de 2021, notificado en estado del 3 de diciembre de 2021. Por lo tanto, computando los diez días de los que dispone la demandante para presentar sus excepciones de mérito, y tomando en consideración el término de vacancia judicial, así como el día de la Rama Judicial, se tiene que el término para presentarlas culminaba 12 de enero de 2022, tal y como se comentó en el párrafo anterior. Se adjunta al presente documento el auto y el estado en mención, para la correcta comprobación del término por parte de su Despacho.

Por lo anterior, dado que la audiencia mediante la cual se surtió el interrogatorio de parte como prueba extraprocesal, se debe afirmar que nos encontramos ante la causal resaltada en el listado que precede, es decir, la referida a las pruebas que versen sobre hechos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

Ahora bien, se debe manifestar que, tal y como se indicó en el escrito de solicitud y decreto de pruebas, es necesario que se traiga al conocimiento del Tribunal de Segunda Instancia las resultas del proceso con radicado 11001310304620210057100, ya referido, toda vez que en él se realizó interrogatorio de parte como prueba extraprocesal por parte del señor Alan Albeiro González Varela en contra de AMCOIN SAS y Jairo Gamboa Amézquita, con la finalidad de obtener, con absoluta precisión y certeza, los hechos que produjeron la negociación del Pagaré No. 001, base de la presente ejecución, los cuales son útiles para detallar la mala fe que existió al momento del endoso del documento cartular.

Debe tenerse en cuenta que buena parte de la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento, llevada a cabo en primera instancia, giro en torno a comprobar si existió mala fe no exenta de culpa por parte de AMCOIN SAS y del tenedor original del Pagaré No. 001, Jairo Gamboa Amézquita. Si bien es cierto que las pruebas traídas al presente proceso por parte de los extremos demandados son capaces de comprobar por sí solas la mala fe no exenta de culpa, es igualmente necesario dar luz sobre las resultas del expediente que se solicita se traiga como prueba extraprocesal, toda vez que en él también aparecieron elementos que comprueban dicha mala fe no exenta de culpa.

II. Solicitudes

1. **Ordenar** la práctica de la prueba trasladada consistente en el expediente con radicado 11001310304620210057100, proveniente del Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, en el cual se realizó interrogatorio de parte como prueba extraprocesal por parte del señor Alan Albeiro González Varela en contra de AMCOIN SAS y Jairo Gamboa Amézquita, con la finalidad de recabar información relativa al proceso ejecutivo de la referencia.

III. Anexos

1. Auto del 2 de diciembre de 2021, notificado en estado del 3 de diciembre de 2021, proferido dentro del proceso con radicado 11001310302920200034900 por el Juzgado Veintinueve (29) Civil del Circuito de Bogotá.

2. Estado del 3 de diciembre de 2021, por medio de cual se notificó el auto del 2 de diciembre de 2021, proferido dentro del proceso con radicado 11001310302920200034900 por el Juzgado Veintinueve (29) Civil del Circuito de Bogotá.

3. Auto del 20 de octubre de 2021, proferido dentro del proceso con radicado 11001310304620210057100 por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual se admite la prueba extraprocesal presentada por Alan González Varela en contra de AMCOIN SAS y Jairo Gamboa Amézquita.

Cordialmente,

Carlos Román Vera Medina
CC. 1.026.290.117 de Bogotá
TP. 301.648 del CS de la J

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL DEL CIRCUITO.
Carrera 9 No. 11 – 45, Torre Central, Piso 2º
j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Ref.

110013103-046- 2021-00571-00

Reunidos los requisitos legales y los establecidos en el artículo 184 y siguientes, del Código General del Proceso, el despacho,

DISPONE

Admitir la solicitud de prueba anticipada presentada por ALAN ALBEIRO GONZÁLEZ VARELA

Por lo anterior, cítese al señor ANDRÉS MAURICIO CORTÉS CHACÓN como Representante Legal de la Sociedad AMCOIN S.A.S identificada con NIT 901.149.593-5, y el señor JAIRO GAMBOA AMÉZQUITA para que absuelvan el interrogatorio de parte solicitado. Para tal fin se señala a la hora de las 9:30 a.m. del día 27 del mes enero de dos mil veintidós (2022).

Se reconoce personería jurídica a la abogada MARCELA VALERO MONSALVE como apoderada de la parte solicitante, en los términos y para los fines del poder conferido.

Notifíquese personalmente este proveído al absolvente, en la forma prevista en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, y a cargo de la parte interesada.

NOTIFIQUESE,



FABIOLA PEREIRA ROMERO

JUEZ

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA, D.C.

Hoy_____ se notificó por Estado No. _____ la anterior providencia.

Julián Marcel Beltrán

Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO 029 CIVIL CIRCUITO
LISTADO DE ESTADO

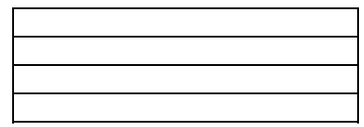
ESTADO -0100

Fecha: 03/12/2021

Cons	No. Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Providencia	Fecha Providencia	Cuad
1	110013103-029-2020-00349-00	EJECUTIVO SINGULAR	AMCOIS S.A.S.	AG INSTITUTE CIRUJIA PLASTICA, RECONSTRUCTIVA Y SALUD ESTETICA I.P.S. S.A.S. (ANTES ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA Y TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS I.P.S. S.A.S.	DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO QUE DECRETÓ MEDIDAS CAUTELARES	2/12/2021	2
2	110013103-029-2020-00349-00	EJECUTIVO SINGULAR	AMCOIS S.A.S.	AG INSTITUTE CIRUJIA PLASTICA, RECONSTRUCTIVA Y SALUD ESTETICA I.P.S. S.A.S. (ANTES ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA Y TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS I.P.S. S.A.S.	DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA MANDAMIENTO DE PAGO	2/12/2021	1
3	110013103-029-2020-00349-00	EJECUTIVO SINGULAR	AMCOIS S.A.S.	AG INSTITUTE CIRUJIA PLASTICA, RECONSTRUCTIVA Y SALUD ESTETICA I.P.S. S.A.S. (ANTES ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA Y TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS I.P.S. S.A.S.	ACEPTA RENUNCIA DE PODER	2/12/2021	1
4	110013103-029-2020-00349-00	EJECUTIVO SINGULAR	AMCOIS S.A.S.	AG INSTITUTE CIRUJIA PLASTICA, RECONSTRUCTIVA Y SALUD ESTETICA I.P.S. S.A.S. (ANTES ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA Y TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS I.P.S. S.A.S.	RESUELVE SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES	2/12/2021	2

CINDY SOLEDAD OLARTE BUSTOS
SECRETARIA

NOTA: EN CASO DE REQUERIR EL EXPEDIENTE, FAVOR SOLICITARLO AL CORREO ELECTRÓNICO ccto29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co



Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2021

Proceso: 11001-31-03-029-2020-00349-00
Clase: Ejecutivo
Asunto: Resuelve recursos.

Para resolver los recursos de reposición que promovieron las demandadas, en contra del mandamiento ejecutivo librado en su contra el pasado 09 de diciembre de 2020, impone **considerar:**

1.- El génesis de la ejecución civil, desde la normativa procesal, se encuentra en un título ejecutivo, esto es, un documento original y auténtico que provenga del deudor y sea plena prueba en su contra, que, además, provea la certeza de una obligación clara, expresa y exigible (L. 1564/12, art. 422).

Sobre tal particular la Corte Constitucional esgrimió, en sentencia T-747 de 2013, que:

> Los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. **Las primeras** exigen que el documento o conjunto de

documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación "*(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.*" Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. **Las segundas**, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible.

Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada. (Negrillas nuestras)

A su turno, doctrina judicial del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 2008, haciendo suyas las palabras del Profesor Hernando Morales Molina, indicó:

El título ejecutivo debe demostrar la existencia de una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que el obligado debe observar, en favor de su acreedor, una conducta de hacer, de dar o de no hacer y esa obligación debe ser expresa, clara y exigible, requisitos estos que ha de reunir cualquier título ejecutivo, no importa su origen.[1]

Reiteradamente, la jurisprudencia[2] ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. **Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo**

[1] LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Dupré Editores, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 1999, pags. 388.
[2] Entre otros puede consultarse el auto proferido el 4 de mayo de 2000, expediente N° 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S. A.

debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la ley.

Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles**.**

Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a lucubraciones o suposiciones. " Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta".[3]

La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. (Negrillas nuestras).

Ergo, las causas de reposición contra el mandamiento de pago serán "el beneficio de excusión", las "excepciones previas" (art. 442-3 CGP); así como los defectos formales del título (art. 430 ibd); de modo que los argumentos deberán descansar exclusivamente sobre vicios que no puedan invocarse como excepción de mérito en la etapa procesal oportuna, su incumplimiento es razón suficiente para denegar la revocatoria de tal decisión judicial.

2.- Acorde con lo anterior, no es de recibo que, a través del recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo, se alegue la falta de capacidad del representante legal de la demandada para adquirir obligaciones y comprometer el patrimonio de aquella. En otras palabras, la inoponibilidad del

[3] MORALES MOLINA, Hernando, *Compendio de Derecho Procesal, El Proceso Civil,* Tomo II.

representante legal respecto a la suscripción y obligación cambiaria es asunto que debe tramitarse de fondo, previo decreto asunción y valoración probatoria (art. 642 C. Cio). Recuérdese, el suscritor del título valor queda obligado conforme al tenor literal de éste (art. 625 ibid).

3.- Ciertamente, la "*Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado*" está catalogada como excepción previa; sin embargo, ésta causal se configura cuando la parte carece íntegramente de poder especial para incoar la acción, lo que no ocurre en este escenario.

Con la demanda se aportó poder especial debidamente otorgado bajo los contornos del art. 74 y ss del C.G.P. en armonía con las formalidades establecidas en el artículo 5º del D.L. 806 de 2020. Así lo reconoce el recurrente.

El documento aportado contiene la firma y antefirma del representante legal de la demandante y la dirección de correo electrónico allí consignada coincide con la publicitada en certificado de existencia y representación legal. A cuál más, no se puso en duda la firma del representante legal.

La falta de prueba de la remisión del poder desde el buzón electrónico inscrito en el registro mercantil de la demandante no derruye el mandamiento de pago y, en virtud de los artículos 244 ss, 247 del CGP, los documentos aportados a instancia de parte se presumen auténticos, presunción que

debe aplicarse respecto del poder allegado aun cuando no haya sido remitido como mensaje de datos desde el correo electrónico del otorgante. Tenga presente, el artículo 5º del Decreto 806 de 2020, implica la ejecución de actos procesales previos como el otorgamiento del poder sin necesidad de presencialidad; ello se hizo para evitar el contagio en época de pandemia.

De modo que, la discusión en torno al otorgamiento de poder, su autenticidad por falta de prueba de su remisión es asunto verificable, incluso en sesión de audiencia de que trata el artículo 372 del CGP, en la medida que será en aquella donde el representante legal de la demandada podrá ratificar e indicar si otorgó o no el poder para instaurar la acción.

3.- Ahora bien, en lo que toca con la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, fundada en que la clasificación de hechos que soportan las pretensiones son vagos, infundados e indeterminados, constituyen alegaciones de la demandada válidos para soportar excepciones de mérito y no previas. Revisada la demanda, puede constatarse que los hechos en que se finca la pretensión cambiaria directa están debidamente determinados, clasificados y enumerados y por lo mismo, el alegato es infructuoso.

4.- Tampoco podrá tener acogida como argumento procedente contra el mandamiento ejecutivo la *"Falta de los requisitos de validez del título valor" y "Del título no emana una obligación clara,*

expresa y exigible", dado que al revisar el documento de coerción, fácilmente puede colegirse que está dotado de los preanotados requisitos que echa de menos el censor y, el fundamento del reclamo elevado por medio de recurso es un tema de fondo que debe ser valorado a la hora de emitir la correspondiente sentencia. Recuérdese, el mandamiento de pago tiene un fundamento provisional y que los hechos no conocidos por la justicia son objeto de excepciones.

5.- Igual suerte corren los restantes argumentos de reposición, fundados de forma profusa y confusa en los escritos de censura contra el mandamiento de pago; pues todos esos son asuntos que escapan a los defectos formales o las causas previstas en el ordenamiento procesal civil vigente para las excepciones previas, las cuales, debe decirse, por virtud del artículo 100 de la ley 1564 de 2012 son taxativas.

Así, entonces, las rotuladas por los censores como falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, ausencia de nexo causal, abuso del derecho, enriquecimiento sin justa causa, falta de autonomía, defecto ritual manifiesto, buena fe, acción temeraria, falta de instrucciones para su diligenciamiento o sobre pasar estas, entrega sin intención de hacerlo negociable, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación y falta de valoración probatoria del contrato subyacente, todas hacen alusión a aspectos propios de excepciones derivadas de los elementos sustanciales del título, de suerte que, estas pueden situarse en defensas reales relativas, en voces del artículo 784

del Código de Comercio y, como se advirtió, esto es razón suficiente para relevar su estudio en esta fase procesal y denegar la revocatoria de tal decisión judicial.

6.- De lo anterior se colige que, a más de una verdadera confrontación con un defecto material del cartular, lo que busca el reposicionista es la decisión antelada de la situación en litigio por una vía procesal inadecuada y, de ello, sólo puede desprenderse la negación de su solicitud de reposición.

7.- De otra parte, el recurso de apelación invocado como subsidiario, encarna su improcedibilidad, por así disponerlo el el artículo 438 de la ley 1564 de 2012.

8.- A más de las veces, y conforme al artículo 118 del CG del P, lo que consiguió los recursos fue ampliar el plazo para contestar la demanda, cual debe computarse desde la notificación por estado electrónico de la presente decisión.

Por lo expuesto, se **DISPONE**:

1. **NO REPONER** la orden de apremio librada el pasado 09 de diciembre de 2020 (pdf. 03).

2. **COMPUTAR** el plazo de 10 días, con los que cuentan los demandados para proponer excepciones, a partir de la notificación de la presente providencia por estado.

3. Cumplido lo anterior, regrese el proceso al Despacho para proseguir con las restantes fases del Juicio.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

MARTHA INES DIAZ ROMERO
Juez (4)
Lmre

La presente providencia se notifica en el estado electrónico No.100

Firmado Por:

Martha Ines Diaz Romero
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 029
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b3b9f29474f1d4eccd055524085dcf60e4583f8b1bcc682e5b85df3f3a15099f**

Documento generado en 02/12/2021 08:09:43 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: 11001310303120120025101 - SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN - PODER - SOLICITUD TERMINACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 8/08/2023 2:51 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

3 archivos adjuntos (3 MB)

11001310303120120025101 - APELACION SENTENCIA.pdf; PODER - DIEGO UÑATE - 11001310303120120025101.pdf; TERMINACION SALUDCOOP - SOLICITUD DESVINCULACION ANEXOS.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Lizette Daniela Rodriguez <lizettedanielar01@gmail.com>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 13:37
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 11001310303120120025101 - SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN - PODER - SOLICITUD TERMINACIÓN

Señores.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
E. S. D.

DEMANDANTE: DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE Y OTROS
DEMANDADOS: SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA Y OTROS
RADICADO: 11001310303120120025101

Cordial saludo,

Con el acostumbrado respeto adjunto al presente poder debidamente conferido para actuar en el presente proceso, sustentación del recurso de apelación a la sentencia proferida por el JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C., el 04 de noviembre de 2022 y solicitud de desvinculación dada la liquidación de la entidad con sus respectivos anexos.

Cordialmente,

Lizette Daniela Rodríguez
Apoderada Saludcoop EPS (hoy liquidada)

--
mi dirección electrónica principal es Lizettedanielar@gmail.com
y estaré usando esta esta dirección alterna por cuestiones de almacenamiento.

Si requieren validar o más información con gusto 3135435277

Señores.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
E. S. D.

DEMANDANTE: DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE Y OTROS
DEMANDADOS: SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA Y OTROS
RADICADO: 11001310303120120025101
REFERENCIA: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN A SENTENCIA I INSTANCIA

LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.088.335.442** de Pereira, abogada titulada con la Tarjeta Profesional No. **321.117** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de representante judicial de **SALUDCOOP EPS HOY LIQUIDADA**, respetuosamente me dirijo a su Despacho con el fin de interponer recurso de APELACIÓN contra la sentencia proferida por el **JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.,** el 04 de noviembre de 2022.

Sustento el recurso en los siguientes argumentos, sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno pueda hacer otras manifestaciones:

SUSTENTACIÓN

De los hechos de la demanda y del material probatorio se tiene que los hoy demandantes instauran acción de responsabilidad civil contractual por una presunta falla medica efectuada al señor **DIEGO IVAN CASTRO UÑATE**, no obstante aun cuando el material probatorio es amplio y brinda claridad a los hechos, la sentencia de primera instancia pasa por alto ciertos aspectos trascendentales y erróneamente condena a la entidad que represento.

Ahora bien los aspectos que el Juzgador de primera instancia paso por alto se sintetizan de la siguiente manera:

1. FUNCIONES DE E.P.S Y I.P.S.

El A quo omite las funciones de ley que le atañen a mi representada y la calidad en la que esta interviene en el sub examine, pues es preciso insistir que en el presente asunto la HOY LIQUIDADA SALUDCOOP E.P.S., para la fecha de los hechos como se definía como una ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD *"entidad responsable de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados"*

Resaltando así el artículo 2 del Decreto 1485 de 1994 el cual señala:

ARTICULO 2°. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. Las Entidades Promotoras de Salud serán responsables de ejercer las siguientes funciones:

a. *Promover la afiliación de los habitantes de Colombia al Sistema General de Seguridad Social en Salud en su ámbito geográfico de influencia, bien sea a través del régimen contributivo o del régimen subsidiado, garantizando siempre la libre escogencia del usuario y remitir al Fondo de Solidaridad y Garantía la información relativa a la afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios.*

b. *Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención, evitando en todo caso la discriminación de personas con altos riesgos o enfermedades costosas en el Sistema.*

   Se exceptúa de lo previsto en el presente literal a las entidades que por su propia naturaleza deban celebrar contratos de reaseguro.

c. *Movilizar los recursos para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud mediante el recaudo de las cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía; girar los excedentes entre los recaudos, la cotización y el valor de la unidad de pago por capitación a dicho fondo, o cobrar la diferencia en caso de ser negativa; y pagar los servicios de salud a los prestadores con los cuales tenga contrato.*

d. *Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud previstos en el Plan Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus afiliados con cargo a las Unidades de Pago por Capitación correspondientes. Con este propósito gestionarán y coordinarán la oferta de*

servicios de salud, directamente o a través de la contratación con Instituciones Prestadoras y con Profesionales de la Salud; implementarán sistemas de control de costos; informarán y educarán a los usuarios para el uso racional del sistema; establecerán procedimientos de garantía de calidad para la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud.

e. *Organizar la prestación del servicio de salud derivado del sistema de riesgos profesionales, conforme a las disposiciones legales que rijan la materia.*

f. *Organizar facultativamente la prestación de planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud, según lo prevea su propia naturaleza*".

Mientras que las I.P.S., Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en donde el hoy demandante fue atendido y en donde se realizaron las distintas intervenciones quirúrgicas tienen como función principal el: *"prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente Ley. Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además propenderán por la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de posición dominante en el sistema".*

De lo anterior es evidente que la función de mi representada no es prestar como tal un servicio de salud, pues ello es una función propia de las I.P.S., por lo cual no es de recibo que se endilgue a mi representada una presunta omisión de responsabilidades que no están en la órbita de sus funciones.

2. FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LOS PERJUICIOS SOLICTADOS Y EL ACTUAR DE SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD.

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios que los hoy demandantes refieren, resulta importante indicar que no le asisten en ninguna medida a la hoy liquidada SALUDCOOP E.P.S., pues en relación al punto anterior es claro que las funciones que le atañen a las Entidades Promotoras de Salud no tiene relación alguna con los procedimientos médicos realizados por los profesionales de salud.

Es claro conforme al material probatorio que todos y cada uno de los actos médicos y quirúrgicos realizados al señor DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE fueron llevados a cabo por las I.P.S y en ningún procedimiento mi representada fue participe lo cual denota la inexistencia de causalidad, pues al respecto cabe resaltar que la responsabilidad exige el cumplimiento de tres elementos básicos, el hecho

generador del daño (culpa e incumplimiento contractual), el daño y la relación de causalidad, frente a lo cual del análisis de la demanda y del material probatorio aportado vale referir que el hecho generador de los daños reclamados según criterio del actor se centra en la ejecución de la apendicetomía, la cual no estuvo a cargo de mi representada y tampoco le era exigible hacerla considerando su condición de EPS.

De esta manera el daño no está acreditado y no es imputable a mi representada pues se insiste en la no participación en la ejecución de los actos bajo los cuales se estructuran dichos perjuicios, y por ultimo no hay relación de casualidad porque las secuelas y lesiones son propias del desarrollo del proceso de corrección clínica y quirúrgica de un efecto adverso considerado como riesgos y complicación propia de la apendicetomía y que involucra una sepsis abdominal post quirúrgica.

Lo anterior, determina que mi representada no participo en ninguna de las conductas que el actor indica como irregulares y generadoras de la falla médica, pues conforme a la ley y a las funciones otorgadas no le era exigible ninguna conducta asociada con el manejo médico, hospitalario ni quirúrgico del demandante.

3. AUTONOMÍA MÉDICA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD QUE NO RESPONSABILIZA A SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA.

El ejercicio de la medicina en el sistema de salud colombiano se ejerce relación médico paciente, en donde hay una interrelación con el paciente quien acude al profesional en medicina solicitando ayuda para resolver un problema de salud que lo aqueja. Esta relación se basa en la confianza de los sujetos en comento y en la autonomía e independencia profesional de la cual gozan plenamente los galenos, pues son quienes directamente ejecutan los procedimientos médicos y/o quirúrgicos a los pacientes, y por ende son a quienes les asiste la responsabilidad de toma de decisiones dentro del tratamiento y procedimientos a someterse al paciente.

Así las cosas esta autonomía y discrecionalidad de los profesionales de las I.P.S., que atendieron e intervinieron al señor UÑATE, no fue debidamente atendida dentro del juicio del presente asunto, pues la sentencia recurrida no precisa sobre este aspecto que resulta crucial para proferir una condena en donde mi representada resulta condenada ello cuando no tuvo injerencia alguna en los procedimientos médicos realizados al hoy demandante.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA.

Saludcoop E.P.S HOY LIQUIDADA, cumplió a cabalidad con las obligaciones que por ley le asisten, ello partiendo de definición dada a las Entidades Promotoras de Salud, la cual indica que son entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el título III de la presente Ley.

Así, atendiendo a la normatividad y a las funciones las cuales fueron ya expuestas en líneas anteriores se tiene que las Entidades Promotoras de Salud-EPS, tienen una carga social y unas obligaciones estrictamente definidas; para el caso que nos ocupa, se tiene que SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA garantizó en todos y cada uno de los niveles la atención del paciente señor DIEGO IVAN CASTRO UÑATE, pues este fue atendido de manera integral, de manera que cada una de las cirugías que el hoy demandante requirió en atención a su diagnóstico fueron autorizadas de manera oportuna, de modo que al señor CASTRO UÑATE no se le negó en ningún momento la atención medica ni la prestación de servicios, pues por el contrario LA HOY LIQUIDADA SALUDCOOP E.P.S puso a disposición del hoy demandante todo lo que por ley le asiste, para que de esta manera accediera a una prestación y atención de óptima calidad, sin contratiempos y por supuesto, sin restricción alguna; cosa distinta es que dentro de las complicaciones probables y consideradas como posibles, se haya presentado una infección, aspecto que puede considerarse como un efecto adverso y fortuito no imputable a mi representada, como bien lo indica el perito Dr. RUBEN DARIO ANGULO en el interrogatorio que tuvo lugar el día 06 de septiembre de 2022 en donde en el experto indica claramente: *“yo no puedo manejar los tiempos de infección porque dependen de muchos factores de la misma situación de salud del paciente que llega al sitio, depende de muchos factores, de la nutrición de la persona, de los anticuerpos (…) márgenes de tiempo que dependen del paciente, es que la medicina no es como la matemática”.,* tal afirmación da cuenta que en casos como en el que nos ocupa pueden existir efectos adversos imprevisibles sin que ello insisto sea responsabilidad de la E.P.S HOY LIQUIDADA.

De lo anterior resulta claro que la función de mi representada no es prestar como tal un servicio de salud, ello al no ser esto su razón de ser, por ello no es posible predicar una responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, pues esta es una función propia de la IPS; por ende no es dable confundir la naturaleza de estas entidades como lo hace el Juzgador de primera instancia y endilgar omisiones en las que no incurrió la hoy liquidada.

Así mismo es preciso resaltar que mediante Resolución No. 2083 de 2023 “Por medio de la cual el liquidador declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC HOY LIQUIDADA”, en la cual se establece claramente que SALUDCOOP EPS OC HOY LIQUIDADA, carece de personería jurídica.

Así las cosas es preciso resaltar lo dicho por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en relación con la personalidad jurídica de una sociedad liquidada, dijo:

"(...) Una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser demandada. Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este e/ cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada.” (Cursiva fuera del texto original)”

Conforme lo anterior se tiene que una vez liquidada, la sociedad deja de ser sujeto de derechos y obligaciones, pues con la terminación del proceso concursal, se extingue la personería jurídica y es cancelada su matrícula mercantil. En ese sentido entonces deja de contar con capacidad jurídica para ser parte en un proceso, así lo expuso el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA en auto de seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dentro de la Radicación: 41001-23-33-000-2014-00414-01 (22343). Demandante: J.R. LA PLATA. Consejera Ponente STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. En su aparte pertinente señalo:

Finalmente respecto al tema la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, “desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones.

Es así como dado el cierre del proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS OC HOY LIQUIDADA la persona jurídica de este desaparece, denotando la imposibilidad para ser parte en un proceso, de conformidad con lo establecido en el inciso 1° del artículo 633 del Código Civil.

Lo anterior se encuentra debidamente soportado en las mencionadas resoluciones que fueron allegadas al expediente las cuales dan cuenta de que a la fecha SALUDCOOP EPS OC HOY LIQUIDADA es una persona jurídica inexistente, por lo cual no puede ser parte procesal y por tal motivo tampoco sujeto de derechos y obligaciones.

Así las cosas, y dado que la hoy liquidada SALUDCOOP E.P.S. cumplió a totalidad con las funciones que por ley le asisten, se considera que los daños sufridos por la parte demandante fueron producto de un factor externo ajeno a la acción o actividad

de mi representada, con fundamento en lo anterior respetuosamente presento ante usted la siguiente:

SOLICITUD

1. Revocar la sentencia proferida por el JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO, de fecha 04 de noviembre de 2022 y en su defecto se absuelva a mi representada SALUDCOOP E.P.S. O.C. HOY LIQUIDADA de todas las pretensiones de la demanda.

NOTIFICACIONES

A la suscrita apoderada al correo lizettedanielar@gmail.com o al 3135435277.

Del Señor Magistrado atentamente:

LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO
CC. 1.233.190.623 Pereira
TP. 321.117 del Consejo Superior de la Judicatura

Señores.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
E. S. D.

DEMANDANTE: DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE Y OTROS
DEMANDADOS: SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA Y OTROS
RADICADO: 11001310303120120025101
REFERENCIA: PODER

LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.088.335.442** de Pereira, abogada titulada con la Tarjeta Profesional No. **321.117** del Consejo Superior de la Judicatura, respetuosamente me dirijo a su Despacho con el fin de atender al requerimiento del auto 28 de julio de 2023, en donde se indica:

"No se reconoce personería a la abogada Lizette Daniela Rodríguez Lozano, para representar a Saludcoop E.P.S., O.C hoy liquidada, en atención a que el poder allegado fue conferido por Francisco Javier Gómez Vargas como apoderado general, sin que se acreditará que tal calidad la ostenta actualmente".

Por lo cual en aras de subsanar tal aspecto adjunto al presente poder debidamente conferido, a fin de que se me reconozca personería para actuar en el proceso en referencia.

Anexo al presente poder otorgado y sustentación del recurso de apelación a la sentencia de primera instancia de fecha 04 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta Civil de Circuito de Bogotá.

NOTIFICACIONES

A la suscrita apoderada al correo lizettedanielar@gmail.com o al 3135435277.

Del Señor Magistrado atentamente:

LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO
CC. 1.233.190.623 Pereira
TP. 321.117 del Consejo Superior de la Judicatura

CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACIÓN

Magistrado
IVÁN DARIO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
Avenida Calle 24 # 53 – 28 Torre C. Oficina 305
601-4233390 Ext. 8349 8350 8351
secsctribsubta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
La ciudad.

REFERENCIA	
CLASE DE PROCESO:	VERBAL – RESPONSABILIDAD MÉDICA
RADICADO:	11001310303120120025100
DEMANDANTE:	DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE
DEMANDADO:	SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA Y OTROS
ASUNTO:	OTORGAMIENTO DE PODER

EDGAR MAURICIO RAMOS ELIZALDE, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.701.063 de Bogotá, obrando en mi condición de **MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN DE SALUDCOOP EPS OC (Hoy Liquidada)**, de acuerdo con el **CONTRATO DE MANDATO CPS No. 361** fechado en enero 24 de 2023, el cual se adjunta al presente escrito; manifiesto que confiero **PODER ESPECIAL,** amplio y suficiente a la doctora **LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO**, mayor de edad, identificada como aparece al pie de su correspondiente firma, para que en nombre y representación de la entidad, ejerza la defensa judicial de **SALUDCOOP EPS OC (Hoy Liquidada)** dentro del proceso de la referencia.

La doctora **LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO**, cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de sustituir, interponer y sustentar recursos e incidentes de Ley, tachar de falsedad y en general las demás actuaciones que sean necesarias de conformidad con el artículo 77 del C.G.P., y las demás necesarias para representar judicialmente los intereses de **SALUDCOOP EPS OC (Hoy Liquidada**), en el proceso de la referencia, **EXCEPTO** las de **CONCILIAR, TRANSIGIR Y DESISTIR**, facultades que expresamente se reserva el **PODERDANTE**.

El correo electrónico de la doctora **LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO** es, lizettedanielar@gmail.com

Atentamente,

EDGAR MAURICIO RAMOS ELIZALDE
C.C. No. 79.701.063 de Bogotá
MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN
SALUDCOOP EPS OC (Liquidada).
mandato@saludcoop.coop

Acepto,

LIZETTE DANIELA RODRÍGUEZ LOZANO
C.C. 1.088.335.442 de Pereira
T.P. 321.117 del C.S. de la J.
lizettedanielar@gmail.com
Cel. 3135435277

Adjunto Contrato de Mandato CPS No. 361 de enero 24 de 2023

Aprobó. Nohelia Ramírez Arias. Coordinadora Jurídica

Revisó. Francisco Javier Gómez Vargas. Coordinador II

Proyectó. Carlos Iván Romero Gómez. Profesional II

MP-2023-00716.

Gmail **Lizette Daniela Rodriguez <lizettedanielar01@gmail.com>**

Fwd: OTORGAMIENTO DE PODER RADICADO: 11001310303120120025100

1 mensaje

Lizette Daniela Rodríguez Lozano <lizettedanielar@gmail.com> 2 de agosto de 2023, 9:25
Para: Lizette Daniela Rodriguez <lizettedanielar01@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Mandato Saludcoop Liquidado** <mandato@saludcoop.coop>
Fecha: El mié, 2 de ago. de 2023 a la(s) 9:25 a.m.
Asunto: OTORGAMIENTO DE PODER RADICADO: 11001310303120120025100
Para: Lizette Daniela Rodríguez Lozano <lizettedanielar@gmail.com>
Cc: Carlos Romero <carlosromerosaludcoop1@gmail.com>

G-SEPS-231008

REFERENCIA

CLASE DE PROCESO: VERBAL – RESPONSABILIDAD MÉDICA

RADICADO: 11001310303120120025100

DEMANDANTE: DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE

DEMANDADO: SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA Y OTROS

ASUNTO: OTORGAMIENTO DE PODER

Cordialmente,



Poder 11001310303120120025100.pdf
268K

Señores.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
E. S. D.

DEMANDANTE: DIEGO IVÁN CASTRO UÑATE Y OTROS
DEMANDADOS: SALUDCOOP E.P.S HOY LIQUIDADA Y OTROS
RADICADO: 11001310303120120025101
REFERENCIA: TERMINACIÓN DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA, IDENTIFICADA CON NIT 800.250.119-1 Y SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO**.**

Cordial Saludo

LIZETTE DANIELA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.334.442 de Pereira, domiciliada en la ciudad de Dosquebradas, en mi calidad de apoderada especial del **MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN DE SALUDCOOP EPS OC (Hoy Liquidada)** el señor **EDGAR MAURICIO RAMOS ELIZALDE** mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.701.063 de Bogotá, de acuerdo con el poder conferido, de manera atenta por medio del presente escrito solicitó la terminación del proceso de la referencia, como consecuencia de la terminación de la existencia legal de **SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA** , solicitud que fundamento en los siguientes :

I. HECHOS

1. Que mediante Resolución No. 2414 del 24 de noviembre de 2015 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN identificada con 800250119-1. Decisión que ha sido prorrogada mediante la Resolución 5687 del 20 de noviembre de 2017, Resolución 7808 del 8 de junio de 2018, Resolución 10895 de 22 de noviembre de 2018, Resolución 6229 del 21 de junio de 2019, Resolución 9172 del 15 de octubre de 2019, Resolución 252 del 24 de noviembre de 2021 y la Resolución No. 151 del 22 de julio de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, es el dispuesto en la Resolución No. 2414 del 24 de noviembre de 2015, Resolución 8892 del 01 de octubre de 2019, adicionada por la Resolución 5687 del 20 de noviembre de 2017, Resolución 7808 del 8 de junio de 2018, Resolución 10895 de 22 de noviembre de 2018, Resolución 6229 del 21 de junio de 2019, Resolución 9172 del 15 de octubre de 2019, Resolución 252 del 24 de noviembre de 2021 y la Resolución No. 151 del 22 de julio de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006.

3. Que de acuerdo con la Resolución No. 151 del 22 de Julio de 2022, el plazo para culminar

el proceso liquidatorio SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, aconteció el 24 de enero de 2023.

4. Que 24 de enero de 2023, el Liquidador de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA, profirió la **Resolución No. 2083 de** 2023 "Por medio de la cual el liquidador declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA".

5. Que la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA , se encuentra debidamente cancelada, tal como consta en el anexo adjunto a este escrito.

II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO.

II.I Por expreso mandato legal una persona jurídica inexistente, no puede ser parte procesal y por tal motivo tampoco sujeto de derechos y obligaciones.

Sobre este punto en particular, debemos observar lo dispuesto en el artículo 53 del Código General del Proceso, que pasamos a retener en lo pertinente:

> **"ARTÍCULO 53. CAPACIDAD PARA SER PARTE.** Podrán ser parte en un proceso:
>
> 1. Las personas naturales y **jurídicas.**" (Negrillas y Subrayado Fuera de Texto)

De la norma en comento se puede concluir sin temor a equívoco alguno, que la capacidad para ser parte respecto de las personas jurídicas se acredita respecto de aquellas que existen en el mundo jurídico y no como lo es el caso de SALUDCOOP EPS OC hoy liquidada, misma que salió del tráfico jurídico el día 24 de enero de 2023, dado el cumplimiento de los requisitos propios de dicho trámite concursal y teniendo en cuenta que el vencimiento del término para culminar el proceso Liquidatorio acontece en la precitada fecha de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva No. 151 del 22 de Julio de 2022.

Aunado a lo anterior el Código Civil también hace referencia a la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones respecto de las personas jurídicas:

> **"ARTICULO 633. <DEFINICION DE PERSONA JURIDICA>.** Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente."

De las normas citadas, se deriva inexorablemente que una vez liquidada **SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA** desapareció, lo que se traduce en la falta de capacidad para contraer obligaciones, y a la postre, en la imposibilidad para ser parte en un proceso, de conformidad con loestablecido en el artículo inciso 1° del artículo 633 del Código Civil.

Así las cosas, **SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA,** carecen de legitimación en la causa por pasiva, al carecer de personería jurídica, capacidad de goce y ejercicio.

En virtud de lo anterior, a partir de la fecha del vencimiento**,** que declara terminada la existencia legal de **SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA,** ningún tercero puede iniciar, promover o continuar
Demanda o actuación administrativa contra SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA, al carecer de capacidad procesal.

Adicionalmente a lo expuesto, no sobra advertir que el poder otorgado en su oportunidad por SALUDCOOP EPS OC hoy Liquidada, no se extingue por haber acontecido su Liquidación el 24 de enero de 2023, teniendo en cuenta que las facultades en el contenidas continúan de acuerdo con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 76 del Código General del Proceso.

II.II. Sobre la Graduación y Calificación de acreencias al interior del proceso Liquidatorio

Teniendo en cuenta que una de las obligaciones más importantes en los procesos Liquidatorios, es la graduación y calificación de acreencias, mediante Resoluciones No. 1945 del 22 de diciembre de 2016, 1958 del 06 de marzo de 2016, 1960 de del 06 de marzo de 2016, 1963 del 23 de marzo de 2017, 1977 del 04 de agosto de 2017, 2037 del 20 de febrero de 2019 y la Resolución 1974 del 14 de julio de 2017, se dio traslado de las reclamaciones oportunamente presentadas a SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA , presentándose un total de **4.190 acreencias oportunas.**

Con posterioridad, se adelantó el proceso de calificación y graduación de todas las acreencias oportunamente presentadas a SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA a la luz del artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, y fueron resueltos todos los recursos de reposición presentados por dicha calificación de conformidad con el Artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010.

Como consecuencia de lo anterior, el Auto de Graduación y Calificación de Acreencias de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA quedó en firme el 06 de marzo de 2017, el cual, actualizado al 24 de enero de 2023, reporta el siguiente detalle:

Prelación	Acreencias Radicadas		Calificación y Graduación de Acreencias		
	Cantidad	Valor Reclamado	Cantidad	Valor Reconocido	Valor Rechazado
Prelación A	793	$36.656.995	793	$17.600.358	$19.191.696
Prelación B	2.379	$4.511.239.980	2.379	$1.349.673.752	$3.165.537.365
Prelación C	6	$87.110.221	6	$59.086.811	$28.023.409
Prelación D	1	$53.351.565	1	$13.089.145	$40.262.419
Prelación E	154	$320.482.925	154	$152.692.175	$170.531.572
Prelación F	857	$3.286.129.337	857	$1.476.728.677	$1.810.267.512
Total Oportunas	**4.190**	**$8.294.971.021**	**4.190**	**$3.068.870.919**	**$5.233.813.975**

SOBRE EL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO Y LAS RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS

Después del 16 de febrero de 2016 y con corte al 24 de enero de 2023, se calificaron y graduaron 12.744 acreencias dentro de esta categoría, de acuerdo con lo dispuesto en el 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010. Así:

	Acreencias Radicadas	Calificación y Graduación de Acreencias

Concepto	Cantidad	Valor Reclamado	Cantidad	Valor Reconocido	Valor Rechazado
NO MASA	11.366	$ 119.438.630	11.366	$ 10.433.678	$ 118.621.603
Prelación A	306	$ 3.850.488	306	$ 2.550.202	$ 2.213.276
Prelación B	585	$ 2.926.384	585	$ 28.529.522	$ 2.656.535
Prelación C	21	$ 0	21	$ 4.417.942	$ 0
Prelación E	9	$ 407.548	9	$ 55.222	$ 407.548
Prelación F	545	$ 30.988.972	545	$ 23.402.810	$ 18.403.314
Total general	**12.832**	**$ 157.612.022**	**12.832**	**$ 69.389.376**	**$ 142.302.275**

Así las cosas, en cumplimiento del artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010, **SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA** expidió la Resolución No. 2061 del 08 de junio de 2022 "*Por medio de la cual el Agente Liquidador determina el pasivo cierto no reclamado dentro del proceso liquidatorio de* SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA."

De conformidad con la citada resolución, SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA clasificó como PASIVO CIERTO NO RECLAMADO por encontrarse registrado contablemente en los estados financieros de la entidad, la suma de **SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($69.389.375) M/CTE**
Así las cosas, a la fecha de cierre del proceso Liquidatorio, se logró cancelar un total del 46,93 % de los créditos de la prelación B que fueron debidamente reconocidos al interior del proceso Liquidatorio de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA, es decir que hasta la fecha de cierre de la Entidad los recursos resultaron insuficientes para cancelar los créditos reconocidos en el trámite del proceso concursal.

II.III Jurisprudencia que corrobora la imposibilidad de iniciar y continuar procesos judiciales en contra de entidades Liquidadas

Sobre este punto en particular ha tenido la oportunidad de pronunciarse el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia de 12 de noviembre de 2015, dentro del radicado 05001-23-33-000-2012-00040-01(20083), providencia en la que dispuso:

> *"En suma, una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser demandada.*
>
> *Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada" (Negrita fuera del texto).*

De igual manera el Tribunal Superior de Pereira-Sala Laboral, mediante providencia de fecha 22 de mayo de 2020, dictada al interior del proceso identificado con el radicado 66001-31-05-004-2009-00180-03, dispuso:

> *"Ahora bien, se tiene que una vez liquidada, la sociedad deja de ser sujeto de derechos y obligaciones, pues con la terminación del proceso concursal, se extingue la personería*

jurídica y es cancelada su matrícula mercantil. En ese sentido entonces deja de contar con capacidad jurídica para ser parte en un proceso, así lo expuso el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA en auto de seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dentro de la Radicación: 41001-23-33-000-2014-00414-01 (22343). Demandante: J.R. LA PLATA. Consejera Ponente STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. En su aparte pertinente señalo:

> ***"La Sala advierte que la capacidad de la persona jurídica en liquidación culmina con la aprobación de la cuenta final de liquidación inscrita en el registro mercantil, toda vez que, a partir de ese momento, la sociedad desaparece como sujeto de derechos y obligaciones y, por ende, también terminan las facultades otorgadas al liquidador. Sobre la materia, esta Sección precisó que[1]:***
>
> > ***"De acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, una vez constituida legalmente, la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Así, la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide definitivamente, esto es, se apruebe la cuenta final de su liquidación y se inscriba este acto en el registro mercantil, momento en el cual desaparece o se extingue la persona jurídica[2].***
> >
> > ***Sobre el momento en que se extingue o desaparece la persona jurídica, la Sala ha precisado lo siguiente[3]:***
> >
> > ***"Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, "desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones.", y "al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe"[4]. (Negrilla y subrayado del texto original)***"

La jurisprudencia en comento tiene sustento jurídico, en el hecho incontrovertible que a partir de la fecha en la que acontece el cierre del proceso Liquidatorio de la Entidad, la regulación normativa que rige el proceso Liquidatorio no establece que exista un subrogatario de la personalidad jurídica de la extinta Entidad, con lo cual, adicionalmente no se puede arribar a conclusión diferente a la inexistencia de subrogatario al interior de los procesos judiciales en los cuales es parte la hoy extinta SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA .

En concordancia con lo anterior, debe indicarse que la Resolución 2083 del 24 de enero de 2023, *"Por medio de la cual el liquidador declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA"*, se estableció:

"Que, SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA no tendrá legitimación en la causa por activa

---

[1] Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia de 12 de noviembre de 2015, Rad: 05001-23-33-000-2012-00040-01 (20083).
[2] 2 Sentencia del 11 de junio de 2009, exp. 16319, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
[3] Sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 19575, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
[4] Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.

o por pasiva, por carecer de personería jurídica, capacidad de goce y ejercicio, como tampoco capacidad procesal.

(…)

Que en consecuencia, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución por medio de la cual se declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA, no existe subrogatario legal, sustituto procesal, patrimonio autónomo, o cualquier figura jurídico procesal que surta los mismos efectos."

Por lo expuesto, una vez liquidada *SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA* desapareció, lo que se traduce en la falta de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y a la postre, en la imposibilidad para ser parte en un proceso, conformidad con lo establecido en el inciso 1° del artículo 633 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 del Código General del Proceso.

Se confirma con las providencias antes citadas, la imposibilidad de iniciar y/o continuar procesos en los cuales se encuentren inmersas entidades liquidadas, como lo es el caso de SALUDCOOP EPS OC hoy Liquidada, puesto que se extinguió la personalidad jurídica y por tal motivo dejó de ser sujeto de obligaciones, tal y como se expuso de manera precedente.

Debe precisarse, que dada la inexistencia de la persona Jurídica de SALUDCOOP EPS OC hoy Liquidada, en el hipotético caso de una condena en contra a la extinta Entidad, resultaría materialmente imposible el inicio de procesos ejecutivos, en virtud a que tal y como se ha expuesto, la inexistencia de la Entidad, conlleva necesariamente a la imposibilidad de vincularla como ejecutada dado que no tiene la capacidad para ser parte al interior de ningún proceso judicial.

Ahora bien, SALUCOOP EPS OC hoy Liquidada fue una entidad de carácter particular, motivo por el que todos aquellos conceptos que no pudieron ser sufragados con su patrimonio, no cuentan con ningún subrogatario que asuma la obligación de pago, ello en virtud a que el Estado Colombiano, no puede asumir deudas de particulares en los términos del artículo 335 de la Constitución Política de Colombia que establece:

"ARTICULO 355. *Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado."*

De la norma constitucional transcrita, resultaría legalmente improcedente, que a alguna Entidad de carácter público, se le endilgue subrogación legal y menos que como consecuencia de ello sea obligada a atender obligaciones de la hoy extinta SALUDCOOP EPS O.C. LIQUIDADA.

III. PETICIÓN

De acuerdo con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita a su digno despacho la terminación y/o desvinculación de SALUDCOOP EPS OC hoy Liquidada, dado que, desde el 24 de enero de 2023, se extinguió su personería jurídica, motivo por el cual no puede ser parte procesal y mucho menos sujeto de obligaciones que se puedan declarar en el trámite del proceso de la referencia.

IV. ANEXOS

1. Resolución 2083 del 24 de enero de 2023.

2. Cancelación registro cámara y comercio.
3. Poder conferido

Me suscribo con todo respeto.

Lizette Daniela Rodríguez
APODERADO JUDICAL
CC. 1.088.335.442
TP. 321.117 del Consejo Superior de la Judicatura

RESOLUCIÓN No. 2083 DE 2023
(24/01/2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DE SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

EL LIQUIDADOR de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 800.250.119-1, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 y,

CONSIDERANDO

CAPÍTULO PRIMERO
ANTECEDENTES DE SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

Que mediante Resolución No. 2414 del 24 de noviembre de 2015 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN identificada con 800250119-1. Decisión que ha sido prorrogada mediante la Resolución 5687 del 20 de noviembre de 2017, Resolución 7808 del 8 de junio de 2018, Resolución 10895 de 22 de noviembre de 2018, Resolución 6229 del 21 de junio de 2019, Resolución 9172 del 15 de octubre de 2019, Resolución 252 del 24 de noviembre de 2021 y la Resolución No. 151 del 22 de julio de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante la Resolución 8892 del 1 de octubre de 2019 de la Superintendencia Nacional de Salud, se designó como Liquidador de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 800250119-1, al suscrito Felipe Negret Mosquera, quien tomó posesión el día 01 de octubre de 2019, como consta en el Acta de Posesión S.D.M.E. 022 de 2019, para que ejecute los actos necesarios para desarrollar y llevar hasta su culminación el proceso liquidatorio de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN.

Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, es el dispuesto en la Resolución No. 2414 del 24 de noviembre de 2015, Resolución 8892 del 01 de octubre de 2019, adicionada por la Resolución 5687 del 20 de noviembre de 2017, Resolución 7808 del 8 de junio de 2018, Resolución 10895 de 22 de noviembre de 2018, Resolución 6229 del 21 de junio de 2019, Resolución 9172 del 15 de octubre de 2019, Resolución 252 del 24 de noviembre de 2021 y la Resolución No. 151 del 22 de julio de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006.

Que en cuanto a la naturaleza de los actos del liquidador, establece el numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero lo siguiente:

> *"(...)* ***2. Naturaleza de los actos del liquidador.*** *Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*
>
> *Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio. Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite,*

preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno (...)

CAPÍTULO SEGUNDO
SOBRE LOS EMPLAZAMIENTOS A LOS ACREEDORES, TERCEROS INTERESADOS Y SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS

Que en cumplimiento del artículo 9.1.3.2.1 y 9.1.3.2.2 del Decreto 2555, SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, los días 02 de diciembre de 2015 y 17 de diciembre de 2015, publicó en periódico de circulación nacional, igualmente en una emisora de Bogotá D.C y mediante fijación de AVISO en la cartelera de la entidad y en la página web https://www.saludcoop.com.co, emplazamiento convocando a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideraran con derecho a realizar reclamaciones de cualquier índole a la presentación de acreencias oportunas al proceso liquidatorio, indicando que se recibiría una reclamación por cada tipo de acreencia de manera separada (ejemplo: civiles, laborales, fiscales, prestación de servicios profesionales, arrendamientos, prestación de servicios de salud, eventos, litigiosas entre otros), por lo que los acreedores debían allegar los documentos relacionados en el FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS que se dispuso en la página web de la entidad https://www.saludcoop.com.co en el link ACREENCIAS, a partir del 18 de diciembre de 2015 o que podría ser solicitado GRATUITAMENTE en las instalaciones de la entidad.

Que en tal emplazamiento, se dispuso informar lo siguiente: "A todas las personas naturales o jurídicas, de carácter público (ICBF, SENA, DIAN, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría General de la República, Entidades Territoriales, entre otros) o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole (incluidos los terceros que consideren que la entidad tiene bienes de su propiedad y debe devolverlos), contra el SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACION, identificada con NIT 800.250.119-1, a fin de que se presenten a radicar su reclamación de manera OPORTUNA con prueba siquiera sumaria de sus créditos, únicamente en la sede ubicada en la Calle 128 Nº 54 – 07, Barrio Prado Veraniego de la ciudad de Bogotá DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 18 DE ENERO DE 2016, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:15 p.m. a 5:00 p.m.; cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título. SE INFORMA que una vez vencido el término para presentar reclamaciones de manera OPORTUNA; es decir, a partir del 19 de enero de 2016, quienes no hayan presentado su reclamación en el término antes fijado lo podrán hacer DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2016, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:15 p.m. a 5:00 p.m., para tal efecto, las reclamaciones presentadas serán graduadas y calificadas como EXTEMPORÁNEAS. SE ADVIERTE que una vez vencidos los plazos fijados en el punto anterior, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación y que las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en fuera de término, que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado y los bienes de terceros no reclamados serán considerados de propiedad de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÒN. SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACION, rechazará de plano aquellas facturas a nombre de otras entidades. Se advierte a toda la red de prestadores de servicios de salud que para radicar facturación de todos los servicios prestados a los usuarios afiliados a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACION y que no estén prescritas, deberán ser presentadas con la correspondiente reclamación, por lo cual, partir de la fecha no se aceptará ningún tipo de radicación de facturación."

Que por medio de la página web de la institución en liquidación, esto es, www.saludcoop.com.co, se dio amplia difusión a los formatos y a la manera en que estos deberían ser diligenciados. En igual sentido, se publicó un "INSTRUCTIVO DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL" con la finalidad de instruir a todos los acreedores de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, acerca del proceso liquidatorio y, en especial, lo concerniente al periodo de reclamaciones y la forma de presentación de las mismas.

Que las reclamaciones remitidas por correo certificado, debían enviarse a las sedes de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN ubicadas en la Calle 128 N° 54 – 07 Prado Veraniego, de la ciudad de Bogotá D.C., entendiéndose oportunas si y solo si, la oficina receptora del envío, registra timbre anterior a la hora y fecha límite de la recepción de acreencias oportunas; todas aquellas reclamaciones que registren fechas de envío posteriores a las 5:00 PM del 18 de enero de 2016, se consideraron reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en los términos del artículo 10 de la Ley 962 de 2005.

Que desde el día 18 de diciembre de 2015, además de la recepción de acreencias, se habilitó el servicio de atención y orientación personal a los acreedores en el punto de radicación, para solventar las dudas que surgieran en relación con la presentación oportuna y certera de las reclamaciones.

Que el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010 señala el término de un (1) mes como periodo máximo para la presentación de reclamaciones con cargo al proceso liquidatorio, el cual deberá ser contado a partir de la publicación del último aviso emplazatorio.

Que en el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2016, se presentaron al proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN reclamaciones oportunas.

Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010, establece que, vencido el término para la presentación de reclamaciones, se dará traslado común a todos los interesados por el término de cinco (5) días hábiles, para la presentación de objeciones acompañadas de las pruebas que tuvieren en su poder, sin que nadie descorriera el traslado.

Que el liquidador también emitió la Resolución No. 00001 del 25 de noviembre de 2015, *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL TÉRMINO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EXTEMPORANEAS DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION IDENTIFICADA CON NIT 800.250.119-1 Y CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"*, la cual fue publicada en la cartelera y en la página web de la entidad. Así mismo, se dispuso su publicación en un diario de amplia circulación con el fin de dar cumplimiento al artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010.

Que así mismo, se profirió la RESOLUCIÓN 00009 DE 19 ENERO DE 2016, por la cual *"SE MODIFICA UNICAMENTE EN CUANTO A LOS TÉRMINOS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 800.250.119-1 Y CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."*

Que a su turno, se profirió la Resolución 00002 del 25 de noviembre de 2015, por la cual *"SE ADOPTA EL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR PROFERIDOS POR EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 800250119-1 Y CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*

Que habiéndose tomado un tiempo prudencial, y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 962 de 2005, se expidió la Resolución No. 00008 del 19 de enero de 2016, *"POR MEDIO DE LA CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR DE SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACION IDENTIFICADA CON NIT.: 800250119-1, "ORDENA EL CIERRE DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO."*, incluyendo las reclamaciones enviadas por correo certificado al proceso de liquidación dentro del periodo de radicación de acreencias oportunas.

Que dichas resoluciones fueron publicadas en la cartelera y en la página web oficial, así como en un diario de amplia circulación a nivel nacional, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010.

Que todas aquellas reclamaciones que registren fechas de radicación o envió posteriores al 18 de enero de 2016, han sido consideradas como reclamaciones extemporáneas con fundamento en el 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010.

Que como consecuencia de lo anterior, mediante Resoluciones No. 00010 del 03 DE FEBRERO DE 2016, No. 00178 DEL 29 FEBRERO 2016, No. 00179 DEL 7 MARZO 2016 y No. 00180 DEL 11 DE MARZO DE 2016, se realizó la calificación y graduación de las reclamaciones presentadas oportunamente en el proceso liquidatorio, como también se hicieron aclaraciones y correcciones a las mismas.

Que posteriormente, la Agente Especial Liquidadora de la época, resolvió revocar los Actos Administrativos en mención por medio de la Resolución 1935 del 10 de AGOSTO 2016.

Que por lo tanto, fue expedida la Resolución No. 1945 del 22 DE DICIEMBRE DE 2016, POR LA CUAL SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA NUEVA CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN, Y ORDENA PAGO DE LAS ACREENCIAS PRESENTADAS DE MANERA OPORTUNA POR CONCEPTOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (LICENCIAS DE MATERNIDAD E INCAPACIDADES), decisión que fue notificada a todos y cada uno de los reclamantes.

Que mediante Resoluciones No. 1963 DEL 23 MARZO DE 2017, No. 1966 DEL 20 ABRIL DE 2017, No. 1973 DEL 22 JUNIO DE 2017, No. 1977 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017, No. 2004 DE 27 FEBRERO DEL 2018 y No. 2010 DE 06 ABRIL DEL 2018), en relación a la Resolución No. 1945 del 22 DE DICIEMBRE DE 2016, se adoptaron las siguientes decisiones: 1) LA INCLUSIÓN DE UNOS ACREEDORES QUE NO FUERON TENIDOS EN CUENTA INICIALMENTE EN EL SEÑALADO ACTO ADMINISTRATIVO, 2) SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION PRESENTADOS CONTRA LA MISMA, 3) SE CORRIGEN INCONSISTENCIAS FRENTE A NOMBRES Y NÚMEROS DE CÉDULAS PRESENTADAS, 4) ADICIONA ALGUNAS ACREENCIAS QUE CONTENIAN DOBLE CONCEPTO DE RECLAMACIÓN. 5) RESUELVE RECURSO PRESENTADO POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO, 6) Y SE REVOCA PARCIALMENTE."

Que mediante Resolución No. 1958 de 06 de marzo de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE TIENEN COMO BIENES EXCLUIDOS DE LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN (NO MASA)", fueron graduadas y calificadas las siguientes reclamaciones presentadas por conceptos de: SGSSS – Aportes SGP, SGSSS – Devolución de aportes, SGSSS – Ministerio y Reembolsos, las cuales se allegaron de manera oportuna al proceso Liquidatorio.

Que así mismo, fue proferida la Resolución No. 1960 del 06 de marzo de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN OBJECIONES A LOS CRÉDITOS PRESENTADOS OPORTUNAMENTE Y SE CALIFICAN Y GRADÚAN LAS ACREENCIAS" presentadas por concepto de: deudas laborales, deudas reconocidas a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, deudas de Impuestos Nacionales y Municipales, deudas con garantía prendaria o hipotecaria y deudas quirografarias.

Que mediante Resoluciones No. 1970 DEL 18 MAYO DE 2017, No. 1974 DEL 14 JULIO DEL 2017, No. 1976 DEL 31 DE JULIO DE 2017, No. 1983 DEL 30 DE AGOSTO DE 2017, No. 2018 DE 09 JULIO DEL 2018, se adoptaron las siguientes decisiones en relación a la RESOLUCIÓN No. 1960 DEL 06 DE MARZO DE 2017: 1) RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS, 2) ADICIONA A LA RESOLUCIÓN CUATRO ACREENCIAS PARA CALIFICAR Y GRADUAR, 3) REVOCA PARCIALMENTE.

Que a través de la citada Resolución No. 1974 de del 14 de julio de 2017 se resolvieron los recursos interpuestos contra la Resolución No. 1960 del 06 de marzo de 2017, en cuyos artículos primero, segundo y tercero se pronunció frente a las acreencias laborales, indicando que el detalle que componen este tipo de acreencias se encontraba en el Anexo N°1. En los artículos cuarto y quinto se pronunció frente a las acreencias por Prestaciones de Servicios de Salud. En el artículo sexto sobre acreencias de tipo fiscal. En el artículo séptimo sobre las acreencias con garantía hipotecaria. En los artículos octavo y noveno sobre acreencias con proveedores estratégicos y en los artículos décimo y décimo primero sobre acreencias quirografarias.

Que también se profirió la Resolución No. 2039 del 29 de marzo de 2019 "Por medio de la cual el agente especial liquidador se pronuncia respecto de las reclamaciones presentadas de forma extemporánea y determina el pasivo cierto no reclamado de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN."

Que a través de las Resolución No. 2061 del 08 de junio y la 2078 del 27 de diciembre de 2022, se adicionó el pasivo cierto no reclamado determinado en la Resolución No. 2039 de 2019, de conformidad con el capítulo tercero del presente acto administrativo.

Que ante SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN se presentaron unas acreencias que pueden agruparse así: i) EXCLUIDAS DE LA MASA, ii) OPORTUNAS y iii) EXTEMPORANEAS, frente a las que se realizarán las precisiones de que tratan los siguientes capítulos.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS ACREENCIAS DE SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

3.1 SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS EXCLUIDOS DE LA MASA

Que el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 9.1.3.2.4, establece que es deber del liquidador determinar las sumas y bienes excluidos de la masa.

Que el parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 señala que los procedimientos administrativos que siga la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de sus competencias, deberán atender las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria, enunciado normativo que se ratifica en el Decreto 1015 de 2002, que en su artículo primero dispone que en los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar una EPS o IPS, la Superintendencia Nacional de Salud deberá aplicar las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones que los complementen. Tal norma reglamentaria se compiló en el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto Único 780 de 2016.

Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el parágrafo único del artículo 299[1] establece que no harán parte de la masa de la liquidación los recaudos realizados por concepto de seguridad social.

Que en concordancia con lo anterior, la Ley 1797 de 2016, por medido de la cual se fijan las medidas de carácter financiero y operativo para el saneamiento de deudas del sector salud y el mejoramiento del flujo de recursos, establece en su artículo 12, que dentro de los procesos de liquidación de las EPS, deberá apartarse y cubrirse primero, los recursos adeudados al FOSYGA -- hoy ADRES -, esto es, los recaudos realizados por concepto de seguridad social, debido a que, de acuerdo con las funciones señaladas en el Decreto 2265 de 2017, esta entidad tiene a su cargo la administración de estos recursos[2] junto con la adopción y desarrollo de procesos y acciones para el adecuado uso, flujo y control de los recursos del SGSSS.

---

[1] **DECRETO LEY 663 DE 1993. ARTÍCULO 299. MASA DE LIQUIDACIÓN.** *"(...) **PARAGRAFO.** No harán parte del balance de los establecimientos de crédito y se contabilizarán en cuentas de orden, las sumas recaudadas para terceros, en desarrollo de contratos de mandato, tales como las correspondientes a impuestos, contribuciones y tasas, así como los recaudos realizados por concepto de seguridad social y los pagos de mesadas pensionales, mientras no se trasladen por orden expresa y escrita del mandante de depósitos ordinarios, cuentas de ahorro o inversiones."*

[2] **LEY 1753 DE 2015. ARTÍCULO 67. RECURSOS QUE ADMINISTRARÁ LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.** La Entidad administrará los siguientes recursos: *"(...) d) Las cotizaciones de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluidos los intereses, recaudados por las Entidades Promotoras de Salud. Las cotizaciones de los afiliados a los regímenes especiales y de excepción con vinculación laboral adicional respecto de la cual estén obligados a contribuir al SGSSS y el aporte solidario de los afiliados a los regímenes de excepción o regímenes especiales a que hacen referencia el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo del artículo 57 de la Ley 30 de 1992. (...)"*

Que así las cosas, SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN excluyó de la masa de liquidación **22.915 acreencias** por tratarse de sumas de dinero producto de la captación o recaudo de los aportes realizados por los usuarios afiliados al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por tratarse de recursos de específica destinación por disposición constitucional, de acuerdo con el siguiente detalle:

Prelación	Acreencias Radicadas		Calificación y Graduación de Acreencias		
	Cantidad	Valor Reclamado	Cantidad	Valor Reconocido	Valor Rechazado
NO MASA	22.915	$333.032.080	22.915	$ 203.222.321	$ 152.313.427

Cifras en miles de pesos

3.2 SOBRE LA CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS ACREENCIAS OPORTUNAS

Que de acuerdo con las Resoluciones No. 1945 del 22 de diciembre de 2016, 1958 del 06 de marzo de 2016, 1960 de del 06 de marzo de 2016, 1963 del 23 de marzo de 2017, 1977 del 04 de agosto de 2017, 2037 del 20 de febrero de 2019 y la Resolución 1974 del 14 de julio de 2017, por medio de las cuales se dio traslado de las reclamaciones oportunamente presentadas a SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, se presentaron **4.190 acreencias oportunas.**

Que se adelantó el proceso de calificación y graduación de todas las acreencias oportunamente presentadas a SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN a la luz del artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, y fueron resueltos todos los recursos de reposición presentados por dicha calificación de conformidad con el Artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010.

Que como consecuencia de lo anterior, el Auto de Graduación y Calificación de Acreencias de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN quedó en firme el 06 de marzo de 2017, el cual, actualizado al 24 de enero de 2023, reporta el siguiente detalle:

Prelación	Acreencias Radicadas		Calificación y Graduación de Acreencias		
	Cantidad	Valor Reclamado	Cantidad	Valor Reconocido	Valor Rechazado
Prelación A	793	$36.6-56.995	793	$17.600.358	$19.191.696
Prelación B	2.379	$4.511.239.980	2.379	$1.349.673.752	$3.165.537.365
Prelación C	6	$87.110.221	6	$59.086.811	$28.023.409
Prelación D	1	$53.351.565	1	$13.089.145	$40.262.419
Prelación E	154	$320.482.925	154	$152.692.175	$170.531.572
Prelación F	857	$3.286.129.337	857	$1.476.728.677	$1.810.267.512
Total Oportunas	**4.190**	**$8.294.971.021**	**4.190**	**$3.068.870.919**	**$5.233.813.975**

Cifras en miles de pesos

3.3 SOBRE EL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO Y LAS RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS

Que después del 16 de febrero de 2016 y con corte al 24 de enero de 2023, se calificaron y graduaron 12.832 acreencias dentro de esta categoría, de acuerdo con lo dispuesto en el 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, así:

Concepto	Acreencias Radicadas		Calificación y Graduación de Acreencias		
	Cantidad	Valor Reclamado	Cantidad	Valor Reconocido	Valor Rechazado
NO MASA	11.366	$ 119.438.630	11.366	$ 10.433.678	$ 118.621.603
Prelación A	306	$ 3.850.488	306	$ 2.550.202	$ 2.213.276
Prelación B	585	$ 2.926.384	585	$ 28.529.522	$ 2.656.535
Prelación C	21	$ 0	21	$ 4.417.942	$ 0
Prelación E	9	$ 407.548	9	$ 55.222	$ 407.548

Prelación F	545	$ 30.988.972	545	$ 23.402.810	$ 18.403.314
Total general	12.832	$ 157.612.022	12.832	$ 69.389.376	$ 142.302.275

CAPÍTULO CUARTO
DEL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO

Que en cumplimiento del artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010, **SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN** expidió la Resolución No. 2061 del 08 de junio de 2022 "*Por medio de la cual el Agente Liquidador determina el pasivo cierto no reclamado dentro del proceso liquidatorio de* SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN."

Que de conformidad con la citada resolución, SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN clasificó como PASIVO CIERTO NO RECLAMADO por encontrarse registrado contablemente en los estados financieros de la entidad, la suma de **SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($69.389.375) M/CTE.**

CAPÍTULO QUINTO
CONFORMACIÓN DEL ACTIVO

Que a la fecha se encuentran plenamente identificados los activos de la liquidación, tal y como consta en la Resoluciones No. 1949, 1952 y 1957 de 2017, donde se encuentran incorporados los bienes muebles y, por otro lado, las Resoluciones No. 184 de 2016, No. 1933, 1948 de 2017, No. 2052, 2053, 2054 de 2021 y 2060 de 2022, donde se encuentra incorporados los bienes inmuebles de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

Que tal y como se refleja en los estados financieros, el total de activos de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN ascienden a la suma de **TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($313.380.164)** M/C, discriminados de la siguiente manera:

Concepto	Saldo a 24 de enero de 2023
Efectivo y Equivalente al Efectivo	$ 29.769.830
Inversiones	$44.193.053
Cuentas Por cobrar	$146.170.819
Propiedad Planta y Equipo	$ 93.246.463
TOTAL ACTIVO	**$313.380.164**

Que los valores correspondientes a "Cuentas por Cobrar" no constituyen un activo actualmente disponible, pues su consolidación está sujeta al cumplimiento de una condición favorable (fallo o recaudo).

Ahora bien, es menester indicar que SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN sigue efectuando la depuración de la Cartera en cuanto a los procesos de: Compensación, Recobros NO POS Contributivo, Prestaciones Económicas, Cuentas por Cobrar LMA, para determinar el recaudo y saneamiento que haya lugar, para así establecer el valor final que hará parte de la entidad en proceso de liquidación, siguiendo los parámetros establecidos en la normatividad legal vigente.

CAPÍTULO SEXTO
CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO

Que de conformidad con el artículo 9.1.3.10.1 del Decreto 2555 de 2010, SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN realizó las actividades tendientes a la depuración del archivo de la extinta de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley.

Que así mismo, se efectúo la cesión del contrato de custodia, conservación y administración

de archivo, con una reserva presupuestal por el término de un año.

CAPÍTULO SÉPTIMO
TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA JURÍDICA DE SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

Que de acuerdo con la Resolución Ejecutiva No. 151 del 22 de julio de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social *"Por la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa para liquidar SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 800.250.119-1"* se ordenó la prórroga de la toma de posesión por el término de seis (6) meses, del 25 de julio de 2022 al 24 de enero de 2023.

Que sin exceder del término de la prórroga concedido en el mencionado acto administrativo, es obligación del Agente especial Liquidador declarar terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN.

Adicional a lo expuesto, el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece que el Liquidador declarará terminada la existencia legal de la entidad en liquidación cuando se cumplan las condiciones ahí señaladas.

Que el literal a) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece que una de las condiciones por la cuales debe declararse la terminación de la existencia legal de la entidad intervenida es "*a) Que se encuentran plenamente determinadas las sumas y bienes excluidos de la masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación, el pasivo cierto no reclamado y la desvalorización monetaria, de conformidad con lo señalado en el presente Libro"*

Que SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, tiene plenamente identificadas las sumas y bienes excluidos de la masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación, el pasivo cierto no reclamado, en los términos descritos en acápites precedentes.

Que el literal b) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: *"b) Que se encuentra plenamente determinado el activo a cargo de la institución financiera en liquidación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 9.1.3.3.1 y 9.1.3.3.2 del presente decreto;(...)"*

Que SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, tiene plenamente identificados los Activos de la liquidación, en los términos establecidos en el capítulo quinto del presente acto administrativo.

Que cabe precisar que si bien, al cierre del proceso de liquidación, se reportaron pretensiones de cartera y procesos a favor, los mismos están sujetos al recaudo y solo se podrán disponer una vez estos ingresen a la entidad o a los terceros encargados de la gestión de remanentes, para ser distribuidos en los términos y prelaciones del proceso Liquidadorio.

Que el literal c) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece lo siguiente: *"c) Que el pasivo externo a cargo de la institución financiera en liquidación se encuentra total y debidamente cancelado o que la totalidad de los activos de dicha institución se han distribuido entre los acreedores;* (...)"

Que el literal f) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: *"f) Que la provisión para el mantenimiento y conservación del archivo de la institución financiera en liquidación se encuentra debidamente constituida, y que el archivo haya sido entregado a quien tendrá la custodia del mismo (...)"*

Que SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN cuenta con la provisión presupuestal para la custodia, el mantenimiento y conservación del archivo en los términos señalados en el capítulo sexto de la presente resolución. Sin embargo, de existir recursos adicionales con posterioridad al cierre de proceso de liquidación se dispondrán para la custodia del archivo.

Que el literal g) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: *"g) Que el cierre contable se haya realizado; (...)"*

Que SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN procedió a efectuar el cierre contable de la entidad el día 24 de enero de 2023, tal como se puede verificar en las cifras contenidas en el informe final de del proceso de Liquidación.

Que el literal h) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: *"h) Que una copia impresa y en medio digital del directorio de acreedores debidamente actualizado haya sido recibido en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN; (...)"*

Que el Agente Especial Liquidador de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, rindió dentro de los términos legales establecidos los informes de gestión mensual, trimestral y los informes anuales de rendición de cuentas a la Superintendencia Nacional de Salud con base en los formatos establecidos, sin que a la fecha se recibieran objeciones por parte del ente de control y vigilancia.

Que el literal i) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: *"i) Que la rendición final de cuentas presentada por el liquidador se encuentre en firme y protocolizada y una copia de la respectiva escritura pública se haya recibido en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN; (...)"*

Que el Agente Especial Liquidador del SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN remitió el 24 de enero de 2023, a la Superintendencia Nacional de Salud, el Informe de Rendición de Cuentas del proceso Liquidatorio con corte al 31 de diciembre 2022, el cual, fue debidamente protocolizado, mediante Escritura Pública No. 138 de fecha 23 de enero de 2023 otorgada en la Notaría 39 del Círculo Notarial de Bogotá D.C.

Que el 17 de enero de 2023, se llevó a cabo sesión extraordinaria de Junta de Acreedores No.13 para la presentación del Informe final de cierre, y se informó a los acreedores que una vez se cuente con el informe final de rendición de cuentas y los estados financieros dictaminados a 24 de enero, se procederá conforme lo establece la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud Título 9 Capítulo 3 numeral 1.4.

Que el 24 de enero de 2023, fue publicado el Informe de Rendición de Cuentas de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN en la página web de la entidad, y se remitió correo electrónico dando aviso de tal situación a todos los acreedores reconocidos de la EPS en liquidación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los literales h), i), j) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, el 24 de enero se remitieron a la Superintendencia Nacional de Salud los siguientes documentos: I) Directorio de Acreedores actualizado. II) Escritura Pública No. 138 del 23 de enero de 2023 de la Notaría 39 del Círculo Notarial de Bogotá, por medio de la cual se protocolizó la rendición de cuentas y los estados financieros debidamente dictaminados. III) Contrato de Mandato suscrito con el Dr. Edgar Mauricio Ramos Elizalde

Que la Junta de Acreedores, sesión extraordinaria No. 14, celebrada el 23 de enero de 2023, aprobó de manera unánime la suscripción de Contrato de Mandato con el Doctor Mauricio Ramos Elizalde.

Que se solicitó en los términos del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, a la Superintendencia Nacional de Salud el día 23 de enero de 2023, mediante 20239300400187842, la autorización de suscripción del contrato de mandato correspondiente a la gestión de los bienes y actividades remanentes del proceso de liquidación de Saludcoop EPS OC en liquidación, así como para representar para todos los efectos legales pertinentes.

Que mediante comunicación 20231300000062991 del 24 de enero de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud, emitió concepto favorable para suscribir contrato de mandato como la mejor alternativa para el cierre del proceso liquidatorio de SALUDCOOP

EPS EN LIQUIDACIÓN, así aprobó la suscripción del contrato de mandato con el Doctor Mauricio Ramos Elizalde.

Que ateniendo a lo anterior, fue debidamente perfeccionado el Contrato de Mandato con el Doctor Mauricio Ramos Elizalde.

Que, según lo expuesto, se encuentran satisfechas cada una de las condiciones que le permiten al Agente Especial Liquidador declarar la terminación de la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN.

CAPÍTULO OCTAVO
CARENCIA DE PERSONERÍA JURÍDICA DE SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en relación con la personalidad jurídica de una sociedad liquidada, dijo: *"(...) En suma, **una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones** y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser demandada. Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada"*[3]

Que, así las cosas, una vez se produzca el cierre el proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN la persona jurídica desaparece, lo que se traduce en falta de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y a la postre, la imposibilidad para ser parte en un proceso, esto es, ser representada judicial y extrajudicialmente, de conformidad con lo establecido en el inciso 1° del artículo 633 del Código Civil.

Que, SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN no tendrá legitimación en la causa por activa o por pasiva, por carecer de personería jurídica, capacidad de goce y ejercicio, como tampoco capacidad procesal.

Que, en consecuencia, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución por medio de la cual se declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, ningún tercero puede iniciar o promover demanda o actuación administrativa contra SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN al carecer de capacidad procesal.

Que de manera expresa se manifiesta que, como consecuencia de la terminación de la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, no existe subrogatario legal, sustituto procesal, patrimonio autónomo o cualquier otra figura jurídica procesal que surta los mismos efectos.

Que, en igual sentido, a partir de la fecha de expedición de la resolución que declara terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, ninguna autoridad administrativa y ningún órgano de control, podrá iniciar actuación alguna en contra de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, toda vez que a partir de la expedición de la presente resolución, SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, carece de personería jurídica para actuar y por tanto desaparece del escenario jurídico.

Que las anteriores precisiones se realizan sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes a favor de la empresa en liquidación, que pueden estarse discutiendo o reclamando en instancias administrativas o judiciales, o que se puedan discutir a futuro y para las cuales no existe ninguna renuncia o desistimiento por parte de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, como quiera que los mismos están destinados al pago de las acreencias insolutas.

En mérito de lo expuesto,

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 23 de abril de 2015, Radicación 25000-23.27-000-2012-00378-01. Número interno 20688. Consejera Ponente: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR terminada la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 800250119-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.

PARÁGRAFO: De manera expresa se manifiesta que como consecuencia de la terminación de la existencia legal de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN no existe subrogatario legal, sustituto procesal, patrimonio autónomo o cualquier otra figura jurídico procesal que surta los mismos efectos, sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes que se discuten o se puedan discutir a futuro judicial y administrativamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Cámara de Comercio de Bogotá la cancelación de la matrícula mercantil a nombre de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 800250119-1, así como la cancelación de inscripción de las sucursales, agencias y establecimientos de comercio de la empresa.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la inscripción de la presente Resolución en los registros administrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades del orden nacional y territorial; así como la cancelación del registro como Agente Liquidador.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en la forma prevista en el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010 y en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante la publicación, por una sola vez, de la parte resolutiva en un diario de amplia circulación nacional y en la web institucional.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso conforme lo señalado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D. C, a los (24) días del mes de enero de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Agente Especial Liquidador
SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA. RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP
Nit: 800250119 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

INSCRIPCIÓN

Inscripción No. S0044051 cancelada

CONSTITUCIÓN

Por Certificación del 5 de marzo de 2013 de Superintendencia Nacional de Salud, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 2013, con el No. 00009231 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona jurídica del sector solidario de naturaleza Cooperativa denominada SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP.

Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 3722 el 20 de diciembre de 1994, otorgada por: DANCOOP DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Resolución No. 3722 del 20 de diciembre de 1994 se autorizó el Acto de Constitución.

Acta 14 de fecha 29 de junio de 2004 (auto 742 de fecha 29 de junio de 2005 y Resolución 1625 del 1 de noviembre de 2005). OR 442 de fecha 23 de enero de 2006.) Se efectuaron observaciones respecto de los Artículos 4 parágrafo segundo; y 17.

Mediante Oficio No. 3271 del 27 de septiembre de 2016, inscrito el 25 de enero de 2017 bajo el No. 00028363 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, el juzgado once Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), comunico que en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual radicación 760013103011-2016-00234-
00, de Edier
Orlando Ramírez y Luisa Milena Marín Gómez, contra SALUDCOOP Entidad Promotora de Salud y Diego Marín Bonilla, se decretó la inscripción de la demanda en la entidad de la referencia.

Mediante oficio No.1700121-
3804 del 22 de septiembre del 2017,
inscrito 16 de noviembre de 2017 bajo el No. 00031941 del libro III, el juzgado 11 civil del circuito de Cali Valle, comunico que en el proceso: verbal No. 2017-
0012100 de: Ana Ximena Ruiz Valencia y
Roberto Ruiz Valencia contra: Alberto Enrique Munive; SALUCOOP EPS en liquidación, se decretó la inscripción de la demanda en la entidad de la referencia.

Mediante oficio No. 2215 del 19 de octubre de 2018, inscrito el 30 de octubre de 2018 bajo el No. 00035753 del libro VIII, el Juzgado 16 civil del circuito de Bogotá D.C., comunicó que en el proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11001310301620180042l de: Viviana María Vélez Arenas y José Iván Méndez Chona quienes actúan en causa propia y en representación de los menores de edad gloria y Yureima Méndez Vélez Y Julián David Méndez Vélez y por Ana Rosa Chona Sánchez, Baudilio Méndez Lozano, Jair De Jesús Vélez Arboleda y Gloria Amparo Arenas Martínez contra: ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. ESIMED, IPS CLÍNICA ESIMED LA SALLE, SALUDCOOP EPS entidad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN, CAFESALUD Entidad Promotora De Salud S.A.- CAFESALUD EPS S.A., MEDIMAS EPS S.A.S se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Resolución No. 00801 del 11 de mayo de 2011 por la cual se ordena la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de SALUDCOOP y se fija un término. Or 686 del 13 de mayo de 2011.

Resolución 01163 del 14 de junio de 2011 por la cual se acepta una renuncia y se designa el agente especial de SALUDCOOP entidad promotora de salud organismo cooperativo, con NIT 800250119-
1, sujeto
a intervención forzosa administrativa, para administrar.

En calidad de Contralor del proceso liquidatario se designó a la firma auditorías y revisorías fiscales AUDOIROUP LTDA, entidad que ejerce la labor a través del Doctor Miguel Antonio Ramírez Alfonso C.C. No. 79.402.530 de Bogotá en arminía (SIC) con el decreto 3023 del 11 de diciembre de 2002, según acta No.004 del 16 de abril de 2005 inscripción Or 465 de fecha 7 de abril de 2005 de la superintendencia nacional de salud.

Mediante Resolución No. 01354 del 23 de junio de 2011 y acta de posesión S.D.M.E 035 del 13 de julio de 2011, se designó como contralor a la firma VEGA MARTINEZ AUDITORES Y CONSULTORES LTDA VM LTDA, con NIT 819.001.616-
2 representada legalmente por el Dr.
Franklin José Martínez Ávila, con C.C. 85.452.265 de santa marta.

Resolución 003135 del 4 de noviembre de 2011, por la cual se da cumplimiento al fallo de tutela de fecha 31 de octubre de 2011, proferido por el juzgado treinta y siete civil del Circuito de Bogotá y se ordena levantar la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de SALUDCOOP entidad promotora de Salud Organismo Cooperativo "SALUDCOOP".- con Nit 800.250.119-1.

Resolución 003373 del 23 de noviembre de 2011, por la cual se da cumplimiento al fallo de tutela de fecha 17 de noviembre de 2011, proferido por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá y se ordena reabrir el proceso de toma de posesión

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar SALUDCOOP, entidad promotora de salud organismo cooperativo "SALUDCOOP".- con NIT 800.250.119-
1 y se dictan
otras disposiciones.

Mediante la cual se resuelve.- artículo primero.- Cumplir la orden impartida por la sala civil del tribunal superior del Distrito Judicial de Bogotá, en los términos de la sentencia proferida en fecha 17 de noviembre de 2011, dictada dentro de la acción de tutela promovida por la Señora Claudia Patricia López Ochoa y Luz Dary Muños Zaraza y el Señor Jesús Hernán Rivera Torres y en la cual se dispuso lo siguiente: Primero.- revocar la sentencia de fecha y origen pre anotados.- segundo.- negar las pretensiones principales y subsidiarias, por las razones expuestas.- tercero.- notifíquese a las partes por el medio más expedito.- cuarto.- envíese el expediente a la corte constitucional. Artículo Segundo.- revocar la resolución No. 3135 del 4 de noviembre de 2011, por la cual se dio cumplimiento a lo ordenado en fallo de tutela del 31 de octubre de 2011, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá. Artículo Tercero.- ordenar la apertura de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar SALUDCOOP entidad promotora de salud organismo cooperativo. Artículo Quinto.- Separar del cargo de representante legal de SALUDCOOP entidad promotora de salud organismo cooperativo, entidad intervenida, a la Doctora Carolina Lamos Becerra, portadora de la cédula de ciudadanía No. 41.789.077 de Medellín o quien haga sus veces, en virtud de lo dispuesto en el estatuto orgánico del sistema financiero. Artículo Sexto.- separar como agente especial interventor de SALUDCOOP entidad promotora de salud organismo cooperativo, entidad intervenida, al Doctor Wilson Sánchez Hernández, portador de la cédula de ciudadanía No. 79.503.500. Artículo Séptimo.- designar como agente especial interventor de SALUDCOOP entidad promotora de salud organismo cooperativo, al Doctor Mauricio Castro Forero, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.439.748

Mediante acta de posesión de la superintendencia delegada de medidas especiales 056 de 2011, el Doctor Mauricio Castro Forero, presta juramento y promete cumplir fielmente las funciones, quien fue designado como agente especial interventor de SALUDCOOP, entidad promotora de salud organismo cooperativo " SALUDCOOP" NIT 800.250.119-1.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Oficio No. 0671 del 19 de diciembre de 2022, el Juzgado 2 Civil del Circuito de Oralidad de Tunja (Boyacá), inscrito el 13 de Enero de 2023 con el No. 00049307 del libro III de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, ordenó la inscripción de la demanda en la entidad de la referencia, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual y contractual No. 150013153002-2022-00184-00 de
Manuel José Católico Pacanchique C.C. 4.179.724 y Blanca Liseth Reyes Cuervo C.C. 33.337.125, a título personal y como representantes de los menores S.V.C.R y S.D.C.R, así como Omar Católico Pacanchique C.C. 7.170.937, Edilberto Católico C.C. 4.249.214, Gonzalo Católico Pacanchique C.C. 4.249.049, Imelda Católico Pacanchique C.C. 40.044.014, Oscar Fernando Católico Pacanchique C.C. 1.073.161.412, Erika Johana Católico Pacanchique C.C. 1.002.709.345, Manuel José Católico Cuervo C.C. 6.747.137, María Pacanchique León C.C. 23.273.894 y Maria Mónica Cuervo Rojas C.C. 40.011.818, contra SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN NIT. 800.250.119-1.

DISOLUCIÓN

Sin dato por disolución.

Mediante Resolución No. 2414 del 24 de noviembre de 2015, inscrito el 26 de noviembre de 2015 bajo el No. 00023737 del libro III, de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, la Superintendencia Nacional de Salud, ordeno la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la entidad de la referencia.

APROBACIÓN DE CUENTA FINAL LIQUIDACIÓN

Mediante Resolución No. 2083 de 2023 del 24 de enero de 2023, del Liquidador, inscrito el 27 de Enero de 2023 con el No. 00049355 del libro III de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, resuelve declarar terminada la existencia legal de la entidad de la referencia.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP tiene como objetivo del acuerdo cooperativo la afiliación y el registro de los afiliados del sistema general de seguridad social en salud y el recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados y girar al fondo de solidaridad y garantía o percibir de éste, dentro de los términos previstos en las normas legales, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por capitación, todo de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y en las demás normas legales que se adopten sobre el sistema general de seguridad social en salud. Parágrafo - SALUDCOOP podrá directa o indirectamente ofrecer a sus afiliados servicios complementarios al plan obligatorio de salud. Parágrafo segundo. De igual forma SALUDCOOP podrá directa o indirectamente administrar y prestar servicios de salud fuera del territorio colombiano, de conformidad con lo señalado en la ley.

PATRIMONIO

-$ 330.970.389.000,00

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Resolución No. 008892 del 1 de octubre de 2019, de Superintendencia Nacional de Salud, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de octubre de 2019 con el No. 00039426 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Agente Especial Liquidador	Felipe Negret Mosquera	C.C. No. 10547944

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Resolución No. 2414 del 24 de noviembre de 2015, de Superintendencia Nacional de Salud, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de 2015 con el No. 00023739 del Libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Contralor	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	N.I.T. No. 800249449 5

PODERES

Por Escritura Pública No. 1728 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018963 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Luz Dary Muñiz Zaraza identificada con cédula ciudadanía No. 63.368.603 de Bogotá D.C., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de Nariño de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la representación
Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1729 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018964 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Gloria Lucia Quiroz Hernández identificada con cédula ciudadanía No. 51.882.565 de Bogotá D.C., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de Santander de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPS OC-: 1.
Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1730 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018965 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Alfonso Lequerica Borge identificado con cédula ciudadanía No. 73.129.563 de Cartagena., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de costa atlántica de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPS OC-: 1.
Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1733 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018966 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Alba Azucena Fonseca Cristancho identificada con cédula ciudadanía No. 46.662.107 de Duitama., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de Boyacá de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la representación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1735 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018967 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Elkin Fabián Silva identificado con cédula ciudadanía No. 86.061.139., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de Norte de Santander de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la representación Legal de
SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 1739 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018968 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Beatriz Helena Giraldo identificada con cédula ciudadanía No. 43.053.644 de Medellín., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de Antioquia de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1740 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 04 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018969 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Jesús Hernán Rivera identificado con cédula ciudadanía No. 17.313.029, para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de los llanos orientales de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la representación Legal de
SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1734 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018970 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Sandra Piedad Villamil peña identificada con cédula ciudadanía No. 23.498.320 de Chiquinquirá, para que en forma individual y en su calidad de gerente regional de occidente de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1.
Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1999 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 09 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018971 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Milton Herllen Peláez Parra identificado con cédula ciudadanía No. 80.731.225 de Bogotá D.C. Y portador de la tarjeta profesional No. 199.234 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1996 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 09 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018972 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Aleyda Rosero Alvear identificada con cédula ciudadanía No. 27.296.533 expedida en la unión (Nariño) y portadora de la tarjeta profesional no 109.677 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1997 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 09 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018973 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Lesvía Cifuentes Zambrano identificada con cédula ciudadanía No. 27.296.070 expedida en la unión (Nariño) y portadora de la tarjeta profesional No. 59.009 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2001 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 09 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018974 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Jon Henry Herrera identificado con cédula ciudadanía No. 79.662.450 expedida en Bogotá D.C., y portador de la tarjeta profesional no 173.362 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2002 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 09 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018975 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente maría helena malagon identificada con cédula ciudadanía No. 52.454.140 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional no 123.442 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2010 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018976 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente yuli Alexandra solano solano identificada con cédula ciudadanía No. 53.168.214 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional no 171.144 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2007 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018977 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente William francisco Angulo García identificado con cédula ciudadanía No. 79.716.259 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional no 182.288 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1741 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018978 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Antonio José Romero Jaime identificado con cédula ciudadanía No. 79.143.810 de Bogotá D.C., para que en forma individual y en su calidad de gerente Regional del Tolima de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-. 1. Ejerza la
representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2005 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018979 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Paola Andrea Bohórquez identificada con cédula ciudadanía No. 1.121.841.544 expedida en Villavicencio y portadora de la tarjeta profesional no 206.708 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2015 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018980 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Irma Fernanda Beltrán Calderón identificada con cédula ciudadanía No. 52.781.008 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la tarjeta profesional no 165.103 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2013 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018981 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Manuel Alejandro Plazas. Identificado con cédula ciudadanía No. 79.918.270 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la tarjeta profesional no 226.708 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2012 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018982 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Silvia Amparo Sáenz Lugo. Identificada con cédula ciudadanía No. 1.015.394.311 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la tarjeta profesional no 180.488 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2009 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018992 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente diana Paola Espitia Sánchez identificada con cédula ciudadanía No. 52.993.253 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la tarjeta profesional no 227.347 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2087 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018993 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Sandra Milena Vergara Gutiérrez identificada con cédula ciudadanía No. 35.263.970 expedida en Villavicencio, y portadora de la tarjeta profesional no 204.243 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la Regional Cundinamarca. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional Cundinamarca, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional de Cundinamarca en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2088 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018994 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente Leidy Tatiana Gómez Velásquez identificada con cédula ciudadanía No. 1.023.889.553 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la tarjeta profesional no 217.050 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional Cundinamarca. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional Cundinamarca en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional de Cundinamarca en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 2086 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018995 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Alba Roció Ramírez identificada con cédula ciudadanía No. 52.483.397 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la tarjeta profesional no 126.572 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la Regional Eje Cafetero. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional eje cafetero en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional del eje cafetero en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2084 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018996 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Néstor Mauricio Nieva Quintero identificado con cédula ciudadanía No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

71.389.583 expedida en Medellín, y portador de la tarjeta profesional no 150.502 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional Antioquia. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional Antioquia en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional de Antioquia en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2093 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018998 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Steven Edwin Echeverría Zea identificado con cédula ciudadanía No. 72.006.019 expedida en barranquilla, y portador de la tarjeta profesional no 130.513 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional costa atlántica. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional de Costa atlántica en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional costa atlántica en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2091 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00018999 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Martha Luisa Díaz Rodríguez identificada con cédula ciudadanía No. 60.350.924 expedida en Cúcuta, y portador de la tarjeta profesional no 91.798 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional Norte de Santander. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional norte de Santander en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional norte de Santander en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2094 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019000 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Juan Carlos Castillo Gómez identificado con cédula ciudadanía No. 77.092.292 expedida en Valledupar, y portador de la tarjeta profesional no 219.031 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional Costa atlántica. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional Costa atlántica en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional Costa Atlántica en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2092 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. 00019001 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Sandra Milena Burgos Idalgo identificada con cédula ciudadanía No. 36.754.595 expedida en pasto, y portador de la tarjeta profesional no 117.758 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la Regional Nariño. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Nariño en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la Regional Nariño en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2518 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 17 de diciembre de 2013, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019002 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Lorena María del Pilar Vargas Oviedo identificada con cédula ciudadanía No. 52.853.260 expedida en Bogotá D.C., y portador de la tarjeta profesional no 116.420 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Nariño en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 3, autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6 asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes por virtud de este encargo, el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De pc. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para - asistir
como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0026 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 13 de enero de 2014, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019003 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Sandra Carolina Cerquera Unda identificada con cédula ciudadanía No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

53.001.820 expedida en Bogotá D.C., y portador de la tarjeta profesional no 165.104 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Nariño en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 3, autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6 asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes por virtud de este encargo, el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De pc. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para - asistir
como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0027 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 13 de enero de 2014, inscrita el 05 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019004 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Ana María Londoño Robín identificada con cédula ciudadanía No. 52.896.697 expedida en Bogotá D.C.,, y portador de la tarjeta profesional no 135.966 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Nariño en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 3, autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6 asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes por virtud de este encargo, el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De pc. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para - asistir
como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1589 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 28 de agosto de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

00019005 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Diana Carolina Monsalve Medina identificada con cédula ciudadanía No. 1.030.545.504 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 209.085 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en general, en calidad de parte, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas de Colombia, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. 2. Actué como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representado Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencia de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la entidad, hasta por un monto de ciento treinta (130) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador o abogado señor de la IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderada de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acuda en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

condición de apoderada judicial y represente Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de falos de tutela, incidentes de desacato, audiencias de conciliación y cualquier otra diligencia, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, la apoderada gozará de la facultad de confesar. 6. La apoderada queda expresamente facultada para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1588 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 28 de agosto de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019006 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Karen Milena Parra Mosquera identificada con cédula ciudadanía No. 1.057.574.748 de Sogamoso., y portadora de la tarjeta profesional No. 225.698 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: 1. Ejerza la representación judicial de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en general, en calidad de parte, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas de Colombia, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. 2. Actué como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representado Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencia de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la entidad, hasta por un monto de ciento treinta (130) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador o abogado señor de la IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderada de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acuda en condición de apoderada judicial y represente Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de falos de tutela, incidentes de desacato, audiencias de conciliación y cualquier otra diligencia, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, la apoderada gozará de la facultad de confesar. 6. La apoderada queda expresamente facultada para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1668 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 03 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019007 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Erika Liliana Prada Gutiérrez identificada con cédula ciudadanía No. 65.758.486., para que en forma individual y en su calidad de gerente regional del Tolima de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la representación Legal de
SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1765 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019008 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad
De agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Constanza Lugo Montes identificada con cédula ciudadanía No. 36.283.868 de, para que para que en forma individual y en su calidad de gerente regional del Huila de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPS OC-: 1. Ejerza la
representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1769 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019010 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Daniel Fernando Hernández Vega identificado con cédula ciudadanía No. 80.843.772 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 239.244 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1768 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de agosto de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019011del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Alberto Miguel Peña Ospino identificado con cédula ciudadanía No. 80.851.935 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 203.676 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1770 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019012 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Juan Daniel Aguilera López identificado con cédula ciudadanía No. 1.130.666.010 de Cali., y portador de la tarjeta profesional No. 228.104 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1773 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019014 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a María Angélica Holguín identificada con cédula ciudadanía No. 53.055.241 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 218.052 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1774 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019015 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Daniel Fernando Gómez Gallego identificado con cédula ciudadanía No. 1.000.116.419 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 216.243 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1772 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019016 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Diego Alexander Gaitán Contreras identificado con cédula ciudadanía No. 1.020.722.652 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 207.475 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1775 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019017 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Manuel Camilo Ortiz Hernández identificado con cédula ciudadanía No. 1.020.759.723 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 235.727 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1771 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019018 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a David Alexander Caicedo Parra identificado con cédula ciudadanía No. 1.040.353.975 de Carepa(Antioquia)., y portadora de la tarjeta profesional No. 213.000 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1776 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 12 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019019 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a camilo Eduardo Santamaría Sánchez identificado con cédula ciudadanía No. 80.902.366 de Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 191.863 del C.S.J para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1843 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 17 de septiembre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019022 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Hernán Sepúlveda Martínez identificado con cédula ciudadanía No. 79.445.101 de Bogotá D.C., para que en forma individual y en su calidad de gerente especial de salud regional de Cundinamarca de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP
EPS OC-: 1. Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Certifica.

Por Escritura Pública No. 2029 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 5 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019024 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad

De agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a MARIA LUISA CALDERON CAÑON identificada con cédula ciudadanía No. 1.121.842.613 y portadora de la tarjeta profesional No. 222.460 del C.S.J, para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: En la región llanos. El (la) mandatario (a) se encuentra facultado (a) para 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional llanos en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C. P ,C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional llanos en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

por Escritura Pública No. 2033 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019029 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Sergio Andrés Rico Gil identificado con cédula ciudadanía No. 18.523.054 y portadora de la tarjeta profesional No. 244.795 del C.S.J, para que en forma individual y en su calidad de apoderada de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: ejecute las facultades descritas a continuación: En la regional eje cafetero. El (la) mandatario (a) se encuentra facultado (a) para 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional eje cafetero en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional eje cafetero en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2039 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019030 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Adriana Ramírez Veloza identificada con cédula ciudadanía No. 52.985.375 y portadora de la tarjeta profesional No. 228.132 del C.S.J, para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2034 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019031 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Hugo Fernando Toro vejarano identificado con cédula ciudadanía No. 93.408.914 de Ibagué y portadora de la tarjeta profesional No. 141.839 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional Tolima el mandatario se encuentra facultado para. 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Tolima en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPS OC en intervención-, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas Regional Tolima en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2040 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019032 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Ángela María Romero García identificada con cédula ciudadanía No. 1.075.653.495 expedida en Bogotá y portadora de la tarjeta profesional No. 244.910 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado (a) de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2032 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019033 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Rosa Milena Jácome Remolina identificada con cédula ciudadanía No. 32.278.347 expedida en Cúcuta y portadora de la tarjeta profesional No. 215.920 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional Norte de Santander. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional Norte de Santander en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la Regional Norte De Santander en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2035 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019034 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Dayahana del Mar Yela Restrepo identificada con cédula ciudadanía No. 1.093.219.986 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y portadora de la tarjeta profesional No. 240.918 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional eje cafetero. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional eje cafetero en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional eje cafetero en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

trámites.

Por Escritura Pública No. 2031 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019035 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Karol Eliana Muñoz Salinas identificada con cédula ciudadanía No. 31.309.003 expedida en Cali y portadora de la tarjeta profesional No. 229.071 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las
facultades descritas a continuación. En la Regional Tolima. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Tolima en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C. P ,C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC-
en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la Regional Tolima en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP
EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2036 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019036 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Juliana Rodríguez Villamil identificada con cédula ciudadanía No. 1.010.168.776 expedida en Bogotá y portadora de la tarjeta profesional No. 192.504 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la Regional Boyacá. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional BOYACÁ en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C. P ,C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la Regional Boyacá en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2037 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019037 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Ursula Llanos Pabón identificada con cédula ciudadanía No. 36.726.707 expedida en santa marta y portadora de la tarjeta profesional No. 160.148 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional costa. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional costa en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC-
en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro
de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional costa en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2030 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 7 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019038 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Jorge Uriel Rueda Romero identificada con cédula ciudadanía No. 91.292.913 expedida en Bucaramanga y portador de la tarjeta profesional No. 208.777 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional occidente. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional occidente en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional occidente en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2107 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de octubre de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019039 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Érica Carolina Kohn Meza identificada con cédula ciudadanía No. 1.129.537.462 expedida en barranquilla y portadora de la tarjeta profesional No. 197.479 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la regional costa. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la regional costa en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPC OC- en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SALUDCOOP EPC OC- en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional costa en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo -
SALUDCOOP EPC OC- en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP
EPC OC- en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0024 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 13 de enero de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019045 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Tatiana Gómez Zamora identificada con cédula ciudadanía No. 20.715.354 de la vega y portadora de la tarjeta profesional No. 133.020 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 3. Autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6 asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes por virtud de este encargo, el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De pc. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para - asistir
como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0025 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 13 de enero de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019046 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Carlos Andrés Mantilla Galvis identificado con cédula ciudadanía No. 91.479.304 expedida en Bucaramanga y portadora de la tarjeta profesional No. 120.030 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 3. Autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6 asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes por virtud de este encargo, el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De pc. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para - asistir

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0028 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 13 de enero de 2014, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019047 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Néstor Orlando Herrera Munar identificada con cédula ciudadanía No. 80.500.545 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 91.455 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cooperativo en intervención para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 3. Autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6 asista y actué en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes por virtud de este encargo, el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

pc. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para - asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 1680 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 3 de septiembre de 2013, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019048 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Gustavo Raad de la Ossa identificado con cédula ciudadanía No. 73.578.651 expedida en Cartagena y portadora de la tarjeta profesional No. 197.479 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de gerente regional del córdoba de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo - SALUDCOOP EPS OC- 1. Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante: las autoridades judiciales, arbítrales y administrativas de Colombia. 2, suscribir en calidad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 3. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las que se requiera la representación Legal de la entidad en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de la protección social u organismos del orden departamental, municipal, o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las audiencias y diligencias

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en que se cite al Representante Legal para la conciliación judicial o extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 5. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia de Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 6. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.C en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2096 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de octubre de 2013, inscrita el 6 de noviembre de 2014 bajo el No. 00019049 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Andrea Carolina Villareal identificada con cédula ciudadanía No. 63.543.397 expedida en Bucaramanga y portadora de la tarjeta profesional No. 183.505 del C.S.J , para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación. En la Regional Santander. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en la Regional Santander, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P ,c. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 100 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional de Santander en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismos cooperativo en intervención en las diligencias en las que cite al Representante Legal- agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

gozará de facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2537 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 4 de diciembre de 2014, inscrita el 23 de enero de 2015 bajo el No. 00019547 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá en su condición de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Adriana María Londoño molina identificado con cédula ciudadanía No. 30.330.670 de Manizales para que en forma individual y en su calidad de gerente regional del eje cafetero de SALUDCOOP entidad promotora de salud: organismo cooperativo "SALUDCOOP EPS OC en intervención" ejecute las facultades descritas a continuación, en la regional eje cafetero. El (la) Mandatano(a) se encuentra facultado (a) para: 1. Ejerza la representación Legal de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, ya sea en calidad de demandante o demandado o coadyuvante, en general en calidad de parte, en cualquier actuación, petición, diligencia o dentro de todo tipo de proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbitrales y, administrativas de Colombia. Suscribir en candad de Representante Legal las tutelas que se presenten en contra de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención. 2. Ejerza la representación Legal de la entidad SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, en las diligencias judiciales y extrajudiciales en las ,que se requiera la representación Legal de la entidad, en especial, las de carácter administrativo que se adelanten ante el ministerio de salud y protección social u organismos del orden departamental, municipal o seccional que lo integren; en los procesos de acciones de tutela que se entablen contra la entidad, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, trámites para el cumplimiento de sentencias, interrogatorios de parte, en las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

audiencias y diligencias en que se cite al Representante Legal para conciliación judicial lo extrajudicial, pacto de cumplimiento y a la práctica de pruebas ante cualquier autoridad judicial o administrativa. 3. El Representante queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el código contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contempla esta diligencia. 4. El Representante queda expresamente facultado para asistir y actuar a nombre de SALUDCOOP EPS O.C. En intervención, en las diligencias en las que se cite al Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el Representante gozará de la facultad de confesar. 5. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP EPS O.E en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2647 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 18 de diciembre de 2014, inscrita el 27 de enero de 2015 bajo el No. 00019555 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.436.836 expedida en Bogotá, en su condición de agente especial interventor y Representante Legal de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, -SALUDCOOP-
por medio de la presente Escritura Pública
confiere poder general amplio y suficiente, al doctor pablo augusto Alfonso carrillo Colombiano, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.420.339 de Bogotá D.C., para que en su calidad de secretario general de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, -SALUDCOOP-
en intervención y en nombre y representación de la entidad
que represento, suscriba y ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Suscribir y firmar todas las declaraciones tributarias del orden nacional, territorial, seccional y municipal que SALUDCOOP EPS deba presentar y pagar en cumplimiento de las normas Legales. 2. Ejercer la representación judicial de -SALUDCOOP-
en intervención como demandante o demandada o coadyuvante,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en cualquier petición, actualización, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y administrativas de Colombia, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, especialmente las de transigir, conciliar delegar, desistir, reasumir, sustituir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c.P.C. 3. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir 4. Autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados 5. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado(a) dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 6. Acudir en condición de apoderado(a) judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes .De desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, contra y vigilancia 7. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite a él(la)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el (la) apoderado(a) gozará de la facultad de confesar. 8. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP organismo cooperativo entidad promotora de salud organismo cooperativo en intervención, inicie1 tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbitrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del c. De pc. O a su árbitro, con facultad especial para transigir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 9. El (la) apoderado(a) queda expresamente facultado(a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 10. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 254 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 19 de febrero de 2015, inscrita el 25 de marzo de 2015 bajo el No. 00019905 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, Compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.436.836 expedida en Bogotá, en su condición de agente especial interventor y Representante Legal de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo SALUDCOOP en intervención, por medio de la presente Escritura Pública confiere poder general amplio y suficiente, a él (la) doctor(a) Diana Marcella Zornosa Lamus, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.993.405 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional número 224.718 del C.S.J., para que en forma individual y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en su calidad de apoderado(a) de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c.P.C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir en caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado(a) dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado(a) judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite a él(la) Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el (la) apoderado(a) gozará de la facultad de confesar. 6. El (la) apoderado(a) queda expresamente facultado(a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás nomas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites. Segundo: El presente mandato se confiere a él (la) apoderado(a), en virtud del contrato de asesoría jurídica, celebrado entre SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y la IAC JURISALUD CONSULTORES, por ende los honorarios que se generen a favor del apoderado por su asesoría y prestación de servicios estará a cargo de la IAC JURISALUD CONSULTORES.

Por Escritura Pública No. 87 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 23 de enero de 2015, inscrita el 25 de marzo de 2015 bajo el No. 00019906 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, Compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.436.836 expedida en Bogotá, en su condición de agente especial interventor y Representante Legal de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo SALUDCOOP en intervención, por medio de la presente Escritura Pública confiere poder general amplio y suficiente, a él (la) doctor(a) Jennifer Stefanny Muñoz Chamorro, identificada con cédula de ciudadanía número 1.032.438.330 expedida en Bogotá D.C., y portadora de la tarjeta profesional número 234.466 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado(a) de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de ciento treinta (130) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado(a) dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado(a) judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

él(la) Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el (la) apoderado(a) gozará de la facultad de confesar. 6. El (la) apoderado(a) queda expresamente facultado(a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás nomas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites. Segundo: el presente mandato se confiere a él (la) apoderado(a), en virtud del contrato de asesoría jurídica, celebrado entre SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y la IAC JURISALUD CONSULTORES, por ende los honorarios que se generen a favor del apoderado por su asesoría y prestación de servicios estará a cargo de la IAC JURISALUD CONSULTORES.

Por Escritura Pública No. 620 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 28 de abril de 2015 inscrita el 3 de agosto de 2015 bajo el No. 00022789 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a luisa Fernanda Ruiz Velasco identificada con cédula ciudadanía No. 1.016.012.091 de Bogotá D.C., para que en forma individual y en calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención: 1. Ejerza la representación judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención como demandante o demandada o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y administrativas de Colombia, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, sustituir, tachar documentos de falsos, recibir y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C 2. Actúe como apoderada judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, representando Legalmente en calidad de parte a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial y audiencias de pacto de cumplimiento en todo el país, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los procesos de cualquier naturaleza que adelante la entidad o se , inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, para tal efecto el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. - 3. Autorizar por escrito a los abogados que actúen en calidad de apoderados o de parte en representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, para la celebración de acuerdos conciliatorios o transacciones, en montos superiores a los autorizados en los correspondientes poderes generales de los abogados. 4. Ejerza la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante todas las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección control y vigilancia. 6. Asista y actúe en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas procesales o extra procesales civiles,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo el apoderado gozará de la facultad de confesar. 7. Confiera poder especial a abogados en ejercicio para que en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, inicie, tramite, atienda y lleve hasta su culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita o proceso que curse ante las autoridades judiciales, arbítrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, con todas las facultades inherentes para el ejercicio de su mandato establecidas en el artículo 70 del C. De P.C. O a su arbitrio, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, desistir, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos dé falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP - entidad promotora de salud. Organismo cooperativo en intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás nomas en las que se contempla esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 647 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 5 de mayo de 2015 inscrita el 3 de agosto de 2015 bajo el No. 00022790 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a María Alejandra Figueroa pinto identificada con cédula ciudadanía No. 1.049.621.031 de Tunja para que en forma individual y en calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P .C. - 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad _promotora de salud organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado(a) dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado(a) judicial y representar Legalmente al SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite a él(la) agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal ,o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el (la) apoderado (a) gozara de la facultad de confesar. 6. El (la) apoderado(a) queda expresamente facultado para asistir parte y representar Legalmente a SALUDCOOPERATIVA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en intervención en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncias en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 619 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 28 de abril de 2015 inscrita el 3 de agosto de 2015 bajo el No. 00022791 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá en su calidad de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Víctor Mario Osorio Ruiz identificado con cédula ciudadanía No. 18.618.173 para que en forma individual y en calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención ejecute las facultades descritas a continuación en la Regional Antioquia el mandatario se encuentra facultado: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la Regional Antioquia, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la Regional Antioquia en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP entidad promotora salud organismo cooperativo en intervención en las diligencias en la las que se cite al agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o suplentes por virtud de este encargo, el apoderado, gozara de la facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 494 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 30 de marzo de 2015 inscrita el 3 de agosto de 2015 bajo el No. 00022794 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá en su calidad de agente especial interventor de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a María Luisa Castro Herazo identificada con cédula ciudadanía No. 53.068.214 de Bogotá D.C., para que en forma individual y en su calidad de apoderado(a) de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del c. P .C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de ciento treinta (130) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado(a) dentro de todas las actuaciones que cursen ante las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

autoridades: administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado (a) judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte, requerimientos de cumplimiento de fallos de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite a él(la) - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, , notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el (la) apoderado(a) gozará de la facultad de confesar. 6. El (la) apoderado(a) queda expresamente facultado(a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP- ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP entidad promotora de -
salud organismo cooperativo en
intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 2014 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 10 de octubre de 2013, inscrita el 14 de agosto de 2015 bajo el No. 00022924 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá en su condición de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

poder general, amplio y suficiente a Vivíana Constanza Martínez forero, identificada con cédula ciudadanía No. 53.081.477 de Bogotá D.C. Y portadora de la tarjeta profesional No. 203.069 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y en audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los tramites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención hasta por un monto de 130 salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que la transacción o conciliación sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, como apoderado dentro de todas las actuación que cursen ante las autoridades administrativas en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recurso que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, en las acciones de tutela en que sea parte requerimiento de cumplir de fallos de tutela, incidentes de desacato asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba interrogatorios de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención en las diligencias en las que se cite al Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales o administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozara de la facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas en las que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites. Segundo: el presente mandato se confiere al apoderado, en virtud del contrato de asesoría jurídica, celebrado entre SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo en intervención, y IAC JURISALUD CONSULTORES, por ende los honorarios que se generen a favor del apoderado por su asesoría y prestación de servicios estará a cargo de la IAC JURISALUD CONSULTORES.

Por Escritura Pública No. 00941 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de julio de 2015, inscrita el 28 de agosto de 2015 bajo el No. 00023055 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C. En su calidad de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Yina Paola Cabarcas Beltrán identificada con cédula ciudadanía No. 55.302.765 y portadora de la tarjeta profesional número 190.247 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado(a) de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

intervención, ejecute las facultades descritas a continuación, en la regional costa. El (la)mandatario(a) se encuentra facultado(a) para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la regional costa, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. Se prohíbe al apoderado judicial sustituir. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el(la) mandatario(a) cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que se celebre la transacción o conciliación y sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, como apoderado(a), dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional costa en el orden departamental, municipal o seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado(a) de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado(a) judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las acciones de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de

parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las diligencias
en las que se cite a el (la) Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión del crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extra procesales civiles, laborales, administrativas en la que se requiera la asistencia del Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el(la) apoderado(a) gozará de la facultad confesar. 6. El(la) apoderado(a) queda expresamente facultado(a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas esta diligencia. 7.- entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, y en
general realizar todo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites. Segundo: el presente mandato se confiere a el (la) apoderado(a), en virtud del contrato de asesoría jurídica, celebrado entre SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, y la IAC JURISALUD CONSULTORES, por ende los honorarios que se generen a favor del apoderado por su asesoría y prestación de servicios estará a cargo de la IAC JURISALUD CONSULTORES.

Por Escritura Pública No. 0943 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de julio de 2015, inscrita el 11 de septiembre de 2015 bajo el No. 00023165 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C. En su condición de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia, por medio del presente instrumento, confiere poder general, amplio y suficiente a la doctora Claudia patricia muñoz rayo, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 67.029.945 expedida en Cali, y portadora de la tarjeta profesional No. 165.998 del C.S.J. Para que en forma individual y en su calidad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de apoderada de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo coopert1vo, -SALUDCOOP- en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación, en la regional occidente. La mandataria se encuentra facultada para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo -SALUDCOOP- en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la regional occidente, en su calidad de apoderada judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. Se prohíbe a la apoderada judicial sustituir e) presente poder. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERATIVO, -SALUDCOOP- EN INTERVENCIÓN en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimientos ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los tramites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTAIVO, -SALUDCOOP- EN INTERVENCIÓN, o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP -SALUDCOOP- en intervención, hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, la mandataria cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que se celebre la transacción o conciliación y sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP- en intervención, como apoderada dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la regional occidente en el orden departamental, municipal o seccional en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, (sic) requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderada de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderada judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP- en intervención, en las acciones de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de

conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención, en las diligencias en las que
se cite al Representante Legal, agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia del Representante Legal, agente especial interventor o sus suplentes. Por virtud de este encargo, la apoderada gozará de la facultad de confesar. 6. La apoderada queda expresamente facultada para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención,
en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención y en general realizar todo
tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0938 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de julio de 2015, inscrita el 11 de septiembre de 2015 bajo el No. 00023166 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C. En su condición de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia, por medio del presente instrumento, confiere poder general, amplio y suficiente a él (la) Doctor (a) Brayan Alberto Loaiza Marulanda, Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1088.283.867 y portador de la tarjeta profesional número 249.811 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, ejecute
las facultades descritas a continuación, en la Regional Cundinamarca. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora. De salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, como demandante o
demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la regional Cundinamarca en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. Se prohíbe al apoderado judicial sustituir. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en calidad de parte,
en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, o
se inicien en su contra, para que en ellas proponga, o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que se celebre la transacción o conciliación y sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, como apoderado dentro
de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional Cundinamarca en el orden departamental, municipal o seccional en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, (sic) requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderada de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las
acciones de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO

COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las diligencias en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

las que se cite a él (la) Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia del Representante Legal, agente especial interventor o sus suplentes. Por virtud de este encargo, la apoderada gozará de la facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado (a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las diligencias de
conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC-
en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0939 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de julio de 2015, inscrita el 11 de septiembre de 2015 bajo el No. 00023167 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C. En su condición de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia, por medio del presente instrumento, confiere poder general, amplio y suficiente a él (la) Doctor (a) Jenny Marcela Malagón Prieto, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.919.311 y portadora de la tarjeta profesional número 245.679 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, ejecute las facultades
descritas a continuación, en la Regional Cundinamarca. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora. De salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, como demandante o demandado o
coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la regional Cundinamarca en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

reasumir, tachar documentos de falsos, recibir en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. Se prohíbe al apoderado judicial sustituir. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, en calidad de parte, en las diligencias
de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, o se inicien en su contra, para que en
ellas proponga, o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, hasta por
un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que se celebre la transacción o conciliación y sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención, como apoderado
dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional Cundinamarca en el orden departamental, municipal o seccional en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, (sic) requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderada de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención, en las acciones de
tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención, en las diligencias en las que
se cite a él (la) Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales

o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

requiera la asistencia del Representante Legal, agente especial interventor o sus suplentes. Por virtud de este encargo, la apoderada gozará de la facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado (a) para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención, en las diligencias de conciliación a las
que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -SALUDCOOP-
en intervención y en general
realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 0940 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de julio de 2015, inscrita el 11 de septiembre de 2015 bajo el No. 00023168 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C. En su condición de agente especial interventor y Representante Legal de la entidad de la referencia, por medio del presente instrumento, confiere poder general, amplio y suficiente a él (la) doctor (a) Martin Emilio Saldaña Hernández, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.250.507 y portador de la tarjeta profesional número 227.340 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, ejecute
las facultades descritas a continuación, en la regional Huila. El (la) mandatario (a) se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora. De salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, como demandante o
demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la regional Huila en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. Se prohíbe al apoderado judicial sustituir. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en calidad de parte, en las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, o se inicien en su contra, para que en ellas proponga, o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, hasta por un monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que se celebre la transacción o conciliación y sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, como apoderado (a) dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en la regional Huila en el orden departamental, municipal o seccional en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, (sic) requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderada de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 4. Acudir en condición de apoderado (a) judicial y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las acciones de tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, - SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las diligencias en las que se cite a él (la) Representante Legal - agente especial interventor para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia del Representante Legal, agente especial interventor o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el (la) apoderado (a) gozará de la facultad de confesar. 6. El (la) apoderado (a) queda expresamente facultado (a) para asistir como parte y representar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC- en intervención, en las diligencias de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ORGANISMO COOPERTIVO, -
SALUDCOOP EPS OC-
en intervención y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 942 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 15 de julio de 2015, inscrita el 9 de octubre de 2015 bajo el No. 00023397 del libro v, compareció Guillermo Enrique Grosso Sandoval identificado con cédula de ciudadanía No. 79.436.836 de Bogotá D.C., en su calidad de agente interventor y Representante Legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general amplio y suficiente a Silvía Vivíana Palomino Guerrero identificada con cédula ciudadanía No. 1.090.372.959, y portadora de la tarjeta profesional número 181.994 del C.S.J., para que en forma individual y en su calidad de apoderado(a) de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, ejecute las facultades descritas a continuación, en la Regional Santander. El mandatario se encuentra facultado para: 1. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, como demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en la Regional Santander, en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en general todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. Se prohíbe al apoderado judicial sustituir. 2. Ejercer la representación de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los tramites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención o se inicien en su contra, para que en

ellas proponga, o acepte formulas conciliatorias que resulten

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

convenientes para los intereses de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención hasta por un
monto de cien (100) salarios mínimos Legales mensuales vigentes, para tal efecto, el mandatario cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. En caso que se celebre la transacción o conciliación y sea superior a este monto, requerirá aprobación escrita del coordinador de IAC JURISALUD CONSULTORES. 3. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, como apoderado
dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de la Regional Santander en el orden departamental, municipal o seccional en cualquier petición, actuación, notificación, investigación (sic) requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderado de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo 4. Acudir en condición de apoderado judicial y Representante Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención en las acciones de tutela, incidentes de
desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte, y demás actuaciones relacionadas con el proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 5. Asistir y actuar en nombre de SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención
en las diligencias en las que se cite al agente especial interventor y Representante Legal para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificación de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera la asistencia del agente especial interventor, Representante Legal o sus suplentes. Por virtud de este encargo, el apoderado gozara de la facultad de confesar. 6. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP-
en intervención, en las diligencias
de conciliación a las que hace referencia el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que se contempla esta diligencia. 7. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de SALUDCOOP

entidad promotora de salud, organismo cooperativo, -SALUDCOOP- en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

intervención, y en general realizar todo tipo de actuaciones necesarias en este tipo de trámites.

Por Escritura Pública No. 3618 de la Notaría 9 de Bogotá D.C., del 07 de octubre de 2019, inscrita el 10 de Octubre de 2019 bajo el registro No 00039467 del libro III, compareció Felipe Negret Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No. 10.547.944 de Popayán (Cauca) en su calidad de Agente Especial Liquidador, de la entidad de la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general amplio y suficiente a Juan Carlos Rodríguez Herrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.397.292 de Bogotá, D.C., para que en forma individual, en cualquier orden, en su calidad de Gerente Jurídico de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACIÓN, ejecute las facultades descritas a continuación: 1. Representar a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1 , ante cualquier persona natural o jurídica,
derecho público o privado, de carácter nacional o internacional y ante cualquiera cuerpo colegiado o tribunal, asamblea, junta, reunión, sociedad, consorcio, corporación, entidad, patrimonio autónomo, establecimiento, oficina, dirección, sección, etc., que pertenezcan o no, o que estén vinculados o adscritos al Estado o la Nación, a los Departamentos, Distritos; Municipios, ministerios, Departamentos Administrativos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Establecimientos Públicos, Sociedades de Economía Mixta, Notarias, y en general a toda la rama ejecutiva o administrativa, judicial o jurisdiccional y legislativa del poder público del Estado, en cualquier acto, contrato, petición, actuación, diligencia, trámite o proceso en cualquier calidad. 2 Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC - EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800250.119-
1. como
demandante o demandado o coadyuvante, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas en su calidad de apoderado judicial, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente, las de transigir, conciliar, delegar, desistir, reasumir, tachar documentos de falsos, recibir y en genera! todas las facultados establecidas en el artículo 74 del Código General del Proceso (C.G.P.) 3. Ejercer la representación de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1 en calidad
de parte, en las diligencias: de conciliación extrajudicial,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

conciliación judicial, y audiencias de pacto de cumplimiento, ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada Con NIT. 800.250.119-
10 se inicien en su
contra, para que en ellas proponga, o acepte fórmulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1. Para tal efecto,
esta cuenta con las facultades de recibir, desistir y transigir. 4. Ejercer la representación extrajudicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC - EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.1191 como apoderados dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas en el orden Nacional, Departamental, Municipal o Seccional; en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio como apoderados de todos los recursos que en materia de vía gubernativa procedan contra todo acto administrativo. 5. Acudir en condición de apoderado judicial y representar legamente SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1, en las acciones de
tutela, incidentes de desacato, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios departe, y demás actuaciones relacionadas con proceso y trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia. 6. Asistir y actuar en de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1 en las diligencias en
las que se cite al Representante Legal Agente Especial Liquidador. Para la práctica de reconocimiento de documento, a absolver interrogatorio de parte, requerimiento en mora, notificaciones de cesión de crédito y en general todas aquellas actuaciones procesales o extraprocesales civiles, laborales o administrativas en las que se requiera asistencia del Representante Legal - Agente Especial Liquidadora. Por virtud de este encargo, el apoderado gozara de la facultad de confesar. 7 Conferir poder especial a en ejercicio para nombre de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificado, NIT 800.250.119-
1,
inicien, tramiten, atiendan y lleven hasta culminación cualquier petición, actuación, diligencia, investigación, requerimiento, visita

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o proceso que autoridades judiciales, arbitrales y/o administrativas de Colombia, como apoderado general y judicial de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada NIT. 800.250.119-
1, con todas las facultades
inherentes para el ejercicio de su mandato, establecidas en el artículo 7/1 del Código General del Proceso (C,G.P), o a su árbitro, con facultad especial para transigir, conciliar, delegar, sustituir, reasumir, recibir y tachar documentos de falsos. 8. El apoderado queda expresamente facultado para asistir como parte y representar Legalmente a SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 800.250.119-
1, en las diligencias a las que hace referencia el Código
de Procedimiento Civil, el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 640 de 2001 y demás normas que contemplen esta diligencia. 9. Entablar denuncias penales y asistir a ampliaciones de denuncia en nombre y representación de, SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS. OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1, y en general, realizar todo tipo de
actuaciones necesarias en este tipo de trámites. 10. Someter a decisión de árbitros cualquier controversia, que comprometa a afecte los intereses jurídicos y/o patrimoniales de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1. 11. Presentar
memoriales de desistimiento frente a los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervengan a nombre del poderdante, incluidos los recursos que en sede administrativa interponga y los incidentes que promueva. 12. Suscribir documentos de transacción de pleitos y diferencias que ocurran al respecto de los derechos y obligaciones del poderdante. Segundo: Revocabilidad SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.1191. Se reserva expresamente la facultad de revocar total o parcialmente el presente mandato, en cualquier momento y por cualquiera razón. Para bastará que SALUDCCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT. 800.250.119-
1 eleve a escritura
pública la revocación y solicite al Señor Notario para que este a quien corresponda, hacer la respectiva nota de revocación o cancelación sobre el texto de la presente escritura pública que contiene este poder. El mandatario queda Obligado a acatar la revocación y no se podrá poner a ella o al otorgamiento y autorización de la escritura de revocación, ni la imposición de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

respectiva nota sobre la presente escritura pública.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2013 de Representante Legal, inscrito el 27 de diciembre de 2013 bajo el número 00014507 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- CONSULTORIA DE ESTRATEGIAS Y NEGOCIOS SA -
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A EN LIQUIDACIÓN
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2013-07-16

Por Documento Privado del 3 de julio de 2013 de Representante Legal, inscrito el 16 de julio de 2013 bajo el número 00012613 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matríz: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- CORPORACION IPS SALUDCOOP
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO PROMOCION SOCIAL Y DEFENSA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SOLIDARIO
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO EDUCARSALUD CON SIGLA IAC EDUCARSALUD. EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GESTION ADMINISTRATIVA
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO JURISALUD CONSULTORES
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SALUD EN LINEA
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2012-09-17

Por Oficio No. 89255 del 17 de julio de 2013 de Superintendencia de Sociedades, inscrito el 24 de julio de 2013 bajo el número 00012782 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matríz: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- AUDIEPS LTDA
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- BIORESCATE S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION CAFESALUD EPS S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CLINICA MARTHA S.A.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CLINICA PAMPLONA LTDA
Domicilio: Pamplonita (Norte De Santander)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CLINICA SALUDCOOP ARMENIA
Domicilio: Armenia (Antioquia)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CLINICA SANTACRUZ DE LA LOMA S.A.
Domicilio: Bucaramanga (Santander)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CONTACT SERVICE S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA CRUZ BLANCA E.P.S.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- EPSICLINICAS S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- EPSIFARMA S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A ESIMED S A EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- HEALTHFOOD S A EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- HEON HEALTH ON LINE S.A.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- OPTIKUS S A EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- PHARMA 100 S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- PROCESOS Y TRANSACCIONES P&T LTDA
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SALUDCOOP CLINICA LOS ANDES S.A.
Domicilio: Pasto (Nariño)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SALUDCOOP CLINICA SANTA ISABEL LTDA
Domicilio: Neiva (Huila)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- WORK & FASHION S A - EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2011-10-21

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2013 de Representante Legal, inscrito el 27 de diciembre de 2013 bajo el número 00014507 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matríz: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- CONSULTORIA DE ESTRATEGIAS Y NEGOCIOS SA -
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- COOPERATIVA EPSIFARMA EN LIQUIDACION
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A EN LIQUIDACIÓN
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2013-07-16

Por Documento Privado del 9 de diciembre de 2014 de Representante Legal, inscrito el 22 de diciembre de 2014 bajo el número 00019374 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matríz: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- SANAS TRANSACCIONES - SANAS SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2014-09-11

Por Documento Privado del 9 de diciembre de 2014 de Representante Legal, inscrito el 22 de diciembre de 2014 bajo el número 00019376 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matríz: SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP EN LIQUIDACION, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- INVERSIONES CRATAGENA S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- INVERSIONES SOLIDARIAS S.A.
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA S.A.
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
- SALUDCOOP MEXICO S.A. DE C.V.
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2001-12-10

Mediante Documento Privado sin núm. del Representante Legal, del 3 de julio de 2013, inscrito el 16 de julio de 2013, bajo el No. 00012613 del libro III, de las entidades sin ánimo de lucro, se aclara el grupo empresarial, en el sentido de indicar que la entidad matriz de la referencia comunica que ejerce situación de control y grupo empresarial sobre: IAC GESTION ADMINISTRATIVA, IAC EDUCARSALUD, IAC SALUD EN LINEA, IAC JURISALUD CONSULTORES, CORPORACION IPS SALUDCOOP, FUNDACION COOP, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A.

Mediante Oficio No. 125-089255 del 17 de julio de 2013, inscrito el 24 de julio de 2013 bajo el No. 00012782 en el libro III, de las entidades sin ánimo de lucro, la Superintendencia de Sociedades ordenó la inscripción de la resolución No. 125-015813 del 21 de octubre de 2011, que en consecuencia se aclara la situación de control y la situación de grupo empresarial, en el sentido de indicar que la entidad matriz de la referencia comunica que ejerce situación de control y grupo empresarial sobre la clínica SALUDCOOP SANTA ISABEL LTDA, LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA, CLÍNICA LOS ANDES SA, CLÍNICA SANTA CRUZ DE LA LOMA SA, PHARMA 100 SA, CLÍNICA MARTHA SA, CLÍNICA PAMPLONA LTDA, CLÍNICA SALUDCOOP ARMENIA SA, OPTICA SALUDCOOP SA, HEALTFOOD SA, IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA S.A.S., BIORESCATE LTDA, CONTACT SERVICE LTDA, WORK & FASHION SA, AUDIEPS LTDA, CRUZ BLANCA EPS, CAFESALUD EPS, HEON HEALTH ONLINE SA EPSICLINICAS SA, PROCESOS Y TRANSACCIONES P&T LTDA, ESIMED SA Y EPSIFARMA SA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante documento privado sin núm. del representante legal del 9 de diciembre de 2014, inscrito el 22 de diciembre de 2014 bajo el No. 00019374 en el libro III, de las entidades sin ánimo de lucro, se aclara la situación de grupo empresarial, en el sentido de indicar que la entidad matriz de la referencia comunica que ejerce situación de grupo empresarial la sociedad centro de expertos para la atención INTEGRAL CEPAIN IPS SAS (subordinada). De manera indirecta a través de su subordinada COOPERATIVA EPSIFARMA

Se Aclara la Situación de Control y Grupo Empresarial registrada bajo el No. 00019376 del libro III, en el sentido de indicar que la entidad de la referencia (matriz) comunica que se configura situación de grupo empresarial directa sobre inversiones CARTAGENA SA, INVERSIONES SOLIDARIAS SA, SALUDCOOP MEXICO SA DE CV (DESDE EL 20/10/2004), MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA SA (DESDE EL 21/12/2001); E INDIRECTA SOBRE PROSANA (A TRAVES DE INVERSIONES CARTAGENA SA E INVERSIONES SOLIDARIA), INVERSIONES MEDELLIN (A TRAVES DE PROSANA SA E INVERSIONES CARTAGENA SA), INVERSIONES CALI LTDA (A TRAVES DE PROSANA SA E INVERSIONES SOLIDARIA SA), HEON HEALTRH ON LINE SERVICIOS DE SALUD LIMITADA (A TRAVES DE HEON HEALTH ON LINE LLC Y HEON HEALTH ON LINE S.A.), HEALT ON LINE LLC (a través DE HEON HEALTH ON LINE S.A.), desarrollos y soluciones informáticas S.A. (a través de HEALTHFOOD S.A. y HEON HEALTH ON LINE S.A.) y HEON HEALTH ON LINE PERU S.A.C. (a través de HEON HEALTH ON LINE LLC y HEON HEALTH ON LINE S.A.).

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8430
Actividad secundaria Código CIIU: 6810

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el ejercicio de la facultad conferida por los artículos 43 y 144 del Decreto número 2150 de 1995.

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.

El registro ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).

La persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen esta función, por lo tanto deberá presentar ante la autoridad correspondiente, el certificado de registro respectivo, expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, más el término de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de enero de 2023 Hora: 13:49:15
Recibo No. AA23276786
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23276786CE936

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde. En el caso de reformas estatutarias además se allegara copia de los estatutos.

Toda autorización, permiso, licencia o reconocimiento de carácter oficial, se tramitará con posterioridad a la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en la respectiva Cámara de Comercio.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: Sustentación apelación I 2019 - 0015 - 02 I EMPORIUM JEANS en contra de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 11/08/2023 11:21 AM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

2 archivos adjuntos (1 MB)

Otorgamiento Poder Proceso declarativo 11001310303120190001500 de EMPORIUM JEANS S.A.S en contra de ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.; EAJ-303219-v2-Sustentación apelación - Emporium Jeans.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Harry Alberto Montoya Fernández (Esguerra Asesores) <hmontoya@esguerra.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 11:15
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: jimmyrojassuarez@gmail.com <jimmyrojassuarez@gmail.com>; german.gamarra <german.gamarra@vivasuribe.com>
Asunto: Sustentación apelación I 2019 - 0015 - 02 I EMPORIUM JEANS en contra de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Magistrado ponente IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
E. S. D.

Referencia:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía promovido por **EMPORIUM JEANS** en contra de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**
No. Radicado:	110013103 031 2019 00015 02
Asunto:	Sustentación recurso de apelación

Harry Alberto Montoya Fernández/ Abogado

Esguerra asesores jurídicos

TOP RANKED Chambers Latin America 2023 Esguerra Asesores Jurídicos

RLI Red Legal Iberoamericana

Teléfono: (+57) 601 3122900
Avenida Calle 72 No. 6-30, Piso 12 Bogotá, Colombia 110231
hmontoya@esguerra.com www.esguerra.com

Aviso de confidencialidad: Este mensaje es para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted ha recibido por error esta comunicación, sírvase informarnos al teléfono +57 601 3122900 o vía e-mail, borrar el mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. Confidentiality notice: This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If you receive this communication by error, please notify us immediately by telephone +57 601 3122900 or by e-mail, delete the e-mail and do not disclose its content to any person.

Otorgamiento Poder Proceso declarativo 11001310303120190001500 de EMPORIUM JEANS S.A.S en contra de ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Laura Yazmin Lopez Garcia <laura.lopez@accion.co>

Mié 9/08/2023 12:34 PM

Para:Harry Alberto Montoya Fernández (Esguerra Asesores) <hmontoya@esguerra.com>

CC:Notificaciones Judiciales <notijudicial@accion.co>

4 archivos adjuntos (766 KB)

Poder de Emporium.pdf; Certificado de Existencia y Representación Acción Sociedad Fiduciaria.pdf; Certificado de Existencia y Representación Legal Super Financiera.pdf; CEDULA JUAN ANTONIO MONTOYA.PDF;

Honorable Magistrado
IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL.
E. S. D.

Referencia:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía promovido por **EMPORIUM JEANS S.A.S** en contra de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**
No. Radicado:	2019-015
Asunto:	Poder.

Respetuoso saludo,

JUAN ANTONIO MONTOYA URICOECHEA, mayor de edad identificado como aparece junto a mi firma, actuando como Representante Legal de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.** identificado con NIT. 800.155.413-6, respetuosamente me dirijo a su Despacho para manifestarle que otorgo **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al doctor **HARRY ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.276.315 y tarjeta profesional de abogado número 212.976, correo electrónico hmontoya@esguerra.com para que represente los intereses de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, dentro del proceso de la referencia y actúen como su apoderado dentro del mismo.

El apoderado cuenta con las facultades propias del mandato, y en especial las de conciliar transigir, recibir, desistir, interponer recursos y ejerces las demás necesarias para el cumplimiento de este mandato en pro de la defensa de los derechos de mi representada.

Sírvase en consecuencia reconocerles personería en los términos y para los efectos de este poder.

Atentamente,

JUAN ANTONIO MONTOYA URICOECHEA
C.C. 79.141.627
Representante Legal
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A

NIT. 800.155.413-6

Nota: El correo electrónico notijudicial@accion.com.co corresponde a un buzón de distribución, motivo por el cual desde el mismo no pueden ser remitidos mensajes de datos. Sin perjuicio de lo anterior se remite con copia al buzón de notificación judicial de la compañía en señal de conocimiento.

Honorable Magistrado
IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL.
E. S. D.

Referencia:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía promovido por **EMPORIUM JEANS S.A.S** en contra de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**
No. Radicado:	2019-015
Asunto:	Poder.

JUAN ANTONIO MONTOYA URICOECHEA, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía 79.141.627, actuando en su calidad de Representante Legal y, por tanto, en nombre y representación de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, sociedad financiera, identificada con el NIT 800.155.413-6, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a **HARRY ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.276.315 y tarjeta profesional de abogado número 212.976 del C.S.J. y correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados hmontoya@esguerra.com para que, en nombre y representación de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A**: (i) actúe como apoderado en el proceso de referencia (ii) represente los intereses de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A** en todo el trámite procesal de la acción; y (iii) en desarrollo de tales facultades, presente memoriales, asista a audiencias, solicite pruebas, desista de ellas, interponga recursos, efectúe solicitudes y, en general, haga todas las actividades necesarias para el cumplimiento de su encargo, en nombre y representación de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**

El apoderado queda investido de todas las facultades consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso, en especial, de las de sustituir este poder, transigir, recibir, conciliar o desistir y, en general, realizar todos aquellos actos inherentes a este tipo de mandatos.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

JUAN ANTONIO MONTOYA URICOECHEA
C.C. 79.141.627
Representante Legal
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A
Sigla:	ACCION FIDUCIARIA
Nit:	800155413 6 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal:	Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	01908951
Fecha de matrícula:	30 de junio de 2009
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	22 de febrero de 2023
Grupo NIIF:	Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 85 # 9 - 65
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	notijudicial@accion.co
Teléfono comercial 1:	6016915090
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Calle 85 # 9 - 65
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	notijudicial@accion.co
Teléfono para notificación 1:	6016915090
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 3676 del 30 de diciembre de 1999 de Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2009, con el No. 01308766 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SOCIEDAD FIDUCIARIA FES S A FIDUFES a SOCIEDAD FIDUCIARIA FES S A FIDUFES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA FIDUFES O FIDUCIARIA FES O FES FIDUCIARIA.

Por Escritura Pública No. 798 del 22 de abril de 2003 de Notaría 18 de Cali (Valle Del Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2009, con el No. 01308770 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SOCIEDAD FIDUCIARIA FES S A FIDUFES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA FIDUFES O FIDUCIARIA FES O FES FIDUCIARIA a SOCIEDAD FIDUCIARIA FES S A FIDUFES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA FIDUFES.

Por Escritura Pública No. 2703 del 13 de septiembre de 2005 de Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2009, con el No. 01308772 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SOCIEDAD FIDUCIARIA FES S A FIDUFES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA FIDUFES a ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Por Escritura Pública No. 781 de la Notaría 42 de Bogotá D.C., del 31 de marzo de 2009, inscrita el 07 de julio de 2009 bajo el número 1310468 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de: Cali (Valle del Cauca) a la ciudad de: Bogotá D.C.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Que mediante Oficio No. 2223 del 08 de agosto de 2018, inscrito el 14 de agosto de 2018 bajo el No. 00170470 del libro VIII, el Juzgado 14

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Civil del Circuito de Oralidad de Medellín (Antioquia), comunicó que en el proceso verbal de resolución de contrato No. 2018-00322 de: María Ofelia Querubín de Zapata, contra: PROMOTORA LEMMON S.A.S, PÓRTICOS INGENIEROS CIVILES S.A.S, INGENIERÍA VIAL Y URBANISMO S.A. y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

CERTIFICA:

Que mediante Oficio No. 1999 del 20 de noviembre de 2019, inscrito el 25 de Noviembre de 2019 bajo el No. 00181736 del libro VIII, el Juzgado 34 Civil del Circuito De Bogotá de Oralidad, comunicó que en el proceso verbal de mayor cuantía de acción de protección al consumidor No. 2019-342 de: EDIFICIO VALSESIA 129 P.H., Contra: REM CONSTRUCCIONES SA, CNK CONSULTORES SAS y ACCION FIDUCIARIA SA, se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 20-1822 del 14 de diciembre de 2020, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá D.C., ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia dentro del proceso acción de protección al consumidor No. 2019-00878 de Wilson Alberto Pinzon Gelvez CC. 79.316.913, Maria Camila Amador Villaneda CC. 39.787.695, Contra: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A NIT. 800.155.413-6 como demandada directa y como vocera del FIDEICOMISO RECURSOS CONIKA-REAL ESTATE y FIDEICOMISO PARQUEO VALSESIA (antes PARQUEO CÓNIKA - REAL ESTATE), REM CONSTRUCCIONES S.A (antes REAL ESTATE MARKETING S.A), CNK CONSULTORES S.A.S (antes CÓNIKA CONSULTORES LTDA), la cual fue inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Diciembre de 2020 bajo el No. 00186936 del libro VIII.

Mediante Oficio No. 0080 del 04 de febrero de 2021, el Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia dentro del proceso declaratoria de incumplimiento de contrato con pretensión indemnizatoria No. 760013103018-2020-00144-00 de Maria Berley Alomia Ayala CC.66.732.911, Contra: CONSTRUCTORA MAS CONSTRUCCIONES SAS, ACCION SOCIEDAD FIDURICIA S.A., la cual fue inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de Febrero de 2021 bajo el No. 00187776 del libro VIII.

Mediante Oficio No. 01024 del 13 de octubre de 2022, el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá D.C., inscrito el 21 de Octubre de 2022 con el No. 00200717 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. 110013103045 2021 00462 00 de Julio Alfonso Curiel Acosta C.C. 12.555.353, Ana Tulia Curiel Acosta C.C.36.543.181, Eduardo Emilio De La Rosa Acosta C.C. 12.547.400, Martha Cecilia Acosta Diaz Granados C.C. 26.667.546, Luís Daniel De La Rosa Acosta C.C. 12.563.065 y Martha Lucía De La Rosa Acosta C.C. 36.554.056, contra CHEQUE EFECTIVO S.A.S NIT. 900.115.567-3 y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A NIT. 805.012.921-0.

Mediante Oficio No. 0409 del 24 de abril de 2023 proferido por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá D.C., inscrito el 2 de Mayo de 2023 bajo el No. 00206035 del libro VIII, se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso declarativo responsabilidad civil contractual No. 11001310302120210043000 de Alan Aguia Agudelo C.C. 80.08279, Alejandra Cristina Medina Brito C.C. 1.126.602.151, Amanda Mora de Cárdenas C.C. 41.414.131, Andrea Aguia Agudelo C.C. 52.452.664, Angélica Natalia Álvarez Guevara C.C. 52.717.023, Aníbal José Vergara Burbano C.C. 92.531.818, Beatriz Mesa Herrera C.C. 41.716.887, Camilo Forero Fernández C.C. 80.871.119, Carlos Alberto Gaviria Riaño C.C. 19.333.843, Carlos Andrés Gamboa Santacruz C.C. 79.786.612, Carlos Andrés Salazar Villegas C.C. 80.505.659, Carlos Eduardo Gavilanes Caicedo C.C. 5.202.380, Carmiña Moreno Rodríguez C.C. 63.280.251, Ceferino Daza Higuera C.C. 4.191.601, Cinthia Carolina Sánchez Osorio C.C. 1.136.880.166, Claudia Janeth Obando Rodríguez C.C. 51.848.582, Clemencia Pineda Camacho C.C. 29.069.061, COMUNIDAD HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA ESAL NIT. 860.033.785-5, representada legalmente por Sor Clemencia Rojas Rojas, C.C. 41.473.477, Cristian David Mejía C.C. 1.016.019.946, Dagoberto Borda Garzón C.C. 80.036.820, Daniel Forero Fernández C.C. 79.942.453, Daniel Alonso Yepes Tejada C.C. 71.381.708, David Corredor Montenegro C.C. 97.011.707.665, David Rincón Pérez C.C. 79.356.870, Diana Carolina Córdoba Soler C.C. 52.996.119, Diana Marcela Cortés Pedraza C.C. 52.792.174, Angela Viviana Ruiz Abril C.C. 52.788.682, Diana Yizel Baquero Lopez C.C. 53.038.564, Dwane Carl Leschhorn Rodríguez C.C. 79.778.220, Eddna Cristina Mejía Me Ta C.C. 52.029.226, Edgar Osvaldo Castillo C.C. 79.406.962, Gina Lisbeth Chaves Enciso C.C. 52.230.952, Edwin Patricio Lara Durán C.E. 204.261, Francisco Alfonso Camargo Salas C.C. 7.228.600, Gloria Milena Martínez Rodríguez C.C. 53.178.301, Gloria Nelly Rodriguez de Martínez C.C. 41.383.143, Gloria Stella Agudelo de Aguia C.C. 41.500.212, Gustavo Enrique Gordillo Forero C.C. 79.779.622, Hassan Feris Karameddine Mohmoud C.C. 1.124.026.424, Hernán Augusto Cristancho Mendieta C.C. 93.285.215, Hernán Pinto

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Montoya C.C. 17.100.424, INVERSIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO S.A.S. NIT. 800.005.591-6, representada legalmente por Diana Pinilla, C.C. 52.699.059, Iván Darío Zuluaga a G. C.C. 70.549.122, Iván Nicolás Saavedra Castañeda C.C. 80.765.657, Jacobo Ocampo Medina 1.013.020.732, representado legalmente por María del Pilar Medina C.C. 22.492.548, Jaime Alexis Ramírez Hoyos C.C. 16.767.073, Jaime Alirio Pineda García C.C. 79.943.292, Jaime Fernando Figueroa Peña C.C. 79.432.467, Johan Efraín Mejía Mejía C.C. 79.748.881, John Mauricio Ramírez Guzmán C.C. 79.648.840, Jorge Emilio Canas Platin C.C. 1.030.618.201, William Canas Platin C.C. 1.032.403.085, Juan Camilo Gómez Henao C.C. 80.091.452, Miguel David Atalaya C.C. 80.032.468, Juan Carlos Guacaneme Mellizo C.C. 79.600.931, Luz Dary Arévalo García C.C. 52.331.776, Juan Carlos Hernández Garcia C.C. 19.444.117, Juan Carlos Orduz Sandoval C.C. 94.375.961, Juan Felipe Montenegro C.C. 1.020.728.452, Juan Pablo Navia Buitrago C.C. 94.501.781, Juan Ramon Cantillo Restrepo C.C. 79.916.905 Julieta Paris Puentes, 1.019.905.658 representada legalmente por Carlos Andrés Paris Jaramillo C.C. 79.944.660, Julio Cesar Saboya Diaz C.C. 79.731.668, Martha Idalf Saboya Diaz C.C. 52.264.877, Kelly Patricia Castillejo López, C.C. 57.466.262 Leonor Esther Muñoz Castro C.C. 32.685.102 Leticia Silva Rodriguez C.C. 51.644.215, Ligia María Zuluaga González C.C. 42.965.161, Luis Alejandro Fernández Castañeda C.C. 1.014.226.062, Luis Vicente Lacambra Segura C.C. 80.423.689, Luisa Maria Álzate Pérez C.C. 51.975.987, Luz Dari Correa C.C. 52.106.383, Manuel Ignacio Botero Machado C.C. 19.360.063, Margarita Trujillo de Vargas C.C. 26.518.659, Maria Cristina Zuluaga González C.C. 32.480.231, Maria de la Luz Salazar Morales C.C. 41.722.211, María Julissa Salgar C.C. 52.309.117, Maria Teresa Mejia de Mejia C.C. 41.542.994, Mario Eduardo Forero Forero C.C. 17.171.962, Martha Inés Sánchez Suarez C.C. 35.401.476, Mauricio Hernández Durán C.C. 79.951.811, Miguel Ángel Ramírez Guzmán C.C. 80.185.870, Mónica Astrid Olarte Aparicio C.C. 1.049.626, Mónica Puello Chavarro C.C. 35.499.514, Olga Elena Escobar Restrepo C.C. 22.174.058, Pablo Corredor Montenegro C.C. 98.060.253.846, Paula María Quintero Gómez C.C. 51.683.739, Rodrigo Ávila C.C. 7.160.058, Martha Mireya Caballero Vargas C.C. 52.019.244, Rubiela Acosta Osorio C.C. 34.533.704, Sandra Catalina Vargas H. C.C. 37.748.643, Santiago Fernández Bernal C.C. 71.773.404, GURUCEAGA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE NIT. 900.077.208, representada legalmente por Jhon David Isaac Cure C.C. 73.236.587, ISAAC BAQUERO SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE NIT. 900.076.328, representada legalmente por Jorge Alberto Isaac Cure, identificado C.C. 9.138.843, Tatiana Elena Restrepo Escobar C.C.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

53.006.933, Tomas Corredor Montenegro C.C. 1.000.272.752, Verónica Alejandra Paredes C.C. 1.013.610.326 Víctor Hugo Maldonado Cortés C.C. 79.129.033, Ximena Alejandra Elinan Sánchez C.C. 66.845.757, Yeny Alexandra Mora Bonilla C.C. 63.352.973, Yenny Catalina Cortés Molina C.C. 52.800.819, contra PRODIGY INTERNATIONAL RESORT DEVELOPMENT S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.409.095-1, REM CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 830.146.768-6, ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. NIT. 800.155.413-6 en su calidad de vocera DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FA-2006 - FIDEICOMISO LOTE AEROPUERTO BUSINESS HUB.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2041.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social el desarrollo de los negocios fiduciarios, actos y operaciones que la ley autorice, entre ellos los siguientes: A) Tener la calidad de fiduciarios; B) Celebrar encargos fiduciarios y contratos de fiducia mercantil de toda naturaleza y especie autorizados por la ley y, en particular, aquellos que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de bienes, la realización de proyectos inmobiliarios, la liquidación de empresas, la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de las mismas, con sujeción a las restricciones que la ley establece; C) Obrar como agente de transferencia y registro de valores; D) Obrar como representante de tenedores de bonos; E) Obrar, en los casos en que sea procedente con arreglo a la ley, como sindico o encargado de las propiedades de cualquier persona insolvente o concursada; curador de bienes de la herencia, de dementes, menores, sordomudos, ausentes y personas por nacer, o como depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden de autoridad judicial competente o por determinación de las personas que tengan facultad legal para designadas con tal fin; n prestar servicios de asesoría financiera;

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

G) Emitir bonos actuando por cuenta de una fiducia mercantil H) Constituirse en agente de manejo en los términos y de conformidad con los requisitos de ley. I) Administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez, previa autorización de la superintendencia bancaria; J) Conformar un fondo común ordinario y fondos comunes especiales de inversión integrados con dineros recibidos de varios constituyentes o adherentes. K) Celebrar con los establecimientos de crédito contratos para la utilización de su red de oficinas. L) Recibir, aceptar y ejecutar lodos aquellos encargos legales, deberes y facultades, relativos a la tenencia, manejo y disposición de cualquier propiedad raíz o mueble, donde quiera que esté situada, y las rentas y utilidades de ella o de su venta, en la forma que se le nombre por cualquiera autoridad competente, persona, corporación u otra autoridad. M) Celebrar y ejecutar los actos jurídicos de carácter civil o comercial que la ley autorice y se requieran para adelantar las actividades relacionadas con su objeto social y las que tengan por fin ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de la sociedad. N) Realizar las operaciones autorizadas para las sociedades de servicios financieros, consagradas especialmente en el estatuto orgánico del sistema financiero y de maneta general en la ley.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $7.000.000.000,00
No. de acciones : 7.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $6.896.431.000,00
No. de acciones : 6.896.431,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $6.896.431.000,00
No. de acciones : 6.896.431,00
Valor nominal : $1.000,00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Pablo Trujillo Tealdo	C.C. No. 19175901
Segundo Renglon	Leopoldo Romero Galvez	C.C. No. 94453341
Tercer Renglon	Carolyn Mary Mondragon Rojas	C.C. No. 32336987
Cuarto Renglon	Fernando Venegas Torres	C.C. No. 19196013
Quinto Renglon	Edgar Alberto Mora Hernandez	C.C. No. 3227327

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Cayetano Sinforoso Ramirez Ocampo	C.C. No. 2895029
Segundo Renglon	Alfonso Otoya Mejia	C.C. No. 16837867
Tercer Renglon	Eduardo Cortes Castaño	C.C. No. 18494545
Cuarto Renglon	Jose Alejandro Herrera Carvajal	C.C. No. 80194641
Quinto Renglon	Mauricio Evaristo Fernando Devis Morales	C.C. No. 3228330

Por Acta No. 062 del 25 de abril de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2019 con el No. 02486496 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Pablo Trujillo Tealdo	C.C. No. 19175901
Tercer Renglon	Carolyn Mary Mondragon	C.C. No. 32336987

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

	Rojas	
Cuarto Renglon	Fernando Venegas Torres	C.C. No. 19196013
Quinto Renglon	Edgar Alberto Mora Hernandez	C.C. No. 3227327

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Cayetano Sinforoso Ramirez Ocampo	C.C. No. 2895029
Segundo Renglon	Alfonso Otoya Mejia	C.C. No. 16837867
Tercer Renglon	Eduardo Cortes Castaño	C.C. No. 18494545
Cuarto Renglon	Jose Alejandro Herrera Carvajal	C.C. No. 80194641
Quinto Renglon	Mauricio Evaristo Fernando Devis Morales	C.C. No. 3228330

Por Acta No. 066 del 18 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de octubre de 2021 con el No. 02755839 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Leopoldo Romero Galvez	C.C. No. 94453341

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 067 del 4 de febrero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2022 con el No. 02809808 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	N.I.T. No. 800249449 5 Persona Juridica

Por Documento Privado del 4 de febrero de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2022 con el No. 02810111 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Edgar Antonio Villamizar Gonzalez	C.C. No. 79269907 T.P. No. 36327-T

Por Documento Privado del 4 de febrero de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2022 con el No. 02809809 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Angie Tatiana Cruz Gutierrez	C.C. No. 1033723203 T.P. No. 256335-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 694 del 2 de marzo de 1993 de la Notaría 11 de Cali (Valle Del Cauca)	01308762 del 30 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1732 del 7 de abril de 1996 de la Notaría 5 de Cali (Valle Del Cauca)	01308764 del 30 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 3676 del 30 de diciembre de 1999 de la Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca)	01308766 del 30 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 798 del 22 de abril de 2003 de la Notaría 18 de Cali (Valle Del Cauca)	01308770 del 30 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2703 del 13 de	01308772 del 30 de junio de

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

septiembre de 2005 de la Notaría 14 de Cali (Valle Del Cauca)	2009 del Libro IX
E. P. No. 781 del 31 de marzo de 2009 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01310468 del 7 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2928 del 23 de junio de 2011 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01494810 del 11 de julio de 2011 del Libro IX
E. P. No. 4328 del 4 de octubre de 2013 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01792994 del 24 de diciembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 5721 del 12 de diciembre de 2013 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01792999 del 24 de diciembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2510 del 30 de diciembre de 2014 de la Notaría 36 de Bogotá D.C.	01906918 del 29 de enero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4229 del 9 de diciembre de 2016 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	02165387 del 13 de diciembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 1735 del 30 de mayo de 2018 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	02347864 del 8 de junio de 2018 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 1 de diciembre de 2009 de Representante Legal, inscrito el 24 de diciembre de 2009 bajo el número 01350405 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CO SAS
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado del 12 de enero de 2012 de Representante Legal, inscrito el 24 de enero de 2012 bajo el número 01600884 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- Pablo Trujillo Tealdo
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2009-09-02

** Aclaración Situación de Control **
Se aclara que la Situación de Control inscrita el 24 de diciembre de 2009 bajo el número de registro 1350414 del libro IX, se inició desde el 02 de septiembre de 2009.

** Aclaración Situación de Control **
Se aclara la Situación de Control inscrita el día 24 de enero de 2012, bajo el No. 01600884 del libro IX, en el sentido de indicar que esta se ejerce de manera indirecta a través de la sociedad CO S.A.S.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6630

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	ACCION FIDUCIARIA S A
Matrícula No.:	00508712
Fecha de matrícula:	28 de julio de 1992
Último año renovado:	2023
Categoría:	Sucursal
Dirección:	Cl 85 No - 9 - 65
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Matrícula No.:	03116977
Fecha de matrícula:	24 de mayo de 2019
Último año renovado:	2023
Categoría:	Sucursal
Dirección:	Cr 11 # 93 A 82
Municipio:	Bogotá D.C.

Mediante Oficio No. 767 del 25 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá D.C., inscrito el 29 de Julio de 2021 con el No. 00190862 del Libro VIII, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del proceso ejecutivo singular No. 11001310301020200035400 de CINE COLOMBIA SA contra ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA.

Mediante Oficio No. 0450 del 18 de mayo 2023, proferido por el Juzgado 02 Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), inscrito el 30 de Junio de 2023 con el No. 00207397 del Libro VIII, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del proceso ejecutivo continuación verbal No. 76001-31-03-002-2019-00008-00 de Jesús Conrado Cadavid C.C. 16.766.704, Paola Andrea Cardona Sánchez C.C. 31.535.465, Ángela María Orrego González C.C. 42.127.043, José Fernando Orrego González C.C. 75.065.391 y Gustavo Adolfo Orrego González C.C. 10.127.043, contra ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA. NIT. 800.155.413-6.

Nombre:	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Matrícula No.:	03116977
Fecha de matrícula:	24 de mayo de 2019
Último año renovado:	2023

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Sucursal
Dirección: Cr 11 # 93 A 82
Municipio: Bogotá D.C.

Mediante Oficio No. 767 del 25 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá D.C., inscrito el 29 de Julio de 2021 con el No. 00190862 del Libro VIII, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del proceso ejecutivo singular No. 11001310301020200035400 de CINE COLOMBIA SA contra ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA.

Mediante Oficio No. 0450 del 18 de mayo 2023, proferido por el Juzgado 02 Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), inscrito el 30 de Junio de 2023 con el No. 00207397 del Libro VIII, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del proceso ejecutivo continuación verbal No. 76001-31-03-002-2019-00008-00 de Jesús Conrado Cadavid C.C. 16.766.704, Paola Andrea Cardona Sánchez C.C. 31.535.465, Ángela María Orrego González C.C. 42.127.043, José Fernando Orrego González C.C. 75.065.391 y Gustavo Adolfo Orrego González C.C. 10.127.043, contra ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA SA. NIT. 800.155.413-6.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria $ 60.924.989.345
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6630

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de abril de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de junio de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de agosto de 2023 Hora: 11:06:40
Recibo No. AB23500978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2350097856309

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1699044057465894

Generado el 01 de agosto de 2023 a las 11:21:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. ó simplemente ACCIÓN FIDUCIARIA para todos los efectos legales podrá utilizar la sigla ACCION FIDUCIARIA

NIT: 800155413-6

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 1376 del 19 de febrero de 1992 de la Notaría 10 de CALI (VALLE). denominandose FIDUCIARIA FES S.A. "FIDUFES"

Escritura Pública No 2703 del 13 de septiembre de 2005 de la Notaría 14 de CALI (VALLE). El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Cali. Cambio su razón social por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. ó simplemente ACCIÓN FIDUCIARIA para todos los efectos legales podrá utilizar la sigla ACCION FIDUCIARIA

Escritura Pública No 0781 del 31 de marzo de 2009 de la Notaría 42 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). el domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 1017 del 19 de marzo de 1992

REPRESENTACIÓN LEGAL: PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE. La sociedad tendrá un Presidente el cual es de libre nombramiento y remoción por la Asamblea de Accionistas, que tendrá representación legal y a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y a las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Podrá tener los suplentes que designe la Asamblea o en su defecto la Junta Directiva, quien o quienes lo reemplazarán en sus faltas temporales o accidentales. Así mismo, la sociedad tendrá tantos vicepresidentes como la junta directiva determine, los cuales serán de libre nombramiento y remoción por parte de esta, y tendrán representación legal si la Junta Directiva así lo dispone. PRESIDENTE. En sus faltas temporales o accidentales, el Presidente de la sociedad será reemplazado por su suplente si la Asamblea o la Junta Directiva lo designa. En caso de falta absoluta, entendiéndose por tal la muerte, la renuncia aceptada o la remoción, la Asamblea de Accionistas deberá designar un nuevo Presidente; mientras se hace el nombramiento, la Presidente de la sociedad será ejercida por el suplente o por quien designe como encargado la Junta Directiva. FUNCIONES PRESIDENTE. Son funciones del Presidente, las cuales ejercerá directamente o por medio de sus delegados las siguientes: 1. Ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 2. Crear los cargos, comités y dependencias que juzgue necesarios para la buena marcha de la Fiduciaria previa autorización de la Junta Directiva. 3. El Presidente tendrá la responsabilidad de evaluar anualmente la gestión de los ejecutivos que le estén directamente subordinados. 4. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias. 5. Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión con inclusión de las medidas cuya adopción recomiende a la

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1699044057465894

Generado el 01 de agosto de 2023 a las 11:21:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Asamblea y presentar a ésta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance general, el detalle completo del estado de resultados y los demás anexos y documentos que la Ley exija. 6. Representar legalmente a la Fiduciaria. 7. Cumplir las funciones que en virtud de delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. 8. Delegar en los comités o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida por la Ley. Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos, las disposiciones de la Superintendencia Financiera o por la naturaleza del cargo. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES. El nombramiento y remoción de otros funcionarios distintos al Presidente que ostenten la representación legal estará a cargo de la Junta Directiva, atendiendo los criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por esta última. Los funcionarios que por disposición de la Junta Directiva ejerzan la representación legal ejercerán las funciones y deberes señalados por la ley, siempre que se encuentren amparadas bajo los lineamientos establecidos por la Junta Directiva. Podrán ostentar la Representación Legal los Vicepresidentes de la sociedad o cualquier funcionario siempre que sean designados como tal por la Junta Directiva. La representación legal en cada caso se ostentará previo otorgamiento por parte de la Junta Directiva y designación, para el ejercicio de las facultades establecidas por la Junta Directiva, quien designará sus funciones en cada caso. (E.P. 1735 del 30/mayo/2018Notaría 11 de Bogotá D.C.). PARÁGRAFO: La Junta Directiva podrá designar representantes legales de la Fiduciaria para asuntos judiciales y administrativos para que comparezcan, asistan actúen y la representen en las etapas y audiencias de conciliación a realizar en cualquier jurisdicción o autoridad administrativa, en los asuntos relacionados con quiebras, concordatos y concurso de acreedores; así como para que reciba notificaciones y constituya apoderados judiciales que representen a la sociedad en procesos que se ventilen en su contra o a su favor en cualquier jurisdicción, o cualquier otra función que determine la Junta Directiva. (E.P. 4229 del 09/diciembre/2016 Notaria 11 de Bogotá)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representacilegal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan Antonio Montoya Uricoechea Fecha de inicio del cargo: 30/05/2018	CC - 79141627	Presidente
Paula Andrea Loaiza Charry Fecha de inicio del cargo: 10/06/2021	CC - 43608924	Suplente del Presidente
Edward Alfonso González González Fecha de inicio del cargo: 20/01/2022	CC - 1032366633	Representante Legal
Hernando Rico Martínez Fecha de inicio del cargo: 30/10/2019	CC - 80889872	Representante Legal
Mónica Patricia Vallejo Henao Fecha de inicio del cargo: 07/10/2021	CC - 66996992	Representante Legal
Francisco Javier Duque González Fecha de inicio del cargo: 23/10/2018	CC - 70553218	Representante Legal
Gilberto Alejandro Salamanca Pulido Fecha de inicio del cargo: 07/10/2021	CC - 1010196834	Representante Legal
Roberto Chain Saieh Fecha de inicio del cargo: 20/10/2020	CC - 1020725647	Representante Legal
Luis Javier Rozo Álvarado Fecha de inicio del cargo: 12/08/2021	CC - 79501027	Vicepresidente de Operaciones y Tecnologia
Daniel Eduardo Ardila Paez Fecha de inicio del cargo: 05/05/2022	CC - 1026272654	Representante Legal para Efectos Judiciales y Administrativos

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1699044057465894

Generado el 01 de agosto de 2023 a las 11:21:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastián Baron Cardozo Fecha de inicio del cargo: 06/08/2021	CC - 1032360390	Vicepresidente de Negocios Fiduciarios
Laura Yazmin Lopez Garcia Fecha de inicio del cargo: 23/10/2018	CC - 1014232349	Representante Legal con Facultades Judiciales y Administrativas
Stefany Mass Mosquera Fecha de inicio del cargo: 17/12/2020	CC - 1140843955	Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos

NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Esguerra
asesores jurídicos

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Magistrado ponente IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
E. S. D.

Referencia:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía promovido por **EMPORIUM JEANS S.A.S** en contra de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**
No. Radicado:	110013103 031 2019 00015 02
Asunto:	Sustentación recurso de apelación

HARRY ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ, obrando en mi calidad de apoderado especial de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.** (en adelante "**ACCIÓN**"), en el proceso de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 322 y siguientes del Código General del Proceso y la ley 2213 de 2022, respetuosamente me permito **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la sentencia de primera instancia que fue proferida por el **JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ** (en adelante "el Despacho") el 24 de marzo de 2023.

I. SOBRE LA CONGRUENCIA Y MOTIVACIÓN DEL FALLO

El negocio por el cual se citó la comparecencia de **ACCIÓN** al presente proceso obedece a un vínculo contractual, así, dicha relación debía apreciarse en conjunto de acuerdo con los contratos coligados que existen en el negocio celebrado.

Yerra el fallador de primera instancia en la interpretación y alcance de las obligaciones contractuales adquiridas por **ACCIÓN** en virtud de los contratos suscritos. En el proceso se encuentra plenamente acreditado que el contrato de Encargo Fiduciario Individual No. 1100010213 fue suscrito por **EMPORIUM JEANS S.A.S**, como INVERSIONISTA del Proyecto denominado MARCAS MALL, **PROMOTORA MARCAS MALL CALI S.A.S.,** en calidad de **FIDEICOMITENTE PROMOTOR y CONSTRUCTOR RESPONSABLE del PROYECTO**, y **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, en calidad de administradora del MR-799 MARCAS MALL, calidad reconocida por el DEMANDANTE y el Despacho en su sentencia pero valorado equivocadamente. Se encuentra acreditado que la Cláusula Décima del mencionado contrato, se dispone que la FIDUCIARIA actúa única y exclusivamente como administradora fiduciaria del encargo fiduciario:

> "***El(los) INVERSIONISTA(S) declara(n) expresamente conocer y entender que la FIDUCIARIA no es constructora, ni interventora y no interviene de ninguna manera en la determinación del punto de equilibrio del proyecto inmobiliario "MARCAS MALL"***, *ni en la determinación de viabilidad o factibilidad financiera o técnica de del citado proyecto inmobiliario, que por tanto, no conoce las especificaciones técnicas del mismo, ni es responsable por su ejecución, terminación o calidad, ni lo será por los perjuicios que la no ejecución de dicho proyecto ocasione(n) al INVERSIONISTA(S) o terceros, responsabilidad que el(los) INVERSIONISTA(S) entiende(n) es única y exclusivamente del PROMOTOR del proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar,* ***quedando claro entonces que ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., actúa única y exclusivamente como administradora del encargo que mediante el presente contrato se constituye y como tal no tiene***

> ***<u>responsabilidad alguna sobre el desarrollo del proyecto que adelantará el PROMOTOR por su propia cuenta, riesgo y responsabilidad</u>*** *[…] El (los) INVERSIONISTA(S) declara(n) que conoce(n) y asume(n) los riesgos de pérdida de valor de los recursos entregados a la FIDUCIARIA para la inversión. Declara con lo anterior, que la FIDUCIARIA no es codeudora, avalista ni garante de las obligaciones adquiridas por el PROMOTOR con el (los) INVERSIONISTA(S) …[…] De acuerdo con lo anterior, es claro que la FIDUCIARIA obra para efectos del presente contrato como simple administradora de Encargo Fiduciario y sus obligaciones y responsabilidades se limitan a las contenidas en este documento, razón por la cual el (los) INVERSIONISTA(S) la exime(n) de cualquier responsabilidad derivada directa o indirectamente de la ejecución del proyecto inmobiliario denominado MARCAS MAL. "* (He subrayado y destacado)

Se presenta por parte del Despacho la violación por vía indirecta pues el fallador realiza la interpretación de manera equivocada de las pruebas existentes, además de darles un alcance que la ley le niega, en especial a la prueba documental allegada.

> *"Se reconoce en la sentencia que entre la PROMOTORA MARCAS MALL CALI S.A.S y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA se suscribió un contrato de encargo fiduciario de preventas promotor, en el que la fiduciaria se obligaba a constituir encargos fiduciarios individuales con las personas interesadas en invertir, quienes le entregaban unos recursos para que los administrara durante la etapa de preventas, hasta que el promotor cumpliera con las condiciones establecidas para la transferencia de tales dineros"* y que además "*se suscribió un contrato de fiducia mercantil que tenía por objeto constituir el FIDEICOMISO MARCAS MALL quien mantendría la titularidad de todos los bienes que se transfirieran para la conformación del proyecto del centro comercial, incluido el lote de terreno en el que se haría la construcción. Recursos que también se encontraban bajo la administración de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA en su calidad de vocera del fideicomiso".*

Siendo este el marco contractual en que debía juzgarse las obligaciones por parte de **ACCIÓN**, incurrió el Despacho en una errada valoración probatoria y aplicación de la norma sustancial y de allí el resultado de una sentencia que deberá ser revocada en segunda instancia, al no proferirse en observancia de las normas jurídicas aplicables a la materia. El Despacho cometió un grave error e inconsistencia al momento de definir el marco normativo que le era aplicable a mi representada —con ocasión de los contratos que celebró con la parte Demandante— y con base en el cual se decidió su responsabilidad civil contractual. En particular, el marco normativo concerniente al rol que debía desempeñar **ACCIÓN** en la definición y constatación del punto de equilibrio del proyecto Marcas Mall y que definía la transferencia de los recursos al Promotor.

Lo primero y más importante que hay que señalar es que, a la luz de la normatividad que estaba vigente para el momento de los hechos, salvo pacto en contrario en los contratos, **ACCIÓN** no tenía el deber legal ni contractual de verificar el cumplimiento de las condiciones financieras, técnicas y jurídicas para que fuera procedente la transferencia o el desembolso de los recursos que conformaban los encargos fiduciarios. Dicha obligación sólo comenzó a existir a partir de la inclusión del numeral 5.2.3.2 que se reguló en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circula Básica Jurídica con la Circular Externa 007 de marzo de 2017:

> *"5.2.3.2. La obligación de la sociedad fiduciaria de verificar el cumplimiento de las condiciones financieras, técnicas y jurídicas contractualmente establecidas para la transferencia o desembolso de los recursos."*

Es importante mencionar que en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la CBJ previsto para negocios fiduciarios, se dispone, con respecto a la información que tenía —y aún hoy tiene que darse— por partede las fiduciarias a sus clientes en el marco de negocios fiduciarios de "preventas" lo siguiente:

> *Negocios fiduciarios de "preventas"*
>
> *En los negocios cuyo objeto sea el recaudo de los recursos provenientes de la promoción y consecución de interesados en adquirir inmuebles dentro de un proyecto inmobiliario, los cuales posteriormente harán parte del precio prometido por la compra, resulta fundamental que haya suficiente claridad, información y revelación acerca de aspectos tales como:*
>
> *Si la sociedad fiduciaria tendrá el manejo futuro de los recursos.*
>
> *Si la sociedad fiduciaria participará en la definición del punto de equilibrio.*
>
> *Si las promesas de venta cuya suscripción constituye una obligación futura del suscriptor del encargo, han sido conocidas por la fiduciaria o si serán suscritas por la fiduciaria o por el promotor.*
>
> *Cuáles serán las causales y los plazos de devolución de los recursosentregados a la fiduciaria.*
>
> *La identificación clara y expresa de la persona en favor de quiense celebra el negocio fiduciario.*
>
> *Quién asume el riesgo de la pérdida de valor de los recursos entregados a la fiduciaria como producto de la pérdida de valor de las inversiones realizadas por ésta con tales recursos, ya sea que los mismos se administren a través de una cartera colectiva o a través de cualquier otro mecanismo.*
>
> *La identificación clara y expresa del beneficiario de los rendimientos generados por el fondo de inversión colectiva o el mecanismoque se escoja.*
>
> *3.4.7.2.8 Los derechos y obligaciones que le otorga su vinculación al negocio fiduciario.*

Tal y como se desprende de esa norma es claro que, conforme a la normatividad vigente para el momento de los hechos: (i) **ACCIÓN** no estaba en la obligación legal de definir el punto de equilibrio; (ii) por el contrario, **ACCIÓN** podía o no participar libremente en esa definición; y (iii) la obligación legal de **ACCIÓN** se circunscribía a informar expresa y claramente a sus clientes si ella participaría ono en dicha definición, indicando las condiciones respectivas para el efecto.

Esto pone de presente que el razonamiento del Despacho no solo fue equivocado en este punto, sino que tumba uno de los soportes principales de la sentencia toda vez que **ACCIÓN** no estaba obligada legalmente a participar y definir el punto de equilibrio ni a determinar o no el cumplimiento de estos.

La sentencia objeto de recurso le impone obligaciones contractuales a **ACCIÓN** que no se derivan ni de los contratos ni mucho de la ley, con lo cual hay una clara trasgresión del ordenamiento sustancial por vía directa, pues el Despacho incurre en falsos juicios, al no tener en cuenta los preceptos que gobernaban el caso, y/o a pesar de haber acertado en su selección, les dio un alcance del cual carecen.

Al respecto se indica en la sentencia:

> *"De lo expuesto se colige que ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA no cumplió con lo acordado en el contrato, en tanto, a PROMOTORA MARCAS MALL le correspondía acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas en el contrato de encargo fiduciario y a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA* ***VERIFICAR*** *que estuviese demostrado el cumplimiento íntegro de cada uno de los ítems pactados previo a la transferencia de los recursos, lo que según se observa, no se acató".*

Las estipulaciones contractuales estipuladas por las partes han sido convalidadas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia cuando, en casos similares, ha reconocido y dado plena validez a las cláusulas que se acuerdan en negocios fiduciarios para desarrollar proyectos urbanísticos en los que las fiduciarias limitan su responsabilidad. Y esto justamente bajo el entendido de que el ordenamiento legal sí permite que ello suceda, porque en el marco de tales proyectos urbanísticos es completamente razonable que todo lo relacionado con aspectos técnicos sean asumidos por las empresas constructoras que son expertas en la materia. Así, por ejemplo, la Corte ha dicho lo siguiente[1]:

> *"La Fiduciaria no es constructora, ni interventora, ni asume responsabilidad por las construcciones o gestión de gerencia del proyecto."*
>
> *"La Fiduciaria expresa que sus obligaciones en este contrato son medio y no de resultado (…) no garantiza que los costos finales del proyecto correspondan a los inicialmente presupuestados, ni asume responsabilidad alguna por la construcción, calidad, estabilidad u oportunidad en la entrega de las obras."*
>
> *"Síguese de lo anterior discurrido que la jurisprudencia patria, le otorga a estas cláusulas de exclusión de responsabilidad alcance eficaz frente a terceros, lo que las hace oponibles a los mismos."*

Así las cosas, se tiene que quien en realidad estaba obligado a cumplir con los requisitos técnicos para que procediera la transferencia de recursos era MARCAS MALL CALI —en su calidad de Promotor— y no mi representada. Por consiguiente, si en efecto la parte Demandante sufrió algún daño, el mismo encuentra su causa en la conductaque MARCAS MALL CALI desplegó, al haber sido ella quien —conforme a lo pactado— tenía la obligación de acreditar el cumplimiento o no de las condiciones que se habían trazado. En otras palabras, de la conducta que llevó a cabo mi representada no es viable desprender ningún vínculo con el daño que alegó la parte Demandante y que le reconoció el Despacho.

El otro punto frente al cual el Despacho aduce un incumplimiento por parte de **ACCIÓN** y motiva su sentencia a pesar de no ser objeto de pretensión ni relacionarse como reproche en los hechos de la demanda, tiene que ver con el deber de información, sobre el cual se aduce en la providencia:

> *"Su función se enfoca en advertir e informar a los inversionistas sobre los riesgos que puedan existir, alertar sobre las dificultades y fracasos, vigilar que el proyecto se ejecute de acuerdo con los términos pactados, asegurar el buen*

[1] Sala de Casación Civil. Corte Suprema de Justicia. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Radicado 11001-31-041-2007-00128-01

> *manejo de los recursos, prevenir hechos que puedan generar su detrimento, y en fin, "realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia" (artículo 1234 del Código de Comercio). Por lo que lo acontecido con la verificación de requisitos no fue algo fútil, marcó el curso del proyecto y contribuyó a su adverso desenlace, pues era en la etapa de preventas que podían detectarse sus falencias y evitar el daño patrimonial de la demandante".*

Frente a este punto, también existe una aplicación errónea e indebida de las normas que regulan la materia por parte del Despacho. Frente al particular, los numerales 2.2.1.2.1 y 2.2.1.2.2 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la CBJ establecen una clara diferenciación entre los deberes de información y asesoría que tienen las sociedades fiduciarias:

> *Deber de información. Con base en el carácter profesional de las sociedades fiduciarias, les asiste el deber de informar los riesgos, limitaciones técnicas y aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte de objeto del contrato y de las prestaciones que se les encomienden, de manera tal que el cliente debe ser advertido de las implicaciones del contrato, desde la etapa precontractual, durante la ejecución e incluso hasta la liquidación del mismo. El alcance de esta obligación debe consultar el carácter y conocimiento de las partes intervinientes. Este deber implica la obligación de poner en conocimiento del cliente las dificultades o imprevistos que ocurran en la ejecución del contrato.*
>
> *En los negocios en los que se comercialicen participaciones fiduciarias las sociedades fiduciarias deben implementar los mecanismos necesarios para que los interesados conozcan con claridad los riesgos asociados a este tipo de inversiones.*
>
> *Deber de asesoría. Este es un deber que no debe confundirse con el de la información previsto en el subnumeral anterior y, salvo que el contrato sea de inversión, solamente es obligatorio en la medida en que haya una obligación expresa pactada en el contrato. En virtud de este deber, el fiduciario debe dar consejos u opiniones para que los clientes tengan conocimiento de los factores a favor y en contra del negocio y así puedan expresar su consentimiento con suficientes elementos de juicio, para lo cual resulta necesario considerar la naturaleza y condiciones propias de cada negocio y de los intervinientes en ellos. Este deber implica necesariamente un juicio de valoración que involucra una opinión fundamentada e inclusive una recomendación para el cliente.*

De la lectura del fallo de primera instancia, es claro que uno de los reproches que hizo el Despacho se sustentan en una aplicación errada del deber de información que tenía **ACCIÓN**, equiparándolo al deber de asesoría, sin reparar en que, por expresa disposición contenida en el numeral 2.2.1.2.2 antes citado, este último deber solo recaía en la fiduciaria si hubiera "una obligación expresa pactada en el contrato" que claramente no existe.

Así las cosas, en cumplimiento de circular externa 046 de 2008 y la circular externa 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera, **ACCIÓN** sí cumplió con todos sus deberes legales y contractuales, razón de más para desechar por completo el razonamiento del Despacho.

Hay violación directa de la norma sustancial por parte del Despacho, en especial del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, por cuanto las normas jurídicas sobre las cuales fundamenta el incumplimiento de las obligaciones por parte

de **ACCIÓN**, no se encontraban vigentes para el año 2014, pues tales obligaciones — aquellas enlistadas como fuente de responsabilidad en la página trece (13) del fallo de primera instancia — solo fueron incorporadas mediante la circular externa 024 de 2016, es decir, no aplicaban para la fecha de los hechos objeto de reproche y sin embargo, el Despacho estructuró la responsabilidad con base en estas, no obstante indicar la misa circular que *"5.2.1 Las instrucciones contenidas en los subnumerales 5.2.2, 5.2.3 y 5.5.2 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica no le son aplicables a los contratos relacionados con negocios de fiducia inmobiliaria y con negocios fiduciarios a través de los cuales se comercializan participaciones fiduciarias, que a la fecha de expedición de la presente circular (i) estén vigentes, (ii) se encuentren radicados en el Módulo de Registro de Negocios de esta Superintendencia y (iii) tengan vinculados inversionistas o vincule inversionistas o partícipes antes del 1° de enero de 2017".*

Finalmente, frente a este reproche y muestra de lo desacertado de la valoración probatoria, así como de la aplicación de las normas que regulan la controversia, se encuentra la afirmación de que el supuesto incumplimiento de las obligaciones por parte de **ACCIÓN**, *"marcó el curso del proyecto y contribuyó a su adverso desenlace",* lo cual con certeza se encuentra probado que es falso, por cuanto el centro comercial se comenzó a construir en el lote de terreno que si se quiere se debía encontrar en cabeza del fideicomiso al momento de la transferencia inicial de los recursos, por lo que no hay lugar a afirmar que alguna acción u omisión de mi representada, hubiese tenido inferencia en el no desenlace satisfactorio del proyecto.

II. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Debe decirse que mi representada, contrario a lo aducido por el Despacho sin fundamento legal alguno, no está llamada a responder por los daños y reproches que motivaron la acción del DEMANDANTE, toda vez que **ACCIÓN** carece de legitimación en la causa por pasiva para resistir las pretensiones de la demanda. Lo anterior toda vez que el DEMANDANTE pretendía imputarle a mi representada el resarcimiento de unos daños que —si es cierto que existen— se derivaron de la conducta y los actos de acreditación del punto de equilibrio del proyecto que hizo en su momento PROMOTORA MARCAS MALL CALI S.A.S. para que procediera la entrega y giro de los recursos económicos que el DEMANDANTE había entregado a título de encargo fiduciario.

Tratar por vía de sentencia que **ACCIÓN** responda con su propio patrimonio y no como vocera del patrimonio autónomo FA-2351 MARCAS MALL, es desconocer abiertamente el artículo 1233 del Código de Comercio y la naturaleza jurídica del contrato de fiducia, pues una de las finalidades de este tipo de contratos es la de la separación de los bienes de la fiduciaria con los del patrimonio autónomo. No fundamenta el Despacho el porqué ACCIÓN debe responder como persona propiamente dicha y de allí de la configuración del yerro en el que incurre en juzgador de primera instancia, quien tiene la obligación de motivar la sentencia con la explicación razonada de los fundamentos legales, constitucionales y doctrinarios en los que funda su decisión, esto en virtud del artículo 280 del Código General del Proceso.

Al no existir fundamento legal para imputar responsabilidad a **ACCIÓN** como persona propiamente dicha, deberá revocarse la demanda en su contra. Recordemos que el contrato de fiducia genera la creación de un patrimonio autónomo con los recursos de los inversores, con su propia identificación, incluso tributaria y que la fiduciaria como

persona propiamente dicha no administra ni tiene el control sobre estos recursos que allí ingresan, por lo que mal haría en caso de condenársele frente a unas obligaciones que no adquirió y frente a unos recursos que no administró. Así, de mantenerse en firme la sentencia está deberá ser únicamente en contra del PROMOTOR y de **ACCIÓN** como vocera del patrimonio autónomo y no de esta como entidad fiduciaria.

En virtud del contrato de fiducia mercantil inmobiliario de preventas, **ACCIÓN** se convierte en vocera y administradora del patrimonio autónomo con las obligaciones y facultades derivadas del negocio, en cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó el fideicomiso.

Ahora, se aclara que los activos propios de la sociedad fiduciaria quedan indemnes frente a reclamaciones derivadas del giro del negocio que constituyó el fideicomiso, quedan en cabeza tanto del fideicomitente como aquella en condición de administradora y vocera del patrimonio, las obligaciones frente al inversor, claro está, sin embargo, no es posible proferir una condena en contra de la fiduciaria pretendiendo que esta responda con su propio patrimonio y no con el administrado como vocera.

III. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ADUCIDA POR EL DESPACHO

Argumenta el Despacho que existió una supuesta responsabilidad contractual por parte de mi representada, en vista de que "omitió" actuar conforme a los deberes legales y normativos que le eran exigibles.

Dentro de las supuestas omisiones, el despacho destacó la falta al deber de información frente a los demandantes, sin embargo, y como fue probado en el proceso, los aquí demandantes conocían el estado del proyecto y las cláusulas de los contratos, tanto del contrato de encargo fiduciario como del encargo fiduciario individual.

Adicionalmente, en el marco de los principios de control interno de autocontrol, autogestión y autorregulación, **ACCIÓN** cumplió con su obligación de definir e implementar los procedimientos de control que consideró pertinentes y adecuados para garantizar que se cumplan con las normas de información financiera, que se cumplieran las cualidades requeridas de la misma y los objetivos desarrollados en las normas que regulan la materia, tal y como se desarrolló en el capítulo anterior de este escrito.

Por lo anterior, **ACCIÓN** no tiene un solo procedimiento sino tiene una variada cantidad de procedimientos de control que en su conjunto se complementan, en todo o en parte, para garantizar el registro de las operaciones en forma clara, completa y fidedigna.

Al encontrarse acreditadas las obligaciones contractuales por parte de **ACCIÓN**, deberá revocarse la sentencia y negarse las pretensiones de la demanda, al ser palmaria la indebida valoración de los medios de prueba — documentales — encargo fiduciario y contrato de fiducia mercantil inmobiliaria por parte del despacho, así como de las normas que regulan la materia.

IV. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA NO ES CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE

LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE LA FIDUCIARIA NO SE CUMPLE EN EL PRESENTE CASO.

Como se demostró en este proceso, de los hechos y pretensiones de la **DEMANDANTE** no resulta posible extraer varios de los elementos de responsabilidad antes enunciados. Hay que decirlo con total contundencia: (i) **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA** nunca actuó en contra de los deberes legales y contractuales que le eran exigibles; (ii) nunca actuó con culpa, conforme al grado de diligencia que le era exigible; y (iii) nunca se generó ningún tipo de daño real, directo, efectivo y determinado o determinable a la **DEMANDANTE** que le resultara imputable.

Respecto del tema de acreditación de los requisitos, se logró probar que acción cumplió con la verificación de los requisitos que fueron establecidos junto con el Promotor y que los aquí demandantes conocían de conformidad al encargo fiduciario y al contrato matriz.

El Despacho pasó por alto lo que se acreditó de manera suficiente con el interrogatorio de parte que se practicó a la parte Demandante. Basta detenerse en el mismo, para encontrar acreditados aquellos elementos por los cuales debieron declararse improcedente las pretensiones:

1. En primer lugar, con los interrogatorios se evidenció un claro desconocimiento del negocio celebrado y un sin número de preguntas sin respuestas. Es claro que la parte demandante tuvo una conducta evasiva que imposibilitó el esclarecimiento de los hechos y la claridad de sus pretensiones.

2. Asimismo, en esos interrogatorios se constató que todos los términos del negocio que aceptó y suscribió el Demandante fueron negociados por el con el PROMOTOR del proyecto. Esto reafirma, entre otras cosas, que **ACCIÓN** no debió haber sido la llamada a responder por los supuestos daños que sufrió el Demandante, siendo en realidad el PROMOTOR del proyecto el realmente responsable de los daños que supuestamente se le generaron.

3. El incumplimiento aducido por el Demandante por parte de **ACCIÓN**, conforme a sus respuestas en su interrogatorio se centra en que el proyecto no se realizó, que el centro comercial no se terminó y que esto le es imputable a la fiduciaria, y de esta manera lo acoge el despacho en la sentencia, lo cual es un yerro insubsanable, por cuanto la fiduciaria no es promotor ni mucho menos constructor del proyecto, lo cual se desprende de las normas que regulan el contrato de fiducia.

4. Es más, muestra de lo anterior incluso se vio cuando la parte demandante no pudo dar claridad sobre cómo se hicieron los aportes al negocio ni la razón por la cual se dio una reestructuración del mismo. Frente a esto, lo que no puede pasar, es que se concluya que entonces que **ACCIÓN** debe asumir el pago de unos perjuicios desconociendo el grado de profesionalidad, responsabilidad y conocimiento que le correspondía a la parte Demandante en el marco del negocio fiduciario que se desarrolló.

5. El Demandante recibió toda la información por parte del PROMOTOR del proyecto, esto lo confiesa en su interrogatorio, por lo que, no podría imputarse responsabilidad a mi representada por la omisión a un deber de información cuando la prueba que obra en el proceso acredita fehacientemente que no se incumplió con esta obligación.

6. A su vez, el representante legal de la demandante no pudo dar cuenta al despacho de los requisitos que presuntamente pasó por alto la Fiduciaria y tampoco pudo identificar cuales requisitos eran los que se exigía para la transferencia de recursos.

Por otro lado, el despacho no analizó completamente el incumplimiento de las obligaciones del promotor del proyecto de acuerdo con las obligaciones que adquirió contractualmente, más teniendo en cuenta los contratos coligados que fueron traídos ante el despacho en el marco del presente proceso, de haber sido así, este sería el único frente al cual se habría de haber proferido una sentencia desfavorable.

Lo anterior fueron yerros que cometió el Despacho en la valoración de los medios de prueba — documentales e interrogatorio de parte — y con base en esta deficiencia en el análisis de estos medios de prueba es que declara la responsabilidad de ACCIÓN, por lo cual, identificados los errores en el juzgamiento, valoración de la prueba y aplicación de las normas jurídicas, deberá revocarse la sentencia.

AUSENCIA DE UNA CONDUCTA ANTIJURÍDICA A LA LUZ DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO MR-799 Y EL CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN FA-2351

En términos muy sencillos, el Despacho concluyó que **ACCIÓN** habría incurrido en una conducta antijurídica a la luz de las obligaciones contractuales que ella tenía en virtud del encargo fiduciario MR-799 y el contrato de fiducia de administración FA-2351, porque, en concreto en que **ACCIÓN** omitió verificar si existía la necesidad o no de obtener un crédito constructor para asegurar la factibilidad, liquidez y éxito del proyecto y la propiedad del predio en cabeza del fideicomiso.

Así las cosas, a continuación, se indicarán las razones particulares por las que, en realidad, mi representada no incurrió en ninguna de las falencias antes anotadas con base en las cuales el Despacho emitió la sentencia de primera instancia:

1. Como se expuso anteriormente, **ACCIÓN** no tenía el deber legal ni contractual de verificar el cumplimiento de las condiciones financieras, técnicas y jurídicas para que fuera procedente la transferencia o el desembolso de los recursos que conformaban los encargos fiduciarios, siendo este argumento suficiente para la revocatoria de la sentencia ante la violación directa de normas sustanciales, al aplicar normas jurídicas— numeral 5.2.3.2 que se reguló en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circula Básica Jurídica con la Circular Externa 007 de marzo de 2017— que no se encontraban vigentes para el momento en que se celebró y ejecutaron las obligaciones derivadas del contrato jurídico. Así como tampoco se encontraba vigente la circular externa 024 de 2016.

2. Mi representada cumplió con la transferencia de los recursos de acuerdo con lo establecido en los contratos de encargo fiduciario individual y el otrosí

reglamentario suscrito con los aquí demandantes.

3. El despacho encontró probado sin estarlo que la parte Demandante acreditó al despacho los requisitos que presuntamente pasó por alto **ACCIÓN,** sin identificar los medios de prueba que lo sustenten.

   Como se alegó a lo largo del proceso, mi representada transfirió los recursos cuando se acreditó el cumplimiento de los mismos por parte del PROMOTOR en las fechas máximas establecidas, inclusive respecto a la transferencia del inmueble, dicho requisito fue satisfecho en el lapso de tiempo estipulado en el contrato de encargo fiduciario (20 de mayo de 2015). Más allá que la fecha del acta de verificación contenga una fecha de transferencia incorrecta, esa inexactitud no afectó el desarrollo del proyecto, por lo que esa falla no es causa del supuesto daño que sufrió el demandante. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la transferencia del inmueble se dio unos días después a la firma del acta u así fue reconocido en la sentencia cuando se indica que la matricula del bien inmueble en el folio de matricula inmobiliaria se presenta el 01 de diciembre de 2014, esto es, muchos meses antes de la fecha final de verificación de requisitos.

   Adicionalmente, en lo referente al punto de equilibrio y como se desprende de la evidencia aportada por mi representada, los recursos fueron aportados al PROMOTOR del proyecto después de que se cumplió con el punto de equilibrio que había sido establecido y, por tanto, dicho PROMOTOR ya contaba con los recursos para dar inicio al proyecto. De igual forma, es importante resaltar que se probó en el proceso que los recursos de los demandantes no tuvieron un destino diferente que el desarrollo del proyecto y por lo tanto, mi representada no incumplió con el deber de administración de los recursos depositados.

4. Por otro lado, frente a los deberes de protección y defensa de los bienes del fideicomiso, mi representada solo obedeció a las voluntades de los titulares del negocio, permitiéndoles el ejercicio de sus derechos en la forma acordada. En esta medida, **ACCIÓN** no estaba en deber de ir más allá de lo convenido por las partes y las normas imperativas vigentes para la época.

   En ese sentido, el Concepto 2008068357-003 del 27 de noviembre de 2008 de la Superintendencia Financiera establece lo siguiente respecto de las obligaciones de las fiduciarias:

   > *"Para poder determinar la seguridad que tienen los dineros recaudados por la fiducia a nombre del constructor, es preciso remitirse al contrato de que se trata. Lo anterior toda vez que sólo de este modo se puede determinar el alcance de la gestión de la fiduciaria, la destinación de los recursos y las condiciones para que el constructor pueda disponer de ellos".*

5. Ahora, respecto del esquema de preventas que se utilizó en el presente caso, resulta pertinente señalar que, después del cumplimiento de las condiciones, **ACCIÓN** no tenía ninguna obligación en relación con el deber de información sobre el estado del proyecto, las gestiones de modificación del mismo, y los demás aspectos que se indicaron en la sentencia.

INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL.

No se acreditó en este proceso el elemento estructural de nexo causal. No debe olvidarse que la existencia de un nexo causal entre las conductas contractuales que se despliegan y el daño que se alega en un proceso de responsabilidad civil contractual, es un aspecto básico estructural para que sea procedente la declaratoria judicial de la misma.

Por esta sola razón, la sentencia de primera instancia debe revocarse, pues sin un análisis particular sobre el elemento del nexo causal, mi representada no ha debido ser condenada. La ausencia de la acreditación y exposición en la providencia por parte del Despacho frente al nexo causal constituye un yerro que no es subsanable desde ningún punto de vista. No existe en la providencia alusión al nexo causal como elemento estructurante de la responsabilidad y de allí que no sea posible la declaratoria de la responsabilidad de **ACCIÓN**. Si el despacho no analizó el nexo causal entre el supuesto incumplimiento y el daño aducido, no era posible proferir una condena en contra de mi representada.

En sede de apelación deberá el Tribunal analizar todo el proceso bajo los siguientes interrogantes, ¿Existe nexo causal entre la transferencia de los recursos realizada en noviembre de 2014 y el desarrollo final del proyecto, estando probado que el centro comercial comenzó su construcción y se estaban ejecutando las obras con normalidad, incluso para el año 2016?, ¿Le es atribuible la no ejecución del proyecto a **ACCIÓN** por el simple hecho de la transferencia de los recursos? y finamente, deberá resolver el Tribunal si hipotéticamente, ¿De haberse realizado la transferencia de los recursos una vez verificado si existía la necesidad o no de obtener un crédito constructor para asegurar la factibilidad, liquidez y éxito del proyecto y de la propiedad del predio en cabeza del fideicomiso, el proyecto se hubiese desarrollado con normalidad?. Si una sola de estas preguntas recibiera una respuesta negativa por parte del Tribunal en el estudio en sede de apelación, es claro que no existe nexo causal entre el supuesto incumplimiento en las obligaciones por parte de **ACCIÓN** y el daño aducido en la demanda.

Al margen de lo anterior, en lo fundamental, de la demanda se desprende que el hecho generador del daño alegado recae en que mi representada supuestamente no verificó de manera correcta los requisitos establecidos en el contrato de encargo fiduciario individual para que fuera procedente la transferencia de los recursos de los inversionistas al Fideicomiso FA-2351. Sin embargo, no hay nexo de causalidad entre este hecho y el daño que se alegó, toda vez que el supuesto del cual partió la parte demandante no es correcto, bajo el escenario de que el proyecto inició una vez se depositaron los recursos y en el lote destinado para tal fin, conforme se desprende de los informes de interventoría allegados mediante exhibición de documentos y que sin embargo no fueron valorados por el juez de primera instancia.

Debemos resaltar que, sobre los elementos de la responsabilidad que supuestamente encuentra probado el Despacho, conforme a la sentencia objeto de recurso se encuentra frente al nexo causal que:

"para el Despacho están demostrados los elementos de la responsabilidad civil en contra de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA como persona propiamente dicha, puesto que se encuentra probado: (i) el hecho dañoso, desatender su deber contractual de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas antes de entregar los recursos de la sociedad

demandante al PROMOTOR; (ii) el daño identificado como la merma del patrimonio de la demandante, y (iii) el nexo causal entre uno y otro elemento, que se materializa en la pérdida del dinero invertido por la transferencia irregular de dineros por parte de la fiduciaria a la promotora, quien de contera incumplió con la ejecución de la obra y actualmente se encuentra en trámite de liquidación, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de que se construya el Centro Comercial Marcas Mall en Cali, Valle del Cauca".
(Resaltado propio)

Bajo la premisa aducida por el juzgador de primera instancia para encontrar acreditada la responsabilidad de **ACCIÓN**, se cuestiona respecto al hecho dañoso, el cual es el elemento inicial estructurante de la responsabilidad civil, que este lo fundamenta en la no verificación de los requisitos previo a la transferencia de los recursos y la transferencia propiamente dicha. Ahora, si los recursos por parte del Demandante fueron transferidos entre el 17 de marzo de 2015 y el 08 de octubre de 2015, tal y como se acredita con la prueba documental y pericial, y los recursos comenzaron a girarse entre el 04 y 05 de noviembre de 2014, no existe nexo causal entre la acción u omisión de la fiduciaria y el daño aducido, por cuanto los recursos que pudieron haberse girado no eran del DEMANDANTE por cuanto para esta fecha, **EMPORIUM JEANS** no había realizado ninguna inversión en el fideicomiso. Entonces, ¿cómo puede atribuírsele a mi representada el supuesto incumplimiento de sus obligaciones de forma retroactiva?. Es claro que no existe nexo causal ni congruencia en la sentencia entre lo pretendido, lo narrado como fundamentos fácticos y lo fallado por el juez de primera instancia.

Ahora, mucho menos puede existir nexo causal a la luz de los contratos de encargo fiduciario y el marco normativo ampliamente explicado en este escrito, cuando **ACCIÓN** no tenía el deber de acreditar e informar el cumplimiento de los requisitos que se habían definido para que la transferencia dineraria fuera procedente —el llamado "punto de equilibrio"—, pues todo ello había quedado contractualmente en cabeza del PROMOTOR y, en algunos casos, del Interventor del proyecto. Tal y como se probó en este proceso, las obligaciones contractuales de **ACCIÓN** estaban circunscritas a recibir del Promotor del proyecto y/o del Interventor la información e instrucciones de transferencia de los recursos, para a continuación proceder con el traspaso de los dineros al Fideicomiso FA-2351. En el caso que nos ocupa, ello se desprende justamente de la Cláusula Décima del Contrato de Encargo Fiduciario individual YA CITADA.

Para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil.

Se tiene por probado documentalmente que quien en realidad estaba obligado a cumplir con los requisitos técnicos para que procediera la transferencia de recursos era MARCAS MALL CALI —en su calidad de PROMOTOR— y no mi representada. Por consiguiente, si en efecto la parte Demandante sufrió algún daño, el mismo encuentra su causa en la conducta que MARCAS MALL CALI desplegó, al haber sido ella quien —conforme a lo pactado— tenía la obligación de acreditar el cumplimiento o no de las condiciones que se habían trazado. En otras palabras, de la conducta que llevó a cabo mi representada no es viable desprender ningún vínculo con el daño que alegó la parte Demandante y que le reconoció el Despacho.

Frente a esto no puede llegarse al absurdo —tal y como lo sugirió el Despacho— de que mi representada, más allá de que el Promotor debía verificar y acreditar las condiciones del punto de equilibrio, tenía a su vez que realizar una verificación directa de las mismas. Si contractualmente se estableció que el PROMOTOR era el responsable de ello, atendiendo para el efecto el marco normativo que permitía válidamente que ello sucediera según se explicó arriba, no es cierto que **ACCIÓN** tuviera entonces que hacer un nuevo ejercicio para revalidarlo. Si esto fuera procedente, entonces simplemente no se aceptaría la posibilidad de que las fiduciarias pacten que la verificación la hará un tercero. En ese sentido, la fiduciaria si bien no era la llamada de acreditar los requisitos, esta si se ocupó de su verificación de conformidad con los documentos entregados por el PROMOTOR del Proyecto.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la validación de las condiciones técnicas y jurídicas fueron revisadas cabalmente por **ACCIÓN**; y si hipotéticamente no hubiese sido así, la culminación o no del proyecto no puede ser asegurada por la fiduciaria; menos cuando se trata de un negocio de preventas y de allí el yerro que comete el juez de primera instancia al atribuirle a mi representada la no culminación del proyecto y derivar de allí su responsabilidad.

De acuerdo con esto, es importante no perder de vista cuál era el objetivo principal del negocio fiduciario que se armó a través del fideicomiso FA-2351 y los diferentes encargos fiduciarios —incluyendo el MR-799 y el contrato de Encargo Fiduciario individual que se suscribió con la parte Demandante— el cual era en realidad el de lograr que estas personas adquirieran unos locales comerciales dentro del Centro Comercial Marcas Mall. Si en realidad existiese un nexo de causalidad entre el supuesto accionar de mi representada y el supuesto daño alegado, el centro comercial ni siquiera se habría empezado a construir, pues no se habría siquiera logrado adquirir el lote destinado a dicha construcción. Frente a esto, en su decisión, el Despacho olvidó que las obras en dicho lote iniciaron y que el proyecto estaba andando, hecho que se puede probar con los boletines informativos los cuales fueron aportados con la contestación de la demanda y mediante exhibición de documentos. En esa medida, con ese simple hecho se rompe cualquier nexo de causalidad entre el actuar de mi representada el daño alegado.

Lo anterior, en otras palabras, significa que, como se ha dicho en numerosas oportunidades en el proceso y en este escrito, cronológicamente el hecho que habría generado el supuesto daño del Demandante —si es que existe uno—, fue posterior a la declaratoria del punto de equilibrio y, por ende, bajo las premisas antes explicadas, en ninguna circunstancia mi representada pudo haber causado el daño alegado.

Ahora, como bien lo manifiesta el extremo demandante en su demanda y hechos, el plazo que disponía el Contrato de Encargo Fiduciario Individual para acreditar el cumplimiento de las condiciones para la transferencia de recursos al PROMOTOR era hasta el 20 de mayo de 2015 prorrogable por un (1) año más. Si se tiene en cuenta lo anterior y el supuesto hecho generador del daño reconocido en la sentencia—esto es la errónea verificación que se hizo de los requisitos del punto de equilibrio por la supuesta tardía transferencia de la propiedad que se hizo del bien inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-695292 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali al patrimonio autónomo FA-2351 MARCAS MALL, que se efectuó el 19 de noviembre de 2014 y fue registrada el 1 de diciembre del mismo año y no verificarse la necesidad o no de un crédito al constructor — se tiene que esta se encontraba, y por

creces, dentro de los términos fijados para la transferencia, por lo que este hecho no pudo haber sido el causante de los supuestos daños. De la misma demanda se puede extraer esta conclusión, con lo que no hay ninguna conexión entre el supuesto daño y el hecho que se le endilgó a mi representada.

INEXISTENCIA DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO REAL, DIRECTO Y DETERMINADO O DETERMINABLE

El daño antijurídico es la piedra angular de la teoría de la responsabilidad civil contractual en Colombia, donde sin la existencia de un daño real, cierto, directo y determinado o determinable, no es posible configurar un caso de responsabilidad contractual. Contrario a lo que afirmó la parte Demandante y lo que a su vez concluyó el Despacho en primera instancia, la demandante no ha sufrido ningún tipo de aminoración en su patrimonio a raíz de los hechos en los que fundamentaron sus pretensiones.

En términos muy concretos, en la sentencia de primera instancia, el Despacho estimó que el daño al Demandante se presenta como "*la merma del patrimonio en cabeza de este y que esto se materializa en la pérdida del dinero invertido por la transferencia irregular de dineros por parte de la fiduciaria a la promotora, quien de contera incumplió con la ejecución de la obra y actualmente se encuentra en trámite de liquidación, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de que se construya el Centro Comercial Marcas Mall en Cali, Valle del Cauca.* En otras palabras, para el Despacho la conducta antijurídica de **ACCIÓN** fue la razón por la cual el proyecto Marcas Mall no se pudo finiquitar, lo que generó que el Demandante no pudieran obtener los beneficios correspondientes.

La conclusión a la que arribó el Despacho es equivocada porque en realidad la parte Demandante no sufrió ninguna aminoración en los términos que se enunciaron en la sentencia de primera instancia. Como se verá en detalle, las afugias que si acaso ha sufrido la parte Demandante no revisten las condiciones para ser catalogadas como un daño antijurídico, real, directo y determinado o determinable que deba ser reparado por **ACCIÓN** a la luz de la normatividad y jurisprudencia vigente.

Sorprende la manera en la que el Despacho desconoció todos los argumentos que mi representada promovió dentro del proceso para demostrar la inexistencia de la supuesta responsabilidad civil contractual, para acto seguido, tomar una decisión que en realidad termina traduciéndose en un enriquecimiento sin causa del Demandante. Reitero: se encuentra acreditado que existe un proceso liquidatario en curso, en el que realmente se definirán los derechos que tienen los inversionistas del proyecto Marcas Mall —entre ellos, el Demandante— de cara a los activos que existen en el fideicomiso FA-2351. Así, los inversionistas pueden hacer valer sus acreencias en ese proceso y, solo de las resultas del mismo, podría emprenderse la acción que hoy se impugna a través de este recurso de alzada.

Esta situación de manera clara evidencia que en el presente caso no se puede establecer un daño cierto, por cuanto aún falta que se liquide el proyecto y fruto de esa liquidación se entregue al Demandante lo que le corresponde. Por consiguiente, no puede reconocerse ningún tipo de daño en favor del Demandante, pues ello terminaría por configurarse como un claro enriquecimiento sin causa a su favor. Según lo antes dicho, no hay razón para que mi representada o cualquier tercera parte, asuma el pago de unos dineros que desde ningún punto de vista el Demandante ha perdido.

Adicional a lo expuesto, y como erróneamente lo ha afirmado el demandante, no hubo ninguna afectación a los inversionistas ni en la entrega de recursos al promotor con ocasión de los hechos ocurridos en la sucursal de Cali, pues, como se encuentra consignado en los Estados Financieros del fideicomiso, los dineros fueron entregados para la realización del proyecto. Sobre esto no existe prueba en contrario que pueda confirmar lo que expresa la parte demandante.

Otros de los yerros en los que incurre el fallador de primera instancia y que se materializa como una violación indirecta de la ley sustancial, se presenta por la indebida valoración de la prueba pericial y documental, en conjunto con la apreciación de la demanda.

Al respecto, las pretensiones de la demanda se encontraban dirigidas a la devolución de los dineros a título de capital invertido y los rendimientos financieros, rendimientos que el Despacho reconoció bajo el título de intereses corrientes bajo la interpretación del artículo 884 del Código de Comercio, no obstante, no solo no es una disposición legal que no le aplica al encargo fiduciario celebrado, sino que además bajo ningún supuesto puede aplicarse a título de rendimiento dentro del encargo fiduciario el equivalente de estos, a intereses bancarios corrientes.

Sobre la indebida valoración de los supuestos rendimientos producidos por el encargo fiduciario, adujo el despacho en la sentencia*: "En el dictamen pericial, el perito aplicó la tasa de interés bancario corriente en virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, norma que reza: "Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente", análisis que se avala, en tanto, ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA como administradora del Fondo Abierto Acción no demostró que la rentabilidad se debiere calcular de forma diferente o con otras tasas de interés".* (Resaltado propio)

Nótese como de la prueba documental —encargo fiduciario — se estableció que "*la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, procederá a poner a libre disposición del (los) INVERSIONISTA (S) la suma depositada en el respectivo encargo fiduciario más los rendimientos generados en el mismo",* es decir, la obligación de **ACCIÓN** como vocera del patrimonio autónomo bajo este supuesto, era el de devolver los recursos invertidos más los rendimientos, es decir, había una condición contractual clara entre las partes, por lo que no puede acudirse de manera supletiva a otorgar el reconocimiento del interés bancario corriente.

En cuanto a este punto, debemos plantear una serie de consideraciones sobre el valor que el Despacho le otorgó a las pruebas que fueron debidamente decretadas, aportadas y practicadas en la etapa probatoria. En nuestro respetuoso criterio, es claro que éste no respondió al resultado natural de la aplicación del criterio de sana crítica sobre las mismas que ordena la ley. Por el contrario, el Despacho decidió valorar las pruebas de manera individual y aislada. Aquí se presenta un error de derecho al interpretarse de manera equivocada el artículo 167 del Código General del Proceso, el cual establece en cabeza de las partes la carga de prueba. Aduce el Despacho que manera errada que *"ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA como administradora del Fondo Abierto Acción no demostró que la rentabilidad se debiere calcular de forma diferente o con otras tasas de interés*", cuando, en virtud de la disposición legal antes citada, era a la parte demandante a quien le correspondía acreditar cuál era la rentabilidad que generaba el fondo, no mi

representada. No le es dable al juzgador invertir la carga de la prueba en la sentencia y mucho menos imponerse a mi representada probar la extensión del daño en favor del demandante.

El dictamen pericial adolece de errores metodológicos y conceptuales que no le permiten ser tenido en cuenta para la cuantificación del daño, pues en este no se realiza ningún cálculo con base en los rendimientos generados en el fondo, sino que se limita para el cálculo del lucro cesante a coger el capital invertido y aplicarle el interés bancario corriente. Ahora, no existe congruencia entre lo pedido en la demanda y decidido en la sentencia por cuanto, la pretensión era el reconocimiento de rendimientos, más no de intereses corrientes como lo concluyó el perito. El dictamen realiza una experticia sobre un aspecto que no es objeto de pretensión y de allí que no pueda darse su reconocimiento. Para que el dictamen hubiese tenido alguna eficacia probatoria, los rendimientos debieron calcularse con base en lo establecido en la Circular Externa 30 de 2015 emitida por la Superintendencia Financiera. Las tasas diarias de los fondos, es una información pública que se encuentra en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se detallan las rentabilidades diarias y valor de la unidad de los FIC en los siguientes enlaces: Antes del 01 de enero de 2016 se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10085897 y a partir del 01 de enero de 2016 se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.superfinanciera.gov.co/ReporteInformacionFIC/ , sin embargo, esto no era una carga probatoria de mi representada sino del demandante, quien debía acreditar el daño no solo en su existencia sino además en su extensión.

Encontró probado el Despacho sin estarlo, que los rendimientos de los recursos en el fondo eran equivalentes al cálculo de los interese corrientes. Este yerro frente al dictamen fue puesto de presente en la contradicción del mismo cuando el apoderado de SBS SEGUROS preguntó al perito *"cuál fue el criterio para tener en cuenta o para determinar el lucro cesante con el interés bancario corriente y no con los intereses que ya estaban o con los réditos que estaban establecidos que los dineros daban en el encargo a donde ingresaban en el proyecto inmobiliario*" y este respondió *"el título que se utiliza es el artículo 884 del Código de Comercio, este es el criterio que se utiliza para la liquidación de estos intereses"* min 27 y siguiente de la audiencia de prueba. Igualmente afirma el perito de manera equivocada que al no tenerse un estimativo de los rendimientos es por esto que se utiliza el interés bancario corriente. Ahora, que el perito o la parte demandante no hubiese tenido la capacidad de acreditare cuál era el porcentaje de los rendimientos que producía el fondo, no significa que deba acudirse al citado artículo, pues este no es una norma supletiva que regule esta materia.

Finalmente, debe resaltarse que frente a la idoneidad del perito, quedó acreditado que este no conoce de contratos de fiducia y que nunca en su experiencia profesional ha rendido dictámenes sobre esta materia, la cual solo se ha dirigido a la liquidación de intereses producto de contratos, tal y como lo realizó en esta experticia y de allí los errores conceptuales y metodológicos que llevaron a no tener en cuenta los aspectos técnicos para el cálculo de los rendimientos producto de la inversión en el fondo.

V. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

OMITIÓ EL DESPACHO PRONUNCIARSE Y ESTUDIAR DE FONDO LOS DEMÁS AMPAROS DEL CONTRATO DE SEGURO.

Considero respetuosamente que el análisis del despacho resulta superfluo y atado a un supuesto de hecho que no ha sido probado.

Sin perjuicio del débil análisis del llamamiento, el despacho soslayó el material probatorio aportado por este extremo procesal y solo fundó su decisión en hechos que no gozan de certeza.

Sin explicación alguna, el Despacho interpreta las declaraciones de la representante legal de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA** como una confesión, cuando por el contrario lo único que se indicó en el interrogatorio de parte es que mi representada conoció de hechos que serían **presuntamente** fraudulentos y procedió a dar alerta a las autoridades competentes como indica su deber legal.

En este sentido, omitió el despacho la calidad de consumidor financiero que tiene mi representada respecto de la aseguradora. De esta forma tampoco puede considerar que la exclusión se encuentra probada en el proceso por la simple denuncia efectuada por **ACCIÓN FIDUCIARIA**, pues más allá de esto, el presunto delito no ha sido estudiado por un juez penal, y, de cualquier modo, estas conductas no fueron, admitidas, avaladas o toleradas por mi representada, que es el supuesto que contempla la exclusión.

Adicionalmente, este despacho se limitó a estudiar la cláusula de exclusión contenida en la póliza, sin embargo, pasó por alto que esta exclusión procede únicamente para la cobertura referente a la responsabilidad civil profesional financiera. En el presente proceso, el llamado en garantía no fue llamado para responder únicamente por esta cobertura, sino también por los otros eventos contemplados en el contrato de póliza, como lo fue, bajo el amparo de infidelidad y riesgos financieros, establecidos en la sección uno del contrato de seguro.

Existe una indebida valoración probatoria por parte del Despacho respecto a las condiciones generales y particulares del contrato de seguro número 1000099 PÓLIZA DE SEGURO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, al no estudiarse todas las coberturas estipuladas en este.

El llamamiento en garantía formulado por **ACCIÓN** a **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, tenía como pretensiones:

> *PRIMERA: Que se declare que ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. tiene el derecho a reclamar de la sociedad AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. (hoy SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.) el reembolso del pago que tuviere que hacer por indemnización de perjuicios con fundamento en la póliza de seguro 1000099, si resultare condenada en el proceso promovido en su contra por EMPORIUM JEANS S.A.S.*
>
> *SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. (hoy SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.) a reembolsarle a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. el valor que ésta tuviere que pagarle a EMPORIUM JEANS S.A.S. de resultar condenada como consecuencia de la sentencia que se dicte en el proceso que promovió.*

Las pretensiones del llamamiento en garantía formulado tienen como finalidad que, en caso de una condena en contra de **ACCIÓN**, por encontrar acreditada su responsabilidad, sea **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** la compañía obligada al reembolso, en virtud del contrato de seguro celebrado, de la cual es beneficiaria **ACCIÓN**, por lo que, debía el Despacho estudiar todas las coberturas de la póliza de seguro número 1000099, analizando cada una de ellas, toda vez que, al encontrarse la prueba documental — póliza — en el expediente, no puede hacerse un análisis restrictivo de los amparos allí otorgados como lo hizo el juez de primera instancia. La sentencia omitió resolver sobre todos los extremos de la litis y deberá el Tribunal en sede de apelación, corregir los yerros en los que incurrió el a quo.

La póliza suscrita entre **ACCIÓN** y **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A**. contiene una pluralidad de amparos, luego, el análisis de responsabilidad contractual de la compañía aseguradora debe realizarse frente a cada uno de ellos.

La relación llamado y llamante en garantía debe ser objeto de pronunciamiento, teniendo en cuenta las pretensiones formuladas.

En la sentencia objeto de la presente solicitud, se indica por parte del Despacho frente al contrato de seguro:

> *Punto en el que se debe aclarar que dicha póliza comprende tres amparos diferentes, distribuidos en tres secciones, a saber: (i) la póliza de seguro integral bancaria, (ii) el amparo de pérdidas a través de sistemas computarizados y (iii) la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras.*
>
> *Por lo que, tratándose de una demanda de responsabilidad civil derivada de los actos profesionales de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA, es la sección III la que debe gobernar el asunto.* (Resaltado propio)

La calificación del único amparo aplicable por parte del Despacho en sentencia es violatorio del derecho de defensa y contradicción de mi representada y va en contravía de la congruencia que debe tener toda providencia judicial, donde deben resolverse todos los extremos de la litis. Reconoce el Despacho que el contrato de seguro está integrado por tres secciones, sin embargo, arbitrariamente, solo estudia una de ellas, la de responsabilidad civil, dejando por fuera el amparo de infidelidad y riesgos financieros. Como se desarrollará, uno u otro otorgan cobertura para el caso en concreto y de allí la revocatoria de la sentencia que deba hacer el Tribunal frente a la condena que deba imponerse a la aseguradora llamada en garantía.

Nótese como el Despacho, de forma errada, limita el estudio del llamamiento en garantía solo al amparo de responsabilidad civil, dejando de lado que el contrato de seguro número 1000099, también cuenta con la sección I, la cual establece la cobertura de infidelidad y riesgos financieros, la cual, conforme con las condiciones generales del contrato establecen que:

> *"1.1. INFIDELIDAD DE EMPLEADOS.*
> *ACTOS DOLOSOS COMETIDOS POR CUALQUIER EMPLEADO DEL ASEGURADO, YA SEA SOLO O EN COMPLICIDAD CON OTRAS PERSONAS, CON LA INTENCIÓN DE CAUSAR AL ASEGURADO UNA PÉRDIDA FINANCIERA."*

Ahora, si el Despacho hubiera resuelto sobre todos los extremos de la litis y no hubiese omitido resolver las pretensiones del llamamiento en garantía, sin duda, hubiera encontrado acreditada la responsabilidad contractual de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,** pues la misma sentencia brinda los elementos para encontrar acreditada la afectación del contrato de seguro, respecto a la sección I, de infidelidad y riesgos financieros.

Si el Despacho a su juicio encontró probado que las actuaciones del representante legal de la fiduciaria fueron realizadas de manera fraudulenta y que se trató de conductas delictivas o maliciosas, debe afectarse la citada cobertura, frente a la cual nada se dijo respecto a la disponibilidad de valor asegurado, y, que al margen de esto, tiene un valor asegurado por evento de $ 25,000,000,000, el cual ya fue objeto de afectación de cobertura por estos hechos.

Sobre la valoración de las conductas se dijo en la sentencia:

> *En efecto, están demostradas las inconsistencias del ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS analizadas por el Despacho, la copia de la denuncia penal formulada por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA en contra de ÁLVARO JOSÉ SALAZAR y otros empleados de la sociedad por el manejo irregular de recursos (folios 225 y siguientes), y las declaraciones de LAURA LÓPEZ, representante legal de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA, en donde se constata que se cumple con el presupuesto de la exclusión 3.7 pactada en la póliza, esto es, que la reclamación está "BASADO U ORIGINADO POR CUALQUIER ACTO, ERROR U OMISIÓN DEBIDO A UNA CONDUCTA DELICTIVA, CRIMINAL, DESHONESTA, FRAUDULENTA, MALICIOSA O INTENCIONAL DEL ASEGURADO" .*

Aquí el razonamiento lógico es, si prosperó la exclusión aplicable a la sección tercera — responsabilidad civil — por un hecho "*basado u originado una conducta delictiva, criminal, deshonesta, fraudulenta, maliciosa o intencional del asegurado",* dicho acto se encuadra en la sección primera de infidelidad de empleados, donde precisamente se ampara los ACTOS DOLOSOS COMETIDOS POR CUALQUIER EMPLEADO DEL ASEGURADO, por lo que, deberá condenarse a **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, al reembolso. Ni tiene ningún sentido lógico ni jurídico que el acto se excluya bajo el amparo de responsabilidad civil, que en gracia de discusión se acepta por calificarlo como un acto doloso, pero que a su vez no se reconozca su cobertura bajo la sección primera, bajo la misma óptica de acto doloso, el cual resaltamos, su materialización causó a mi representada una pérdida financiera, es decir, el supuesto de hecho que es objeto de cobertura se encuentra plenamente acreditado.

INAPLICABILIDAD DE LAS EXCLUSIONES PACTADAS RESPECTO AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. CLÁUSULA ABUSIVA.

Como se encuentra acreditado, el fundamento del llamamiento en garantía radica en el hecho de que **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** expidió la PÓLIZA DE SEGURO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS No. 1000099, cuyo asegurado es **ACCIÓN**. En virtud de dicha póliza, **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** está llamada a responder por aquellos eventos que generen un detrimento económico para **ACCIÓN**, conforme a las coberturas otorgadas en el contrato de seguro, así:

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA
ACTOS DESHONESTOS Y FRAUDULENTOS DE LOS TRABAJADORES
EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS, TEMPORALES Y DE FIRMAS
PERDIDAS FUERA DE LOS PREDIOS (TRANSITO)
PERDIDAS POR BILLETES FALSIFICADOS
PERDIDAS POR FALSIFICACION DE TITULOS VALORES
CRIMEN POR COMPUTADOR
MOTIN, CONMOCION CIVIL Y DA¥O MALICIOSO
COBERTURA EXTORSION
EXTENSION DE TERREMOTO PARA VALORES
COBERTURA PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
EXTENSION DE FALSIFICACION
HONORARIOS DE ABOGADOS
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL FINANCIERA
LIMITE AGREGADO ANUAL : $ 50,000,000,000.00
DEDUCIBLES
COBERTURA: ACTOS DESHONESTOS Y FRAUDULENTOS DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS, TEMPOI
PERDIDAS POR BILLETES FALSIFICADOS, PERDIDAS POR FALSIFICACION DE TITULOS VALORES, CRIMEN POR COMPUTADC
EXTORSION, EXTENSION DE TERREMOTO PARA VALORES, COBERTURA PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EXTENSIOI
CIVIL PROFESIONAL FINANCIERA
DEDUCIBLE : 225,000,000.00 $ POR TODA Y CADA PERDIDA,.

La sentencia objeto de apelación tal y como se ha venido desarrollando, encontró probada la exclusión 3.7 aplicable únicamente a la sección tercera del contrato de seguro, en la cual se encuentra el amparo de responsabilidad civil profesional. La citada exclusión establece que el asegurador no responderá por:

> *"3.7. CUALQUIER RECLAMO BASADO U ORIGINADO POR CUALQUIER ACTO, ERROR U OMISIÓN DEBIDO A UNA CONDUCTA DELICTIVA, CRIMINAL, DESHONESTA, FRAUDULENTA, MALICIOSA O INTENCIONAL DEL ASEGURADO O CUALQUIER VIOLACIÓN DE UNA LA LEY POR PARTE DEL ASEGURADO SIEMPRE QUE: (A) LO ANTERIOR SE HAYA ESTABLECIDO MEDIANTE CUALQUIER SENTENCIA, FALLO U OTRO VEREDICTO EJECUTORIADO DICTADO POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE, O (B) CUANDO EL ASEGURADO HAYA ADMITIDO DICHAS CONDUCTAS."*

Esta exclusión es, desde cualquier punto de vista, abusiva, por las razones que expondré a continuación.

La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece en la Parte I, Título III, Capítulo I cuales son las cláusulas y prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas por este órgano, siendo estas cláusulas y prácticas las que afectan el equilibrio contractual o dan lugar a un abuso de la posición dominante contractual.

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., incurre en las prohibiciones que ha establecido la Superintendencia Financiera, toda vez que ha pretendido evadir reiteradamente el pago de las coberturas que otorgó a **ACCIÓN**. Las cláusulas y prácticas abusivas que ha materializado la entidad aseguradora con su negativa al pago se centran en las siguientes:

> *6. CLÁUSULAS Y PRÁCTICAS ABUSIVAS*
>
> *De acuerdo con lo establecido en el literal e) del art. 7 de la Ley 1328 de 2009, las entidades vigiladas deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o que den lugar a un abuso de posición dominante contractual.*

6.1. Cláusulas abusivas

Salvo que medie autorización legal expresa para incorporar este tipo de cláusulas en los contratos que celebren las entidades vigiladas, son abusivas de acuerdo con lo previsto por la Ley 1328 de 2009, las siguientes cláusulas o estipulaciones:

6.1.2. Las que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero.

6.1.6. Las que afectan el equilibrio contractual o dan lugar a abuso de posición dominante contractual. Son ejemplos de estas cláusulas las siguientes:

6.2. Prácticas abusivas.

Se consideran abusivas por parte de las entidades vigiladas, entre otras, las siguientes prácticas:

6.2.4. Invertir la carga de la prueba en caso de fraudes en contra del consumidor financiero.

6.2.55.3 Que la delimitación del riesgo asegurado se realice de manera sencilla, clara y comprensible, de forma que permita a los consumidores financieros identificar si el riesgo que quieren asegurar se encontraría amparado por la póliza, sin tener que acudir a las exclusiones, límites de cobertura o restricciones de ley.

6.2.55.4 Que las exclusiones estén redactadas de forma sencilla, clara y precisa y las mismas tengan un impacto en el valor de la prima, debidamente sustentado actuarialmente.

La entidad aseguradora además de haber establecido una cláusula de exclusión que, de acuerdo con lo dicho por la SFC es claramente es abusiva, púes desligarse del pago de los riesgos que buscaban ser cobijados por el contrato de seguro, también se ha aprovechado de la ambigüedad de cláusula de exclusión en mención para confundir al juzgador.

El despacho en la sentencia dio por probado que el representante legal de **ACCIÓN** en el interrogatorio de parte admitió la ocurrencia de unas conductas delictivas, criminales, deshonestas, fraudulentas, maliciosas o intencionales del asegurado. Sin embargo, esto lo ha afirmado resguardándose en la ambigüedad de dicha cláusula, pues esta no delimita cuales son las condiciones para que el asegurado "admita" la ocurrencia de las conductas. El contrato de seguro no otorga esta claridad y cualquier interpretación que se hiciera debe realizarse en favor del tomador y asegurado en el contrato y aún más, en favor de los beneficiarios de la póliza, que son finalmente los terceros afectados atendiendo a la naturaleza del seguro de responsabilidad civil.

El inciso 2 del artículo 1624 del Código Civil, establece que la ambigüedad que se encuentre en el contrato debe ser interpretada en contra de quien dispuso la cláusula ambigua, que en este caso es **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A**:

"Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella".

La admisión de la conducta no puede entenderse, para el caso de referencia, como las acciones que haya tomado mi representada para contener o mitigar las ocurrencias de unos hechos que no se desprendieron de ella como asegurada, pues diferente hubiese sido si **ACCIÓN** en calidad de asegurada hubiese admitido o permitido las conductas excluidas en el contrato durante la materialización de estas.

Si bien **ACCIÓN** tuvo conocimiento de diferentes hechos presuntamente fraudulentos, los cuales puso en conocimiento de las autoridades competentes mucho después a su materialización, sin que a hoy haya certeza de estos, al no existir decisión judicial que así lo establezca, no puede entenderse bajo ningún supuesto que el cumplimiento de un deber legal y más en cabeza de una entidad vigilada, de poner en conocimiento unos hechos que podrían constituir un delito, sea el elemento para dejar sin efecto una cobertura bajo un contrato de seguro.

Adicionalmente, y relacionado a lo que se ha venido exponiendo, mi representada, frente a la aseguradora tiene la condición de consumidor financiero, en los términos de la Ley 1328 de 2009 y el artículo 78 de la Constitución Política. Por consiguiente, al momento de leerse, interpretarse y aplicarse la exclusión prevista en el literal (B) del numeral 3.7 del clausulado general, el despacho deberá declarar la nulidad o ineficacia por ser completamente abusiva y contraproducente para los derechos que le corresponden a **ACCIÓN** como consumidor financiero.

La cláusula consignada en el literal (B) del numeral 3.7 del clausulado general, es abusiva e ineficaz porque, por su conducto, la compañía aseguradora le traslada al consumidor financiero una serie de cargas que no le corresponden y que solo buscan que ella pueda liberarse de la responsabilidad que le asiste a partir de un entendimiento que puede o no tener el asegurado, sin que él cuente con los elementos de juicio necesarios para hacerlo.

El amparo de responsabilidad civil profesional otorgado en el contrato de seguro establece como cobertura:

> *"EL ASEGURADOR PAGARÁ EN NOMBRE DE CUALQUIER ASEGURADO, LA PÉRDIDA PROCEDENTE DE TODO RECLAMO PRESENTADO EN SU CONTRA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL PERÍODO DE LA PÓLIZA O EL PERÍODO DE DESCUBRIMIENTO (SI FUESE APLICABLE), COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER ACTO PROFESIONAL INCORRECTO, REAL O PRESUNTO, DEL ASEGURADO COMETIDO POR PRIMERA VEZ CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE RETROACTIVIDAD Y ÚNICAMENTE EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL ASEGURADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CONDICIÓN 4.1 DE LA PRESENTE PÓLIZA.".*

Ahora, tal y como se ha expuesto, el mismo contrato de seguro excluye la única cobertura otorgada "*CUANDO EL ASEGURADO HAYA ADMITIDO DICHAS CONDUCTAS",* es decir, la exclusión cercena por completo el objeto del contrato de seguro, de allí, una de las razones de la abusividad de la cláusula, por lo que, debe aplicarse la sanción señalada por el legislador, de ser ineficaz de pleno derecho.

Así, no puede ahora el llamado en garantía pretender liberarse de las obligaciones contractuales que adquirió al amparar el siniestro y de esta forma, debe el despacho interpretar la cláusula en favor de mi representada. Así lo expresó el magistrado Marco António Álvarez en el salvamento de voto al interior del proceso con radicado 11001319900320180121602:

> *"Expresado con otras palabras, si la aseguradora asumió el riesgo por actos profesionales incorrectos, que no tienen que ser delitos, la circunstancia de considerar que sí lo son y cumplir con el deber de denunciar no puede, en mi opinión, calificar como exclusión. Sería tanto como sostener, si se me permite este modo de explicarlo, que la aseguradora le dijo al asegurado: te amparo por los perjuicios que sufras como consecuencia de los actos impropios de tus empleados, pero si tú, en tu fuero, crees que esa conducta es delito y se lo dices a alguien, no te pagaré la indemnización. La exclusión, ello es medular, tiene lugar cuando la conducta constituye un hecho punible ("una conducta delictiva… o cualquier violación de la ley"), si el asegurado la admite, por lo que, si aún no se sabe si en verdad es conducta criminal, el sólo parecer u opinión del agraviado es insuficiente para configurar la exclusión.*
>
> *La interpretación de la que respetuosamente discrepo de alguna manera sugiere que el asegurado debe abstenerse de cumplir con el deber de denunciar, o de expresarle al juez su opinión sobre el alcance de la conducta de la que fue víctima, porque si lo hace no obtendrá el pago del siniestro, aunque la autoridad competente -que debe ser la penal, porque la exclusión se refiere a delitos- no hubiere adelantado juicio de tipicidad, o en el marco de él la descarte."*

Otro de los fundamentos para la declaratoria de ineficacia de la citada cláusula en el contrato de seguro se encuentra en el literal (B) del numeral 3.7 del clausulado general resulta ineficaz conforme a lo previsto en el Literal C) del numeral 2 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

> *"2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:*
>
> *Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva;*
>
> *Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza."*

Finalmente, de conformidad con el artículo séptimo de la ley 1328 de 2009, dentro de las obligaciones especiales de las entidades vigiladas se encuentran las de:

> *c) Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado.*
>
> *e) Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual.*

El asunto antes planteado es un yerro y que pasó por alto el Despacho, por lo que deberá el Tribunal declarar la nulidad o ineficacia de la exclusión prevista en el literal (B) del numeral 3.7 del clausulado general por ser completamente abusiva y contraproducente para los derechos que le corresponden a **ACCIÓN** como consumidor financiero.

Así las cosas, **ACCIÓN** tiene el derecho contractual de exigirle a **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** el reembolso del pago que eventualmente tuviere que hacer como resultado de una sentencia desfavorable, por lo que, en el hipotético caso de no revocarse la sentencia impugnada frente a la responsabilidad principal frente al demandante, deberá revocarse en favor de **ACCIÓN** respecto del llamamiento en garantía formulado pues se encuentra acreditado que hay lugar a la afectación del contrato de seguro.

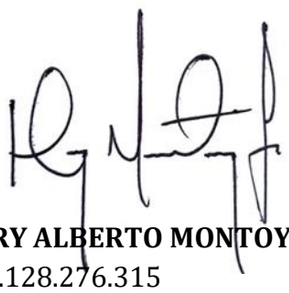
SOLICITUDES

Con base en todo lo anterior, respetuosamente solicito que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado 31 Civil Del Circuito de Bogotá.

En línea con lo anterior, respetuosamente solicito que se emita una nueva sentencia en la que se rechacen íntegramente las pretensiones que fueron formuladas por el Demandante en contra de **ACCIÓN**.

De manera subsidiaria solicito que, en caso de que se confirme la sentencia de primera instancia y/o se decida algún tipo de condena en favor del Demandante, se condene al llamado en garantía **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** a asumir el pago de acuerdo con lo estableció en la póliza de seguros celebrada con mi representada.

De los señores Magistrados, cordialmente,



HARRY ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ
C.C. 1.128.276.315
T.P. 212.976

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO RV: EXP. 110013103038-2021-00254-01. ASUNTO. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 08/08/2023 8:39

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (187 KB)
2023.06.20. Recurso de apelación sentencia.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Diana Méndez Llanos <dianapmendez95@gmail.com>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 8:26
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: EXP. 110013103038-2021-00254-01. ASUNTO. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
M.P. AÍDA VICTORIA LOZANO RICO
E. S. D.

RADICADO. 110013103038-2021-00254-01
DEMANDANTE. CARLOS ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DEMANDADO. RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUIEL
TIPO DE PROCESO. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA

Asunto. Sustentación de reparos del recurso de apelación.

Yo, Diana Paola Méndez Llanos, actuando en calidad de curadora ad litem de la parte ejecutada, presento sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de la referencia.

Anexos:
1. Memorial referenciado.



Diana Méndez Llanos.
Abogada.

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
M.P. AÍDA VICTORIA LOZANO RICO
E. S. D.

RADICADO. 110013103038-2021-00254-01
DEMANDANTE. CARLOS ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DEMANDADO. RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUIEL
TIPO DE PROCESO. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA

Asunto. Sustentación de reparos del recurso de apelación.

Yo, Diana Paola Méndez Llanos, actuando en calidad de curadora ad litem de la parte ejecutada, presento sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de la referencia, así:

I. **SUSTENTACIÓN DE LOS REPAROS CONCRETOS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 1° INSTANCIA.**

1. **El Despacho profirió sentencia anticipada con fundamento en una causal que no aplicaba al caso concreto, pues la parte ejecutada solicitó el decreto de pruebas, y tal solicitud nunca fue resuelta.**

El Despacho de primera instancia profirió sentencia anticipada con fundamento en la causal establecida en el numeral 2° del artículo 278 del Código General del Proceso, consistente en que no existan pruebas pendientes por practicar. Sin embargo, en el escrito de contestación de demanda en el que la suscrita apoderada radicó memorial proponiendo excepciones de mérito, solicitó como medio de prueba la declaración de la parte ejecutada, así:

> *"Solicito respetuosamente se sirva decretar como prueba la declaración de parte del señor* ***RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUIEL****, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.556.500, quien recibirá notificaciones a la dirección de correo electrónico de la suscrita apoderada, para que se pronuncie sobre los hechos de la demanda, y aporte los documentos relacionados con sus manifestaciones."*

Sin embargo, tal solicitud probatoria nunca fue resuelta por el Despacho en el curso de la primera instancia, razón por la cual no resultaba procedente dictar sentencia anticipada con fundamento en la causal 2° del artículo 278 del Código General del Proceso, pues no se había decidido previamente acerca del decreto de los medios de prueba solicitados, más cuando el medio de prueba de la declaración de parte era de pertinente y útil para acreditar las excepciones de mérito propuestas.

Ahora bien, el Despacho en la decisión a través de la cual resolvió la solicitud de aclaración señala que no había lugar a decretar dicho medio de prueba toda vez que el ejecutado nunca se hizo presente al proceso, y por esa razón se le nombró curador ad litem. Al respecto, debe indiciarse que el hecho de

que el ejecutado no haya comparecido al proceso, no implica que durante el curso del proceso no pudiera ser ubicado por la curadora, para que rindiera declaración de parte.

En todo caso, el Despacho de primera instancia debió adoptar una decisión en la que resolviera la solicitud probatoria, de forma previa a la sentencia anticipada.

2. **El título ejecutivo carece de claridad, lo cual impide que pueda ser objeto de ejecución.**

El artículo 422 del Código General del Proceso establece los requisitos generales de los títulos ejecutivos, así:

> *"ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO.* ***Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles*** *que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184."*

De forma clara, el artículo 422 del Código General del Proceso exige que las obligaciones contenidas en los títulos ejecutivos sean claras, expresas y exigibles. Adicionalmente, el artículo 671 del Código de Comercio establece los tres requisitos específicos de la letra de cambio como título valor, así:

> *"ARTÍCULO 671. <CONTENIDO DE LA LETRA DE CAMBIO>. Además de lo dispuesto en el artículo 621, la letra de cambio deberá contener:*
> *1) La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;*
> *2) El nombre del girado;*
> *3)* ***La forma del vencimiento****, y*
> *4) La indicación de ser pagadera a la orden o al portador.*

Con respecto al tercer requisito, esto es, la forma de vencimiento, el artículo 673 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 673. <POSIBILIDADES DE VENCIMIENTOS EN LAS LETRAS DE CAMBIO>. La letra de cambio puede ser girada:*
> *1) A la vista;*
> *2) A un día cierto, sea determinado o no;*
> *3) Con vencimientos ciertos sucesivos, y*
> *4****) A un día cierto después de la fecha o de la vista****"*

Teniendo claridad acerca de los requisitos generales del título ejecutivo, es factible señalar que, una vez analizado el contenido de la letra de cambio que la parte actora pretende hacer valer como título ejecutivo, se evidencia que este se creó y se venció en la misma fecha, esto es, el 5 de julio de 2018, circunstancia que hace que desaparezca la claridad y exigibilidad del título, como requisitos de este.

Pues, no se explica cómo una persona celebra un negocio por una cantidad alta, en este caso $185.000.000, para recibirlos en calidad de préstamo y devolverlos el mismo día.

Al tiempo, no se evidencia ninguna constancia de cobro por la parte ejecutante a la parte ejecutada con fecha posterior a la creación y vencimiento del título valor, y llama la atención que se haya realizado un préstamo a una persona de la que no se conoce siquiera el domicilio.

En el expediente no obra ningún documento que dé cuenta de que el dinero se destinó a un negocio instantáneo. Por esa razón, se considera que el título carece de claridad y exigibilidad. Además, el artículo 673 del Código de Comercio señala que cuando el vencimiento del plazo se pacte en día cierto, este debe ser diferente a la fecha de creación.

Por último, no se tiene certeza acerca de la autenticidad de la firma de la parte ejecutante, y si esta es la misma que reposa en la letra de cambio, circunstancia que deberá dirimirse en el curso del proceso.

I. SOLICITUD:

Teniendo en cuenta los reparos antes señalados y la sustentación de estos, solicito al Despacho **REVOQUE** la sentencia de primera instancia en su integridad, y en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda y declare probadas las excepciones de mérito propuestas en la contestación de demanda.

Sin otro particular,



Diana Paola Méndez Llanos
C.C. No. 1.067.943.083 de Montería
T.P. No. 348.097 del C. S. de la J.

RV: REPARTO QUEJA 041-2021-00387-01 DR LUIS ROBERTO SAUREZ GONZALEZ

Margarita Parrado Velasquez <mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/08/2023 18:03

Para:David Santiago Parra Diaz <dparradi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (521 KB)
OFICIO REMISORIO OCCES23-GB0772.pdf; F11001310304120210038701Caratula20230811102155.pdf; 6922.pdf;

dav

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MARGARITA PARRADO VELÁSQUEZ
Escribiente
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: Mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 10:30 a. m.
Para: Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REPARTO QUEJA 041-2021-00387-01 DR LUIS ROBERTO SAUREZ GONZALEZ

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha : 11/ago./2023

GRUPO RECURSOS DE QUEJA

CD. DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
003	6922	11/ago./2023

REPARTIDO AL DOCTOR (A)

LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ

IDENTIFICACIO	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
83010351551	GRUPO CBC SAS		01
90020273001	MULTIMODAL EXPRESS SAS Y OTROS		02

OBSERVACIONES: 11001310304120210038701

BOG305SR
dlopezr

FUNCIONARIO DE REPARTO

11001310304120210038701

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ**

Procedencia : 041 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310304120210038701

Instancia : Segunda Instancia

Clase de Juicio : Ejecutivo Singular

Recurso : Queja

Grupo : 32

Repartido_Abonado : REPARTIDO

Demandante : GRUPO CBC SAS

Demandado : MULTIMODAL EXPRESS SAS Y OTROS

Fecha de reparto : 11/08/2023

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Oficina Apoyo Juzgado 04 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Bogota - Bogota D.C. <ofiapoyoj04ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 15:58
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 11001310304120210038700

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá

4120210038700

De manera respetuosa me permito remitir el proceso de referencia No. 11001310304120210038700, perteneciente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá con el fin de que sea resuelto el recurso de Apelación en el efecto Devolutivo.

Cordialmente

Área de Comunicaciones
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá

Atentamente

Área de correspondencia.

Oficina de apoyo para los juzgados de Ejecución Civil circuito de Bogotá
Cra. 10 N° 14-30 piso 3 (edificio Jaramillo Montoya)
JER

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

LINK EXPEDIENTE 11001310304120210038701

República de Colombia
Rama Judicial

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil - Secretaria

LIQUIDACIÓN DE COSTAS

PROCESO No 11001220300020230004100

MAGISTRADO(A) Dr. MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ

11 de agosto de 2023.- En la fecha procedo a efectuar la liquidación de costas ordenada en providencia anterior, así:

AGENCIAS EN DERECHO:	$ $3’000.000.oo
OTROS:	$ 0
	==========
TOTAL:	$$3’000.000.oo =

SON: TRES (3) MILLONES DE PESOS .-

P/ El Secretario.



OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

14/08/2023 En la fecha se fija el presente proceso en lista por el término legal para efectos del traslado a las partes de la anterior liquidación de costas, por el lapso de tres días que vencen el 17/08/2023, conforme lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso y artículo 110 ibídem.

P/ El Secretario



OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA PELAEZ ARENAS RV: RAD.: 11001 3103 001 2020 00342 01 // REF: Declarativo de SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE- contra OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 10/08/2023 12:49

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (202 KB)

2023 08 10 Sustentación Apelación.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA PELAEZ ARENAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: NC ASESORIAS JURÍDICAS S.A.S <ncasesoriasjuridicas@hotmail.com>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 12:34
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Andrés Caballero <a.caballero@caballerochaves.com>
Asunto: RAD.: 11001 3103 001 2020 00342 01 // REF: Declarativo de SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE- contra OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO.

Honorables Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C -Sala Civil-
Mag. Pte. JUAN PABLO SUAREZ OROZCO
E. S. D.

REF: Declarativo de **SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE-** contra **OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO.**

RAD.: 11001 3103 001 **2020 00342** 01

NORBERTO CALDERÓN ORTEGÓN, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, encontrándome dentro de la oportunidad legal, me permito allegar escrito de **SUSTENTACIÓN** del recurso de apelación que surte dentro del expediente de la referencia.

En cumplimiento de lo ordenado por el numeral 14 del artículo 78 del Código General del proceso, me permito remitir copia del correo y sus anexos al apoderado de la contraparte.

Atentamente

NORBERTO CALDERÓN ORTEGÓN
Abogado
ncasesoriasjuridicas@hotmail.com
Carrera 13 #32 -51. Bloque 3. Oficina 503 - Bogotá D.C
Tel. 3002186
Cel. 313 4183149

Honorables Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C -Sala Civil-
Mag. Pte. JUAN PABLO SUAREZ OROZCO
E. S. D.

REF: Declarativo de **SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE-** contra **OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO.**

RAD.: 11001 3103 001 **2020 00342** 01

NORBERTO CALDERÓN ORTEGÓN, actuando en mi mi calidad de apoderado judicial de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, encontrándome dentro de la oportunidad legal, respetuosamente manifiesto a su Despacho que, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 12 de la ley 2213 de 2022 del Código General del Proceso, **RATIFICO** los argumentos expuestos en audiencia celebrada el día 15 de junio de 2023 en contra de la sentencia dictada dentro del presente asunto, por lo que para todos los efectos de la presente **SUSTENTACIÓN** respetuosamente solicito a su Despacho tenerlos en cuenta al momento de resolver el presente recurso, y que se resumen así:

.- No es objeto de discusión la designación como depositario provisional por cuenta de la demandante. No obstante lo anterior, si es objeto de discusión si por cuenta de la demandante se cumplieron las cargas que a ella le correspondían.

En este sentido se tiene que desde el escrito de contestación de la demanda se indicó los siguiente:

.- En la diligencia realizada el 13 de febrero de 2014 al inmueble identificado con matrícula 282-17413, se evidenció que se trata del Lote de terreno denominado La Primavera ubicado en Calarcá-Quindío, de propiedad de Yasmin Caicedo Rosas. Para el momento de la diligencia no se hizo presente quien la atendiera y no se logró tener información de contacto del responsable del bien. Se dejó constancia de que se trataba de un predio de 40 hectáreas y 4234 metros cuadrados sembrados en plátano y sin edificaciones aparentes.

.- Según acta de entrega de los inmuebles identificados con matrícula 282-23801 y 282-4603, allegada como anexo de la demanda se advierte que, para el 13 de febrero de 2014 se hicieron presentes en el predio denominado finca Los Almendros y Los Guaduales en la vereda / barrio La Picota, ubicada en Calarcá-Quindío, los señores Octavio Retrepo Castaño (quien recibe el bien), Israel Morales en representación de la DNE (quien entrega el bien) y el señor Armando Trujillo Jaramillo (quien atiende la diligencia practicada en la finca Los Almendros), y cuyo presunto propietario era Roberto Cortez Londoño.

En el texto del acta mencionada se dejó la descripción general de cada uno de los predios y una descripción del inmueble allí construido y de siembra de plátano (banano), dejando constancia que este pertenecía a un arrendatario, y que otra parte de la finca se dedicaba a la ganadería también de propiedad de un arrendatario.

Se dejó constancia así mismo que, no se aportaron copias de los contratos de arrendamiento.

.- En la diligencia realizada el 13 de febrero de 2014 al inmueble identificado con matrícula 282-40546, se evidenció que se trata del inmueble denominado Hacienda Volga, ubicado en Calarcá-Quindío, de propiedad de Roberto Londoño Cortes. Esta diligencia fue atendida por el señor Luis Ancizar Andrade, quien se identificó como el mayordomo. Se registró en el acta el nombre de José Guillermo Gómez Jaramillo como responsable de bien. Se dejó constancia de que se trataba de un predio que consta de 252.8 hectáreas, de ellas, 80 fanegadas en plátano, una casa acondicionada para los trabajadores, una construcción con tanque de agua y tres baños.

.- En la diligencia realizada el 27 de marzo de 2014 al inmueble identificado con matrícula 378-4952, se evidenció que se trata del inmueble denominado La Esneda o finca

Tranquilandia, ubicada en el Municipio de Palmira-Valle del Cauca, de propiedad de María del Carmen Arrollo Izquierdo. Esta diligencia fue atendida por la señora Beatriz Eugenia Jiménez, quien se identificó como arrendataria. Se dejó constancia de que se trataba de una finca que consta de seis construcciones, con la descripción de cada una de ellas. Los señores Octavio Retrepo Castaño (quien recibe el bien), Israel Morales en representación de la DNE (quien entrega el bien).

.- En la diligencia realizada el 27 de marzo de 2014 al inmueble identificado con matrícula 378-44790 y 378-44791, allegada como anexo de la demanda se advierte que, para el 27 de marzo de 2014 se hicieron presentes en los predios La Perla y El Alcazar, ubicados en el Municipio de Palmira-Valle del Cauca los señores Octavio Retrepo Castaño (quien recibe el bien), Israel Morales en representación de la DNE (quien entrega el bien). Inmueble de propiedad de Libardo Álvarez Meyendorff y Libia Ossa Castaño, atendió la diligencia el señor Rosember Hernandez. Se dejó constancia de que se trataba de un predio que cuenta con una casa principal de 2 pisos, kiosco de dos niveles y demás equipamiento debidamente relacionado, en mal estado, y que el terreno de la propiedad está sembrado en pasto.

.- Finalmente en la diligencia realizada el 27 de marzo de 2014 al inmueble identificado con matrícula 378-108540, se evidenció que se trata del inmueble denominado Lote 22 Bloque 4, etapa 1/ vereda Ayacucho, Condominio Campestre La Acuarela, ubicado en Municipio de Palmira-Valle del Cauca, de propiedad de Luz Marina Duque Gallego. Esta diligencia fue atendida por la señora Ofelia Gallego de Duque, quien se identificó como madre la propietaria. Se dejó constancia de que se trataba de un predio que consta de una casa de dos pisos y que se describió en el texto del acta.

En lo que tiene que ver con las funciones y responsabilidades a cargo del Depositario Provisional o secuestre, se reitera que, la Sociedad de Activos Especiales – SAE SAS- **NO CUMPLIÓ** con la carga que a ella le impone la ley como administradora, de expedir la Resolución de designación y mucho menos con la carga de informar a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes su decisión sobre el depositario provisional.

Se dijo así mismo desde el texto de contestación que:

.- Mediante comunicación de fecha 14 de marzo de 2014, dirigida al Dr. Jorge Hernando Cáceres Duarte, Gestor de Sociedades de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, con constancia de radicación de la misma fecha ante la esta entidad, se presentó un primer informe de los inmuebles ubicados en Calarcá-Quindío y se allegó copia de las comunicaciones remitidas al arrendatario depositante de las fincas El Volga, Los Almendros y otras, y si allego así mismo el texto del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor Roberto Londoño Cortez y Jesús María Gómez Escobar.

.- Mediante comunicación de fecha 05 de mayo de 2014, dirigida al Dr. Álvaro Augusto Pinzón Guarín, Gestor de Inmuebles Rurales de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, con constancia de radicación de la misma fecha ante la esta entidad, se presentó un primer informe de los inmuebles identificados con matrículas 378-44790 y 378-44791, pertenecientes a Libardo Álvarez y Libia Ossa, en el que se indicó que para esa fecha solo se había tenido un contacto telefónico con el supuesto arrendatario, pero sin noticias posteriores.

También se informó en relación con el inmueble identificado con matrícula 378-108540 de propiedad de la señora Luz Marina Duque, que para esa fecha y luego de tener varias comunicaciones con quien se acreditó como el abogado del señor Meyendorff, no había sido posible concretar acuerdo para el pago de arrendamiento.

Finalmente se informó en relación con la finca Tranquilandia, que se había obtenido fotografía del contrato de arrendamiento que se tenía sobre el inmueble, indicando que se trataba de un contrato leonino, pues tenía duración de 5 años contados a partir de año 2013, con un canon mensual de $400.000 mil pesos y un supuesto pago anticipado de dos años y una cláusula de prórroga automática.

De acuerdo con lo anterior se solicitó a la entidad se impartiera instrucciones a fin de lograr el desalojo de estos.

.- Mediante comunicación de fecha 01 de julio de 2014, dirigida al Dr. Álvaro Augusto Pinzón Guarín, Gestor de Inmuebles Rurales de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, con constancia de radicación de fecha 15 de julio de 2014 se remitió informe en relación con los inmuebles de propiedad de los señores Roberto Londoño Cortez, Yasmín Caicedo Rosas y Luz Marina Duque, indicando que los mencionados inmuebles se encontraban ocupados según contrato de arrendamiento ya existente a fecha de incautación que habían sido remitidos a la DNE el 14 de marzo de 2014 con radicado número 20142050408052, y se informó que la facturación del arrendamiento se realizaría a partir del mes de julio bajo la modalidad de mandato comercial, a través de la sociedad COQUINVALLE S.A.

Se informó así mismo, que la finca La Primavera de propiedad Yasmín Caicedo Rosas no se encontraba en producción.

En relación con los inmuebles ubicados en el Municipio de Palmira, se reiteró la solicitud de pronunciamiento, sobre las acciones a seguir para su desalojo por la inconveniencia del contrato celebrado y porque los ocupantes de los otros inmuebles "se han escabullido para la celebración de los contratos de arrendamiento".

.- Mediante comunicación de fecha 9 de julio de 2014, dirigida al Dr. Álvaro Augusto Pinzón Guarín, Gestor de Inmuebles Rurales de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, se dio alcance al informe anterior allegando oficio que a su turno se había remitido de la finca Tranquilandia, solicitando revisar el clausulado del contrato.

.- Mediante comunicación del 01 de septiembre de 2014, dirigida al Dr. Mauricio Solorzano Arenas, Gerente Jurídico de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., se informó del envío de varios escritos remitidos por el señor Octavio Restrepo Castaño al Dr. Álvaro Augusto Pinzón G, por los cuales se informó sobre la situación de los predios La Ruana y La Perla, indicado que la situación seguía incólume y se allegó así mismo la respuesta de la comunicación remitida al arrendatario de la finca Tranquilandia.

.- Mediante comunicación del 04 de noviembre de 2014, dirigida al Dr. Mauricio Solorzano Arenas, Gerente Jurídico de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., con constancia de radicación de la misma fecha, y luego de hacer un resumen de las actuaciones surtidas en relación con los inmuebles ubicados en el Municipio del Palmira-Valle del Cauca, desde la fecha de incautación, se solicitó se impartieran instrucciones sobre las acciones a emprender, advirtiendo desde ese momento que

> ***"La situación sigue incólume, pero sigue pesando sobre mí la responsabilidad de rendir informes sobre bienes a los que no tengo acceso y que no puedo disponer libremente de ellos"***

.- Mediante comunicación del 03 de diciembre de 2014, dirigida al Dr. Juan Carlos Gutiérrez Cubillos, Técnico Dos de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., se dio respuesta a requerimiento del 27 de noviembre de 2014, rindiendo el informe correspondiente a los inmuebles objeto de la presente demanda. En la misma comunicación se advirtió y solicito que:

> *"Teniendo en cuenta que mi participación como depositario provisional en las matrículas inmobiliarias descritas en el numeral 2 "inmuebles ubicados en el municipio de Palmira" obedeció a la inasistencia del encargado inmobiliario para la fecha de la diligencia, respetuosamente* ***solicito a su Despacho me sea relevado de las mismas y en consecuencia se designe a quien o quienes me hayan de reemplazar para hacer entrega de los bienes****"*

.- Mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014, dirigida al Dr. Juan Carlos Gutiérrez Cubillos, Técnico Dos de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., remitida vía correo certificado, se allegó en medio físico el informe de gestión con corte al 30 de noviembre de 2014.

.- Mediante comunicación del 18 de junio de 2015, dirigida al Dr. Mauricio Solórzano Arenas, Vicepresidente Jurídico de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., con constancia de radicado de fecha 22 de junio de 2015, nuevamente se informa de la entrega de varios inmuebles rurales y de las varias comunicaciones remitidas a la Dirección Nacional de Estupefacientes y a la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S.,

con las que se había informado las dificultades para la administración para los inmuebles, reiterando la solicitud de ser relevado como depositario provisional de todos los inmuebles, como se había manifestado al Dr. Juan Carlos Gutiérrez Cubillos desde el 03 de diciembre de 2014.

.- Mediante comunicación del 13 de agosto de 2015, dirigida a la Dra. Nubia Esperanza Vargas Mora, Gerente Bienes Muebles Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., se solicitó el relevo como depositario provisional, exceptuando los predios de Calarcá - Quindío.

.- Mediante comunicación con sello de salida del 09 de octubre de 2015, remitida por la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., al señor Octavio Restrepo Castaño, se informó que se llevaría a comité la solicitud de revocatoria de los inmuebles que se relacionaron en la misma comunicación y que corresponde exactamente a los mismos que son objeto de la presente demanda. Se informó en esta comunicación que

> *"… Le será notificado el correspondiente acto administrativo que se profiera y se le informará el procedimiento para la (sic) realizar la entrega de los bienes, suscribiendo las actas correspondientes."*

.- Mediante la Resolución 377 del 16 de octubre del año 2015 la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S, resolvió remover del cargo de depositario provisional al señor Octavio Restrepo Castaño, respecto de los inmuebles que son objeto de la presente demanda aplicando las causales 1 y 6 contenidas en la misma Resolución así:

> "*Del ítem 1 al 120, corresponden a las aprobaciones de la Sesión N° 23 y del ítem 121 a 189, corresponden a las aprobaciones de la Sesión N° 25 con las siguientes Causales de Remoción:*
>
> *1. El depositario Provisional No reporta Informes de Gestión ante la Gerencia de Bienes Inmuebles adscrita a la Vicepresidencia de Bienes Muebles e Inmuebles.*
>
> *2. (…)*
>
> *6. Depositario solicitó renuncia a la administración de los bienes inmuebles por las dificultades que ha presentado en la gestión de la administración…."*

.- Mediante comunicación de fecha 14 de enero de 2016, remitida a la Dra. María Virginia Torres de Cristancho, Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., vaticinando precisamente la situación que hoy se está presentando, el señor Octavio Restrepo Castaño, manifestó que " La causal invocada con el numero 1 corresponde a no rendición de cuentas lo que no es cierto ya que con respecto a los predio ubicados en Calarcá (Quindío), una vez recibidos se procedió efectuar un contrato de mandato…, lo que ha permitido una explotación eficiente de los mismos.

Los informes se han enviado mensualmente a la Gerencia de Sociedades de lo cual se dio aviso a la Vicepresidente de Inmuebles y Muebles, en comunicación del 2015/10/20 (radicado CE2015-023708) y previamente a Inmuebles Rurales, en particular al Dr. Juan Carlos Gutiérrez, Técnico II del Área Comercial, según oficio del 3 de diciembre de 2014.

Con respecto a los predios, ubicados en la ciudad del Palmira (Valle del Cauca), desde su recibo se informó en comunicación dirigida al Dr. Álvaro Augusto Pinzón Guarín, de las dificultades legales y prácticas para ejercer la administración de los mismos (radicado 20142050601292 del 2014/05/06) y en particular en julio 1 de 2014 se le rindió el informe de gestión.

> *".."*
>
> *Me ha motivado esta comunicación, por que como bien pueden dar fe en la Gerencia de Sociedades Activas, mi gestión ha seguido los lineamientos fijados inicialmente por DNE en liquidación y con posterioridad por la S.A.E., entre ellos el cumplimiento de las obligaciones y en particular el rendimiento de cuentas.*

El hecho de que se invoque para mi relevo una causal que contraría estos postulados, ***puede tener consecuencias negativas a futuro tales como investigaciones disciplinarias****, …"* (Resaltado fuera de texto)

De conformidad con lo anterior, resulta evidente que mi representado**, SI** rindió informes periódicos de las gestiones adelantadas en relación con los cuatro (4) inmuebles que le fueron entregados en su calidad de secuestre o depositario, informando así mismo de todas las dificultades que habían imposibilitado una administración diligente de los inmuebles ubicados en el Municipio de Palmira, respecto de los cuales no se logró percibir suma alguna de dinero que debiera ser entregada a la administradora.

Así mismo se informó que la administración de los tres (3) inmuebles ubicados en el Municipio de Calarcá- Quindío, de propiedad del señor Roberto Londoño Cortés se estaba adelantado a través de un contrato de mandato, celebrado con la sociedad COQUINVALLE S.A.

Respecto de esta sociedad, conviene mencionar que también fue objeto de medida por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante Resolución 0208 del 20 de febrero de 2014, habiéndose designado como depositario provisional al Señor Octavio Restrepo Castaño, acto que fue debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Cali el día 4 de marzo de 2014.

Tomando en consideración que, como se explicó en los informes rendidos a la aquí demandante, los inmuebles de propiedad del señor Roberto Londoño Cortés y la finca La Primavera de propiedad de Yasmin Caicedo Rosas (que no se encontraba en producción) son colindantes con los de propiedad de la sociedad COQUINVALLE S.A., se decidió que la facturación del arrendamiento y los gastos en que se incurriesen a partir del mes de julio de 2014 se realizarían a través de esa sociedad.

Esta facturación y los gastos se ven reflejados en los estados financieros presentados en las reuniones de la Asamblea de Accionistas de la sociedad COQUINVALLE S.A., en las cuales se contó con la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes inicialmente y de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., quienes actuaron como presidentes de cada una de ellas, en atención precisamente a su condición de administrador, en los términos contenidos en la Resolución 0208 del 20 de febrero de 2014 ya citada.

Ahora bien, con ocasión de la prueba de oficio decretada por el a quo, la demandante allegó el expediente que conservaba en relación con los bienes objeto de la presente demanda.

Una vez revisado el mencionado expediente, se pudo evidenciar, en primer lugar, que la demandante no conservaba copia de las comunicaciones que le fueron remitidas por el demandado, por virtud de las cuales se ponía de presente toda la situación relatada en ele escrito de contestación, ni respuestas a las mismas, y tampoco se encontró requerimiento para que rindiera informes de unos bienes que no le habían sido entregados físicamente.

Lo que si se encontró fue una solicitud remitida por la SAE con destino al Ministerio de Justicia, para practicar diligencia de desalojo, de la cual no se conoce respuesta, pero que tampoco fue valorada por el a quo.

Estas pruebas no fueron tenidas en cuenta por El Despacho, ya que se pretende imponer una carga al demandado Octavio Restrepo Castaño, cuando lo cierto es que fue él quien solicitó, en reiteradas oportunidades la legalización, a través de la respectiva resolución, de su designación, de manera que pudiera actuar en consecuencia, peticiones que nunca fueron atendidas, por lo que fue el propio demandado quien decidió solicitar la remoción de su cargo.

Al depositario le queda imposible cumplir la carga de rendir cuentas de unos bienes que ni siquiera se le fueron entregados de manera física ni material, que le permitiera a él disponer y administrar en debida forma.

Esa es la gran diferencia entre la "simple designación" y la posibilidad de administrar, obligación que surge cuando existe una entrega material, carga que, se itera, nunca se cumplió por parte de La Sociedad de Activos Especiales -SAE-

En los anteriores términos dejo sustentado el recurso de apelación formulado en contra de la sentencia objeto de impugnación

PETICIÓN

Con base en los argumentos expuestos, respetuosamente solicito a su Despacha se sirva **REVOCAR** la sentencia objeto de impugnación, negando en consecuencia las pretensiones de la demanda.

Atentamente,



NORBERTO CALDERÓN ORTEGÓN
C.C. No. 79.563.656 de Bogotá D.C.
T.P. No. 131.927 del C. S. de la J.
E mail: ncasesoriasjuridicas@hotmail.com
Carrera 13 #32 -51. Bloque 3. Oficina 503
Tel. 3002186

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: RAD. 11001319900120224189501 - SUSTENTACIÓN RECURSO

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 4/08/2023 3:48 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (686 KB)
RECURSO DE APELACION 22-41895 FINAL.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Legal Counsel <legal@astorgacorp.com>
Enviado: viernes, 4 de agosto de 2023 14:53
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juridico <juridico@astorgacorp.com>
Asunto: RAD. 11001319900120224189501 - SUSTENTACIÓN RECURSO

Acción de Protección al Consumidor
Radicado No. 22-41895
Demandante: DAVID CAMILO LATORRE MONROY, EDGAR MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA y EMMA JULIANA GACHANCIPÁ CASTELBLANCO.
Demandado: FUNDACIÓN CODERISE "EN LIQUIDACION"

Reciba un cordial saludo,

Se radica memorial para el proceso de la referencia.

Atentamente,
DANIEL FELIPE MONTIEL VERA
CC: 1.022.366.466 de Bogotá
T.P: 301.900 del C.S.J

HONORABLES;
MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
E.S.D

REF: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA

Acción de Protección al Consumidor
Radicado No. 22-41895
Demandante: DAVID CAMILO LATORRE MONROY, EDGAR MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA y EMMA JULIANA GACHANCIPÁ CASTELBLANCO.
Demandado: FUNDACIÓN CODERISE "EN LIQUIDACION"

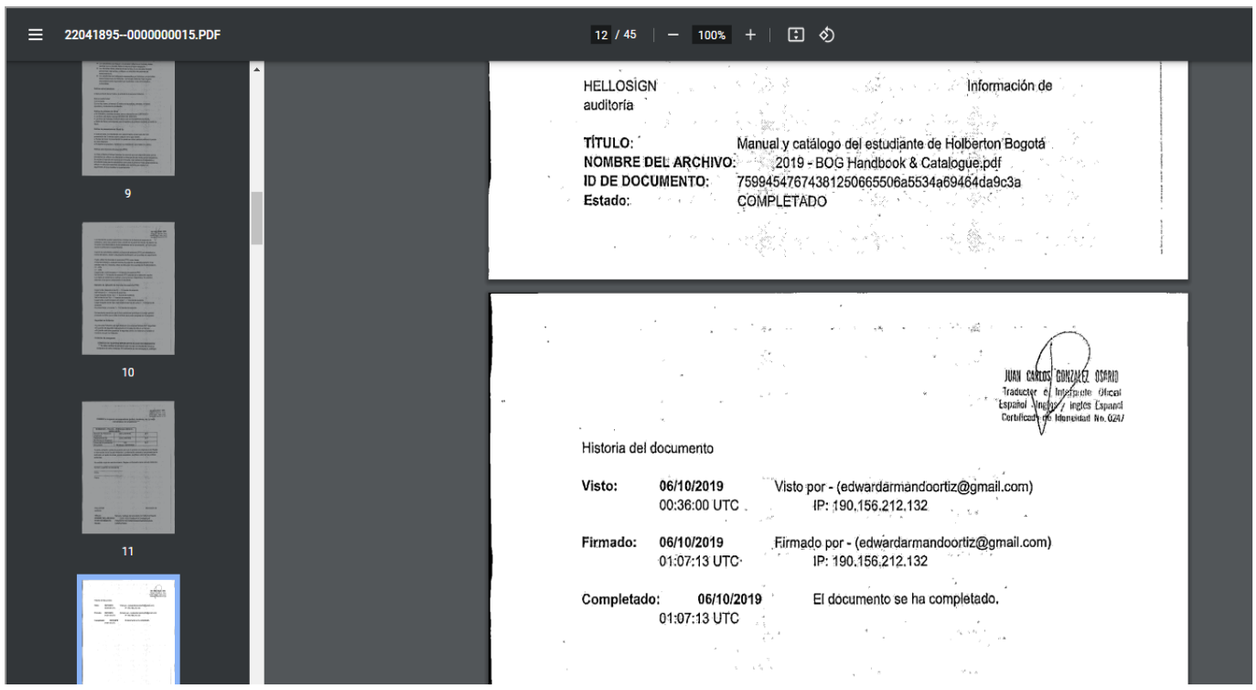
DANIEL FELIPE MONTIEL VERA, Apoderado judicial de la sociedad demandada, comedidamente y estando en término legal, me permito sustentar el recurso de apelación interpuesto en audiencia del día 25 de mayo de 2023, en el proceso 2022-41895, recurso el cual sustentó en los siguientes términos:

Sea lo primero manifestar, y como introducción al presente recurso de apelación, es menester indicar que la sentencia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, carece de fundamento legal y fáctico, puesto que ostenta irregularidades en materia procesal, y no cuenta con sustento probatorio eficiente y contundente, que bajo la legalidad conllevara al pleno convencimiento, como lo indica el artículo 280 del C.G del P, el cual es preciso en indicar que la sentencia deberá limitarse al examen crítico de los elementos probatorios, con una explicación razonada sobre las conclusiones de estas, lo cual me permito señalar, que los defectos de la sentencia proferida hacen carecer de estos lineamientos, los cuales me permito indicar; que el recurso de apelación va encaminado a revocar los numerales quinto al décimo segundo, de la sentencia, para lo cual como sustento de los reparos indicó:

1. **<u>DEFECTO FÁCTICO EN LO QUE RESPECTA A LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA:</u>**

Como sustento de este reparo me permito señalar que la sentencia es afectada por este defecto, por cuanto como lo indicó el despacho, se tuvo en cuenta el catálogo aportado con una traducción “oficial”, y que en la misión de este, se indicaba que se prestaba un servicio académico, sin embargo, en lo que respecta a esta situación cabe resaltar que en el interrogatorio realizado al representante legal se encuentra demostrado que no siempre se entregaba el catálogo antes de suscribir el AIC, adicionalmente el catálogo aportado está viciado dicho elemento probatorio puesto que el Despacho seguramente inducido en error por los demandantes, evidencia que el catálogo corresponde al suscrito por el señor Edwar Ortiz, el cual en el presente proceso no es demandante, ni le asiste derecho alguno para que esta prueba se tuviera como válida y se encuentra en el radicado 22041895--0000000015.PDF, y esto se evidencia en la siguiente imagen:

“(…)



(…)"

Es así, que la sentencia atacada, se encuentra afectada por el defecto fáctico el cual la Corte Constitucional ha sido enfática y lo ha establecido en reiteradas ocasiones en los siguientes términos:

"(…)

3.4.3. Defecto fáctico*, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.*[1]

(…)"

Cabe resaltar que todos los elementos probatorios aportados tienen calificación de propietarios los señores JORGE ZAFRA Y EDWARD ORTIZ, quienes no son demandantes en el presente proceso, y no fue probado por los demandantes, ni su apoderado qué relación tienen o qué intereses tienen en el presente proceso.

Finalmente, al ser esta la única prueba conducente y que sirve de motivación para proferirse la sentencia que genera un grave perjuicio al bueno nombre o prestigio de la demandada, y del programa Holberton, si bien es cierto el Juez de primera instancia indica que la carga de la prueba estaba en cabeza de la demandada y como sustento jurídico cita el artículo 167 del C.G.P, pero es equivocado por cuanto el demandante probó sus hechoS y pretensiones con documentos ajenos a los demandantes, CON PRUEBAS QUE SON DE CARÁCTER inconducentes, razón por la cual carece de legalidad dicha sentencia.

Razón por la cual deberá el superior revocar la sentencia en su integridad y en consecuencia declarar no probadas las pretensiones de la demanda, y reconociendo que no existe vulneración por parte de la demandada.

2. RELACIÓN DE CONSUMO ENTRE EL DEMANDANTE Y LA SOCIEDAD DEMANDADA.

En lo que respecta este ítem la sentencia proferida por el despacho indica que la relación de consumo estaba derivada del AIC (Acuerdo de Ingreso Compartido), el cual no corresponde con la realidad y con lo que se probó en el proceso, ya que la etapa contractual

[1] Sentencia SU-453 de 2019 Corte Constitucional -- expediente T-7.136.220 -- Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER

no inicia con el AIC, y esto se probó por cuanto mediante los testimonios de los demandantes y del representante legal de la demandada, como con el AIC aportados, ya que en este contrato solo se indica la creación de un acuerdo para la financiación del programa, mas no indica oferta o programa a ejecutar.

Con extrañeza se probó como lo indica el artículo 167 del C.G.P, que el AIC no tiene la fuerza de generar una relación de consumo ya que este solo se limita a un acuerdo para honrar la obligación contraída con el catálogo, el cual no se conoció por parte de los demandantes la existencia de dicho catálogo ya que los demandantes nos los aportaron, siendo esto una indebida apreciación del despacho, la carga de la prueba estaba en cabeza del demandante, quien en el interrogatorio que se le realizó confesó la existencia del catálogo como contrato que da origen a la celebración del contrato AIC, el cual como se indicó nace de la celebración del catálogo y de la imposibilidad de sufragar en un solo pago el valor del programa, así las cosas correspondía al demandante demostrar que existía una relación de consumo, pero el despacho fue inducido en error y mal interpreto la finalidad del contrato AIC, tanto así que admitió pruebas que no correspondían a los demandantes.

Sin embargo, revisado el Acuerdo de Ingresos Compartidos no se advierte algún tipo de relación de consumo como consecuencia de la prestación de un servicio, todo lo contrario, los mismos se asemejan a meros acuerdos de pago, propios de la voluntad de los contratantes, enmarcada en los artículos 1502 y siguientes del Código Civil.

Esto conlleva a que no se probó por la parte demandante que dicho contrato constituye una relación de consumo siendo así que el demandante no ostenta la legitimidad por activa lo que infiere que no le asiste derecho.

3. PRUEBA DEL DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO

En lo que versa este reparo a la sentencia atacada, es evidente que El Despacho de manera caprichosa determinó que para el caso del señor David Latorre, se suspendió la plataforma la cual no es cierto, ya que los 24 meses del programa vencían en el mes de enero 2021, es decir que como se indicó para el mes de la suspensión temporal, el señor Latorre ya había culminado su programa, y no tenía acceso por obvias razones, adicionalmente se aceptó por parte del demandante que había solicitado su homologación con las labores que estaba realizando en los últimos nueve meses del programa, lo que demuestra que por voluntad propia el señor Latorre decidió no continuar con los proyectos de la aplicación, y no es culpa atribuible al demandado.

Sobre el señor Edgar rodríguez, es un caso aparte porque si bien es cierto dentro del proceso se probó que no se le ha realizado descuento alguno, es decir las gestiones de cobro no se han llevado a cabo de acuerdo a lo pactado en el Acuerdo de Ingreso Compartido, el cual el señor Edgar Rodríguez se acogió sin embargo si debe cancelar proporcional a su desarrollo del entrenamiento, situación está que el despacho no interpreto de manera separada, únicamente se basó en el lapso de unos días de suspensión pero, no tuvo en cuenta que el señor rodríguez había disfrutado de una parte del entrenamiento y no había cancelado suma alguna.

4. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RESPECTO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

Sobre esta apreciación del despacho es evidente que abiertamente es extralimitado, puesto que determinar que la cláusula penal consagrada en la cláusula vigésima primera, es abusiva va en contra de todos los principios contractuales determinados en el ordenamiento civil y comercial, ahora bien, en cláusula seguida se determinó que:

"(…)

***DÉCIMA NOVENA Carácter de individualidad**. **La invalidez o inexigibilidad total o parcial de una cláusula de este CONTRATO no afectará de modo alguno la validez y exigibilidad de las demás cláusulas o disposiciones del mismo**. Sin embargo, las*

Partes harán todo lo que esté a su alcance para lograr el propósito de la cláusula o disposición no válida o inexigible a través de una nueva estipulación válida y exigible.

(…)"

Si bien es cierto las partes aquí acordaron que la invalidez de una cláusula no declara ineficaz de todo derecho el contrato base de la presente acción, al contrario, permite que se busquen mecanismos alternos para la conservación del contrato y que no es más que la materialización de la voluntad de las partes, como lo ha indicado la H Corte Suprema de Justicia en tal modo:

"(…)

Al respecto, tiene dicho esta Corporación que "[p]ara averiguar el querer de los obligados, a más del tenor literal de sus cláusulas y las directrices establecidas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, 5° y 823 del Código de Comercio, debe tener en cuenta el intérprete diversos factores que inciden en el acuerdo, tales como las condiciones particulares de los intervinientes y su proceder en los diferentes momentos contractuales, esto es, antes, durante y después de su celebración, de tal manera que se refleje de manera precisa el ánimo que los inspiró a vincularse" (CSJ, SC del 24 de julio de 2012, Rad. n.° 2005-00595-01; se subraya).

En esa misma línea de pensamiento, la Sala, con anterioridad, había puntualizado, en cuanto hace a la "recíproca intención de las partes", que para "reconstruirla, precisarla e indagarla" es forzoso apreciar, entre muchos otros factores, el "entorno cultural, social, económico, político, geográfico y temporal en una perspectiva retrospectiva y prospectiva, esto es, considerando además de la celebración, ejecución y conducta práctica negocial, la fase prodrómica, de gestación o formación teniendo en cuenta que '…los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato' (cas. civ. junio 28/1989)" (CSJ, SC del 7 de febrero de 2008, Rad. n.° 2001-06915-01; se subraya).[2]

(…)"

Es así como el a quo desconoce la voluntad de las partes máxime que como pretensiones se fue expreso al determinar que la cláusula que se pretendida declarar como abusiva corresponde a la décima octava, la cual fue debidamente declarada legal, sin embargo, de manera *ultra petita,* se procede a declarar la abusividad de la cláusula correspondiente a la penalidad.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano en materia civil, el artículo 1602 y 1603 establecen la fuerza de ley existente para los temas de los contratos, así como su ejecución, consagrando taxativamente que:

(…)

*"**ARTÍCULO 1602**: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.*

***ARTÍCULO 1603**. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella"*

(…)

Como se menciona en nuestro ordenamiento jurídico, los contratos sin importar su naturaleza son LEY PARA LAS PARTES, es decir, lo allí estipulado es la base de la relación contractual, bilateral y consensual que se generara al suscribirse o pactarse, es por este motivo que existe una validez jurídica desde su firma, obligando a las partes al cumplimiento puntual y taxativo de lo allí acordado, sin embargo en dichos contratos no solamente se

[2] Sentencia Sc5185-2021 Radicación N.° 54405-31-03-001-2013-00038-01 M.P Álvaro Fernando García Restrepo, Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil.

pactan obligaciones para las partes, sino que por el contrario se puede como es el caso se determine su modo de resolución de conflictos o su forma de ejecución el cual así está determinado en él.

Por último, derivado del contrato de ingreso compartido solo se encuentra una obligación de hacer y es financiar un entrenamiento que se determinó en otro contrato denominado catálogo, en el cual, si se determina que programa se ejecuta, es así que no corresponde con la realidad al determinar que la cláusula penal es desbalanceada para el consumidor puesto que esta cláusula como se indicó es meramente voluntad de las partes.

Con base en todo lo anteriormente expuesto solicito al Honorable Magistrado, se sirva revocar la sentencia proferida por la superintendencia de industria y comercio, Delegatura Asuntos Jurisdiccionales, de fecha 25 de mayo de 2023, y en consecuencia se sirva declarar no probadas las pretensiones de la demanda y su correspondiente condena en costas y agencias en derecho.

Cordialmente



DANIEL FELIPE MONTIEL VERA
CC: 1.022.366.466 de Bogotá
T.P: 301.900 del C.S.J

REPARTO QUEJA 002-2021-00243-03 DR JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/08/2023 10:46 AM

Para:**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**
CC:Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (712 KB)
BDSS01-#114428898-v1-2023-01-640619-000.PDF; F11001319900220210024303Caratula20230811103846.pdf; 6923.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

Rama Judicial
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO
ASIGNACION POR CONOCIMIENTO PREVIO

11001319900220210024303

FECHA DE IMPRESION 11/08/2023 PAGINA 1

GRUPO **RECURSOS DE QUEJA**

REPARTIDO AL MAGISTRADO	DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS	004	6923	11/08/2023

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	PARTE
9006650071	JCRB INVERSIONES SAS	DEMANDANTE
79602776	CARLOS NADRES PEÑUELA MONTOYA	DEMANDADO

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
PRESIDENTE

Elaboró: dlopezr
BOG305SR

11001319900220210024303

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS**

Procedencia : 002 Superintendencia Circuito

Código del Proceso : 11001319900220210024303

Instancia : Segunda Instancia

Clase de Juicio : Verbal

Recurso : Queja

Grupo : 32

Repartido_Abonado : ABONADO

Demandante : JCRB INVERSIONES SAS

Demandado : CARLOS NADRES PEÑUELA MONTOYA

Fecha de reparto : 11/08/2023

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 7:54
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: (REPARTO)////RV: 2023-01-640619-000 Ref.: Recurso de apelación.

De: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES <correocertificadonotificaciones@4-72.com.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 7:27
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 2023-01-640619-000 Ref.: Recurso de apelación.



Señor(a)

rprocesosctsbta

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, quien ha depositado su confianza en el servicio de correo electrónico certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente notificación electrónica.

Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes, especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el **contenido del mensaje** recibido, usted debe **hacer click** en el enlace que se muestra a continuación:

4-72 Correo y mucho más

Ver contenido del correo electrónico
Enviado por SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Correo seguro y certificado.
Copyright © 2023
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.
Todos los derechos reservados.

¿No desea recibir más correos certificados?

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación electrónica.

Correo Electrónico Certificado

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

QUEJA 002-2021-00243-03 DR JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS LINK DEL PROCESO 11001319900220210024303

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ RV: 11001310302620180036003 | Apelación adhesiva - Comcel S.A.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 03/08/2023 15:14

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

5 archivos adjuntos (5 MB)

1. Reparos Comcel.pdf; 2. Reparos M. Hermosa.pdf; 3. Correo electrónico 23 de abril de 2021.pdf; 4. Restitución de los inmuebles.pdf; 20230803 Apelación adhesiva .pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Adriana Lopez (Lopez Abogados) <alopez@lopezabogadoscol.com>
Enviado: jueves, 3 de agosto de 2023 15:06
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: laurab@lopezabogadoscol.com <laurab@lopezabogadoscol.com>; 'Johana Villanueva Rodriguez' <johana.villanueva@claro.com.co>; 'Jose Ivan Yepes' <joseyepes@yepesjimenezlegal.com>
Asunto: 11001310302620180036003 | Apelación adhesiva - Comcel S.A.

HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
M.P. Dr. Marco Antonio Álvarez Gómez.
E.S.D.

Proceso	Ejecutivo – A continuación de verbal de restitución de inmueble arrendado
Radicación	11001310302620180036003
Demandantes	Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa
Demandada	Comcel S.A.
Asunto	**Apelación adhesiva**

ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, identificada como aparece al pie de mi antefirma, en calidad de apoderada judicial de **COMCEL S.A**. en el proceso de la referencia, me permito radicar el memorial del asunto junto con los cuatro (4) anexos anunciados.

Agradezco confirmar el recibido de la presente comunicación.

Atentamente,

ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ
C.C. No. 52.051.679
T.P. No. 85.250 del C.S. de la J.

HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
M.P. Dr. Marco Antonio Álvarez Gómez.
E.S.D.

Proceso	Ejecutivo – A continuación de verbal de restitución de inmueble arrendado
Radicación	11001310302620180036003
Demandantes	Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa
Demandada	Comcel S.A.
Asunto	**Apelación adhesiva**

ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de **COMCEL S.A**. en el proceso de la referencia, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 322 del Código General del Proceso, me permito ADHERIR al recurso de apelación interpuesto por los DEMANDANTES contra la sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá (en adelante **Sentencia Apelada**), que fue admitido por este H. Tribunal mediante auto del 28 de julio de 2023 y notificado el 31 de julio de 2023 por estado electrónico, de acuerdo con lo siguiente:

I. LA SENTENCIA APELADA

En la Sentencia Apelada, el Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá declaró probada la excepción de pago formulada por mi representada y decretó la terminación del proceso por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.

PRIMERO: Declarar probada la excepción de pago cumplimiento de la sentencia propuesta por la parte demandada, conforme a lo expuesto en esta audiencia.

SEGUNDO: Decretar la terminación del proceso por pago total de la obligación.

TERCERO. Como consecuencia se ordena el levantamiento de las medidas cautelares, de existir embargo de remanentes póngase a disposición de la sede judicial que lo requiera.

CUARTO: De existir dineros para entregar a la parte demandada, por secretaria procédase teniendo en cuenta para ello las consideraciones expuestas.

QUINTO: Costas a cargo de la parte actora, como agencias se fija la suma de $4.521.000 pesos.

El *a quo* encontró probada la excepción del pago total de la obligación, porque concluyó acertadamente que el alcance de la obligación del pago de cánones a cargo de mi representada, estaba sujeto a la entrega del inmueble, hecho que no ocurrió por culpa de los demandantes. A continuación se transcriben las consideraciones realizadas por el *a quo* en audiencia del 4 de julio de 2023:

> *Entonces en el caso concreto la parte demandada, el medio exceptivo que propone es la excepción de pago, y como sustento de ella ha demostrado su imposibilidad de cumplir con la entrega de los inmuebles, es decir que se generó un incumplimiento de la demandada por el proceder de la demandante, pero no por responsabilidad respecto de la entrega del inmueble, que como se vio, estuvo dispuesto a cumplir en las datas ya indicadas por el despacho.*
>
> *Es que definitivamente no se puede desligar que lo que había que pagar era solamente dinero, que la obligación era solo dinero, como a mi parecer o entender se pudo entender desde el punto de vista de la parte demandante. Lo que había también era una obligación de dar, dar haciendo la entrega el cuerpo cierto, del inmueble, y coligado a ello, hasta ahí, si se hacía la entrega que fue ofrecida, pues claramente hasta ahí iban los arriendos.*

Como consecuencia de estas consideraciones, el *a quo* concluyó que la obligación de pago de cánones a cargo de Comcel se extendió hasta el 5 de noviembre de 2021, fecha en la que quedó en firme la sentencia que puso fin al proceso de restitución anterior al ejecutivo:

> *Entonces, teniendo en cuenta estos derroteros, estas explicaciones impartidas por el despacho, queda claro el pago de los cánones de arrendamiento hasta el 5 de noviembre de 2021, fecha en la que el Tribunal confirmó la decisión de negar la procedencia de una segunda instancia para el caso que nos ocupa, y por tanto los arriendos solicitados en el procedimiento ejecutivo contemplado en el artículo 306, no tienen sustento como ya lo examinamos.*

En consecuencia, el Juzgado 26 Civil del Circuito, al resolver la solicitud de aclaración formulada por Comcel, señaló que la obligación del pago de cánones a cargo de Comcel se extendió hasta el 5 de noviembre de 2021:

> 4-. Se interpone recurso por la parte actora. formula reparos y se tomará los 3 días para sustentar.
>
> 5-. La parte demandada solicita complementación sobre la fecha del pago de los dineros.
>
> 6-. El Despacho aclara que se debe tomar el pago hasta la fecha del 5 de noviembre de 2021.
>
> 7-. EL apoderado hace manifestación sobre los dineros que debe devolver su poderdante.
>
> 8-. El Despacho concede la apelación en el efecto SUSPENSIVO, secretaria remita el expediente digital al Tribunal para el trámite.

De acuerdo con lo anterior, los DEMANDANTES deben devolverle a COMCEL los cánones de arrendamiento que fueron consignados a órdenes del juzgado por mi representada desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022[1]. Así quedo claro en la audiencia del 4 de julio de 2023, cuando el Despacho resolvió la solicitud de aclaración del apoderado de las DEMANDANTES:

> **APODERADO DEMANDANTES (MIN 30:00) ¿***Señor juez, conforme a la parte motiva que usted está establecido en esta sentencia, entonces*

[1] Fecha de la última consignación realizada por Comcel a órdenes del juzgado en cumplimiento del artículo 384 del CGP, con la finalidad de ser oídos en el proceso.

está manifestando que los dineros del 22 de noviembre a enero de 2022, 2021 a enero del 2022, deben ser devueltos por parte de Mario Hermosa.?

JUEZ (MIN 30:18) *Eso es lo que consider… eso es lo que quedó claro doctor. Esa es la obligación.*

APODERADO DEMANDANTES (MIN 30:26) *Sí pues, con mayor razón, pues obviamente tanto en la parte emotiva como resolutiva del presente de fallo dictado por usted, pues interponemos el recurso correspondiente y como lo manifesté previamente, manifestaremos por escrito los argumentos jurídicos…"*

II. ALCANCE DE LA APELACIÓN ADHESIVA

Así, es preciso aclarar que mi representada **NO TIENE REPAROS frente a las decisiones contenidas en el aparte resolutivo de la Sentencia Apelada**, que declaró probada la excepción de pago, y decretó la consecuente terminación del proceso.

Tampoco tiene COMCEL reparo alguno contra la obligación de reembolso de cánones a cargo de los DEMANDANTES, desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022.

En los términos del parágrafo del artículo 322 del CGP, mi representada interpone el recurso de apelación **únicamente frente a los puntos en que ésta fue desfavorable** para Comcel.

Así, el único reparo que tiene Comcel frente a la Sentencia Apelada, es que el *a quo* debió considerar que la obligación de pago a cargo de Comcel se extendió **solamente hasta el 21 de abril de 2021 y no hasta el 5 de noviembre de 2021,** como se verá continuación:

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El a quo debió concluir que la obligación de pago de cánones de arrendamiento a cargo de Comcel era exigible solamente hasta el **7 de abril de 2021, fecha en la que quedó en**

firme la orden de entrega del inmueble y no desde el 5 de noviembre de 2021, fecha en la que adquirió firmeza la sentencia del 7 de abril de 2021, puesto que **la orden de restitución contenida en la sentencia del 7 de abril no fue objeto de apelación.**

En la Sentencia Apelada, el *a quo* consideró, de manera adecuada, que la obligación a cargo de Comcel, que consistía en el pago de cánones, estaba sujeta a la entrega del inmueble, hecho que dependía únicamente de los DEMANDANTES, quienes se negaron injustificadamente a recibir.

Sin embargo, consideró que la obligación de entregar – y la correspondiente obligación de recibir – adquirió firmeza con el auto notificado por este Tribunal el 5 de noviembre de 2022, en el que se rechazaron de manera definitiva los recursos de apelación presentados por las partes del proceso de restitución.

Lo que dejó de lado el *a quo* es que la orden de restitución del inmueble no fue objeto de apelación, por lo que quedó en firme desde la notificación en estrados de la sentencia del 7 de abril de 2021. Veamos:

Con la sentencia proferida el 7 de abril de 2021, el Despacho dio por terminado el contrato de arrendamiento, **ordenó la restitución de los inmuebles objeto de arrendamiento,** y estableció a cargo de COMCEL la obligación de pagar los cánones de arrendamiento desde enero de 2018 hasta la entrega del inmueble. Resolvió:

> ***TERCERO****, condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si la demandada no hace entrega de forma voluntaria comisiónese a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá y/o Inspecciones de Policía. Secretaría libre los oficios correspondientes.*

Durante la audiencia de instrucción y juzgamiento del 7 de abril de 2021, Comcel interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia proferida. En el escrito de reparos concretos, se indicó expresamente que Comcel cumpliría de manera voluntaria con la orden de restitución contenida en la sentencia del 7 de abril de 2021 y que por lo tanto, **la orden de restitución de los inmuebles no era objeto de apelación por parte de Comcel:**

I. Alcance del recurso de apelación interpuesto

1. **COMCEL S.A.** no tiene reparo alguno contra la orden de restitución contenida en el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada, en el que se ordena la restitución de los inmuebles de propiedad de los demandantes, así:

> *En tercer lugar Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si la demandada no hace entrega de forma voluntaria comisiónese a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá y/o Inspecciones de Policía. Secretaría libre los oficios correspondientes."*

2. Por lo tanto, Comcel procederá, en cumplimiento de lo ordenado, a restituir los inmuebles dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia.
3. El recurso de apelación interpuesto en audiencia del 7 de abril de 2021 **(en adelante "Recurso de Apelación")** se circunscribe única y exclusivamente frente a las decisiones contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO,

Por su parte, **los DEMANDANTES interpusieron recurso de apelación únicamente frente a la decisión del Despacho de no condenar a Comcel al pago de la cláusula penal** contemplada en el contrato de arrendamiento:

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REF: RESTITUCIÓN INMUEBLE ARRENDADO
RADICADO: 2018 – 00360
DE: MARIO HERMOSA PUYO Y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
CONTRA: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN NUMERAL 5 (NO PAGO CLAUSULA PENAL) SENTENCIA DEL 07 DE ABRIL DE 2021.

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 80.095.614 de Bogotá, con Tarjeta Profesional 186.701 del C. S de la J, actuando en como apoderado de la parte actora, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito interponer recurso de apelación en contra del numeral 5 de la sentencia proferida el 07 de abril de 2021 por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito, en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 320 del Código General del Proceso, es claro que el numeral TERCERO de la sentencia no fue objeto de apelación, y por lo tanto, se encuentra en firme desde el 7 de abril de 2021.

Se encuentra probado, y así lo consideró el *a quo,* que con posterioridad a la sentencia del 7 de abril de 2021, COMCEL manifestó mediante numerosos memoriales su voluntad de entregar el inmueble, obteniendo una respuesta negativa por parte de los DEMANDANTES. Por lo anterior, es claro que la obligación del pago de cánones a cargo de COMCEL no se extendió hasta el 5 de noviembre de 2021 sino hasta el 12 de abril de 2021, puesto que fue a partir de esa fecha (5 días con posterioridad a la sentencia y con el primer requerimiento de entrega realizado por COMCEL) que los DEMANDANTES se constituyeron en mora de recibir.

Por lo tanto, la orden de devolución de los dineros a cargo de los DEMANDANTES **debe abarcar no únicamente los cánones que se consignaron desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022, sino TAMBIÉN los cánones que Comcel consignó a ordenes del despacho desde el 12 de abril de 2021 hasta el 5 de noviembre de 2021.**

IV. SOLICITUD

De acuerdo con los fundamentos anteriormente expuestos, solicito respetuosamente al H. TRIBUNAL que:

REVOQUE la aclaración No. 6 realizada frente a la sentencia del 4 de julio de 2023 y en su lugar aclare que se debe tomar el pago **hasta la fecha del 12 de abril de 2021.**

V. PRUEBAS DOCUMENTALES

Allego los siguientes documentos que YA OBRAN EN EL EXPEDIENTE:

1. Recurso de apelación interpuesto por COMCEL contra la sentencia objeto de ejecución, del 7 de abril de 2021.

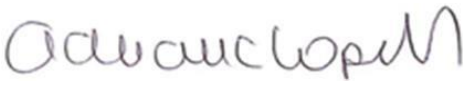
2. Recurso de apelación interpuesto por los DEMANDANTES contra la sentencia objeto de ejecución del 7 de abril de 2021.

3. Correo del 23 de abril de 2021 enviado al apoderado de los DEMANDANTES

4. Solicitud de entrega mediante secuestro presentada por COMCEL el 23 de abril de 2021 ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

VI. ANEXOS - Lo anunciado en el acápite V.

Atentamente,



ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ
C. C. No. 52.051.679
T. P. No. 85.250 del C. S. de la J.

Rad. 2018 – 00360 Memorial de reparos contra la sentencia del 7 de abril de 2021

Laura Bermudez <laurab@lopezabogadoscol.com>

Lun 12/04/2021 12:36 PM

Para: Juzgado 26 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: joseyepes@yepesjimenezlegal.com <joseyepes@yepesjimenezlegal.com>; Andres Felipe Tamayo Caro <Andres.Tamayo@claro.com.co>; MARIA CAMILA DE BRIGARD <mcb@lopezabogadoscol.com>; alopez@lopezabogadoscol.com <alopez@lopezabogadoscol.com>

1 archivos adjuntos (335 KB)

20210409 Reparos en concreto Sent. 1ª .pdf;

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
E.S.D.

Proceso: Verbal de restitución de tenencia a título de arrendamiento.
Radicado: 2018 – 00360
Demandante: Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa
Demandado: Comcel S.A.
Asunto: Formulación de reparos en concreto frente a la sentencia proferida en audiencia del 7 de abril de 2021

Por instrucciones de ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, apoderada judicial de **COMCEL S.A.**, me permito radicar memorial del asunto.

Cordial Saludo,

LÓPEZ ABOGADOS

Laura Isabel Bermúdez V.
Carrera 7 No. 74-56 Oficina 705
Tel. (57) (1) 3124329268
Bogotá - Colombia.
laurab@lopezabogadoscol.com

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
E.S.D.

Proceso: Verbal de restitución de tenencia a título de arrendamiento
Radicado: 2018 – 00360
Demandante: Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa
Demandado: Comcel S.A.
Asunto: Formulación de reparos en concreto frente a la sentencia proferida en audiencia del 7 de abril de 2021

ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de **COMCEL S.A**. con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, presento los reparos concretos frente a la sentencia que fue dictada en audiencia del 7 de abril de 2021 en el presente proceso y frente a la cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación **(en adelante "Sentencia Apelada")**

I. Alcance del recurso de apelación interpuesto

1. **COMCEL S.A.** no tiene reparo alguno contra la orden de restitución contenida en el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada, en el que se ordena la restitución de los inmuebles de propiedad de los demandantes, así:

> *En tercer lugar Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si la demandada no hace entrega de forma voluntaria comisiónese a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá y/o Inspecciones de Policía. Secretaría libre los oficios correspondientes."*

2. Por lo tanto, Comcel procederá, en cumplimiento de lo ordenado, a restituir los inmuebles dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia.
3. El recurso de apelación interpuesto en audiencia del 7 de abril de 2021 **(en adelante "Recurso de Apelación")** se circunscribe única y exclusivamente frente a las decisiones contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO,

SEXTO y OCTAVO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada en los que respectivamente (i) se negaron las excepciones de mérito propuestas por Comcel, (ii) se declaró la terminación del Contrato de Arrendamiento celebrado entre las partes por incumplimiento de Comcel, (iv) se condenó a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento desde enero de 2018 hasta la fecha de entrega de los inmuebles, (vi) no se tuvo en cuenta el dictamen pericial presentado por Comcel y (viii) se condenó en costas a Comcel. Por lo anterior, este memorial contiene los reparos frente a las decisiones anteriormente mencionadas, y frente a las consideraciones que las fundamentaron.

II. Reparos en concreto

a. En cuanto a la declaratoria de terminación del contrato.

4. En la parte resolutiva de la Sentencia Apelada, el Despacho declaró la terminación del contrato de arrendamiento suscrito entre Comcel, Mario Hermosa y Vivian Fernández en abril de 1998 **(en adelante "el Contrato")** por incumplimiento de Comcel, así:

> *"En segundo lugar, declarar terminado el contrato de arrendamiento celebrado por Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa como arrendadores y Comunicación Celular -Comcel como arrendatario, contrato de abril de 1998, por incumplimiento de la parte demandada, tal como se plasmó en esta audiencia."*

5. Como consecuencia de tal declaración, condenó a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento, desde el 1º de enero de 2018 hasta la fecha de entrega del inmueble:

> *"En cuarto lugar, se condena a la Demandada al pago de los arriendos correspondientes al periodo que abarca desde el primero de enero de 2018 hasta la fecha en que se efectivice la entrega. Como se han realizado los correspondientes depósitos, una vez se encuentre en firme esta decisión por Secretaría hágase entrega de los títulos de depósito judicial a la demandante por dicho lapso."*

6. En la Sentencia Apelada, el Despacho consideró que el Contrato no se terminó el 31 de diciembre de 2017 y que su terminación se encontraba sujeta a la condición de la entrega de los inmuebles con las obras terminadas que se habían determinado para su entrega.
7. La interpretación del despacho sobre la fecha de terminación del Contrato se fundamentó en una valoración errada de las pruebas documentales y del

interrogatorio de parte rendido por el señor Mario Hermosa en la audiencia inicial del 21 de octubre de 2019 (**en adelante la "Audiencia Inicial").**

8. Al interpretar las comunicaciones escritas intercambiadas por las partes y las actas por ellas suscritas con posterioridad a la comunicación de la terminación del contrato enviada por Comcel el 23 de marzo de 2017, el juez consideró que las partes habían condicionado la fecha de la terminación del contrato a la entrega de los inmuebles con las obras pactadas terminadas. Sin embargo, de la lectura de esas comunicaciones no es posible concluir que las partes hubieran sujetado la fecha de la terminación a la finalización de las obras. Por el contrario, lo que se concluye de las pruebas documentales mencionadas es que las partes aceptaron que la fecha de la terminación del contrato sería el 31 de diciembre. Las pruebas analizadas por el Despacho evidencian que lo que ocurrió es que, como consecuencia de la terminación del contrato, las partes se pusieron de acuerdo en las condiciones para el cumplimiento de una obligación derivada de la terminación del mismo, que es la restitución del inmueble. Una clara muestra de lo anterior es el texto del Acta Final de Adecuaciones suscrita por las partes en la que señalan:

> *"En la ciudad de Bogotá, hoy 27 de octubre de 2017, se reunieron por un lado MARIO HERMOSA PUYO, identificado con la cédula de ciudadanía 160.056 de Bogotá, EL ARRENDADOR, y por otro lado Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, quien en su nombre actúa Nayibe Castañeda, gerente administración de inmuebles, identificada con la cédula 52.80 9.026, de Bogotá, EL ARRENDATARIO, acuerdan las siguientes condiciones finales de entrega para el inmueble ubicado en la Calle 90 número 13 guión 23, oficina 601 y 604 y parqueaderos 15 y 26, Bogotá,* ***por motivo de la terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en abril de 1998 No. 1169."***

9. En el interrogatorio de parte en la Audiencia Inicial, el señor Hermosa, señaló cuáles fueron los hechos posteriores a las comunicaciones en que las partes acordaron la fecha de terminación, sin mencionar que se haya opuesto de alguna forma a la fecha acordada para la terminación. Por el contrario, aceptó que la fecha del 31 de diciembre la fecha pactada para la terminación del contrato de arrendamiento:

> *Audiencia inicial del 21 de octubre de 2019. 10:56:35 a 10:58:29.*
>
> *[Pregunta del Juez]: "¿Qué comunicaciones tuvieron con Comcel después de las comunicaciones que ustedes enviaron terminando el contrato de arrendamiento en marzo de 2017."*
>
> *Mario Hermosa: "El día 23 de mayo hubo por lo menos 4 reuniones con el fin de aclarar cuáles eran las especificaciones que yo le daba a Comcel para que la restitución se*

> *hiciera a mi satisfacción. En cada una de esas reuniones se especificaban las cosas pero daba la impresión de que Comcel quería hacerme la misma pregunta varias veces a ver si mi respuesta cambiaba, en cada una de esas reuniones que se hacían yo enviaba comunicaciones a Comcel aclarándole los puntos. Y eventualmente en octubre del año 2017 se desarrolló la reunión final para los acuerdos y aún después había puntos que aclarar que yo le mandé comunicaciones a Comcel. Lo que ocurrió entonces es que Comcel dio inicio a obras que me imagino eran tendientes a la restitución del edificio.* ***Yo estaba obrando de buena fe haciendo todos los planes para el 31 de diciembre recibir las oficinas****. Me parecía que la fecha era un poco como difícil que un 31 de diciembre se hiciera una restitución…"*

10. Es claro que el señor Hermosa aceptó la fecha del 31 de diciembre de 2017 como la fecha de terminación del contrato y que los acuerdos posteriores versaron sobre la forma de la restitución, como consecuencia de la terminación del contrato.
11. Y es que las pruebas mencionadas no pueden interpretarse como lo hizo el Despacho, porque la Ley es clara al determinar que la restitución de un inmueble arrendado es una obligación que se deriva de la terminación del contrato, y no una condición para que éste se termine. El Código Civil establece sobre la restitución de la cosa arrendada:

> ***ARTICULO 2005. <RESTITUCION DE LA COSA ARRENDADA POR TERMINACION DEL CONTRATO >.*** *El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento.*
>
> *Deberá restituir en el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo.*
>
> *Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario.*
>
> *En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable.*

12. Lo establecido en el Código Civil fue replicado por las partes en el Contrato:

> ***RECIBO Y ESTADO :*** *Los arrendatarios declaran que han recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado conforme al inventario que hace parte del mismo, y que en el mismo estado los restituirán al Arrendador a la terminación del Contrato, o cuando éste haya de cesar por alguna de las Cláusulas previstas, salvo el deterioro proveniente del tiempo y uso legítimo. (...)*

13. Las partes del Contrato no sujetaron la terminación del mismo al cumplimiento de las condiciones determinadas para la restitución de los inmuebles. Comcel nunca aceptó tal condición y una modificación de las obligaciones del Contrato en tal sentido hubiera requerido de la aceptación expresa de Comcel.

14. Comcel aceptó las condiciones establecidas por los arrendadores para el cumplimiento de una obligación derivada de la terminación del contrato. No se puede confundir la terminación del contrato con el cumplimiento de la obligación de restitución del inmueble que surge luego de que el contrato termina, como lo señala el citado artículo 2005 del Código Civil.[1]
15. Por lo tanto, se debe concluir que la interpretación hecha por el Despacho sobre la fecha de la terminación del Contrato no es adecuada de acuerdo con las pruebas recaudadas durante el proceso, ni con Contrato ni con la Ley.
16. En ese sentido, no podía el Despacho declarar la terminación del Contrato, puesto que éste terminó, de acuerdo con lo establecido por las partes, el 31 de diciembre de 2017.
17. Tampoco podía el Despacho condenar a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento con posterioridad a su fecha de terminación, que fue el 31 de diciembre de 2017.

b. En cuanto a la condena al pago de los cánones de arrendamiento hasta la fecha de entrega del inmueble.

18. En todo caso, y de considerarse que la terminación del Contrato estaba sujeta a la condición de la entrega de los inmuebles y de las obras acordadas, el Despacho debió considerar que el Contrato se terminó, al menos, el 17 de septiembre de 2019, fecha en la que Comcel entregó las zonas comunes del edificio y las llaves de los inmuebles objeto del Contrato a la administración del Edificio Gales.
19. Para esa fecha, y como se probó a través del dictamen pericial, de los testimonios y de las fotografías contenidas en el Acta No .04 de la Asamblea General de Copropietarios del Edificio Gales del 17 de septiembre de 2019, tanto las zonas comunes como los inmuebles objeto del Contrato cumplían con los requerimientos solicitados por los demandantes para su entrega, y se pusieron a disposición de los arrendadores, tal como lo establece el Código Civil:

[1] Tribunal Superior de Tunja. Sentencia del 10 de diciembre de 2020. Rad. 2019-0465 M.P. José Horacio Tolosa.

> ***ARTICULO 2006. <FORMA DE RESTITUCION>.*** *La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves, si las tuviere la cosa.*

20. Por lo tanto, y de manera subsidiaria, si se considerara que el Contrato no se terminó el 31 de diciembre de 2017, se debió considerar que las supuestas condiciones para su terminación ocurrieron al menos el 17 de septiembre de 2019. Por lo tanto, la condena al pago de los cánones no podía extenderse a una fecha posterior al 17 de septiembre de 2019.
21. El Despacho debió considerar entonces que los arrendadores se encuentran en mora de recibir el inmueble al menos desde el 17 de septiembre de 2019, a pesar de estar los inmuebles listos y de acuerdo con lo acordado por las partes para sus adecuaciones.

c. Frente al incumplimiento de las obligaciones de Comcel.

22. En la Sentencia Apelada, el Despacho consideró que la demora en las obras para la restitución de los inmuebles objeto del Contrato le eran atribuibles exclusivamente a Comcel:

> *"Las obras no pudieron ser terminadas por la actuación de Comcel, porque es que el sellamiento no es culpa del demandante, ya que las adecuaciones, obvio, incluían zonas comunes y zonas privadas y para las primeras se requería de licencia solicitada por quien? Pues por quien las hizo, no por la otra parte, porque es que una persona no está legitimada sin hacer una obra para ir a solicitar una licencia. "Lo normal, lo lógico, lo entendible, lo que tiene sentido común, es que quien solicita una licencia es quien vaya hacer una obra, no quien no la hace. ¿Qué sentido tiene solicitar una licencia quien no hace una obra? Eso no suena sino a disculpa."*

23. El Despacho consideró que el sellamiento de las obras era únicamente atribuible a Comcel por haber realizado las obras sin licencia.
24. Sin embargo, el Despacho no tuvo en cuenta que las modificaciones iniciales del edificio existieron durante casi 20 años sin que los arrendadores se pronunciaran al respecto, a pesar de tener facultades que, tanto como propietarios del inmueble (y copropietarios de las zonas comunes), como arrendadores[2], les permitían realizar las conductas tendientes a evitar o al menos a sanear oportunamente las

[2] El contrato preveía como causal de terminación la ejecución de mejoras no autorizadas en los inmuebles objeto de arrendamiento.

infracciones urbanísticas que con posterioridad fueron declaradas mediante trámite administrativo.

25. El Despacho también ignoró las pruebas documentales y testimoniales que se practicaron en el proceso, que demuestran que los arrendadores fueron quienes solicitaron las obras de adecuación, que conocían de su alcance, que contaban con asesoría técnica, y que a pesar de esto, y conociendo de la falta de licencia para su desarrollo, omitieron siquiera poner de presente que podría requerirse una licencia para su ejecución.

26. Sin que durante las negociaciones para la determinación de las condiciones de la entrega se pusiera de presente la necesidad -conocida- de iniciar con los trámites de una licencia, el arrendador conoció y se hizo parte de un procedimiento administrativo que tenía como finalidad el sellamiento de las obras que él mismo solicitó, por iniciarse sin contar con una licencia de construcción. [3]

27. Con los documentos que obran en el proceso relacionados con el trámite de la querella[4] y con las respuestas al interrogatorio de parte rendido por el demandante, se demostró que (i) el señor Hermosa no puso de presente a Comcel la necesidad de una licencia de construcción para el desarrollo de las obras que él mismo había solicitado, a pesar de estar asesorado por arquitectos durante la ejecución de las adecuaciones, y que (ii) el señor Hermosa, con posterioridad a la firma del Acta Final de Adecuaciones, se hizo parte de un procedimiento policivo tendiente a sellar las obras que él mismo había acordado realizar.

28. De haberlo puesto de presente en el momento oportuno – o durante los 7 meses que duraron las negociaciones que se concluyeron con el Acta Final de Adecuaciones – las partes interesadas en la restitución hubieran podido iniciar las gestiones para la obtención de la licencia, sin tener que ser objeto de sellamientos.

---

[3] El señor Hermosa confirmó que se hizo parte de la querella, en el interrogatorio de parte practicado en la audiencia inicial de este proceso: ***Audiencia Inicial del 21 de octubre de 2019. 11:18:25 [Pregunta de la apoderada de Comcel]:*** *Las actas a las que me refiero son a las que ya usted se refirió en una respuesta que le dio al despacho, una que se firmó en junio y otra que se firmó en octubre de 2017, entonces, en lo que usted recuerde, si el enteramiento frente al tema de la licencia a través de la señora Consuelo de la* ***Vega*** *fue antes o después de estas actas?* ***[Respuesta de Mario Hermosa]:*** *Fue después.*

[4] Como por ejemplo el acta de audiencia 20175233870100835E en la que se expusieron los argumentos del querellante y querellado en el Despacho de la Inspectora 2B de la Policía de Chapinero el 27 de febrero de 2018.

29. Los demandantes no solamente debían estar interesados en la obtención oportuna de una licencia en calidad de arrendadores de los inmuebles sino también en calidad de copropietarios de la propiedad horizontal del Edificio Gales. La ley es clara en que el propietario es solidario frente al arrendatario de las infracciones urbanísticas y además debe coadyuvar en la obtención de las licencias correspondientes.

30. El incumplimiento en la solicitud de licencia de construcción para las adecuaciones requeridas para la entrega del inmueble objeto del proceso, configura un incumplimiento a una obligación para la cual los arrendadores y arrendatarios son solidariamente responsables, tal como lo estipula el parágrafo del artículo 79 de la Ley 675 de 2001:

> *"ARTÍCULO 79. Ejecución de las obligaciones. Los Administradores de Unidades Inmobiliarias Cerradas podrán demandar la ejecución de las obligaciones económicas y de las sanciones pecuniarias impuestas a propietarios y moradores.*
>
> *En tales procesos de liquidación de las obligaciones vencidas a cargo del propietario o morador, realizada por el Administrador, prestará mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la presente ley, sin necesidad de protesto ni otro requisito adicional.*
>
> *PARÁGRAFO. **En todo caso el copropietario de cada inmueble responderá solidariamente por todas las obligaciones ordinarias y extraordinarias y por las sanciones pecuniarias impuestas a los moradores de su inmueble".***

31. De lo anterior se debe concluir que la infracción urbanística que generó el sellamiento de las obras y que generó que no se pudieran entregar a tiempo, le es imputable también a los demandantes.
32. El Despacho consideró que la solidaridad que impone la ley frente a las sanciones urbanísticas no era un argumento válido para excluir un incumplimiento de sus obligaciones:

> *"Ahora, tampoco resulta válido que la demandada se escude en la solidaridad del propietario, en tanto que las mejoras locativas corresponden al arrendatario y las mejoras no locativas pueden ser realizadas por el arrendatario con el permiso del arrendador y reembolsadas por éste tal como lo exponen los artículos 1993 y 1994 del Código en concordancia con el decreto 1077 de 2015, pues salvo modificación de las partes.*
> *Y ello demuestra que no hay solidaridad entre arrendador y arrendatario y no hay solidaridad porque no hay pluralidad de sujetos pasivos y no hay pluralidad de sujetos activos. Dos o más frente a uno o varios acreedores o dos o más frente a uno o varios deudores.*
> *Tampoco le es aplicable el artículo 825 del Código de Comercio que predica la solidaridad de los negocios mercantiles. Esto es en contratos de carácter comercial pero cuando obligan a una misma posición.*

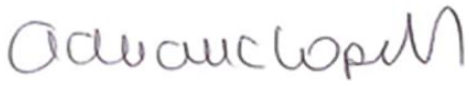
> *Y además cabe recordar que los administradores responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que con dolo o culpa ocasionen a la sociedad u ocasionen a los miembros de la misma y esto implica que claramente quién ha debido sacar la licencia? Pues le correspondía a la administración del edifico de Comcel, quien la tomó y quien no niega "la tuvimos porque teníamos a disposición todo el edificio.*
> *A punto tal que la licencia fue otorgada el 16 de agosto de 2018, posteriormente, y en ella también se dice que se da porque hay obras de carácter común."*

33. No tuvo en cuenta el Despacho las pruebas y normas expuestas, que dan cuenta de las omisiones de los deberes de los demandantes como arrendadores, propietarios y copropietarios, y de la incidencia que el incumplimiento de esos deberes tuvo en el retraso de las obras pactadas para la restitución del inmueble.
34. Por lo anterior, erró el Despacho al considerar que Comcel fue el único responsable por la demora en la restitución de las obras.

III. Conclusiones y solicitudes

35. Teniendo en cuenta, como se probó en el proceso, que el Contrato celebrado entre las partes se encuentra terminado, que los arrendadores se encuentran en mora de recibir los inmuebles, y que son corresponsables de la demora en la entrega de las obras para la restitución de los inmuebles, la Sentencia Apelada debe ser revocada y deben ser negadas las pretensiones de la demanda.

Atentamente,



ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ
C. C. No. 52.051.679
T. P. No. 85.250 del C. S. de la J

Registered: Recurso Apelación Numeral 5 Fallo del 07 de abril 2021 (Expediente 2018-360)

joseyepes@yepesjimenezlegal.com <joseyepes@yepesjimenezlegal.com>

Lun 12/04/2021 4:09 PM

Para: Juzgado 26 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: alopez@lopezabogadoscol.com <alopez@lopezabogadoscol.com>

2 archivos adjuntos (4 MB)

Recurso de Apelacion Mario Hermosa.pdf; RPostDigitalSeal.htm;

RPost REGISTERED EMAIL™ | SENDER AUTHENTICATION

This is a Registered Email™ message signed by **joseyepes@yepesjimenezlegal.com**.
To authenticate this email, forward to **verify@r1.rpost.net**.

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REF: RESTITUCIÓN INMUEBLE ARRENDADO
RADICADO: 2018 – 00360
DE: MARIO HERMOSA PUYO Y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
CONTRA: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN NUMERAL 5 (NO PAGO CLAUSULA PENAL) SENTENCIA DEL 07 DE ABRIL DE 2021.

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 80.095.614 de Bogotá, con Tarjeta Profesional 186.701 del C. S de la J**,** actuando como apoderado de la parte actora, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente correo me permito enviar en archivo adjunto escrito que contiene recurso de apelación en contra del numeral 5 de la sentencia proferida el 07 de abril de 2021 por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito.

Cordialmente,

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ

DERECHO URBANO E INMOBILIARIO
Calle 97 A No 9-45 Of 303
Bogotá, Colombia

Cel: (+57) 300 4940057
www.yepesjimenezlegal.com

Avast logo El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com

RPost ® Patented

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REF: RESTITUCIÓN INMUEBLE ARRENDADO
RADICADO: 2018 – 00360
DE: MARIO HERMOSA PUYO Y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
CONTRA: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN NUMERAL 5 (NO PAGO CLAUSULA PENAL) SENTENCIA DEL 07 DE ABRIL DE 2021.

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 80.095.614 de Bogotá, con Tarjeta Profesional 186.701 del C. S de la J**,** actuando en como apoderado de la parte actora, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito interponer recurso de apelación en contra del numeral 5 de la sentencia proferida el 07 de abril de 2021 por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito, en los siguientes términos:

El presente recurso se formula tomando en cuenta lo siguiente:

I. **OPORTUNIDAD**

De acuerdo con la notificación surtida en audiencia del 07 de abril de 2021, de conformidad con el artículo 322 del C.G.P, inciso 2 del numeral 3 el cual dispone *"... Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere proferido en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versara su sustentación que hará ante el superior."*

En este caso, la notificación por estrados fue de fecha del miércoles 7 de abril de 2021, teniendo un plazo de tres (3) días hábiles fecha desde la cual iniciaría el plazo para interponer el correspondiente recurso y sustentarlo, plazo que vence el lunes

12 de abril de dos mil veintiuno (2021).

Así la cosas, la sustentación al recurso de apelación se presenta en término.

II. SÍNTESIS

Consideramos que el fallo de primera instancia se ajusta a derecho en su parte motiva y resolutiva. Teniendo solo diferencia con el numeral 5 de la sentencia del 07 de abril de 2021 proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito, respecto de la cláusula penal, ya que considera el despacho que la cláusula penal pactada tiene carácter compensatorio, no encontrando el Despacho pactada la acumulación de la obligación principal y la pena, por lo tanto, no da a lugar el reconocimiento a su pago.

Consideramos que a la luz del contrato y de la norma, la pena impuesta por las partes es válida, puede ser reconocida por orden judicial, indiferente del cumplimiento de la obligación principal, por lo que en el presente escrito expondremos nuestro reparo ÚNICAMENTE sobre la cláusula penal y su negación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CLAUSULA PENAL

El Despacho en fallo de primera instancia dispuso:

> ***QUINTO.*** *No se ordena el pago de la cláusula penal por lo indicado en la parte motiva de esta audiencia.*

La parte motiva del fallo en términos generales dispuso:

> *La clausula penal esta reglamentada en el articulo 1592 y 1594 del Código Civil. El acreedor no puede pedir al mismo tiempo la obligación principal y la pena, salvo dos excepciones. Primero, cuando se ha pagado la pena con carácter moratorio o sea por el simple retardo del cumplimiento de la*

obligación principal, en cuyo caso no se exige la estipulación expresa. Dos, cuando se ha pactado la pena con carácter compensatorio o sea que tiene como función reparar perjuicios sufridos por el acreedor como consecuencia del incumplimiento total, parcial o defectuoso de la prestación. En este caso se exige que se haya estipulado expresamente dicha postulación, porque sino se pacta no tiene operancia.

Que conforme a la lectura de la clausula penal establecida por las partes, la clausula penal pactada tiene carácter compensatorio, no encontrando el despacho pactada la acumulación de la obligación principal y la pena, y por lo tanto no hay lugar a ordenar su pago.

Lo anterior como una cita no textual de la parte motiva del fallo, pero que resume en gran medida la decisión del juez de primera instancia. Nuestros reparos sobre esta posición se expresan a continuación.

LA CLAUSULA PENAL – EL CONTRATO ES LEY PARA LA PARTES.

En este punto es importante analizar lo que las partes pactaron en el contrato de abril de 1998, respecto de la Cláusula penal.

> **CLAUSULA PENAL:** El incumplimiento por parte de los Arrendatarios de cualquiera de la cláusulas de este Contrato, los constituirá en deudores del Arrendador en una multa igual al duplo del canon de arrendamiento vigente en el momento del incumpliminto o violación pagaderos en moneda legal Colombiana en favor del Arrendador que será exigibles inmediatamente sin necesidad de requerimientos de ninguna clase y sin perjuicio de los demás derechos del Arrendador para hacer cesar el arrendamiento y exigir Judicialmente la entrega del inmueble arrendado y el pago de la renta debida.

Ahora bien, dentro del contrato se establecieron prohibiciones dentro del mismo contrato, como mejoras y reformas, artículo del contrato que dispuso:

MEJORAS Y REFORMAS: No podrán los Arrendatarios ejecutar en el inmueble mejora o reformas de ninguna especie excepto las reparaciones locativas a que se refiere la ley (Art. 2028,2029, y 2030 del C.C.) sin permiso escrito del Arrendador, si se ejecutaren estas acrecerán al inmueble y el propietario no pagara en ningún momento indemnización a quien las efectúo, lo cual no obsta para que el Arrendador y/o propietario pueda exigir el retiro de esta a fin de que el inmueble sea entregado en el mismo estado en que se recibió.

Ahora bien, la sentencia de primera instancia, en su artículo segundo dispuso:

> ***SEGUNDO.*** *Declarar terminado el contrato de arriendo celebrado entre Mario Hermosa y Vivian Fernández como arrendadores y COMCEL S.A como arrendatarios, contrato de abril de 1998, por incumplimiento de la parte demandada, tal y como se plasmo en la presente audiencia.*

Es decir, **el juez de primera instancia declaro terminado el contrato por incumplimiento del arrendatario Comcel S.A**. Este incumplimiento, como se podrá ver a luz de la parte motiva del fallo, NO CORRESPONDE al pago del canon de arrendamiento, sino que **obedece al no cumplimiento de las obligaciones que tenía COMCEL S.A como arrendatario**, y así fue como lo estableció al enunciar que es COMCEL S.A el que estaba obligado a obtener las licencias de construcción, a solicitar las autorizaciones correspondientes a la Asamblea de Copropietarios.

Es decir, esta cláusula penal, que finalmente, es la definición que le dan las partes, la cual va encaminada a establecer que **esta es una "multa", es decir, una sanción por el incumplimiento de las obligaciones, sin perjuicio de exigir judicialmente la entrega del inmueble arrendado y el pago de la renta debida.**

Por lo que es evidente, el juez dejo claro que existió incumplimiento por parte de COMCEL S.A , por lo que da por terminado el contrato, siendo entonces aplicable la multa o sanción establecida previamente por las partes. En ese orden de ideas, el pago de los cánones de arrendamiento ordenados por el Juez de primera instancia, no es excluyente con la sanción pactada por las partes en el contrato de arrendamiento.

Leyéndolo de otra forma, es que el pago de los cánones de arrendamiento no son una sanción, sino el cumplimiento de una obligación, dado que para el 01 de enero de 2018 el contrato se encontraba vigente.

Por lo que validar o aprobar lo que las partes acordaron como sanción económica no es excluyente con el pago de los cánones de arrendamiento y excluirla es negar lo que las partes acordaron en el contrato de arrendamiento.

Desde el punto de vista doctrinal, el tratadista Guillermo Ospina Fernández, en su libro Regimen General de Las Obligaciones, me permito citar.

223. EL CÚMULO DE LA PENA Y LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.—Fundándose también en la presunción de que la cláusula penal implica la estimación anticipada de todos los perjuicios que habrán de seguirse del incumplimiento o el retardo de la obligación principal, el artículo 1600 del Código Civil declara: "No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena". De no ser así, el acreedor también podría recibir una doble indemnización: la preestipulada en la cláusula penal y la resultante de la estimación judicial de los perjuicios. De manera que si al pactar la cláusula penal, la intención real del acreedor es la de establecer un apremio para el deudor, independientemente del cumplimiento de la obligación principal y de la indemnización compensatoria de ella, así deberá dejarlo expresamente estipulado, pues, de no hacerlo, no habrá lugar al cúmulo de la pena y de la obligación principal, a menos de que aparezca que la pena solo se refiere a la indemnización moratoria, como tampoco al de aquella y la indemnización compensatoria.

Parece que entre los artículos 1600 y 1594 no existiese armonía en lo tocante al cúmulo de la pena moratoria, por una parte, y de la indemnización compensatoria o de la obligación principal, por la otra, respectivamente, porque según el 1594, basta que "aparezca" que la pena se pactó por el simple retardo para que pueda ser cobrada conjuntamente con la obligación principal, al paso que el 1600 exige la estipulación expresa que deje a salvo la indemnización compensatoria para que esta pueda ser cobrada junto con la moratoria, aunque sea indudable que la pena se refiera solo a esta, como en el ya propuesto ejemplo de que el contrato se limite a decir que el deudor pagará $ 100 por cada día de demora en la ejecución de la prestación debida.

En nuestra opinión, esta aparente dicotomía debe ser superada a la luz de los principios generales que gobiernan la materia. El cúmulo de la indemnización compensatoria y la moratoria siempre es factible, porque ellas provienen de causas distintas: la primera, de los daños que experimenta el acreedor por el incumplimiento total, parcial o defectuoso de la prestación que le es debida (*damni compensatorii*); y la segunda, de los perjuicios que a aquel se le ocasionan por no recibir oportunamente esa prestación (*damni moratorii*). Entonces, como la equidad exige que dicho acreedor sea indemnizado por ambos conceptos, la po-

sibilidad de acumular las referidas indemnizaciones se impone. Por tanto, el artículo 1600 del Código Civil debe interpretarse en el sentido de que el acreedor puede exigir la pena y la indemnización de perjuicios, siempre que esta se deje expresamente a salvo y, por ello, dicha pena asume el carácter de apremio al deudor, como también en el caso de que aparezca del pacto que la pena solo se endereza a sancionar el retardo en el cumplimiento de la obligación principal, sin que quede afectado el derecho del acreedor para que se le resarza por la inejecución total o parcial, o por la ejecución defectuosa de esa obligación[69]. La solución contraria, a más de no compadecerse con el régimen general del cúmulo de las indemnizaciones, se opondría a las reglas sobre la interpretación de los actos jurídicos que mandan atender principalmente a la intención de los agentes (art. 1618) y al sentido en que las cláusulas de aquellos actos puedan producir algún efecto en vez de ninguno (art. 1620). Al negársele al acreedor la facultad de cobrar los $ 100 diarios estipulados por la demora, más los perjuicios compensatorios sufridos, se le restaría toda eficacia a la cláusula penal, so pretexto de aplicar a la letra el citado artículo 1600 que, según él mismo lo indica, es apenas una norma supletiva de la voluntad de los agentes.

En fin, a este respecto importa fijar la atención en el segundo colon del dicho artículo 1600, que le otorga al acreedor, pese a la estipulación penal, opción para acogerse a esta o para prescindir de ella y exigir la indemnización de los perjuicios, lo que sucedería cuando estos fueran mayores que el monto de la pena pactada. Esta regla, que data del derecho romano, se suele defender diciendo que la equidad exige que el acreedor insatisfecho resulte siempre ileso, por lo cual, si la estimación convencional es inferior a los perjuicios realmente sufridos por él, aunque la pena le haya sido pagada, tiene derecho a cobrar la diferencia[70]. Estimamos nosotros que, como la regla en cuestión es de índole meramente supletiva, ella no puede tener aplicación cuando del acto aparezca claramente que la intención de los interesados ha sido la de limitar a la pena la responsabilidad del deudor, conforme a la expresa autorización que para el efecto les confiere el artículo 1616 del Código Civil[71].

Cita tomada del REGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES, Septima Edicion, Ospina Fernandez Guillermo, séptima edición actualizada, paginas 149 y 150

En los términos del artículo 1594 del Código Civil, el acreedor podrá exigir el cumplimiento de la obligación principal y el pago de la penalidad al mismo tiempo, siempre y cuando se acredite que i) la penalidad se causa por el simple retardo o ii) las partes expresamente hubieran dispuesto que el pago de la penalidad no extingue la obligación principal. En los demás eventos, el acreedor solamente podrá exigir, a su elección, el pago de la obligación o de la penalidad.

Cuando analizamos la cláusula penal establecida por las partes, tenemos que dicha clausula estableció que **el incumplimiento de CUALQUIERA de las cláusulas** de este contrato, **lo constituirá en deudor del arrendador en una multa** igual al duplo del canon de arrendamiento vigente en el momento del incumplimiento, **sin perjuicio** de los demás derechos del arrendador **de hacer cesar el arrendamiento** y **exigir judicialmente la entrega del inmueble arrendado** y **el pago de la renta debida**.

Es así, que consideramos que el numeral 5 de la sentencia del 07 de abril de 2021, proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito debería ser revocada y acoger la pretensión de la clausula penal, como una sanción establecida por las partes que no es excluyente con el pago de los cánones de arrendamiento, por lo que respetuosamente me permito:

SOLICITAR

En virtud de lo expuesto, solicito al Despacho conceder el recurso interpuesto, revocando el numeral quinto de la Sentencia proferida el 07 de abril de 2021 por el Juzgado 26 del Circuito, y en su defecto decidir:

1. **Revocar la decisión impartida en el numeral 5 de la Sentencia** proferida el 07 de abril de 2021 conforme los argumentos expuestos verbalmente al momento de interponer el recurso y ampliados mediante el presente escrito.

2. En caso de revocar el numeral 5 de la Sentencia proferida el 07 de abril de 2021, sea condenado al pago de la sanción pactadas por las partes, correspondientes a dos cánones de arrendamiento.

3. En caso de existir fallo favorable a la parte demandante, que sea condenado a costas la parte demandada.

Cordialmente,

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ
C.C. 80.095.614 de Bogotá
T.P 186.701 expedida por el C. S de la J

Asunto: Restitución del inmueble de Mario Hermosa y Vivian Fernández
Fecha: viernes, 23 de abril de 2021, 11:04:21 a. m. hora estándar de Colombia
De: Laura Bermudez
A: joseyepes@yepesjimenezlegal.com
CC: alopez, María Camila de Brigard
Datos adjuntos: image001.jpg

Respetado doctor Yepes,

Espero se encuentre muy bien. De acuerdo con nuestra conversación telefónica del pasado 12 de abril de 2021, en la que, a nombre de Comcel, le propusimos acordar la restitución voluntaria de los inmuebles de propiedad de sus representados, los señores Hermosa y Fernández (oficinas No. 601, 604 y los parqueaderos 15 y 26 que hacen parte del Edificio Gales – Propiedad Horizontal, ubicado en la calle 90 No. 13-23 de la ciudad de Bogotá), me permito sintetizar los argumentos expuestos por usted para rechazar la propuesta de Comcel de restituir los inmuebles, de común acuerdo:

- Según su interpretación, la sentencia proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito (Proceso No. 2018 – 00360) en audiencia del 7 de abril de 2021, en la que se ordenó a Comcel la restitución de los inmuebles de propiedad de sus representados, no se encuentra ejecutoriada, puesto que se concedieron los recursos de apelación interpuestos por las partes.
- De acuerdo con esta interpretación, y a pesar de que los reparos de Comcel y de sus representados frente a la sentencia del 7 de abril no versan sobre la orden de restituir los inmuebles mencionados, su posición es que la orden de restitución contenida en la sentencia no se encuentra en firme, dado que la sentencia no se encuentra ejecutoriada.
- En ese sentido, su posición es que, a menos de que Comcel desista del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en audiencia del 7 de abril y que, como consecuencia, sus representados puedan recibir los títulos correspondientes a los cánones de arrendamiento consignados a órdenes del juzgado, no existe una orden judicial ejecutoriada de restitución.
- Como conclusión de lo anterior, sus representados no acordarán recibir los inmuebles objeto del proceso de manera voluntaria.

Agradeciendo de nuevo haber recibido nuestra llamada, le reiteramos la total disposición que tiene Comcel S.A. para restituir los inmuebles de propiedad de los señores Hermosa y Fernández, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 7 de abril de 2021 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. Abajo le confirmamos nuestros contactos en caso de que sus representados accedan a recibir los inmuebles de su propiedad:

Adriana López Martínez
alopez@lopezabogadoscol.com
Tel. 3124573416

Laura Isabel Bermúdez Villamizar
laurab@lopezabogadoscol.com
Tel. 3124329268

Agradecemos confirmar el recibo de la presente comunicación,

Cordial Saludo,



Laura Isabel Bermúdez V.
Carrera 7 No. 74-56 Oficina 705
Tel. (57) (1) 3124329268
Bogotá - Colombia.
laurab@lopezabogadoscol.com

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
E.S.D.

Proceso: Verbal de restitución de tenencia a título de arrendamiento
Radicado: 2018 – 00360
Demandante: Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa
Demandado: Comcel S.A.
Asunto: Solicitud de designación de secuestre para la entrega de los inmuebles objeto del proceso.

ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de **COMCEL S.A**., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso que establece que una vez concedido el recurso de apelación de la sentencia en el efecto suspensivo, el inferior conservará competencia para conocer todo lo relacionado con medidas cautelares, y ante la renuencia de los demandantes para dar cumplimiento a las resoluciones de la sentencia proferida el 7 de abril de 2021 que no fueron objeto de recurso de apelación, solicito el nombramiento de un secuestre para poder realizar la restitución de las oficinas No. 601, 604 y los parqueaderos 15 y 26 que hacen parte del Edificio Gales – Propiedad Horizontal, ubicado en la calle 90 No. 13-23 de la ciudad de Bogotá, y que son propiedad de los demandantes en este proceso (en adelante **"Inmuebles"**), de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En audiencia de instrucción y juzgamiento del 7 de abril de 2021 el Despacho profirió la sentencia de 1ª instancia en este proceso en la que resolvió ordenar, entre otros, la restitución de los Inmuebles a los demandantes.

> *"En tercer lugar Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si la demandada no hace entrega de forma voluntaria comisiónese a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá y/o Inspecciones de Policía. Secretaría libre los oficios correspondientes."*

2. El Despacho ordenó la restitución del inmueble, accediendo a la pretensión SEGUNDA de la demanda:

> *SEGUNDA. Se condene a la demanda a restituir los inmuebles en las condiciones recibidas al inicio del contrato, junto con las zonas comunes de conformidad con la licencia de construcción con la que se construyó el edificio, salvo el deterioro y uso normal de los mismos.*

3. En las consideraciones de la sentencia[1], el Despacho dio cuenta de que, desde el 17 de septiembre de 2019, los inmuebles se encuentran en el estado exigido por los demandantes para su entrega:

> *"Ahora, encontramos que solamente para la Asamblea del 17 de septiembre de 2019 los inmuebles entregados en arrendamiento por los aquí demandantes se encontraban con las reparaciones acordadas y restituidas las áreas comunes que habían tomado como consecuencia de las obras ilegales y que de manera informal dicha situación fue conocida tanto por el demandante como por su representante."*

4. Durante la audiencia de instrucción y juzgamiento del 7 de abril de 2021, Comcel interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, y de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 322 del Código General del Proceso, presentó el escrito de reparos concretos contra la sentencia el lunes 12 de abril de 2021.
5. El escrito de reparos concretos fue radicado mediante correo electrónico en el que se copió al apoderado de los demandantes, en cumplimiento de los deberes de las partes establecidos en el artículo 78 del Código General del Proceso y en el Decreto 806 de 2020.
6. En el escrito de reparos concretos, enviado al correo del apoderado de los demandantes, se indicó expresamente que Comcel cumpliría de manera voluntaria con la orden de restitución contenida en la sentencia del 7 de abril de 2021:

> *"1.COMCEL S.A. no tiene reparo alguno contra la orden de restitución contenida en el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada, en el que se ordena la restitución de los inmuebles de propiedad de los demandantes, así: (...)*

[1] Ver minuto 34:31 de la grabación de la Audiencia de Instrucción y juzgamiento del 7 de abril de 2021.

> *2. Por lo tanto, Comcel procederá, en cumplimiento de lo ordenado, a restituir los inmuebles dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia*.

7. Los demandantes interpusieron recurso de apelación únicamente frente a la decisión del Despacho de no condenar a Comcel al pago de la cláusula penal contemplada en el contrato de arrendamiento.
8. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 320 del Código General del Proceso, y para dar cumplimiento a la orden de restitución del inmueble que no fue objeto de reparos, Comcel se comunicó con el apoderado de los demandantes, para acordar una entrega voluntaria de los Inmuebles.
9. El apoderado de los demandantes se negó a acordar la entrega voluntaria de los Inmuebles, aduciendo que la sentencia en la que se ordena la restitución de los Inmuebles no se encuentra en firme, dado el recurso de apelación presentado por Comcel.[2]
10. La actuación del apoderado y de los demandantes de negarse a recibir los inmuebles frente a la solicitud de Comcel desconoce lo dispuesto por el Código General del Proceso, que establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, <u>únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.</u>
11. El hecho de que los demandantes se nieguen a recibir los Inmuebles demuestra también que su intención es prolongar injustificadamente el pago de los cánones de arrendamiento por parte de Comcel, a pesar de que ya se cumplieron las condiciones exigidas para la entrega de los Inmuebles.
12. Como lo constató el Despacho en la sentencia del 7 de abril, los Inmuebles están listos para ser entregados desde hace más de un año y medio y a pesar de eso, los arrendadores se han negado injustificadamente a recibirlos durante todo este tiempo, a pesar de que Comcel, en repetidas ocasiones – incluida la etapa de conciliación de la audiencia inicial – ha ofrecido entregarlo.
13. Como se señaló en el escrito de reparos concretos, el juez de segunda instancia deberá resolver el conflicto relacionado con la fecha de terminación del contrato y con los hechos ocurridos durante su ejecución. Sin embargo, es claro que ya no hay un conflicto sobre la restitución de los Inmuebles, de acuerdo con lo siguiente:

---

[2] Ver correo electrónico enviado el viernes 23 de abril de 2021 al apoderado de los demandantes (Anexo 1).

a. Los demandantes solicitaron en su demanda la restitución de los Inmuebles, en las condiciones en que se entregaron inicialmente.
b. El Despacho constató que los inmuebles se encuentran en las condiciones solicitadas desde el 19 de septiembre de 2019 y ordenó a Comcel su restitución.
c. Comcel está dispuesta a cumplir la orden y la solicitud de restitución de los Inmuebles en las condiciones determinadas por los demandantes, así lo indicó expresamente en el escrito de reparos concretos.

14. Sin embargo, y habiendo transcurrido cinco (5) días desde que se profirió la sentencia, Comcel no ha podido coordinar la restitución voluntaria de los Inmuebles, porque los demandantes se siguen negando, injustificadamente, a recibir los Inmuebles.

II. Fundamentos de la solicitud

15. De acuerdo con lo establecido por el artículo 320 del Código General del Proceso, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
16. Comcel no formuló reparo alguno contra la orden de restitución de los Inmuebles y por lo tanto, nada tienen que ver las discusiones jurídicas actuales de las partes sobre el contrato de arrendamiento con la restitución del bien.
17. La decisión del juez de segunda instancia no podrá versar sobre la orden de restitución del inmueble. Por lo tanto, la orden de restitución es una decisión judicial que se encuentra en firme, y este Despacho es el competente para tomar las medidas de su respectivo cumplimiento.
18. Por lo tanto, frente a ese punto, existe una orden judicial en firme que Comcel ha intentado acatar, sin que los demandantes lo permitan.
19. Como se concluye de los hechos anteriormente expuestos, los demandantes, al negarse a recibir los inmuebles, generan para Comcel un situación totalmente injusta y absurda, si se tiene en cuenta que la sentencia de 1ª instancia ordenó a Comcel el pago de los cánones de arrendamiento hasta la entrega del inmueble.
20. Ante la renuencia a recibir por parte de los arrendadores, en caso de que el juez de segunda instancia confirme la decisión objeto de recurso de apelación, Comcel

tendría que pagar los cánones de arrendamiento que se causen desde la sentencia del 7 de abril de 2021 hasta que se profiera la sentencia de segunda instancia.

21. Esto, a pesar de que los demandantes que solicitaron la restitución que fue ordenada en sentencia judicial por el Despacho y que no fue objeto de apelación por Comcel, se niegan injustificada y arbitrariamente a recibir los Inmuebles.
22. Lo anterior demuestra claramente que la intención de los demandantes es prolongar el pago de los cánones de arrendamiento, sin tener una justa causa para ello.
23. En todo caso, el artículo 323 del Código General del Proceso establece que una vez concedido el recurso de apelación de la sentencia en el efecto suspensivo, el inferior conservará competencia para conocer todo lo relacionado con las medidas cautelares.
24. El último inciso del numeral 4 del artículo 384 establece las consecuencias frente al arrendador que se niega a recibir la cosa arrendada.

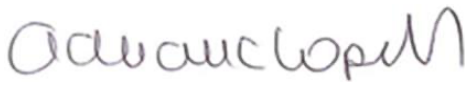
III. Solicitud

25. De acuerdo con los antecedentes y fundamentos expuestos, y con la finalidad de proteger los derechos de Comcel frente a las actuaciones injustificadas de los arrendadores, solicito respetuosamente que el Despacho nombre un secuestre con la finalidad de proceder a la restitución de los Inmuebles.

IV. Anexo

1. Copia del correo electrónico enviado al apoderado de los demandantes, el señor Jose Iván Yepes Jiménez el 23 de abril de 2021.

Atentamente,



ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ
C. C. No. 52.051.679
T. P. No. 85.250 del C. S. de la J

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ RV: Sustentación Recurso Apelación 110013103026_2018_00360

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 02/08/2023 15:58

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

6 archivos adjuntos (5 MB)

05. 25Recursoapelacion Comcel SA.pdf; 0.2 77AUTO2018 0360 Entrega de dineros (1).pdf; 01. TRANSCRIPCION FALLO AUDIENCIA 2021-04-07 MARIO HERMOSA.docx; 03. 85AUTO2018 0360 reposición entrega de dineros.pdf; 04. 15AUTOOBEDEZCASE Y CUMPLASE 2018-360 (1).pdf; V2-Recurso de Apelacion Mario Hermosa Ejecutivo Tribunal.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Jose Yepes <joseyepes@yepesjimenezlegal.com>
Enviado: miércoles, 2 de agosto de 2023 15:30
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: alopez@lopezabogadoscol.com <alopez@lopezabogadoscol.com>; laurab@lopezabogadoscol.com <laurab@lopezabogadoscol.com>
Asunto: Sustentación Recurso Apelación 110013103026_2018_00360

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
RADICADO: 2018 – 00360
DE: MARIO HERMOSA PUYO Y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
CONTRA: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DEL 04 DE JULIO DE 2023 proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 80.095.614 de Bogotá, con Tarjeta Profesional 186.701 del C. S de la J**,** actuando en como apoderado de la parte actora, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito **me permito interponer y sustentar recurso de apelación en contra de la TOTALIDAD de la sentencia proferida el 04 de julio de 2023 por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito**, conforme los archivos adjuntos.

De igual forma, se copia a la contraparte para los efectos pertinentes.

Agradecemos confirmar la recepción del presente correo electrónico.

Cordialmente

José Iván Yepes Jiménez



YEPES JIMENEZ
ABOGADOS
DERECHO URBANO E INMOBILIARIO
Cra 7 No 80-49 Of 803
Bogotá, Colombia.
Cel. (+57) 324 656 5800
Cel USA (+1) 347 878 3902

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
RADICADO: 2018 – 00360
DE: MARIO HERMOSA PUYO Y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
CONTRA: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DEL 04 DE JULIO DE 2023 proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá .

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 80.095.614 de Bogotá, con Tarjeta Profesional 186.701 del C. S de la J**,** actuando en como apoderado de la parte actora, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito **me permito interponer y sustentar recurso de apelación en contra de la TOTALIDAD de la sentencia proferida el 04 de julio de 2023 por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito**, en los siguientes términos:

El presente recurso se formula tomando en cuenta lo siguiente:

I. **OPORTUNIDAD**

De acuerdo con la notificación surtida en audiencia del 04 de julio de 2023, de conformidad con el artículo 322 del C.G.P, inciso 2 del numeral 3 el cual dispone *"... Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere proferido en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versara su sustentación que hará ante el superior."*

La sustentación para presentar el recurso ante el Juzgado 26 Civil del Circuito se dio por escrito, mediante radicado realizado el 07 de julio de 2023.

Que, mediante auto del 28 de julio de 2023, notificado mediante estado del 31 de

julio de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá, dio por admitido el recurso de apelación.

Que, mediante la Ley 2213 de 2022, en el artículo 14, se estableció que *"ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega las pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días."*

Así la cosas, la sustentación al recurso de apelación se presenta en término.

II. SÍNTESIS

Dentro de un proceso judicial previo, se solicitó la restitución de inmueble arrendado, sobre el cual se profirió un fallo el 07 de abril de 2021, que en su numeral 4 de la parte resolutiva dispuso:

> ***"se condena a la demandada al pago de los arriendos correspondientes al periodo que abarca desde el primero de enero de 2018 hasta la fecha en que se efectivice la entrega".***

Al respecto, el Juzgado 26 Civil del Circuito en auto de diciembre 1º del 2022, dice:

> ***"En ese aspecto, es claro que al ser la entrega o restitución del inmueble, el tiempo límite para la generación de cánones de arrendamiento, dicha evento dentro del expediente se encuentra demostrado con el acta de entrega suscrita hasta el 14 de junio de 2022, la cual fue aportada al expediente y firmada por el demandante y representantes de la demandada, donde no se formuló ninguna limitación para la entrega de los cánones de arrendamiento".***

El inmueble fue entregado el 14 de junio de 2022, pero el demandado solo consignó los dineros hasta 30 enero de 2022.

Que conforme la sentencia, **se solicitó la entrega de los títulos de depósito, entrega que fue aprobada mediante auto proferido el 26 de octubre de 2022**, sobre el cual se resolvió recurso de apelación el día 1º de diciembre de 2022, en la que claramente **manifestó este Despacho que los dineros se debían hasta que se realizara la entrega del inmueble**, por lo que el Juzgado realizó la entrega de todos los dineros depositados, desde enero 1º de 2018 hasta enero 31 de 2022.

Con base en este claro planteamiento, se procedió a cobrar los dineros desde febrero 1º de 2022 hasta el 14 de junio de 2022, mediante el presente proceso ejecutivo.

Sin embargo, **en este proceso ejecutivo**, **el Juez 26 Civil** del Circuito **desconoce abiertamente las providencias** por el dictadas; sentencia del 07 de abril de 2021, autos del 26 de octubre y 1º de diciembre de 2022, **ahora diciendo que mi poderdante debe devolver los dineros al demandado**, desde noviembre 6 de 2021 a enero 31 de 2022, que la excepción de pago es válida, en la medida que el ejecutado solicitó la entrega del inmueble en diferentes fechas, por lo que considero que el fallo de primera instancia del 04 de julio de 2023 dentro del proceso ejecutivo, es totalmente errado, trasgrede el ordenamiento jurídico, incumpliendo y **dejando sin efectos providencias ejecutoriadas**, con plenos y claros efectos vinculantes, vulnerando el debido proceso y la cosa juzgada, modulando providencias por fuera del procedimiento.

Es por esto, que a continuación se explicarán los argumentos en los que se funda el recurso de apelación.

III. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURÍDICOS

En el presente escrito, expondré los puntos facticos a tener en cuenta, que deben ser validados por el Tribunal y luego los argumentos jurídicos a estudiar dentro del presente caso.

ANTECEDENTES FACTICOS

Estamos frente a un proceso ejecutivo por unas sumas de dinero pendientes de pago, provenientes de una sentencia, proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el 07 de abril de 2021, parte resolutiva que me permito transcribir. Adjunto como anexo transcripción de todo el fallo.

> **“JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO**
> **TRANSCRIPCIÓN SENTENCIA DEL 07 DE ABRIL DE 2021**

PROCESO 110013103026 2018 00360 00

Primero. En primer lugar, declarar frustradas las decisiones de mérito propuestas por la demandada.

Segundo. Y segundo, declarar terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre Mario Hermosa y Vivian Fernández Hermosa como arrendadores y Comunicación Celulares COMCEL como arrendatario, contrato de abril de 1998 por incumplimiento de la parte demandada tal como se plasmó en esta audiencia.

Tercero. Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento señalado en el numeral anterior, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia; sobre zonas comunes no habrá pronunciamiento porque estas fueron restituidas, como consecuencia de orden administrativa.

Si la demandada no hace entrega de los bienes inmuebles de forma voluntaria comisiónese para tal efecto a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá DC y/o Inspecciones de Policía, Secretaría libre los oficios correspondientes.

Cuarto. En cuarto lugar, se condena a la demandada pago de los arriendos correspondientes al periodo que abarca del primero de enero de 2018 hasta la fecha en que se efectivice la entrega.

Como la demandada realiza las consignaciones pertinentes, una vez se encuentre en firme esta decisión, por Secretaría hágase entrega de los títulos de depósito judicial a la demandada que cubra dicho lapso, si hay lugar a fraccionamiento de los mismos, Secretaría, proceda.

Quinto. No se ordena el pago de la cláusula penal por lo indicado en la parte emotiva de esta audiencia.

Sexto. En sexto lugar no se tiene en cuenta el dictamen pericial aportado por lo expuesto.

Séptimo. En séptimo lugar, no hay lugar a declarar objeción al juramento estimatorio.

En octavo, se condena a la demandada el pago de las costas del proceso.
Como agencias en derecho se fija la suma de $12.521.000

Este proceso se originó porque **COMCEL S.A buscó obligar a la recepción del inmueble de cualquier manera, incluso estando el inmueble con un sellamiento por parte de la inspección de Policía** de Chapinero, para el 1º de enero de 2018.

El mismo Juez, en la parte motiva de dicho fallo estableció varios puntos a tener en cuenta:

> *"Ahora, esto nos lleva a una conclusión que las elucidaciones trazadas, las disquisiciones trazadas a lo largo de la audiencia,* ***nos demuestran que el actuar de la demandada contravenía los artículos 2005 y 2006 del Código Civil Colombiano y por lo tanto, no se produjo la terminación del contrato a 31 de diciembre de 2017, ya que la demandada no está en posición de restituir la cosa arrendada al final del arrendamiento****, el estado en que le fue entregado, ni conforme a los parámetros acordados en acta de entrega de 27 de octubre.*
>
> ***Ni podía restituirla o ponerla a disposición del arrendador por el sellamiento producto de su misión o incuria****, y es que esto claramente si va para hacer una verificación de las obras y de cómo se iba a entregar eso, claramente tenía que haberse roto los sellos y en tal evento se había incurrido en delitos que contemplan nuestra legislación penal.*
>
> *Entonces no habría manera ni de entregar, ni observar ni mirar, ni establecer como se encontraban esos lugares, salvo pues los parqueaderos, que la constancia que dejó la parte demandada el 21 de diciembre pues que no aparece.*
>
> *Ahora, encontramos que solamente para la Asamblea General de* ***17 de septiembre de 2019, se encuentra, que para esa época los inmuebles entregados en arrendamiento, por los aquí demandantes se encontraban con las reparaciones acordadas*** *restituidos a las zonas comunes que han tomado como consecuencias a las construcciones ilegales y que a manera informal dicha situación fue conocida tanto, por el demandante como por su representante,* ***pero no puede tener eficacia esa sola circunstancia de que tuvieran conocimiento, pues no aparece un acto formal de la entrega en esa época o posteriormente****.*
>
> ***Y si eso hubiese sido así, eso modificaría integralmente las pretensiones de la demanda y los hechos contenidos*** *en ella, así como los hechos de la contestación y las excepciones, por lo cual, si el despacho acogiera cualquiera de las tesis de la demandante o*

demandado en tal sentido, que modificaran las iniciales o la de la contestación, ***claramente iría en contravía del principio de la congruencia que reclama las decisiones judiciales.***

Esto ahora, debemos decir que lo expuesto de manera integral, de manera omni comprensiva por el despacho, nos conduce a declarar frustradas a las excepciones de mérito propuestas por la demandada.

En primer lugar, contra la terminación del contrato de arrendamiento desde el 31 de diciembre de 2017 e inexistencia del contrato de arriendo y falta de causa para recibir cánones, nos damos cuenta que eso no fue así, lo hemos explicado hasta el cansancio, ha quedado diáfanamente explicada esta situación.

La culpa exclusiva de los demandantes y hechos de terceras para obstaculizar la entrega del bien inmueble, y nadie puede alegar su propia culpa a su favor ya que no se probado que los demandantes se negaron a recibir injustificadamente, como ya se explicó.

La demandante no podía recibir por el sellamiento por autoridad competente como lo alega la demandada, y por no estar ejecutadas las obras a que se comprometió, por lo tanto, no podía entregar los inmuebles dentro de los parámetros del artículo 2005 y 2006. Es que cabe recordar que aquí, dentro de las obligaciones del contrato de arrendamiento está la obligación de restituir la cosa arrendada, ***encontramos que eso no pesa sobre el arrendatario la presunción de culpabilidad, le toca destruir a él esa presunción probando que, la no entrega no sobrevino por su culpa, y que empleó toda diligencia o cuidado en la entrega de la cosa, pero alguien puede predicar diligencia, cuidado, no culpa, no omisión cuando no saca las licencias previamente,*** *cuando no hace las Asambleas Generales de Copropietarios, en debida oportunidad. Yo creo que la respuesta es absolutamente negativa.*

Y es que cabe recordar, que esta obligación de dar que contiene estas obligaciones del 2005 y 2006, están inmersas dentro de la culpa contractual, porque de conformidad con el 1604 del Código Civil, ***el arrendador tiene la obligación de entregar la cosa, entregarla en los términos en que fue convenida, no excusando ni achacándole culpa a la parte contraria.***

Es que, de otro lado, ¿de dónde acá encontramos que el actuar de los querellantes frente a la acción policiva luce ilegitima? ¿o contraria a derecho, o es un abuso del derecho? Tanto así que este funcionario interrogó a la parte demandada, sobre si habían hecho alguna acción por el ejercicio abusivo de acción policiva o sobre temeridad o mala fe, encontrando una respuesta negativa.

*Luego, **esas afirmaciones** en sentido **que la acción tenía como propósito extender los contratos de arrendamiento carece de fundamento total**.*

Ahora, una parte que también toca con esto y unas obligaciones sobre la solidaridad es que el artículo 42 del Reglamento de Propiedad Horizontal no tiene cabida en este proceso, porque la solidaridad que allí se predica, es por los actos omisiones frente a terceros, no ha responsabilidad derivadas entre las partes, entre quienes son contendientes en este proceso, entre una parte que reclama acto de omisiones del otro.

Entre actos de omisiones que se reclaman del arrendador frente al arrendatario, entonces es la solidaridad que se predica por parte de la demandada no tiene cabida.

*En punto, en **igual derrotero también tiene la excepción de efectiva entrega al inmueble desde el 21 de diciembre de 2017,** renuencia a los demandantes a la recepción del inmueble, mora en recibir. En conformidad con el 2008 **no se aprecia la mora, por ninguno de los eventos.***

La parte del numeral cuarto del cumplimiento del contrato, por parte de COMCEL SA hasta la fecha de terminación, eso es hasta 31 de diciembre de 2017, que ni siquiera se ha producido la terminación mucho menos el cumplimiento, eso tiene sentido hilar de esa manera.

*El punto de la falta de legitimación por activa de los demandantes, y falta de legitimación por pasiva de COMCEL frente a las peticiones de restitución de zonas comunes y que se finca en que la demandada tomó unas zonas comunes del sexto piso que afectaban las oficinas 601-604 y garajes 15-26, pues vemos que **estas solamente se vinieron a restituir, para restituir no al arrendador, sino vinieron a restituir al edificio, a la construcción, como consecuencia de la querella y de la licencia otorgada por la Curaduría y de las obras realizadas, pero no, que se hayan restituido a la parte demandante que son dos cosas completamente diferentes**.*

Ahora, la mala fe de los demandantes, teniendo en cuenta los postulados o derroteros que señala el artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume y la mala fe debe demostrarse, situación que no ha ocurrido en desarrollo de este proceso.

Si bien, las zonas comunes no fueron del objeto del contrato de arrendamiento, si bien fueron objeto de modificación que afectaba

los bienes de propiedad del demandante a punto tal que, la licencia lo contempló y ordenó su restitución.

*Ahora, buena fe de **COMCEL**, pues a lo largo de todas las disquisiciones, de esta elucidaciones que ha plantado el despacho en desarrollo de esta audiencia, se estableció que COMCEL en desarrollo del contrato de arrendamiento, sobre todo en punto de las zonas comunes, **no actuó con rectitud ni actuó atado a la legalidad,** a punto tal que, mediante ciertas situaciones, **hace una entrega de manera indeterminada sin cumplir con sus obligaciones previas**, que ya les hemos explicado, que era la citación Asamblea General de Copropietarios, solicitó previa licencia, entrega mediante **acta que vulnera del artículo 2005 y 2006 del Código Civil, entrega no consensuada**.*

Y tenemos que decir que aquí claramente, siguiendo los lineamientos del artículo 39 de la Ley 675 los demandantes, por sí solos no habían podido citar Asamblea General de Copropietarios como lo quiere hacer ver la parte demandada, porque es un número plural y el ¿número plural cuál es? No podía hacerse los propietarios de las oficinas 601-604 y garajes 15-26, se podían considerar como una dupla para tal efecto.

(…)

*Y hay una cosa que también aquí queda claro, es que Esteban Barreto Gamboa testigo, **que también trabajo con COMCEL, cuando se le preguntó si se podían entregar los bienes dados en arrendamientos, manifestó que no, entonces cada vez va quedando más claro**.*[1] (Negrillas y subrayado fuera de texto)

Por lo que se puede ver, **dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado se dio una larga discusión respecto de la entrega del inmueble en la que COMCEL realizó varias formas de entrega unilateral**, sin dar pleno cumplimiento a los requisitos legales, a toda costa, sin importar el estado en el que se encontrara.

Luego de este fallo, COMCEL interpuso recurso de apelación, pero siempre ha insistido que su recurso nunca versó sobre la entrega, sin embargo, este punto no es cierto, su recurso iba más allá, ya que la pretensión principal era desconocer las

[1] Se adjunta transcripción textual del fallo proferido el 07 de abril de 2021. Por supuesto el documento válido para tal fin será el video que hace parte del expediente, pero no está de más el apoyo que pueda tener este texto.

obligaciones contractuales, por considerar que el contrato estaba terminado para diciembre de 2017, veamos las pretensiones del recurso interpuesto.

3. El recurso de apelación interpuesto en audiencia del 7 de abril de 2021 **(en adelante "Recurso de Apelación")** se circunscribe única y exclusivamente frente a las decisiones contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO,

> SEXTO y OCTAVO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada en los que respectivamente (i) se negaron las excepciones de mérito propuestas por Comcel, (ii) se declaró la terminación del Contrato de Arrendamiento celebrado entre las partes por incumplimiento de Comcel, (iv) se condenó a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento desde enero de 2018 hasta la fecha de entrega de los inmuebles, (vi) no se tuvo en cuenta el dictamen pericial presentado por Comcel y (viii) se condenó en costas a Comcel. Por lo anterior, este memorial contiene los reparos frente a las decisiones anteriormente mencionadas, y frente a las consideraciones que las fundamentaron.
>
> (…)
>
> 8. Al interpretar las comunicaciones escritas intercambiadas por las partes y las actas por ellas suscritas con posterioridad a la comunicación de la terminación del contrato enviada por Comcel el 23 de marzo de 2017, el juez consideró que las partes habían condicionado la fecha de la terminación del contrato a la entrega de los inmuebles con las obras pactadas terminadas. Sin embargo, de la lectura de esas comunicaciones no es posible concluir que las partes hubieran sujetado la fecha de la terminación a la finalización de las obras. Por el contrario, lo que se concluye de las pruebas documentales mencionadas es que las partes aceptaron que la fecha de la terminación del contrato sería el 31 de diciembre. Las pruebas analizadas por el Despacho evidencian que lo que ocurrió es que, como consecuencia de la terminación del contrato, las partes se pusieron de acuerdo en las condiciones para el cumplimiento de una obligación derivada de la terminación del mismo, que es la restitución del inmueble. Una clara muestra de lo anterior es el texto del Acta Final de Adecuaciones suscrita por las partes en la que señalan:

> 10. Es claro que el señor Hermosa aceptó la fecha del 31 de diciembre de 2017 como la fecha de terminación del contrato y que los acuerdos posteriores versaron sobre la forma de la restitución, como consecuencia de la terminación del contrato.
> 11. Y es que las pruebas mencionadas no pueden interpretarse como lo hizo el Despacho, porque la Ley es clara al determinar que la restitución de un inmueble arrendado es una obligación que se deriva de la terminación del contrato, y no una condición para que éste se termine. El Código Civil establece sobre la restitución de la cosa arrendada:
>
> (Subrayado en amarillo fuera de texto)

Igual, se podrá ver dentro del cuaderno digital correspondiente, el recurso interpuesto y las justificaciones que siempre **buscaban sustentar para la entrega y terminación del contrato a toda costa, teniendo como fecha inicial el 31 de diciembre de 2017.**

Es por esto por lo que **no puede concluirse que COMCEL no se oponía a la entrega**, ya que, inclusive, para ellos ya estaba entregado, para diciembre de 2017 y su esperanza a debatir en segunda instancia, era la no exigibilidad del contrato presumiendo que la entrega ya se había realizado.

A la semana siguiente del fallo, es decir, el 12 de abril de 2021, yo, recibo la llamada telefónica a mi celular de una persona llamada LAURA BERMÚDEZ, solicitando a nombre de COMCEL S.A la entrega del inmueble. Al respecto, **esta persona nunca hizo parte del proceso, solo vino a hacer parte del mismo por sustitución hasta el 04 de julio de 2023**, más de dos años después. A pesar de ello, ella misma envío un correo electrónico "resumiendo" la conversación de forma abusiva y tomando esta mismo intento de entrega como válido para todos los efectos. Prueba del correo y la llamada fue aportada por la misma ejecutada, anexo inserto en este escrito.

Friday, April 23, 2021 at 15:31:00 Colombia Standard Time

Asunto: Restitución del inmueble de Mario Hermosa y Vivian Fernández
Fecha: viernes, 23 de abril de 2021, 11:04:21 a. m. hora estándar de Colombia
De: Laura Bermudez
A: joseyepes@yepesjimenezlegal.com
CC: alopez, María Camila de Brigard
Datos adjuntos: image001.jpg

Respetado doctor Yepes,

Espero se encuentre muy bien. De acuerdo con nuestra conversación telefónica del pasado 12 de abril de 2021, en la que, a nombre de Comcel, le propusimos acordar la restitución voluntaria de los inmuebles de propiedad de sus representados, los señores Hermosa y Fernández (oficinas No. 601, 604 y los parqueaderos 15 y 26 que hacen parte del Edificio Gales – Propiedad Horizontal, ubicado en la calle 90 No. 13-23 de la ciudad de Bogotá), me permito sintetizar los argumentos expuestos por usted para rechazar la propuesta de Comcel de restituir los inmuebles, de común acuerdo:

- Según su interpretación, la sentencia proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito (Proceso No. 2018 – 00360) en audiencia del 7 de abril de 2021, en la que se ordenó a Comcel la restitución de los inmuebles de propiedad de sus representados, no se encuentra ejecutoriada, puesto que se concedieron los recursos de apelación interpuestos por las partes.
- De acuerdo con esta interpretación, y a pesar de que los reparos de Comcel y de sus representados frente a la sentencia del 7 de abril no versan sobre la orden de restituir los inmuebles mencionados, su posición es que la orden de restitución contenida en la sentencia no se encuentra en firme, dado que la sentencia no se encuentra ejecutoriada.
- En ese sentido, su posición es que, a menos de que Comcel desista del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en audiencia del 7 de abril y que, como consecuencia, sus representados puedan recibir los títulos correspondientes a los cánones de arrendamiento consignados a órdenes del juzgado, no existe una orden judicial ejecutoriada de restitución.
- Como conclusión de lo anterior, sus representados no acordarán recibir los inmuebles objeto del proceso de manera voluntaria.

Agradeciendo de nuevo haber recibido nuestra llamada, le reiteramos la total disposición que tiene Comcel S.A. para restituir los inmuebles de propiedad de los señores Hermosa y Fernández, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 7 de abril de 2021 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. Abajo le

La persona legitimada a realizar esta solicitud sería la apoderada de COMCEL S.A, la abogada Adriana López, o en su defecto el representante legal de COMCEL S.A, pero un tercero a nombre de otra persona, ejecutando un mandato sin la debida representación, considero que no es apropiado.

Desde abril de 2021, COMCEL S.A solicitó que se designara un secuestre, cosa que pudo suceder y que el Despacho del Juzgado 26 Civil del Circuito no atendió ni resolvió, seguramente por entender que existía un proceso en curso, sin embargo, pues no es menester de nosotros excusar o avalar acciones u omisiones del mismo juzgado, pero, en cualquier caso, **el demandando tuvo oportunidad para proceder y solicitar la entrega forzada del inmueble, si es que en derecho así correspondiera.**

Ahora bien, sobre este recurso de apelación interpuesto por COMCEL S.A, deviene un escenario particular, en donde el Tribunal Superior de Bogotá mediante el magistrado ponente, Marco Antonio Álvarez Gómez, se determinó que este proceso de restitución de inmueble arrendado no era de doble instancia, argumentando que

lo único que estaba en discusión era el pago, fallo que fue proferido el 04 de noviembre de 2021, notificado en estado del 05 de noviembre de 2021. Sobre esta decisión se interpuso recurso de suplica por parte de COMCEL S.A, la cual fue igualmente negada.

Finamente, COMCEL S.A interpuso acción de tutela con número de radicado 11001-02-03-000-2021-04605-00 el 10 de diciembre de 2021 y el 15 de diciembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, negó el amparo incoado, notificado el 16 de diciembre de 2021, enviando este proceso a segunda instancia a la sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia quien tiene conocimiento el 14 de enero de 2022 quien resuelve dicha tutela en segunda instancia, confirmando el fallo de primera instancia.

Sin embargo, SOLO hasta el 14 de enero de 2022, **no antes**, nuevamente es enviado correo electrónico por parte de Laura Bermúdez (Hace parte de los anexos de la contestación del proceso ejecutivo) en el cual adjunta un archivo PDF suscrito por la abogada apoderada. Es decir, un escrito de un tercero, proveniente de un correo electrónico que no ha hecho parte del proceso, ni en el de restitución de inmueble ni del presente proceso ejecutivo.

laurab@lopezabogadoscol.com

De:	laurab@lopezabogadoscol.com
Enviado el:	viernes, 14 de enero de 2022 12:17 p. m.
Para:	'Jose Ivan Yepes'
CC:	'ccto26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co'; 'JOHANA VILLANUEVA RODRIGUEZ'; 'Johanna Gonzalez Romero'; 'Adriana Lopez (Lopez Abogados)'
Asunto:	Rad. 2018-360 Cumplimiento sentencia del 7 de abril de 2021 - Entrega de inmuebles de propiedad de los señores Hermosa y Fernández.
Datos adjuntos:	20220114 - Carta cumplimiento sentencia Mario Hermosa.pdf

Señores
MARIO HERMOSA PUYO y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
C.C. José Iván Yepes Jiménez
joseyepes@yepesjimenezlegal.com

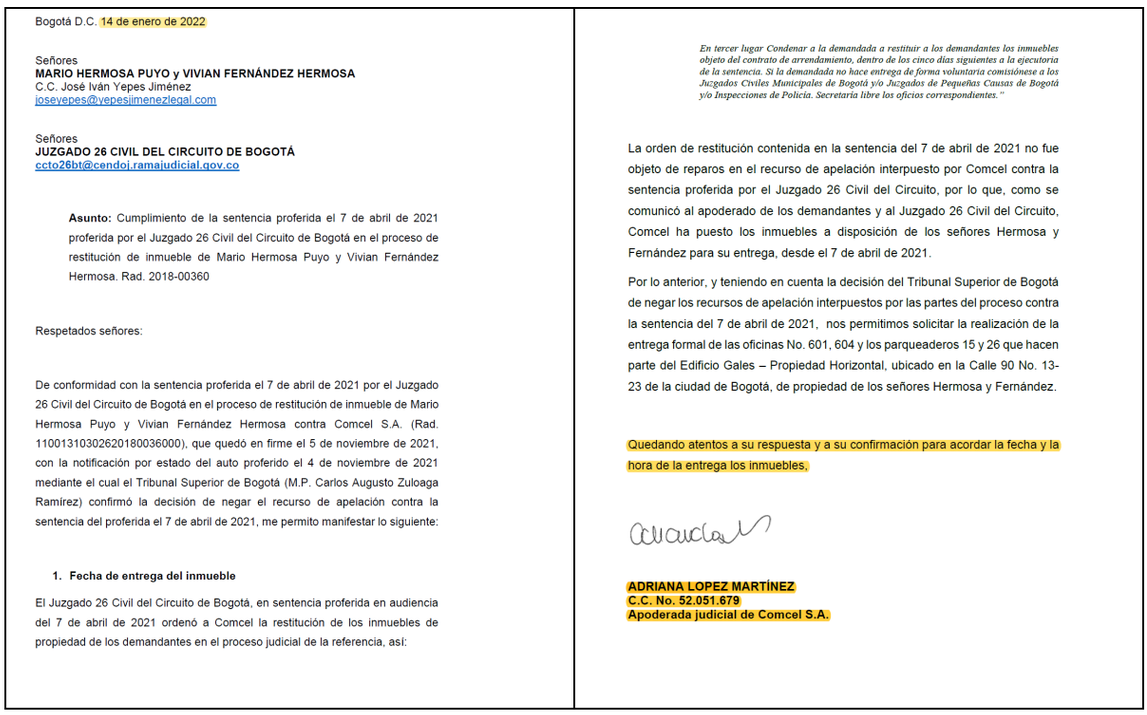
Señores
JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
ccto26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Cumplimiento de la sentencia proferida el 7 de abril de 2021 proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso de restitución de inmueble de Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa. Rad. 2018-00360

Respetados señores,

Por instrucciones de la doctora **Adriana López Martínez,** apoderada judicial de Comcel S.A. en el proceso del asunto, me permito remitir a ustedes la comunicación adjunta.

Documento PDF (Resaltado fuera de texto)



Bogotá D.C. 14 de enero de 2022

Señores
MARIO HERMOSA PUYO y VIVIAN FERNÁNDEZ HERMOSA
C.C. José Iván Yepes Jiménez
josevepes@yepesjimenezlegal.com

Señores
JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
ccto26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Cumplimiento de la sentencia proferida el 7 de abril de 2021 proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso de restitución de inmueble de Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa. Rad. 2018-00360

Respetados señores:

De conformidad con la sentencia proferida el 7 de abril de 2021 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso de restitución de inmueble de Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa contra Comcel S.A. (Rad. 11001310302620180036000), que quedó en firme el 5 de noviembre de 2021, con la notificación por estado del auto proferido el 4 de noviembre de 2021 mediante el cual el Tribunal Superior de Bogotá (M.P. Carlos Augusto Zuloaga Ramírez) confirmó la decisión de negar el recurso de apelación contra la sentencia del proferida el 7 de abril de 2021, me permito manifestar lo siguiente:

1. **Fecha de entrega del inmueble**

El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida en audiencia del 7 de abril de 2021 ordenó a Comcel la restitución de los inmuebles de propiedad de los demandantes en el proceso judicial de la referencia, así:

En tercer lugar Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si la demandada no hace entrega de forma voluntaria comisiónese a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá y/o Inspecciones de Policía. Secretaría libre los oficios correspondientes."

La orden de restitución contenida en la sentencia del 7 de abril de 2021 no fue objeto de reparos en el recurso de apelación interpuesto por Comcel contra la sentencia proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito, por lo que, como se comunicó al apoderado de los demandantes y al Juzgado 26 Civil del Circuito, Comcel ha puesto los inmuebles a disposición de los señores Hermosa y Fernández para su entrega, desde el 7 de abril de 2021.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar los recursos de apelación interpuestos por las partes del proceso contra la sentencia del 7 de abril de 2021, nos permitimos solicitar la realización de la entrega formal de las oficinas No. 601, 604 y los parqueaderos 15 y 26 que hacen parte del Edificio Gales – Propiedad Horizontal, ubicado en la Calle 90 No. 13-23 de la ciudad de Bogotá, de propiedad de los señores Hermosa y Fernández.

Quedando atentos a su respuesta y a su confirmación para acordar la fecha y la hora de la entrega los inmuebles.

ADRIANA LOPEZ MARTÍNEZ
C.C. No. 52.051.679
Apoderada judicial de Comcel S.A.

Que, en cualquier caso, dimos respuesta a dicha comunicación el 26 de enero de 2022, con copia al Juzgado 26 Civil del Circuito, exponiendo los mismos argumentos que hemos expuesto acá respecto de la entrega del inmueble, que estaba pendiente por definir la acción de tutela y que el fallo no tenía auto de obedézcase y cúmplase. (Documento anexo en el proceso ejecutivo)

El 27 de enero de 2022, envío esta vez Adriana López a través del correo registrado y sobre el que actúo dentro del proceso, documento adjunto, indicando porque su posición respecto de la acción de tutela y las fechas posibles de entrega, manifestando que estaba mi poderdante en mora de recibir *"…desde al menos desde el 23 de abril de 2021, fecha en la que Comcel puso de presente su renuencia a recibir a pesar de lo ordenado en sentencia del 7 de abril de 2021 ante la autoridad judicial."*

Por lo que, en la parte final de la comunicación, establecen como entrega unilateral el lunes 31 de enero de 2022 a las 2.30 pm, e indicando que mi poderdante está en mora de recibir el inmueble.

Sin embargo, **el 28 de enero de 2022**, Adriana López apoderada de Comcel S.A,

solicita nuevamente al Juzgado 26 Civil del Circuito **la designación de un secuestre** para la entrega de los inmuebles objeto del proceso.

Durante este lapso, COMCEL S.A realizó el pago de los cánones de arrendamiento, esto con el fin de ser escuchado. El interrogante que surge, y es que, bajo la teoría de COMCEL S.A y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el proceso ya finalizó, ¿porque deben seguir pagando los cánones de arrendamiento para ser escuchados?, o desde el punto de vista práctico ¿no es evidente que COMCEL S.A esperaba para aquella época validar que este caso fuera decidido en segunda instancia?, y de esta forma acceder a sus pretensiones de eliminar cualquier pago o responsabilidad vía contractual sobre los inmuebles de Mario Hermosa.

Por ello, **es que acá cobra vital importancia la figura de la expedición de un auto que tiene la fuerza vinculante y establecer una fecha para que dicho caso**; restitución de inmueble arrendado se diera por finalizado, ya que de forma objetiva es lo que debe suceder, mas cuando se interpusieron recursos de segunda instancia y escenarios de tutela para dirimir el "conflicto" presentado inicialmente.

Fue hasta el 3 de junio de 2022 que el Juzgado 26 Civil del Circuito procedió a proferir el auto de obedézcase y cúmplase, **bajo este parámetro y sin saber el estado actual del inmueble se procedió a recibir el mismo**, **dando cumplimiento a la sentencia, dejando constancia del estado en el que se recibía**, mediante acta del 14 de junio de 2022. Dicha acta fue clara en establecer como se recibía el inmueble y sobre los cánones el titular no se pronunció. A dicha entrega acudió un representante legal de Comcel S.A.

Ya con estas decisiones y el acta, en donde era claro el estado del proceso, **se pudo solicitar la entrega de los dineros depositados a órdenes del juzgado**.

Para tal fin, se elaboró escrito **el 17 de junio de 2022**, sobre el cual **COMCEL S.A se opuso y manifestó la negación a entregarlos**. El **26 de octubre de 2022**, **el Juzgado 26 Civil del Circuito, profirió auto** mediante el cual, en derecho y bajo el procedimiento **autorizó la entrega de los dineros**, toda vez, que la entrega del inmueble se realizó el 14 de junio de 2022.

YEPES JIMENEZ
ABOGADOS

JUZGADO VEINTISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., octubre veintiséis (26) de dos mil veintidós.

Radicación: Restitución No. 2018 0360.
Demandante: MARIO HERMOSA PUYO Y OTRA.
Demandado: COMCEL S.A.

Conforme a lo resuelto en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 7 de abril de 2021, se dispone entregar los dineros a la parte demandante, que se consignaron por concepto de cánones de arrendamiento por parte de la demandada, a ordenes de este juzgado y por cuenta del proceso de la referencia.

Lo anterior, por cuanto el inmueble objeto de los cánones de arrendamiento fue entregado hasta el 14 de junio de 2022, según acta aportada al expediente y firmada por el demandante y representantes de la demandada, donde no se formuló ninguna limitación para la entrega de los cánones de arrendamiento.

NOTIFIQUESE, (2)

LEONARDO ANTONIO CARO CASTILLO
Juez

El 1 de noviembre de 2022, COMCEL S.A interpuso recurso de reposición sobre dicho auto, el cual fue resuelto el 01 de diciembre de 2022, en la que **el Juzgado 26 Civil del Circuito confirmó la posición de la entrega de los dineros**, toda vez, que la sentencia proferida en abril de 2021 establecía que se debían desde el 01 de enero de 2018 hasta la fecha de entrega, lo cual sucedió el 14 de junio de 2022. Esto de la siguiente forma:

en que se efectivice la entrega. Como se han realizado los correspondientes depósitos, una vez se encuentre en firme esta decisión por Secretaría hágase entrega de los títulos de depósito judicial a la demandante por dicho lapso."

La orden impuesta fue clara en indicar que los arriendos que se debían pagar se extendían hasta que se realizara la entrega del bien inmueble objeto de litigio, lo cual únicamente se podría verificar con el acta de entrega, lo cual se verificó con el acta de entrega suscrita hasta el 14 de junio de 2022, siendo aportada al expediente y firmada por el demandante y representantes de la demandada, donde no se formuló ninguna limitación para la entrega de los cánones de arrendamiento.

De otro lado, de manera posterior a la sentencia de fecha 7 de abril de 2021, si bien es cierto obran en el expediente comunicaciones entre las partes en lo relativo a la entrega del inmueble, este despacho judicial únicamente puede tomar como referente la fecha de entrega verificada en la respectiva acta, sin poder entrar a dirimir o establecer si existió o no alguna mora o negligencia por parte de los demandantes, ya que esa situación correspondería a otro proceso.

Así las cosas, al encontrarse los dineros consignados por concepto de arrendamientos a ordenes del Juzgado y por cuenta del proceso de la referencia, es obligatorio efectuar la entrega de esos dineros a la parte demandante.

En tal sentido, se dispone:

NO REVOCAR el auto de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se ordenó la entrega de dineros.

NOTIFIQUESE, (2)

LEONARDO ANTONIO CARO CASTILLO
Juez

(Resaltado fuera de texto)

Es decir, **estamos frente a una decisión judicial clara por parte del mismo despacho y con fundamento en estos autos** y el derecho que nos asistía en el numeral cuarto de la sentencia proferida por este mismo despacho el 4 de abril de 2021, **debíamos proceder a solicitar los dineros pendientes correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo, hasta el 14 de junio**, fecha en la que se realizó la entrega.

Fue con base en lo anterior, que se solicitaron los dineros depositados a orden del Juzgado 26 Civil del Circuito, respecto de los cánones del 01 de enero de 2018 al 31 de enero de 2022, dinero que fue entregado al señor Mario Hermosa el 20 de diciembre de 2022, quedando pendiente los dineros del 01 de febrero de 2022 al 14 de junio de 2022, por lo que se dio inicio al proceso ejecutivo.

Ahora, **el mismo Despacho, desconociendo los hechos anteriores**, en especial la sentencia del 07 de abril de 2021, el auto de obedézcase y cúmplase del 03 de junio de 2022, el auto del 01 de diciembre de 2022 que resolvió la entrega de los dineros, procede dentro de este proceso ejecutivo a **cometer dos grandes errores**: uno, **apartarse de decisiones en firme** y segundo **modular una sentencia en firme** o un fallo, **generando condiciones mas gravosas para mis poderdantes**, sin tener un claro sustento procedimental para ello.

En este sentido, y bajo estos hechos, no se puede entender que el proceso ejecutivo iniciado, tuviera la justificación establecida en la parte motiva y resolutiva de la sentencia proferida el 04 de julio de 2022, por lo que consideramos que **este fallo está violando el debido proceso, la cosa juzgada, aclarando un fallo por fuera de término**, elementos jurídicos que serán explicados a continuación.

CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA Y UN AUTO

No puede ahora el juez de primera instancia modular un fallo y **entrar a establecer mediante un proceso ejecutivo obligaciones o consecuencias que no fueron cobijadas por el juez ni por el procedimiento**, siendo que el fallo proferido el 07 de abril de 2021, tuvo fuerza de ejecutoria hasta el 03 de junio de 2022, de forma integra sin modificaciones, por lo que esta decisión le es oponible, desde el 06 de

junio de 2022 a todos; tanto a COMCEL S.A como a mi poderdante, al mismo Juez y a la rama judicial, por lo que **desconocer dichos efectos, estaría claramente violando el ordenamiento jurídico; sustancial y procedimental**.

Si el objetivo era aclarar la sentencia, deben seguirse los parámetros del articulo 286 del CGP, que dispone:

> *Artículo 285. Aclaración.* ***La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció****. Sin embargo,* ***podrá ser aclarada****, de oficio o a solicitud de parte,* ***cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda****, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.*
>
> ***En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto****. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.*
>
> *La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.* (Negrilla y subrayado fuera de texto)

El mismo artículo 285 citado, deja claro que **ni la sentencia ni los autos son revocables ni reformables por el juez que los pronunció, cosa que sucedió en este proceso a través de un fallo de un proceso ejecutivo**.

Ahora bien, el auto proferido el 26 de octubre de 2021, sobre el cual se resolvió recurso de apelación el día 01 de diciembre de 2021, respecto de la entrega de los dineros, fue claro al establecer los efectos de la sentencia y de la obligación a cumplir, tanto para el demandado, como para el mismo despacho.

No puede ahora a través de este fallo, de un proceso ejecutivo, desconocer lo previamente proferido, esto es, una sentencia con unos efectos económicos claros, unos autos con unas consecuencias claras, todos ellos en cumplimiento del ordenamiento legal y ahora darle otros efectos a la sentencia y al fallo.

Es por esto, que el ordenamiento procesal establece los parámetros de la sentencia y la congruencia de lo motivo con lo resolutivo.

El articulo 281 del CGP establece lo siguiente:

> *Artículo 281. Congruencias.* ***La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda*** *y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.*
>
> *No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.*
>
> *Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.*
>
> *En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.*
>
> *(…)"*

Es que en el caso en concreto, se dio inicio a un proceso ejecutivo reclamando unos dineros, y ahora es mi poderdante, **con fundamento en este proceso ejecutivo, paso de ser de ejecutante a ejecutado**, ya que el mismo fallo en su parte motiva y resolutiva ordena la devolución de los dineros ya pagados (aprobados mediante auto del 01 de diciembre de 2022), por lo que mi poderdante, según esto, deberá ahora realizar la devolución de los dineros comprendidos entre el 06 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022, resultado a toda luz ilógico, contradictorio y abiertamente trasgresor del ordenamiento jurídico.

Es por esto, que, con todo respeto del fallador de primera instancia, desconoce abiertamente el debido proceso y el cumplimiento de los efectos de una sentencia y de un auto, que gozan de plena validez y legalidad, con los efectos que la Constitución y la Ley le otorgan.

COSA JUZGADA

La cosa juzgada, esta definida en el titulo III, efecto y ejecución de las providencias, capitulo I y Capitulo II. Quiero llamar la especial atención sobre el capítulo II, artículos 305 y siguientes, porque este deja claro y da un esquema académico sobre el cual fundamos el pleno cumplimiento de una sentencia, sin optar por mejores o peores fechas, sino por elementos objetivos.

> *"CAPÍTULO II*
>
> *Ejecución de las Providencias Judiciales*
>
> *Artículo 305. Procedencia.* ***Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o*** *a partir del* ***día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior****, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya* ***concedido apelación en el efecto devolutivo****.*
>
> ***Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior,*** *según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta.*
>
> *(…)"* (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Este artículo, trae varios elementos a estudiar y quiero con todo respeto, desglosarlo y analizarlo a luz del presente caso.

Norma	Análisis Normativo	Análisis sobre el caso
1. Podrá exigirse la ejecución de las providencias **una vez**	Cuando sobre estas no se interpongan recursos o no sea posible interponerlos, es decir, tres días después de proferida la	Comcel S.A interpuso recurso de apelación, concedido en el efecto

ejecutoriadas o,	providencia.	suspensivo el 07 de abril de 2021.
2. Podrá exigirse la ejecución de las providencias **a partir del día siguiente de la notificación del auto del obedecimiento a lo resuelto por el superior.**	Interpuesto los recursos, se ejecutará la sentencia, al día siguiente del auto de **obedecimiento** a lo resuelto por el superior. **Esto no sucede antes, ni después.**	En este caso, al existir recurso de apelación y en el interregno casualmente una tutela, el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior jerárquico se dio el 03 de junio de 2022
3. Según fuere el caso.	Es decir, sucederá una cosa u otra, la providencia adquirirá firmeza y ejecutoria si contra ella no proceden recursos o procediendo no se interponen, por lo que la FECHA en la que tiene fuerza vinculante será tres días después de proferida la providencia. O si lo anterior no sucede, es decir, si se interponen recursos, la providencia tendrá efectos al día siguiente del auto de obedézcase y cúmplase. Este articulo disyuntivo no es de escogencia o a gusto del consumidor, es un parámetro objetivo en la que si sucede una cosa u otra objetivamente se tendrá claro cuando la providencia tiene fuerza vinculante y oponible, es una condición futura cierta, con una fecha clara.	En el caso concreto, lo acontecido fue lo segundo, por lo que la fecha clara de exigibilidad y cumplimiento de TODO el proceso fue el 04 de junio de 2022, ya que el 03 de junio de 2022 fue proferido el auto de obedézcase y cúmplase.
4. Cuando la apelación se haya concedido en efecto devolutivo.	Es decir, en el evento que, concedida la apelación, esta allá sido concedida en efecto devolutivo, el fallo sin importar lo que pase en segunda instancia o a futuro tendrá los efectos de fuerza vinculante y exigible, proferida dicha providencia.	En este caso, el recurso de la sentencia fue concedido en efecto suspensivo.

Lo mismo, explicado en el cuadro anterior, se puede predicar de los autos del 26 de octubre de 2021 y 01 de diciembre de 2021, en relación con la entrega de los dineros.

Y es que el mismo artículo 305 deja claro que, si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

El artículo 3 de la sentencia del 14 de abril de 2021, disponía que se debía realizar la entrega 5 días siguientes a la ejecutoria.

> **Tercero.** Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento señalado en el numeral anterior, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia; sobre zonas comunes no habrá pronunciamiento porque estas fueron restituidas, como consecuencia de orden administrativa.

Por lo que la obligación de entrega y la obligación de recibir surgía conforme el numeral 3 de la misma sentencia del 14 de abril de 2021, a los 5 días siguientes de la ejecutoria de la sentencia.

La ejecutoria de la sentencia se dio cuando el juez de primera instancia profirió auto de obedézcase y cúmplase, el lunes 03 de junio de 2022, es decir el plazo se vencía 14 de junio de 2022, cosa que así sucedió, fecha en la que se recibió el inmueble

Y es que antes de esa fecha, era desconocer el ordenamiento jurídico, por lo que acudir a una fecha diferente era dar por sentado la no existencia de un proceso judicial sobre el cual, ya existía un fallo y sobre el cual no era objeto de conciliación o arreglo diferente, ya que la oportunidad para hacerlo había finalizado.

Asumir ahora entonces, que se deba acudir a las mejores condiciones para quien puso en una contingencia a mis poderdantes, ahora deba salir a deber, por no acceder a una supuesta entrega anticipada, cuando **las partes, tomaron la decisión de forma clara, y es que fuera el Estado a través de su facultad jurisdiccional, arreglara y fijara el resultado de TODA una controversia** que con

una respuesta negativa o positiva, será de obligatorio cumplimiento con las condiciones, plazos insertos y claros dentro de un procedimiento, teniendo esa fuerza vinculante al estarse resuelto el caso, obedeciéndose y cumpliendo lo que designa un superior jerárquico en análisis de una segunda instancia o de un recurso interpuesto, teniendo desde aquella fecha, los efectos de cosa juzgada, oponible a todos, inclusive al mismo Estado.

Ahora bien, lo que respecta al debido proceso, se hace también importante manifestarlo, lo cual ha sido tocado parcialmente en líneas anteriores.

DEBIDO PROCESO

El debido proceso, un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución Política como fundamento del Estado Social de Derecho, permea no solo las actuaciones del Estado, sino también la de toda la población.

Entrar a estudiar el marco académico, jurisprudencial y normativo es de sobra para los efectos pertinentes.

Sin embargo, si se hace necesario aterrizar los hechos ocurridos dentro de este proceso, y que sea el juez de segunda instancia el que analice si existe vulneración a dicha figura Constitucional.

La forma para modular o aclarar una sentencia, tiene un procedimiento claro, y no puede, con todo respeto, el Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá desconocer su propio fallo, proferido el 07 de abril de 2021 sobre la restitución de un inmueble arrendado, para ahora mediante fallo del 04 de julio de 2023, a través de un proceso ejecutivo manifieste posiciones diferentes, y, ya sea, aclare o module un fallo con fechas y consecuencias claras.

De igual forma, considero que **el debido proceso se vulnera al dejar sin efectos los autos del 26 de octubre de 2021 y 01 de diciembre de 2021**, sobre la entrega de los dineros del proceso de restitución de inmueble arrendado, para con un fallo de un proceso judicial diferente, esto es, un proceso ejecutivo, los deje sin efecto,

los module y ahora proceda a hacer gravosa la situación de mi poderdante **a obligarlo a entregar unas sumas de dinero, otorgados con base en unos autos que tienen el efecto de cosa juzgada y exigibles de cualquier modo**.

Como se explicó de varias formas, la entrega podría darse de muchos modos, voluntaria o forzada, pero el pago de los dineros estaba sujeto a una fecha, no a una conducta, por lo que acudir a esta figura desdibuja en su totalidad lo dispuesto en el fallo de primera instancia, que es sustentó del proceso ejecutivo.

Es por esto, que, estas explicaciones buscan hacerle entender al Tribunal que la no entrega-recibo de los inmuebles se dio con base a un sustento normativo, que dentro de la buena fé, considero que es valido dada la complejidad de la contraparte y del caso en concreto, en el cual, el común acuerdo no era viable por su proceder sesgado y estrictamente impositivo.

CUMPLIMIENTO – INCUMPLIMIENTO – ABUSO DEL DERECHO.

En este punto es vital tener claro que frente a un fallo judicial debemos respetar sus disposiciones, estemos o no estemos de acuerdo,

El riesgo de un litigio lo asumió COMCEL S.A al iniciar obras sin licencia, entregar una oficina sellada por infracción al régimen de obras y urbanismo, y no puede ahora pretender que sea el afectado que procure de cualquier forma gestionar la recepción de un inmueble que se encontraba en curso de un proceso judicial por el indebido actuar de COMCEL S.A, que como lo manifestó el juez en fallo del 07 de abril de 2021, que resolvió el proceso de restitución de inmueble arrendado, en el que en su parte motiva determino que **COMCEL S.A, *"…no actúo con rectitud ni actúo atado a la legalidad…".***

Pero no puede, ahora, el juez en su fallo del proceso ejecutivo acudir a que mi poderdante ahora sí deba recibir los inmuebles como están conforme el artículo 1648 del código civil, cuando quedo probado dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, que el inmueble estaba con un sellamiento por una autoridad administrativa y en obra, c**on la clara imposibilidad de recibir los mismos y que**

mi poderdante no tenía claro para aquellas fechas el estado actual de los mismos.

Es que el juez, al establecer en su fallo que:

> *"…De esto se deduce que el acreedor no puede ser obligado a que se le pague en forma distinta a como se estipuló, pero tampoco puede ser conductas que impidan el cumplimiento del pago y hagan más gravosa la situación del deudor pues puede estar atado a una condición o plazo, por lo tanto, si el pago no está vinculado a un plazo, una condición debe ejecutarse inmediatamente…"*

De esta forma desconoce la sentencia del 07 de abril de 2021, que dejo claro a una condición futura cierta, dos cosas, la obligación de entregar y recibir, esto es, 5 días después de ejecutoriado el fallo, lo cual sucedió el 14 de junio de 2021. Y dos, a pagar unos dineros desde el 01 de enero de 2018 hasta que se efectivice la entrega, lo cual sucedió el 14 de junio de 2022.

De nuestra parte, existía un litigio, que COMCEL S.A así también lo entendió sabiendo las consecuencias de no pagar los cánones de arrendamiento para ser escuchado, cosa que hizo hasta enero de 2022, fecha en la que existía fallo de primera instancia de la acción de tutela interpuesta. Es por esto, que **el auto de obedézcase y cúmplase tiene unos efectos muy importantes dentro del ordenamiento jurídico y considero que se están pasando por alto, omitiendo lo que quiso el legislador con esta figura.**

Acá, no puede predicarse como abuso o incumplimiento un fundamento para tal fin, amparados en el procedimiento para dirimir un conflicto "irremediable" entre las partes, pero remediable con las reglas objetivas de nuestro ordenamiento jurídico.

La posición de cuando este fallo le era exigible a cualquiera sucedía cuando el proceso llegara al juez de conocimiento y expidiera el auto de obedézcase y cúmplase, y cuando este auto cumpliera su termino de ejecutoria, **la obligación de hacer, tanto de recibir como de entregar se activaba, por clara disposición de la misma sentencia y de la Ley**, por lo que en este evento no estábamos en el escenario de una conciliación o de acuerdo entre las partes, ya que estaba en

discusión TODO el contrato y sus obligaciones, por lo que **asumir algo diferente para nuestro punto de vista era desconocer los efectos de la misma sentencia.**

La teoría que la ejecutoria sucede cuando no existen recursos, daría por cierta la afirmación que el auto de obedézcase y cúmplase no es sino entonces una exclusiva norma obsoleta sin ningún efecto, apreciación que parece ser acogida por la simple posición que con la decisión del superior o de segunda instancia es razón suficiente para manifestar que el fallo es exigible por no existir más recursos a interponer.

Y, es que no se puede desconocer la mutación normativa procedimental que ha tenido el código general del proceso, que **en principio era predominantemente oral**, tanto así, que los recursos de apelación debían sustentarse en audiencia presencial y oralmente, **pero con la Pandemia**, surgió el Decreto con fuerza de Ley 806 de 2020, que dispuso que **los recursos de segunda instancia debían sustentarse y resolverse por escrito**, practica que se consolido con la Ley 2213 de 2022, volviendo de esta forma a practicas procesales anteriores, como lo eran las del Código de Procedimiento Civil.

Es por esto, que la figura del artículo 302 del código general del proceso debe estudiarse y tener claro sus efectos.

El mismo articulo trae dos condicionamientos, disyuntivos, es decir, excluyentes entre sí.

> *"Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.*
>
> *No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.*
>
> *Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos."*

Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas cuando no sean impugnadas o no admitan recurso, es decir, si admiten recurso no tendrán el efecto de ejecutoria, pero no con ello serán exigibles o tendrá efectos de ejecución, toda vez, que este efecto lo otorga el auto de obedézcase y cúmplase proferido por el juez que conoció en primera instancia.

Es decir, si una providencia no es impugnada o no admita recurso su término de ejecutoria y ejecución es coincidente.

Pero si una providencia es impugnada, de ipso facto no adquiere, la ejecutoria y la ejecución la sentencia al proferirse la decisión de segunda instancia, ya que, para ello, el legislador, tanto en el Código General del Proceso, como en el extinto Código de Procedimiento Civil, estableció con claridad que después de proferido fallo de segunda instancia, el juez de conocimiento deberá proferir auto de obedézcase y cúmplase.

Es por esto, que **considero un error del Juez 26 Civil del Circuito determinar que surtió efecto la excepción del pago** contra una providencia judicial, ya que el pago, como se manifestó a lo largo del presente escrito es un hecho que proviene de una fecha objetiva y claramente establecida, **sin que se pueda ahora pretender asumir un intento de entrega como un pago**, porque de esta forma, entonces se **podría entender cualquier intento de entrega sucedido entre diciembre de 2017 a la fecha, como hecho suficiente para dar por satisfecha la condición de pago.**

PAGO COMO EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

El pago, para que realmente extinga una obligacion, debe ser ejecutado acorde al contenido de la obligación misma, ya que cada prestación posee características distintas, lo cual hace que un pago sea eficiente pueda adoptar múltiples variantes. De esto se deduce, que **el acreedor no podrá ser obligado a que se le pague de forma distinta a como se estipuló**, como lo determine la ley o **en** este caso **una sentencia judicial en firme**, aun sin importar que el deudor

realice otro pago de parecida similitud o de mayor amplitud a la que se estableció. Por lo que el pago se deba hacer, se hará cuando este sea exigible, excepto cuando esté sujeto a un plazo o condición. Como en el presente caso, la sentencia sujetó la obligación de pago a una fecha futura cierta; desde el 01 de enero de 2018 hasta cuando se efectivice la entrega del inmueble. (14 de julio de 2021)

Sin embargo, **para que el pago efectivamente extinga la obligacion debe ser completo y se debe ajustar a la obligación debida**, no solo basta con la intención de tomar cualquier fecha a gusto para establecer la mora en recibir o dar por satisfecho el cumplimiento del pago, ya que la sentencia había establecido un plazo sujeto a una condición cierta, esto es la entrega material del inmueble.

Que si el pago se quisiera aplicar a una fecha o plazo diferente debe concurrir la voluntad del acreedor y el deudor, cosa que no sucedió, por lo que el plazo condicionado para recibir/entregar sucedió cuando debía suceder, esto es el 14 de junio de 2021.

EFECTOS OBJETIVOS DEL TITULO EJECUTIVO.

Es claro, que el título ejecutivo es el origen de la obligación económica, y que la discusión anterior, de las fechas, resulta en un segundo plano, en la medida que la sentencia contiene un plazo claro.

La discusión de la ejecutoria de la sentencia para efectos de la entrega de los dineros no tiene nada que ver con su exigibilidad, ya que lo que se está ejecutando y dando cumplimiento es lo dispuesto en el numeral cuarto.

Los dineros de los cánones de arrendamiento son exigibles desde el 01 de enero de 2018, hasta que se materialice la entrega, es decir, hasta el 14 de junio de 2022, fecha en la que se efectivizó la entrega, tal como lo soportan las actas respectivas; no antes, ni después.

No tiene sentido, que ahora, la contraparte y el Juez 26 Civil del Circuito quieran leer el fallo e interpretarlo, cuando no hay lugar a ello.

Sin importar si el inmueble se hubiera recibido antes o durante el proceso, o mediante autoridad judicial o administrativa (Inspección de Policía), **COMCEL S.A está obligado en cualquier caso a pagar los cánones de arrendamiento hasta la fecha de entrega**, por virtud del numeral cuarto de la Sentencia.

Y es que **el numeral cuarto** de dicha sentencia, **no tiene** por ninguna parte **interpretación alguna**, ya que quedó totalmente claro, desde cuando, 01 de enero de 2018, y hasta cuando; fecha de la entrega, se está en la obligación de reconocer el pago de unos cánones de arrendamiento.

Sin embargo, el Despacho expresó en otros términos lo dicho en el numeral cuarto y tercero de dicha sentencia, en su forma actual no hay espacio para ninguna interpretación; se condena a Comcel al pago de cánones de arrendamiento desde una fecha (enero 1, 2018), hasta otra fecha (fecha en que se efectivice la entrega, junio 14, 2022).

De esta forma se está desconociendo que, en cualquier caso, ya existe un fallo en firme, que se encuentra ejecutoriado y que, en su numeral cuarto le exige pagar los cánones arrendamiento. Teniendo esto una consecuencia y es que le es exigible a todas las partes, inclusive al Juez, por lo que, en este caso, **estamos frente a una obligación proveniente de una sentencia judicial**, clara, expresa y actualmente exigible, de carácter dinerario. **Al igual que los autos del 01 de noviembre y 01 de diciembre de 2022.**

Considero que, con base en los motivos fácticos y jurídicos expuestos, que tanto la parte motiva como resolutiva de la providencia dictada el 04 de julio de 2023 por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo, deben ser revocadas en su totalidad, por lo que respetuosamente me permito, elevar la siguiente:

IV. SOLICITUD

En virtud de lo expuesto, solicito al Tribunal Superior de Bogotá conceder el recurso interpuesto, revocando la totalidad del fallo proferido dentro del proceso ejecutivo

mediante sentencia del 04 de julio de 2023, y en su defecto decidir:

1. **<u>Revocar la decisión proferida mediante Sentencia</u>** el 04 de julio de 2023 conforme los argumentos expuestos mediante el presente escrito.

2. Continuar con la ejecución de los dineros contendidos en el mandamiento de pago.

3. Que no sea condenados mis poderdantes en costas procesales.

4. Que sea condenada en costas procesales a la parte ejecutada en primera y en segunda instancia.

V. PRUEBAS DOCUMENTALES

Se adjuntan y solicitan como pruebas documentales.

1. Todo el proceso judicial **110013103026_2018_00360** de restitución de inmueble arrendando, digitalizado que esta en poder del Juzgado 26 Civil del circuito de Bogotá, mediante el siguiente enlace publico. https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccto26bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/EuBpcWVxG9JImeB6cIdCE80BeZexHySu0wm523Yp_mKjhQ?e=5%3aBkynUP&at=9
2. Transcripción del fallo de primera instancia.
3. Auto del 26 de octubre de 2021 que aprobó la entrega de dineros
4. Auto del 01 de diciembre de 2021 que resolvió el recurso de reposición sobre el auto del 26 de octubre de 2021.
5. Auto del 03 de junio de 2022, mediante el cual se profirió obedézcase y cúmplase a lo dispuesto por el superior.
6. Recurso de Apelación por parte de Comcel S.A en contra de la providencia del 14 de abril de 2021.

Cordialmente,

JOSE IVAN YEPES JIMENEZ
C.C. 80.095.614 de Bogotá
T.P 186.701 expedida por el C. S de la J

JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO

TRANSCRIPCIÓN SENTENCIA DEL 07 DE ABRIL DE 2021

PROCESO 110013103026 2018 00360 00

Juez:

Vamos a proferir la pertinente sentencia, en este proceso, y para ello vamos a tener en cuenta, pues las consideraciones que vamos a exponer.

En primer lugar, pues el punto de los presupuestos procesales pues decimos que no hay reparo en punto de ello, porque son aquellos que traban la relación jurídica procesal de la forma, y aquí se encuentra la demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer en el proceso y Juez competente. Que, aunque se ha hecho una revisión también del control de legalidad, pues no se advierte causal de nulidad que invalide en todo o parte lo actuado.

El punto de la legitimación de las partes, pues debemos tener en cuenta el principio de la relatividad de los contratos, y aquí es una contienda entre arrendador y arrendatario.

Ahora, con la demanda pues se pretende que se declare terminado el contrato de arrendamiento celebrado en abril de 1998, entre Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa como arrendadores y Comunicación Celular Comcel como arrendataria, por incumplimiento del pago de los cánones de arrendamientos pactados a partir del mes de enero de 1998.

Consecuencialmente, también se pide que se condene a la demanda, restituir los inmuebles en las condiciones en que inició el contrato junto con las zonas comunes

de conformidad con la licencia de construcción, con la que se construyó el edificio salvo el deterioro y uso normal.

Los inmuebles a restituir pues son las oficinas 601y 604, y garajes 15-26 ubicados en la calle 90 No. 12-23.

Además, se pide que no se escucha al demandado durante el transcurso del proceso mientras no se consigne el valor de los cánones de enero, febrero, marzo, abril del 2018 cada uno por $12.888.313, y se condene al pago a la demandada a pagar la cláusula penal pactada en el contrato.

Ahora, pues vamos a hacer unas apreciaciones muy breves del contrato de arrendamiento, pero que nos van a servir de soporte teórico y factico para efectos de poder terminar si ha habido cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones teniendo en cuenta que este es un contrato sobre todo de carácter bilateral que vamos a tener más en cuenta en esto.

Decimos que el contrato según el artículo 1973 del Código Civil Colombiano es un contrato en que las partes se obliga recíprocamente, la una concede el goce de una cosa, para ejecutar una obra o prestar un servicio que es ajeno, este es el goce de una cosa, la otra a pagar por este goce.

En el caso del estudio, pues teniendo en cuenta el objeto del contrato de arrendamiento y oficinas y parqueaderos, este decae entre el concepto de arrendamiento de naturaleza comercial, tanto que se entregó el uso de los inmuebles para el desarrollo de establecimiento comercial industrial o de servicios, en estos eventos pues el contrato se rige por las normas del Código Civil en concordancia con el Código de Comercio tal como lo consagra en los artículos segundo y 822 del Código del Estatuto Comercial.

Y, tenemos que advertir sobre las características del contrato de arrendamiento que son su bilateralidad, su consensualidad, onerosidad, su conmutatividad, de ejecución sucesiva, principal y nominada

Ahora, de las obligaciones del arrendador, las encontramos en el artículo 1982 y se las vamos a resumir que son entregar al arrendatario la cosa arrendada, a mantener en estado desde el fin para que ha sido arrendada, y a librar al arrendatario de turbación o embarazo del goce de la cosa, y por parte de las obligaciones del arrendatario, tenemos que es pagar el precio del arrendamiento en los plazos acordados, conservar en buen estado el bien arrendado, restituir el bien en el estado que lo recibió a la extinción del contrato de arrendamiento, cumplir con las normas pertinentes de arrendamiento de Propiedad Horizontal, cuando el bien está ubicado dentro de ella, y hacer las reparaciones locativas acordadas en el contrato, y usar la cosa según el espíritu del mismo.

Ahora, y además, de estas obligaciones que están consagradas en los textos que hemos mencionado, pues se encuentran otras que las partes pueden pactar según la obligación, como obligación, según la naturaleza y el uso del bien arrendado.

Bueno, tenemos que el arrendatario pues que, una de las obligaciones que tiene, teniendo en cuenta la bilateralidad del mismo, es para restituir la cosa al final del contrato de arrendamiento, pues el contrato hay que entenderlo que en él se entrega es la tenencia el goce, el goce de la cosa, como dice el 1973 y de manera temporal, ya que no puede ser perpetua, y en materia comercial también se encuentra reglado por el artículo 520 del Código de Comercio, que menciona que si el arrendatario no ha ocupado el bien por un término mínimo de 2 años consecutivos con la misma explotación económica, no tendrá derecho a la renovación consagrada en el presente artículo, de manera que el arrendador como derecho para ejercer su derecho a obtener la restitución del inmueble a la terminación del contrato, o por medio de desahucio de 6 meses, que deberá darse con anticipación de un periodo

entero de los designados por las partes o la ley para el pago del canon de arrendamiento.

Ahora, tenemos como causales de terminación del contrato de arrendamiento la destrucción total de la cosa, la expiración del tiempo estipulado para erogación del arriendo por la extinción del derecho del arrendador, por incumplimiento del arrendatario por sentencia del Juez, y a esos hay que agregar las que consagra el artículo 518 del Estatuto Comercial, que señala, que la ley considera el derecho del arrendatario que se le arrendó el contrato tal como lo contempla el artículo antes mencionado, cuando el arrendatario ha ocupado un mismo establecimiento de comercio por un término no inferior a dos años, tiene derecho a como lo dijimos que se le renueve el contrato en los siguientes casos: cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, cuando el arrendatario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, cuando el inmueble debe ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación.

Ahora, en punto, eso nos da la pauta para decir que conforme al 520 el Código de Comercio, que señala que en los casos previstos en los ordinarios 2 y 3 del 518 el propietario desahuciaría al arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena que este se considere renovado.

Y esto significa en términos más sencillos que el propietario únicamente podrá desahuciar al arrendatario por medio de las causales anteriores notificando con un término no menor a 6 meses a la fecha de terminación del mismo.

Ahora, esto ya nos da un marco de carácter teórico para poder resolver este asunto sometido a consideración del despacho.

Y decimos que debemos dejar en claro que en el caso del estudio de la terminación del contrato de arrendamiento se produciría el 31 de diciembre de 2017 habida cuenta de la comunicación del arrendatario al arrendador en misiva de 23 de marzo de 2017 y de contestación de este fecha 23 de mayo del mismo en el cual expresa: "Terminación que se hará efectiva el 31 de diciembre de 2017" eso dice el arrendador y respuesta dada en el curso del interrogatorio de parte en la que dijo: "Yo quería recibir las obras a 31 de diciembre de 2017" o sea quería recibir los inmuebles arrendados con las obras que se pactaron.
Confesión pues que tiene que surtir los efectos consagrados en el artículo 191 y subsiguientes del Código en especial que ese artículo menciona en el numeral segundo: que verse sobre hechos que buscan consecuencias jurídicas adversas al conferente o favorezcan a la parte contraria.
En este aspecto se da plenamente el numeral segundo del artículo 191.

Entonces claramente, la terminación del contrato se produciría el 31 de diciembre de 2017 siempre y cuando que se hicieran las obras, es condicionada, no es pura y simple, sino es una obligación condicionada.

Esto implica que el despacho no tiene que adentrarse en aspectos de prórroga ni de otrosí a que aluden los demandantes y demandados en sus respectivos escritos, porque se ha establecido un límite excepcional del contrato de arrendamiento y que no puede entenderse desvinculada de ciertas obligaciones del arrendatario, que se desprende del contrato de arrendamiento y los pactos entre las partes posterior al documento 23 de marzo de 2017.

Y es que, en desarrollo del contrato que vincula a los extremos, en este caso el arrendatario ejecuta obras sobre zonas privadas y sobre zonas comunes. Ante tal situación el arrendatario el día 19 de mayo de 2017, envió al arrendador comunicado en el que se le proponía recibir el inmueble en el estado en que se encontrara a la fecha de terminación del contrato.

Ante la negativa del arrendador, pues COMCEL dio inicio a las adecuaciones de los bienes objeto del contrato de arrendamiento, que fueron solicitados por el arrendador con el fin de que recibiera los inmuebles por la terminación del contrato.

Dichas adecuaciones quedaron plasmadas en el documento acta, solicitud de adecuación de área arrendada en el predio de la calle 90 13-23 oficinas 601-604 de la ciudad de Bogotá de fecha 14 de junio de 2017.

El 16 de junio de 2017 el arrendador envió una comunicación a COMCEL donde solicitaba aclarar algunas dudas que quedaron sobre el acta anterior, desde agosto de 2017 se envió al arrendador un comunicado por parte de COMCEL de las adecuaciones finales a realizar para entrega a satisfacción de las partes de los inmuebles.

El 27 de octubre de 2017 pues se suscribió acta final de adecuaciones al inmueble, objeto del contrato celebrado entre COMCEL y Mario Hermosa y Vivián Fernández de fecha de 27 de octubre de 2021, suscrito pues entre COMCEL y los demandantes.

El 14 de diciembre de 2017 COMCEL ratificó la fecha de terminación del contrato de arrendamiento y señalándola como efectivamente el 31 de diciembre de 2017 y que el inmueble sería entregado el 21 de diciembre a las 9 AM; el 18 de diciembre se produjo un auto de sellamiento el número 06 de la Inspección 2B de la Policía de Chapinero, ordenando en la parte resolutiva la suspensión de la construcción, la imposición de sellos y la advertencia que solo podía ser retirados por autoridad competente.

El 21 de diciembre, pues la demandada produce un documento que denomina acta de entrega real y material de los inmuebles ubicados en las oficinas 601-604 y parqueadero 15 de la calle 90 12-23 de la ciudad de Bogotá a la cual comparecieron Nayibe Castañeda, María Alejandra Albao, Johanna González, José Alejandro Caro

Barragán, como testigos Johana Pérez y Julieth Yadira Serrano, los primeros dos nombrados eran empleados de COMCEL.

En el acta se indicó que se dio inicio al recorrido de las oficinas y al parqueadero 15 y 26, los cuales se encuentra con sellamiento lo dijo perfectamente en esa acta, la parte demandada.

Y en las constancias se señaló lo siguiente: Primero, que los inscritos nos hicimos presentes en el inmueble a las 9 AM, hora indicada en la comunicación enunciada, se realizó recorrido del inmueble para comprobar las adecuaciones realizadas por las partes y que se encuentran en las condiciones notificadas por COMCEL y los puntos 8 y 10, pero que el arrendador no está conforme y no acepta la entrega del inmueble, el punto 8 pues apunta a que el documento 27 de octubre y el 10 al documento enviado a 19 de diciembre donde se le informa que el inmueble sería entregado el 21 de diciembre de 2017 en el estado que se encuentra a la fecha pues las adecuaciones para la entrega no pudieron ser terminadas por COMCEL por motivo de sellamiento realizado por autoridades competentes, acción que fue instaurada por el arrendador provocando así la imposibilidad de continuar la ejecución de dichas obras de adecuación por culpa del arrendador que lo único que busca es demorar la restitución del inmueble.

En el numeral tercero, se dijo que el inmueble a la fecha de la presente acta fue entregado por COMCEL, quien lo pone a disposición de sus actuales propietarios a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Los participantes en esta acta, pues notarizaron el testimonio judicial en el mismo sentido en la Notaria 30 del Círculo de Bogotá.

Por su parte, la demandante en el texto de la demanda manifestó el hecho décimo séptimo que llegado el día 21 de diciembre los arrendadores asistieron a una cita con el fin de proceder con la entrega material del inmueble y se inició el recorrido

observando que: el arrendatario efectuó modificaciones a la estructura del edificio construyendo y cubriendo los patios del aislamiento posterior.

Y el 7.2, señaló que el arrendatario efectuó sin previo consentimiento la intervención en las áreas comunes del edificio los cuales, si bien no son objeto del contrato estás sí afectan o modifican los accesos a las áreas de los inmuebles arrendados.

En el 7.3, el arrendatario sin previo consentimiento instaló ductos sobre los muros del patio del piso 2, hasta el piso 6.

7.4, el arrendatario sin previo consentimiento alteró los estacionamientos ubicados en el sótano en el sentido de adaptar parqueaderos en zonas comunes, construyó cuartos eléctricos e instalación de ductos sobre los costados de los estacionamientos los cuales limitan el espectro de maniobra de los vehículos.

7.6 De los numerales anteriores es importante resaltar que las intervenciones mencionadas no son permitidas de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, así como tampoco se encuentran aprobados por licencia de construcción del predio.

En el 7.7, adicional a lo anterior se pudo observar que el inmueble con ocasión a las obras que se encontraban adelantando el arrendatario presenta un sello impuesto por la inspección de Policía de Chapinero por ejecutar obras sin licencia.

Y frente a esto dicho la demandada contesta, de hecho, lo acepta como parcialmente cierto, en relación que el 21 de diciembre del 2017 se hicieron presentes los representantes de COMCEL y los arrendadores para llevar a cabo entrega del inmueble, tal como consta en la entrega del acta real y material de la declaración extra procesal.

Dice que nos son ciertas las situaciones 7.1 a 7.8.

Estos aspectos que hemos traído a colación, y que son puestos por las partes en el proceso, merecen un análisis profundo en cuanto toca con aspectos centrales de este proceso.

Pues en el acta se encuentra que, en el acta de COMCEL se indicó que el inmueble se encuentra en las condiciones notificadas por COMCEL y los puntos 8 y 10, pero que el arrendador no está conforme y no acepta la entrega.

Aquí encontramos que, si miramos los putos 8 y 10, pues son diametralmente contradictorios, porque el uno se refiere a que había que hacerle unas obras y entregar el inmueble con esas obras perfectamente terminadas.

Y en el otro dice: No, es que se va a entregar el inmueble como consecuencia de sellamiento en el estado en que se encuentra.

En el punto de las obligaciones ¿Cómo estamos? ¿se cumple o no se cumple? ¿Se es o no se es? ¿Ser o no ser?

Entonces hay un sellamiento por autoridad competente como lo reconozco y para tratar de librarme de ello, simplemente saco una disculpa, una abroquelado jurídico que hablaban nuestros antepasados en esta cosa, que nos antecedieron en épocas anteriores, en las cuestiones de derecho y dice no: es que la culpa por el sellamiento la tienen los demás, la tienen los arrendatarios.

Bueno, esta es la primera disgregación que hacemos de estos elementos de juicio traídos aquí y que hemos puesto en escena.

Esto pues, nos lleva a ciertas conclusiones de primera mano, que dice pues, el acta y el testimonio notarizado, de que el arrendador no está conforme, y no acepta la entrega del inmueble, en tanto que no aparece que arrendatario estuviese en contra.

¿Porque decimos que esto contraviene en el punto de que el arrendador no está conforme y no acepta la entrega del inmueble?

Porque el acta no está firmada por las dos partes, porque no es bilateral, y no se ha probado que demandante y demandado se hayan encontrado para tal efecto, porque cada uno hizo su acta por aparte ¿Entonces? Esa es una imprecisión que contiene dicho documento aportado por la parte demandada.

En punto de adecuaciones, pues nuevamente recabamos que no pudieron ser terminadas por la actuación de COMCEL, porque es que el sellamiento no es culpa del demandante, ya que las adecuaciones, pues obvio, cobijaban zonas comunes y zonas privadas y para las primeras se requería licencia.

Por quien, solicitadas ¿por quién? Por quien las hizo, no por la otra parte, porque es que una persona no está legitimada sin hacer una obra para ir a solicitar una licencia, lo normal, lo lógico, lo entendible, lo que tiene sentido común, es que quien solicita una licencia es quien vaya a ser una obra, no quien no la hace, ¿qué sentido tiene solicitar una licencia quien no hace una obra? Eso no suena, sino a disculpa.

Ahora, esa entrega realizada por COMCEL, no tiene, las obligaciones son bilaterales del contrato, pero la entrega es unilateral, como se diría en el lenguaje popular “yo con yo”; ¿De dónde acá se ha visto tal situación?

Ahora tampoco resulta válido en que la demanda se escude en la solidaridad del arrendador y el propietario en tanto que las mejoras locativas corresponden al arrendatario y las mejoras no locativas pueden ser realizadas por el arrendatario con el permiso del arrendador y reembolsadas por este, tal como lo expone en el artículo 1993 y 1994 del Código de Concordancia con el Decreto 1077 de 2015, pues salvo modificación de las partes.

Y ello muestra pues que no hay solidaridad entre arrendador y arrendatario, y no hay solidaridad, porque no hay pluralidad de sujetos pasivos, ni hay solidaridad de sujetos activos, dos o más frente a uno o varios acreedores, o dos o más frente a varios deudores.

Y tampoco es aplicable el artículo 825 del Código de Comercio que predica la solidaridad en los negocios mercantiles cuando fueren varios los deudores se presumirán que se obliga solidariamente, pero ese es en negocios de carácter comercial cuando abrigan una misma posición.

Y, además, cabe recordar que los administradores responden solidaria y e ilimitadamente los procesos que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad u ocasionen a los miembros de la misma.

Y esto implica, pues que claramente quien ha debido sacar la licencia, le correspondía a la administración del edificio COMCEL que la tenía, se la tomó y no niega en toda la parte, la tuvimos a disposición todo el edificio.

Ahora en el punto de las constancias del 7.1 al 7.7 del acta que encontramos, que estas no están desdibujadas por parte de la demanda, la demandada no pudo desdecir de ellas, no aparecen elementos de juicio, elementos de prueba que claramente desdigan que no son ciertas.

A punto tal que la licencia fue otorgada el 16 de agosto de 2018, posteriormente y en ella también se dice que se da porque hay obras de carácter común.

Ahora, mediante decisión de 14 de junio de 2018, la inspección 2B de policía en acta de audiencia, expediente 2017 53 870 100 83 5E declaró infractora a la convivencia que afecta la integridad urbanística a COMCEL y le impuso multa de $156.248.400, continuando vigente la medida dispuesta mediante auto 18 de

diciembre de 2017 de suspensión de actividad urbanística y sellamiento hasta la presentación de la licencia de construcción en la modalidad correspondiente.

En dicho acto administrativo se estableció que las intervenciones realizadas en el predio de la calle 93 No 13-23, por parte de COMCEL son en el parqueadero, sótano, demolición de muros, área de infracción de 54.68 metros cuadrados. En el piso sexto, cambio al diseño original aprobado por la Curaduría, zonas comunes, área de infracción 125.64 metros, y así tiene en cuenta aspectos de las oficinas 601-603-602-604.

Este documento pues en cuando alude que se modificaron puertas de acceso, pues necesariamente lo que está diciendo es que se modificaron zonas comunes, situación que fue reconocida por el testigo Caro Barragán, en audiencia de 8 de mayo de 2018 ante la Inspección de Policía, en la cual señaló que la intención de COMCEL es “gestionar la licencia en modalidad de modificación para poder restituir las áreas comunes al estado original”, de igual forma se expuso a la asamblea de copropiedad la celeridad de los poderes y el acta de asamblea, pues es un requisito de la Curaduría para poder gestionar el trámite de la licencia en la modalidad para intervención de las unidades privadas y áreas comunes.

Y es que la interior de COMCEL, se conocían cuáles eran los requisitos para el trámite cuando se intervenían zonas comunes. Igualmente, pues en el desarrollo del interrogatorio de parte del representante legal de la demandada también reconoció dicha situación.

Y es que esto es tan diciente que, cuando se vio abocado a una situación como fue el cerramiento, pues cuando conoció las situaciones de la querella y el cerramiento claramente, pues convocó a Asamblea General de copropietarios del año 2017 y luego cuando hubo necesidad de obtener los poderes, convocó para la Asamblea General de Copropietarios de marzo de 2018.

Cuando se vio en la necesidad, no lo hizo siendo un requisito obligatorio, pero cuando se vio con la necesidad, sí lo hace, y era un requisito que conocía como lo demuestra uno de los empleados, arquitecto de la empresa demandada claramente tiene la experticia en estos temas.

Ahora hay que relevar también que este mismo testigo, el doctor Caro Barragán, ante pregunta del apoderado de la parte demandante refiriéndose al desarrollo de las obras sobre los inmuebles del demandante señaló: “se demoraron en hacer las obras en el 2019 porque tenían que hacer obras sobre las zonas comunes, se agregaron adecuaciones que nos demoraron dos meses para el 2017, estaban entregando las zonas comunes pero con la licencia tenían que hacer más obras, restituir el lindero posterior, eso significaba que la entrega no se podía hacer”}

La contestación de la demanda gira, en que la entrega se podía hacer, aquí un mismo testigo de la parte demandada dice: “que no se podía hacer”.

Esto pues lo que nos está indicando es que las obras a realizar en los inmuebles de Mario Hermosa y Vivián Hernández, que fueron objeto del contrato de arrendamiento, no podían estar listas para el 21 de diciembre del 2017 y que la propuesta de entrega de los inmuebles de 14 de diciembre y el acta de 21 del mismo mes elaborado por COMCEL, contiene elementos pues extraños, ajenos a la verdad, ya que como lo dijo el testigo Caro, tenían que ejecutarse obras sobre zonas comunes que requerían permiso previo, a no ser que se determinara, pues como lo hizo COMCEL, ¡cabalgar sobre la ilegalidad en tanto que se realizaban obras sin licencia!
¿Quién la realizaba? No fueron los arrendadores.
Lo cual implica, que no era el lapso tan corto entre la comunicación de 11 de diciembre y el día 21 que se iban a ejecutar.

Tanto, así como nuevamente recabamos y lo decimos que la licencia se otorgó el 16 de agosto de 2018 y solo vinieron a estar completas para la Asamblea General

de Copropietarios de 2019, en la cual se citó para entrega de zonas comunes, objeto que fue conocido por Mario Hernández y su apoderado.

Ahora, el Consejo de Justicia, pues revocó la decisión adoptada por la Inspección 2B de Policía de Chapinero en audiencia de 14 de junio de 2018 y para tal efecto plasmó.

Dijo: “COMCEL aportó la licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana No 4 para el predio en la modalidad de modificación, demolición parcial, la cual corresponde con los hechos constitutivos de la infracción urbanística, que fueron evidenciados en el transcurso de la presente actuación; en razón de ello, se considera procedente la aplicación del principio de favorabilidad previsto en la anteriormente señalado artículo 137 de la ley 1801 de 2016, toda vez que esta norma en su inciso tercero contempla la posibilidad que no haya lugar a la imposición de multas en aquellos casos de infracción urbanística donde el presunto infractor prueba el restablecimiento urbanístico antes de que quede firme la declaratoria de infractor.

Esta revocatoria pues como se dice, aprobó como consecuencia de la aplicación del principio de favorabilidad, no porque no existiera la infracción, esta existió al momento del acto administrativo que emitió el Consejo de Justicia, y empero, la multa no se dio como consecuencia de que el presunto infractor sacó la licencia posteriormente, licencia pues que fue expedida el 16 de agosto de 2018 y ejecutoriada el 18 de octubre del año antes mencionado, y en esa licencia se mencionan zonas comunes del sexto piso, del sótano, que tienen que ver con los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento.

Ahora, el testigo Caro Barragán pues dada su experticia también reconoce que con relación al acta final de las adecuaciones la inmueble objeto del contrato celebrado entre COMCEL y Mario Hermosa y Vivián Fernández del 27 de octubre de 2017, para ciertos aspectos se requería licencia previa, en las que tocaban con zonas

comunes, como eran los muros divisorios y los muros de retroceso, entonces no podía, a no ser que la ilegalidad cobre un caris de legalidad por el transcurso del tiempo no más. No podía entregar válidamente unas zonas sino que no fuera de manera legal, porque es que yo no encuentro que lo ilegal se convierta en legal.

El juez interrumpe para tomar una llamada.

Ahora, en punto del peritaje, destacamos que el auxiliar de la justicia no cumple con los numerales 4, sobre lista de publicaciones relacionados en la materia del peritaje que hubiera realizado en los últimos 10 años. Quinto, lista de casos que hayan sido asignada como perito en los últimos 4-6 años, si ha sido designado en procesos anteriores en curso. El octavo, declarar los exámenes, métodos y experimentos, y encontramos que tampoco es sólido, claro, preciso, exhaustivo ni detallado.

Encontrando que estas normas de carácter procesal tienen o son de orden público, el Juez no se puede sustraer al cumplimiento de las mismas ni el Juez ni las partes, no cumpliéndose los requisitos memorados, los numerales, memorados del artículo 226 tal como se ha expresado, no puede ser apreciado por el despacho.

Ahora, esto nos lleva a una conclusión que las elucidaciones trazadas, las disquisiciones trazadas a lo largo de la audiencia, nos demuestran que el actuar de la demandada contravenía los artículos 2005 y 2006 del Código Civil Colombiano y por lo tanto, no se produjo la terminación del contrato a 31 de diciembre de 2017, ya que la demandada no está en posición de restituir la cosa arrendada al final del arrendamiento, el estado en que le fue entregado, ni conforme a los parámetros acordados en acta de entrega de 27 de octubre.

Ni podía restituirla o ponerla a disposición del arrendador por el sellamiento producto de su misión o incuria, y es que esto claramente si va para hacer una verificación de las obras y de cómo se iba a entregar eso, claramente tenía que haberse roto

los sellos y en tal evento se había incurrido en delitos que contemplan nuestra legislación penal.

Entonces no habría manera ni de entregar, ni observar ni mirar, ni establecer como se encontraban esos lugares, salvo pues los parqueaderos, que la constancia que dejó la parte demandada el 21 de diciembre pues que no aparece.

Ahora, encontramos que solamente para la Asamblea General de 17 de septiembre de 2019, se encuentra, que para esa época los inmuebles entregados en arrendamiento, por los aquí demandantes se encontraban con las reparaciones acordadas restituidos a las zonas comunes que han tomado como consecuencias a las construcciones ilegales y que a manera informal dicha situación fue conocida tanto, por el demandante como por su representante, pero no puede tener eficacia esa sola circunstancia de que tuvieran conocimiento, pues no aparece un acto formal de la entrega en esa época o posteriormente.

Y si eso hubiese sido así, eso modificaría integralmente las pretensiones de la demanda y los hechos contenidos en ella, así como los hechos de la contestación y las excepciones, por lo cual, si el despacho acogiera cualquiera de las tesis de la demandante o demandado en tal sentido, que modificaran las iniciales o la de la contestación, claramente iría en contravía del principio de la congruencia que reclama las decisiones judiciales.

Esto ahora, debemos decir que lo expuesto de manera integral, de manera omni comprensiva por el despacho, nos conduce a declarar frustradas a las excepciones de mérito propuestas por la demandada.

En primer lugar, contra la terminación del contrato de arrendamiento desde el 31 de diciembre de 2017 e inexistencia del contrato de arriendo y falta de causa para recibir cánones, nos damos cuenta que eso no fue así, lo hemos explicado hasta el cansancio, ha quedado diáfanamente explicada esta situación.

La culpa exclusiva de los demandantes y hechos de terceras para obstaculizar la entrega del bien inmueble, y nadie puede alegar su propia culpa a su favor ya que no se probado que los demandantes se negaron a recibir injustificadamente, como ya se explicó.

La demandante no podía recibir por el sellamiento por autoridad competente como lo alega la demandada, y por no estar ejecutadas las obras a que se comprometió, por lo tanto, no podía entregar los inmuebles dentro de los parámetros del artículo 2005 y 2006. Es que cabe recordar que aquí, dentro de las obligaciones del contrato de arrendamiento está la obligación de restituir la cosa arrendada, encontramos que eso no pesa sobre el arrendatario la presunción de culpabilidad, le toca destruir a él esa presunción probando que, la no entrega no sobrevino por su culpa, y que empleó toda diligencia o cuidado en la entrega de la cosa, pero alguien puede predicar diligencia, cuidado, no culpa, no omisión cuando no saca las licencias previamente, cuando no hace las Asambleas Generales de Copropietarios, en debida oportunidad. Yo creo que la respuesta es absolutamente negativa.

Y es que cabe recordar, que esta obligación de dar que contiene estas obligaciones del 2005 y 2006, están inmersas dentro de la culpa contractual, porque de conformidad con el 1604 del Código Civil, el arrendador tiene la obligación de entregar la cosa, entregarla en los términos en que fue convenida, no excudando ni achacándole culpa a la parte contraria.

Es que, de otro lado, ¿de dónde acá encontramos que el actuar de los querellantes frente a la acción policiva luce ilegitima? ¿o contraria a derecho, o es un abuso del derecho? Tanto así que este funcionario interrogó a la parte demandada, sobre si habían hecho alguna acción por el ejercicio abusivo de acción policiva o sobre temeridad o mala fe, encontrando una respuesta negativa.

Luego, esas afirmaciones en sentido que la acción tenía como propósito extender los contratos de arrendamiento carece de fundamento total.

Ahora, una parte que también toca con esto y unas obligaciones sobre la solidaridad es que el artículo 42 del Reglamento de Propiedad Horizontal no tiene cabida en este proceso, porque la solidaridad que allí se predica, es por los actos omisiones frente a terceros, no ha responsabilidad derivadas entre las partes, entre quienes son contendientes en este proceso, entre una parte que reclama acto de omisiones del otro.

Entre actos de omisiones que se reclaman del arrendador frente al arrendatario, entonces es la solidaridad que se predica por parte de la demandada no tiene cabida.

En punto, en igual derrotero también tiene la excepción de efectiva entrega al inmueble desde el 21 de diciembre de 2017, renuencia a los demandantes a la recepción del inmueble, mora en recibir. En conformidad con el 2008 no se aprecia la mora, por ninguno de los eventos.

La parte del numeral cuarto del cumplimiento del contrato, por parte de COMCEL SA hasta la fecha de terminación, eso es hasta 31 de diciembre de 2017, que ni siquiera se ha producido la terminación mucho menos el cumplimiento, eso tiene sentido hilar de esa manera.

El punto de la falta de legitimación por activa de los demandantes, y falta de legitimación por pasiva de COMCEL frente a las peticiones de restitución de zonas comunes y que se finca en que la demandada tomó unas zonas comunes del sexto piso que afectaban las oficinas 601-604 y garajes 15-26, pues vemos que estas solamente se vinieron a restituir, para restituir no al arrendador, sino vinieron a restituir al edificio, a la construcción, como consecuencia de la querella y de la licencia otorgada por la Curaduría y de las obras realizadas, pero no, que se hayan restituido a la parte demandante que son dos cosas completamente diferentes.

Ahora, la mala fe de los demandantes, teniendo en cuenta los postulados o derroteros que señala el artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume y la mala fe debe demostrarse, situación que no ha ocurrido en desarrollo de este proceso.

Si bien, las zonas comunes no fueron del objeto del contrato de arrendamiento, si bien fueron objeto de modificación que afectaba los bienes de propiedad del demandante a punto tal que, la licencia lo contempló y ordenó su restitución.

Ahora, buena fe de COMCEL, pues a lo largo de todas las disquisiciones, de esta elucidaciones que ha plantado el despacho en desarrollo de esta audiencia, se estableció que COMCEL en desarrollo del contrato de arrendamiento, sobre todo en punto de las zonas comunes, no actuó con rectitud ni actuó atado a la legalidad, a punto tal que, mediante ciertas situaciones, hace una entrega de manera indeterminada sin cumplir con sus obligaciones previas, que ya les hemos explicado, que era la citación Asamblea General de Copropietarios, solicitó previa licencia, entrega mediante acta que vulnera del artículo 2005 y 2006 del Código Civil, entrega no consensuada.

Y tenemos que decir que aquí claramente, siguiendo los lineamientos del artículo 39 de la Ley 675 los demandantes, por sí solos no habían podido citar Asamblea General de Copropietarios como lo quiere hacer ver la parte demandada, porque es un número plural y el ¿número plural cuál es? No podía hacerse los propietarios de las oficinas 601-604 y garajes 15-26, se podían considerar como una dupla para tal efecto.

Ahora, respecto a la cláusula penal, la cláusula penal de conformidad con el 1592 del Código Civil es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal y el artículo 1594 de la misma **modificación** señala el tratamiento de la obligación principal y de la pena por mora.

Señala que antes de constituirse el deudor en mora no puede el acreedor demanda a su arbitrio la obligación principal y la pena.

Y de acuerdo con la norma citada, se extracta que el acreedor no puede pedir al mismo tiempo la obligación principal y la pena, salvo en dos excepciones: cuando se ha pactado la pena con carácter moratorio, o sea por el simple retardo del cumplimiento de la obligacion principal en cuyo caso no se exige la estipulación expresa.

En segundo lugar, cuando se ha afectado la pena con carácter compensatorio, o sea que tiene como función reparar perjuicios sufridos por el acreedor, como consecuencia del incumplimiento total, parcial o defectuoso de la prestación.

En este caso, se exige que haya estipulado expresamente dicha acumulación ya que si no se pacta no tiene tolerancia, entre las partes se pactó una cláusula penal del siguiente tenor, en el contrato de arrendamiento, el incumplimiento por parte de los arrendatarios de cualquiera de las cláusulas de este contrato, los constituirá en deudores del arrendador en un monto igual al duplo del canon de arrendamiento vigente en el momento del incumplimiento o violación pagaderos en moneda legal colombiana en favor del arrendador y que será exigible inmediatamente y sin necesidad de requerimientos de ninguna clase y sin perjuicios de los demás derechos del arrendador para hacer cesar del arrendamiento y exigir judicialmente la entrega. Ese es el tenor de la cláusula

Pues esto nos indica que la cláusula penal pactada tiene carácter compensatorio, no encontrando el despacho pactada la acumulación de la obligación principal y la pena y por lo tanto no hay lugar a ordenar su pago, eso tiene que quedar bien claro.

Ahora, en la contestación de la demanda se objetó el juramento estimatorio y el artículo 206 del capítulo 4, juramento, artículo 210 dice: que quien pretende el reconocimiento de indemnización compensación, o pago fruto o mejoras deberá

estimarlo razonadamente bajo juramento la demanda o que tiene un correspondiente.

Pues aquí claramente, lo que observamos es que aquí no se está pidiendo ni compensación ni pago, ni usufructos ni mejoras estos son aspectos totalmente ajenos, lo que se está pidiendo del canon de pago de arrendamiento que es totalmente ajeno a como está redactado el artículo 206, luego la objeción al juramento estimatorio no puede tener procedencia en este proceso.

Y hay una cosa que también aquí queda claro, es que Esteban Barreto Gamboa testigo, que también trabajo con COMCEL, cuando se le preguntó si se podían entregar los bienes dados en arrendamientos, manifestó que no, entonces cada vez va quedando más claro.

Ahora, hay que precisar que la parte demandante dice que: los bienes se encontraban por fuera del comercio como consecuencia del actuar de la Inspección 2B de Policía de Chapinero, hay que tener en cuenta que, lo que pone el bien por fuera de comercio, es el embargo de bienes conforme lo estatuye el numeral tercero de artículo 1621 del Código Civil Colombiano.

Teniendo en cuenta estos argumentos expuestos por el despacho, **procede en mérito de lo expuesto** el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá DC, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:

Primero. En primer lugar, declarar frustradas las decisiones de mérito propuestas por la demandada.

Segundo. Y segundo, declarar terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre Mario Hermosa y Vivian Fernández Hermosa como arrendadores y Comunicación Celulares COMCEL como arrendatario, contrato de abril de 1998 por incumplimiento de la parte demandada tal como se plasmó en esta audiencia.

Tercero. Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento señalado en el numeral anterior, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia; sobre zonas comunes no habrá pronunciamiento porque estas fueron restituidas, como consecuencia de orden administrativa.

Si la demandada no hace entrega de los bienes inmuebles de forma voluntaria comisiónese para tal efecto a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá DC y/o Inspecciones de Policía, Secretaría libre los oficios correspondientes.

Cuarto. En cuarto lugar, se condena a la demandada pago de los arriendos correspondientes al periodo que abarca del primero de enero de 2018 hasta la fecha en que se efectivice la entrega.

Como la demandada realiza las consignaciones pertinentes, una vez se encuentre en firme esta decisión, por Secretaría hágase entrega de los títulos de depósito judicial a la demandada que cubra dicho lapso, si hay lugar a fraccionamiento de los mismos, Secretaría, proceda.

Quinto. No se ordena el pago de la cláusula penal por lo indicado en la parte emotiva de esta audiencia.

Sexto. En sexto lugar no se tiene en cuenta el dictamen pericial aportado por lo expuesto.

Séptimo. En séptimo lugar, no hay lugar a declarar objeción al juramento estimatorio.

En octavo, se condena a la demandada el pago de las costas del proceso.

Como agencias en derecho se fija la suma de $12.521.000
Las partes quedan notificadas…

¿Algún pronunciamiento de la parte demandante?

Abogado demandante:
Señor Juez, más que interponer un recurso, puesto que estoy de acuerdo con la decisión que en derecho este despacho ha tomado, el punto en la cláusula penal, tengo discusión y estaría… no tendría para mí sentido alargar un proceso judicial de esta índole, si mi contraparte interpone un recurso de apelación sobre la misma. En dado caso que lo haga, no perdería la oportunidad para discutir un poco lo que significa la cláusula penal y las condiciones que consideramos nosotros que también debería estar obligado COMCEL.

Entonces no sé para efectos prácticos, si COMCEL desea apelar esta sentencia, pudiera después de ellos hacerlo, poder manifestar los reparos específicamente sobre la cláusula penal ya que sobre los demás puntos no tengo ningún reparo.

Juez:
Usted tiene la oportunidad también de la apelación…

Abogado, parte demandante:
Sí claro, si señor.
Juez:
¿Parte demandada que nos va a decir por favor?

Abogada, parte demandada:
Gracias, señor Juez en la aplicación del artículo 122 del Código General del Proceso es decisión de COMCEL interponer recurso de apelación, sin perjuicio de solicitar los 3 días posteriores a esta audiencia, para presentar los reparos en concreto por escrito.

Me permito decir sucintamente, que nuestra inconformidad tiene que ver con la fecha de terminación del contrato, toda vez que como lo manifestamos en nuestros alegatos de conclusión, una obligación o una cosa, tiene que ver con la fecha de terminación de contrato, la cual sí fue concertada entre las partes y otro tema es los perjuicios causados por la entrega tardía o no de conformidad con las obras que ha solicitado el señor Mario Hermosa perjuicio que no fueron ni siquiera estimados ni pretendidos dentro de la demanda, muchas gracias.

Juez:
Doctor ¿Algún pronunciamiento al respecto?
O por favor, como no hay efecto sobre la cláusula penal, ¿alguna apelación va a sustentar doctor? no tiene ningún problema.

Abogado, parte demandante:
Respecto a la cláusula penal, más allá de que estoy conforme, de acuerdo al fallo proferido por este despacho, considero que la cláusula penal debería ser aplicada dentro de esta sentencia en la medida que fue COMCEL SA, que ejecutó una serie de obras a lo largo de 20 años que incumplió el contrato y que, para aspectos del día de la entrega del inmueble, este se encontraba totalmente sin uso.
Por lo que no se puede aplaudir, o tener como favorable el simple hecho de aquellos incumplimientos que fueron generados por parte de COMCEL SA, cuando efectivamente ha quedado probado dentro de este proceso y donde las partes previamente habían determinado que cualquier incumplimiento e “incumplimiento” significa también haber ejecutado obras sin licencia, haber alterado el inmueble y, además, entregar el inmueble por fuera de los tiempos que se habían pactado.
En ese orden de ideas considero que, la cláusula referente a la cláusula penal establecida por las partes, como una sanción por incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, incumplimiento que no estaba enmarcado en temas accesorios sino principales de la ejecución del contrato, debería ser condenada COMCEL SA para efectos de lo que pactaron las partes en lo que corresponde a la

cláusula penal, que fue terminada en una suma de dos años de arrendamiento al momento del incumplimiento.

Juez:
Habida cuenta que ambas partes recurrieron la sentencia, y en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 323 numeral tercero inciso segundo, se concede para ante Superior Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, reparto en el efecto suspensivo, en cumplimiento del artículo 324 y nuevas normas sobre digitalización de un procesos y demás aspectos de orden técnico, se señala que Secretaría debe enviar copias digitales al Tribunal dentro del término señalado en el artículo 324 del Código General del Proceso.
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se dio por culminado y las partes quedan notificadas en esta acta.
Buena tarde y muchas gracias.

Abogado, parte demandante:
Señor Juez muchas gracias, muy amable por su tiempo.

Abogada, parte demandada:
Gracias señor Juez y señor Yepes, que estén muy bien.

Abogado, parte demandante:
Lo mismo señora, hasta luego.

JUZGADO VEINTISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., octubre veintiséis (26) de dos mil veintidós.

Radicación: Restitución No. 2018 0360.
Demandante: MARIO HERMOSA PUYO Y OTRA.
Demandado: COMCEL S.A.

Conforme a lo resuelto en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 7 de abril de 2021, se dispone entregar los dineros a la parte demandante, que se consignaron por concepto de cánones de arrendamiento por parte de la demandada, a ordenes de este juzgado y por cuenta del proceso de la referencia.

Lo anterior, por cuanto el inmueble objeto de los cánones de arrendamiento fue entregado hasta el 14 de junio de 2022, según acta aportada al expediente y firmada por el demandante y representantes de la demandada, donde no se formuló ninguna limitación para la entrega de los cánones de arrendamiento.

NOTIFIQUESE, (2)



LEONARDO ANTONIO CARO CASTILLO
Juez

JUZGADO VEINTISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., diciembre primero (1°) de dos mil veintidós.

Radicación: Restitución No. 2018 0360.
Demandante: MARIO HERMOSA PUYO Y OTRA.
Demandado: COMCEL S.A.

Se procede a resolver el recurso de reposición presentado por la apoderada de la parte demandada contra el auto de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se ordenó la entrega de dineros.

En subsidio, solicita se ordene la entrega de títulos hasta el 5 de noviembre de 2021, fecha en la que el Tribunal resolvió el recurso de súplica interpuesto por COMCEL, y en el que confirmó su decisión de declarar improcedentes los recursos de apelación contra la sentencia.

La apoderada de la parte actora fundó su recurso en que la orden de restitución se encontraba en firme desde el 7 de abril de 2021, no solo porque no fue objeto de apelación, sino porque en este caso no era admisible el recurso de apelación, como lo concluiría el Tribunal mediante auto del 4 de noviembre de 2021.

La entrega formal del inmueble no ocurrió sino hasta el 14 de junio de 2022, Comcel vio frustrada su intención de dar cumplimiento de la sentencia en lo relativo a la restitución de los inmuebles por la renuencia de los demandantes a recibir los inmuebles y por la pasividad del despacho ante las solicitudes de designación de un secuestre para la restitución de los Inmuebles.

Para dar cumplimiento a la orden de restitución del inmueble que no fue objeto de reparos por ninguna de las partes, Comcel se comunicó con el apoderado de los demandantes, para acordar una entrega voluntaria de los Inmuebles.

El apoderado de los DEMANDANTES se negó en esa oportunidad a acordar la entrega voluntaria de los Inmuebles, aduciendo que la sentencia en la que se ordena la restitución de los Inmuebles no se encontraba en firme, dado el recurso de apelación presentado por Comcel.

Como lo constató el Despacho en la sentencia del 7 de abril, los Inmuebles están listos para ser entregados desde hace más de un año y medio y a pesar de eso, los arrendadores se han negado injustificadamente a recibirlos durante todo este tiempo, a pesar de que Comcel, en repetidas ocasiones – incluida la etapa de conciliación de la audiencia inicial –ha ofrecido entregarlo.

Consideraciones

Efectivamente, el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 7 de abril de 2021, dispuso que: *“se condena a la demandada al pago de los arriendos correspondientes al periodo que abarca desde el primero de enero de 2018 hasta la fecha*

en que se efectivice la entrega. Como se han realizado los correspondientes depósitos, una vez se encuentre en firme esta decisión por Secretaría hágase entrega de los títulos de depósito judicial a la demandante por dicho lapso."

La orden impuesta fue clara en indicar que los arriendos que se debían pagar se extendían hasta que se realizara la entrega del bien inmueble objeto de litigio, lo cual únicamente se podría verificar con el acta de entrega, lo cual se verificó con el acta de entrega suscrita hasta el 14 de junio de 2022, siendo aportada al expediente y firmada por el demandante y representantes de la demandada, donde no se formuló ninguna limitación para la entrega de los cánones de arrendamiento.

De otro lado, de manera posterior a la sentencia de fecha 7 de abril de 2021, si bien es cierto obran en el expediente comunicaciones entre las partes en lo relativo a la entrega del inmueble, este despacho judicial únicamente puede tomar como referente la fecha de entrega verificada en la respectiva acta, sin poder entrar a dirimir o establecer si existió o no alguna mora o negligencia por parte de los demandantes, ya que esa situación correspondería a otro proceso.

Así las cosas, al encontrarse los dineros consignados por concepto de arrendamientos a ordenes del Juzgado y por cuenta del proceso de la referencia, es obligatorio efectuar la entrega de esos dineros a la parte demandante.

En tal sentido, se dispone:

NO REVOCAR el auto de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se ordenó la entrega de dineros.

NOTIFIQUESE, (2)



LEONARDO ANTONIO CARO CASTILLO
Juez

REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO VEINTISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., junio tres (3) de dos mil veintidós.

Radicación: Ejecutivo 11001310302620180036OO VIVIAN HERNANDEZ HERMOSA contra COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.

Obedézcase y cúmplase lo dispuesto por el superior.

NOTIFÍQUESE,

EL JUEZ.



LEONARDO ANTONIO CARO CASTILLO
Juez

SEÑOR
JUEZ VEINTISÉIS (26) CIVIL DEL CIRCUITO
BOGOTÁ D.C.
E.S.D.

Proceso: Verbal de restitución de tenencia a título de arrendamiento
Radicado: 2018 – 00360
Demandante: Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa
Demandado: Comcel S.A.
Asunto: Formulación de reparos en concreto frente a la sentencia proferida en audiencia del 7 de abril de 2021

ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada judicial de **COMCEL S.A**. con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, presento los reparos concretos frente a la sentencia que fue dictada en audiencia del 7 de abril de 2021 en el presente proceso y frente a la cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación **(en adelante "Sentencia Apelada")**

I. Alcance del recurso de apelación interpuesto

1. **COMCEL S.A.** no tiene reparo alguno contra la orden de restitución contenida en el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada, en el que se ordena la restitución de los inmuebles de propiedad de los demandantes, así:

> *En tercer lugar Condenar a la demandada a restituir a los demandantes los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si la demandada no hace entrega de forma voluntaria comisiónese a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá y/o Juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá y/o Inspecciones de Policía. Secretaría libre los oficios correspondientes."*

2. Por lo tanto, Comcel procederá, en cumplimiento de lo ordenado, a restituir los inmuebles dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la audiencia.
3. El recurso de apelación interpuesto en audiencia del 7 de abril de 2021 **(en adelante "Recurso de Apelación")** se circunscribe única y exclusivamente frente a las decisiones contenidas en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO,

SEXTO y OCTAVO de la parte resolutiva de la Sentencia Apelada en los que respectivamente (i) se negaron las excepciones de mérito propuestas por Comcel, (ii) se declaró la terminación del Contrato de Arrendamiento celebrado entre las partes por incumplimiento de Comcel, (iv) se condenó a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento desde enero de 2018 hasta la fecha de entrega de los inmuebles, (vi) no se tuvo en cuenta el dictamen pericial presentado por Comcel y (viii) se condenó en costas a Comcel. Por lo anterior, este memorial contiene los reparos frente a las decisiones anteriormente mencionadas, y frente a las consideraciones que las fundamentaron.

II. Reparos en concreto

a. En cuanto a la declaratoria de terminación del contrato.

4. En la parte resolutiva de la Sentencia Apelada, el Despacho declaró la terminación del contrato de arrendamiento suscrito entre Comcel, Mario Hermosa y Vivian Fernández en abril de 1998 **(en adelante "el Contrato")** por incumplimiento de Comcel, así:

> *"En segundo lugar, declarar terminado el contrato de arrendamiento celebrado por Mario Hermosa Puyo y Vivian Fernández Hermosa como arrendadores y Comunicación Celular -Comcel como arrendatario, contrato de abril de 1998, por incumplimiento de la parte demandada, tal como se plasmó en esta audiencia."*

5. Como consecuencia de tal declaración, condenó a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento, desde el 1º de enero de 2018 hasta la fecha de entrega del inmueble:

> *"En cuarto lugar, se condena a la Demandada al pago de los arriendos correspondientes al periodo que abarca desde el primero de enero de 2018 hasta la fecha en que se efectivice la entrega. Como se han realizado los correspondientes depósitos, una vez se encuentre en firme esta decisión por Secretaría hágase entrega de los títulos de depósito judicial a la demandante por dicho lapso."*

6. En la Sentencia Apelada, el Despacho consideró que el Contrato no se terminó el 31 de diciembre de 2017 y que su terminación se encontraba sujeta a la condición de la entrega de los inmuebles con las obras terminadas que se habían determinado para su entrega.
7. La interpretación del despacho sobre la fecha de terminación del Contrato se fundamentó en una valoración errada de las pruebas documentales y del

interrogatorio de parte rendido por el señor Mario Hermosa en la audiencia inicial del 21 de octubre de 2019 (**en adelante la "Audiencia Inicial").**

8. Al interpretar las comunicaciones escritas intercambiadas por las partes y las actas por ellas suscritas con posterioridad a la comunicación de la terminación del contrato enviada por Comcel el 23 de marzo de 2017, el juez consideró que las partes habían condicionado la fecha de la terminación del contrato a la entrega de los inmuebles con las obras pactadas terminadas. Sin embargo, de la lectura de esas comunicaciones no es posible concluir que las partes hubieran sujetado la fecha de la terminación a la finalización de las obras. Por el contrario, lo que se concluye de las pruebas documentales mencionadas es que las partes aceptaron que la fecha de la terminación del contrato sería el 31 de diciembre. Las pruebas analizadas por el Despacho evidencian que lo que ocurrió es que, como consecuencia de la terminación del contrato, las partes se pusieron de acuerdo en las condiciones para el cumplimiento de una obligación derivada de la terminación del mismo, que es la restitución del inmueble. Una clara muestra de lo anterior es el texto del Acta Final de Adecuaciones suscrita por las partes en la que señalan:

> *"En la ciudad de Bogotá, hoy 27 de octubre de 2017, se reunieron por un lado MARIO HERMOSA PUYO, identificado con la cédula de ciudadanía 160.056 de Bogotá, EL ARRENDADOR, y por otro lado Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, quien en su nombre actúa Nayibe Castañeda, gerente administración de inmuebles, identificada con la cédula 52.80 9.026, de Bogotá, EL ARRENDATARIO, acuerdan las siguientes condiciones finales de entrega para el inmueble ubicado en la Calle 90 número 13 guión 23, oficina 601 y 604 y parqueaderos 15 y 26, Bogotá,* ***por motivo de la terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en abril de 1998 No. 1169."***

9. En el interrogatorio de parte en la Audiencia Inicial, el señor Hermosa, señaló cuáles fueron los hechos posteriores a las comunicaciones en que las partes acordaron la fecha de terminación, sin mencionar que se haya opuesto de alguna forma a la fecha acordada para la terminación. Por el contrario, aceptó que la fecha del 31 de diciembre la fecha pactada para la terminación del contrato de arrendamiento:

> *Audiencia inicial del 21 de octubre de 2019. 10:56:35 a 10:58:29.*
>
> *[Pregunta del Juez]: "¿Qué comunicaciones tuvieron con Comcel después de las comunicaciones que ustedes enviaron terminando el contrato de arrendamiento en marzo de 2017."*
>
> *Mario Hermosa: "El día 23 de mayo hubo por lo menos 4 reuniones con el fin de aclarar cuáles eran las especificaciones que yo le daba a Comcel para que la restitución se*

> *hiciera a mi satisfacción. En cada una de esas reuniones se especificaban las cosas pero daba la impresión de que Comcel quería hacerme la misma pregunta varias veces a ver si mi respuesta cambiaba, en cada una de esas reuniones que se hacían yo enviaba comunicaciones a Comcel aclarándole los puntos. Y eventualmente en octubre del año 2017 se desarrolló la reunión final para los acuerdos y aún después había puntos que aclarar que yo le mandé comunicaciones a Comcel. Lo que ocurrió entonces es que Comcel dio inicio a obras que me imagino eran tendientes a la restitución del edificio.* ***Yo estaba obrando de buena fe haciendo todos los planes para el 31 de diciembre recibir las oficinas****. Me parecía que la fecha era un poco como difícil que un 31 de diciembre se hiciera una restitución…"*

10. Es claro que el señor Hermosa aceptó la fecha del 31 de diciembre de 2017 como la fecha de terminación del contrato y que los acuerdos posteriores versaron sobre la forma de la restitución, como consecuencia de la terminación del contrato.
11. Y es que las pruebas mencionadas no pueden interpretarse como lo hizo el Despacho, porque la Ley es clara al determinar que la restitución de un inmueble arrendado es una obligación que se deriva de la terminación del contrato, y no una condición para que éste se termine. El Código Civil establece sobre la restitución de la cosa arrendada:

> ***ARTICULO 2005. <RESTITUCION DE LA COSA ARRENDADA POR TERMINACION DEL CONTRATO >.*** *El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento.*
>
> *Deberá restituir en el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo.*
>
> *Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario.*
>
> *En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable.*

12. Lo establecido en el Código Civil fue replicado por las partes en el Contrato:

> ***RECIBO Y ESTADO :*** *Los arrendatarios declaran que han recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado conforme al inventario que hace parte del mismo, y que en el mismo estado los restituirán al Arrendador a la terminación del Contrato, o cuando éste haya de cesar por alguna de las Cláusulas previstas, salvo el deterioro proveniente del tiempo y uso legítimo. (...)*

13. Las partes del Contrato no sujetaron la terminación del mismo al cumplimiento de las condiciones determinadas para la restitución de los inmuebles. Comcel nunca aceptó tal condición y una modificación de las obligaciones del Contrato en tal sentido hubiera requerido de la aceptación expresa de Comcel.

14. Comcel aceptó las condiciones establecidas por los arrendadores para el cumplimiento de una obligación derivada de la terminación del contrato. No se puede confundir la terminación del contrato con el cumplimiento de la obligación de restitución del inmueble que surge luego de que el contrato termina, como lo señala el citado artículo 2005 del Código Civil.[1]
15. Por lo tanto, se debe concluir que la interpretación hecha por el Despacho sobre la fecha de la terminación del Contrato no es adecuada de acuerdo con las pruebas recaudadas durante el proceso, ni con Contrato ni con la Ley.
16. En ese sentido, no podía el Despacho declarar la terminación del Contrato, puesto que éste terminó, de acuerdo con lo establecido por las partes, el 31 de diciembre de 2017.
17. Tampoco podía el Despacho condenar a Comcel al pago de los cánones de arrendamiento con posterioridad a su fecha de terminación, que fue el 31 de diciembre de 2017.

b. En cuanto a la condena al pago de los cánones de arrendamiento hasta la fecha de entrega del inmueble.

18. En todo caso, y de considerarse que la terminación del Contrato estaba sujeta a la condición de la entrega de los inmuebles y de las obras acordadas, el Despacho debió considerar que el Contrato se terminó, al menos, el 17 de septiembre de 2019, fecha en la que Comcel entregó las zonas comunes del edificio y las llaves de los inmuebles objeto del Contrato a la administración del Edificio Gales.
19. Para esa fecha, y como se probó a través del dictamen pericial, de los testimonios y de las fotografías contenidas en el Acta No .04 de la Asamblea General de Copropietarios del Edificio Gales del 17 de septiembre de 2019, tanto las zonas comunes como los inmuebles objeto del Contrato cumplían con los requerimientos solicitados por los demandantes para su entrega, y se pusieron a disposición de los arrendadores, tal como lo establece el Código Civil:

[1] Tribunal Superior de Tunja. Sentencia del 10 de diciembre de 2020. Rad. 2019-0465 M.P. José Horacio Tolosa.

> ***ARTICULO 2006. <FORMA DE RESTITUCION>.*** *La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves, si las tuviere la cosa.*

20. Por lo tanto, y de manera subsidiaria, si se considerara que el Contrato no se terminó el 31 de diciembre de 2017, se debió considerar que las supuestas condiciones para su terminación ocurrieron al menos el 17 de septiembre de 2019. Por lo tanto, la condena al pago de los cánones no podía extenderse a una fecha posterior al 17 de septiembre de 2019.
21. El Despacho debió considerar entonces que los arrendadores se encuentran en mora de recibir el inmueble al menos desde el 17 de septiembre de 2019, a pesar de estar los inmuebles listos y de acuerdo con lo acordado por las partes para sus adecuaciones.

c. Frente al incumplimiento de las obligaciones de Comcel.

22. En la Sentencia Apelada, el Despacho consideró que la demora en las obras para la restitución de los inmuebles objeto del Contrato le eran atribuibles exclusivamente a Comcel:

> *"Las obras no pudieron ser terminadas por la actuación de Comcel, porque es que el sellamiento no es culpa del demandante, ya que las adecuaciones, obvio, incluían zonas comunes y zonas privadas y para las primeras se requería de licencia solicitada por quien? Pues por quien las hizo, no por la otra parte, porque es que una persona no está legitimada sin hacer una obra para ir a solicitar una licencia. "Lo normal, lo lógico, lo entendible, lo que tiene sentido común, es que quien solicita una licencia es quien vaya hacer una obra, no quien no la hace. ¿Qué sentido tiene solicitar una licencia quien no hace una obra? Eso no suena sino a disculpa."*

23. El Despacho consideró que el sellamiento de las obras era únicamente atribuible a Comcel por haber realizado las obras sin licencia.
24. Sin embargo, el Despacho no tuvo en cuenta que las modificaciones iniciales del edificio existieron durante casi 20 años sin que los arrendadores se pronunciaran al respecto, a pesar de tener facultades que, tanto como propietarios del inmueble (y copropietarios de las zonas comunes), como arrendadores[2], les permitían realizar las conductas tendientes a evitar o al menos a sanear oportunamente las

[2] El contrato preveía como causal de terminación la ejecución de mejoras no autorizadas en los inmuebles objeto de arrendamiento.

infracciones urbanísticas que con posterioridad fueron declaradas mediante trámite administrativo.

25. El Despacho también ignoró las pruebas documentales y testimoniales que se practicaron en el proceso, que demuestran que los arrendadores fueron quienes solicitaron las obras de adecuación, que conocían de su alcance, que contaban con asesoría técnica, y que a pesar de esto, y conociendo de la falta de licencia para su desarrollo, omitieron siquiera poner de presente que podría requerirse una licencia para su ejecución.

26. Sin que durante las negociaciones para la determinación de las condiciones de la entrega se pusiera de presente la necesidad -conocida- de iniciar con los trámites de una licencia, el arrendador conoció y se hizo parte de un procedimiento administrativo que tenía como finalidad el sellamiento de las obras que él mismo solicitó, por iniciarse sin contar con una licencia de construcción. [3]

27. Con los documentos que obran en el proceso relacionados con el trámite de la querella[4] y con las respuestas al interrogatorio de parte rendido por el demandante, se demostró que (i) el señor Hermosa no puso de presente a Comcel la necesidad de una licencia de construcción para el desarrollo de las obras que él mismo había solicitado, a pesar de estar asesorado por arquitectos durante la ejecución de las adecuaciones, y que (ii) el señor Hermosa, con posterioridad a la firma del Acta Final de Adecuaciones, se hizo parte de un procedimiento policivo tendiente a sellar las obras que él mismo había acordado realizar.

28. De haberlo puesto de presente en el momento oportuno – o durante los 7 meses que duraron las negociaciones que se concluyeron con el Acta Final de Adecuaciones – las partes interesadas en la restitución hubieran podido iniciar las gestiones para la obtención de la licencia, sin tener que ser objeto de sellamientos.

---

[3] El señor Hermosa confirmó que se hizo parte de la querella, en el interrogatorio de parte practicado en la audiencia inicial de este proceso: ***Audiencia Inicial del 21 de octubre de 2019. 11:18:25 [Pregunta de la apoderada de Comcel]:*** *Las actas a las que me refiero son a las que ya usted se refirió en una respuesta que le dio al despacho, una que se firmó en junio y otra que se firmó en octubre de 2017, entonces, en lo que usted recuerde, si el enteramiento frente al tema de la licencia a través de la señora Consuelo de la* ***Vega*** *fue antes o después de estas actas?* ***[Respuesta de Mario Hermosa]:*** *Fue después.*

[4] Como por ejemplo el acta de audiencia 20175233870100835E en la que se expusieron los argumentos del querellante y querellado en el Despacho de la Inspectora 2B de la Policía de Chapinero el 27 de febrero de 2018.

29. Los demandantes no solamente debían estar interesados en la obtención oportuna de una licencia en calidad de arrendadores de los inmuebles sino también en calidad de copropietarios de la propiedad horizontal del Edificio Gales. La ley es clara en que el propietario es solidario frente al arrendatario de las infracciones urbanísticas y además debe coadyuvar en la obtención de las licencias correspondientes.

30. El incumplimiento en la solicitud de licencia de construcción para las adecuaciones requeridas para la entrega del inmueble objeto del proceso, configura un incumplimiento a una obligación para la cual los arrendadores y arrendatarios son solidariamente responsables, tal como lo estipula el parágrafo del artículo 79 de la Ley 675 de 2001:

> *"ARTÍCULO 79. Ejecución de las obligaciones. Los Administradores de Unidades Inmobiliarias Cerradas podrán demandar la ejecución de las obligaciones económicas y de las sanciones pecuniarias impuestas a propietarios y moradores.*
>
> *En tales procesos de liquidación de las obligaciones vencidas a cargo del propietario o morador, realizada por el Administrador, prestará mérito ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la presente ley, sin necesidad de protesto ni otro requisito adicional.*
>
> *PARÁGRAFO. **En todo caso el copropietario de cada inmueble responderá solidariamente por todas las obligaciones ordinarias y extraordinarias y por las sanciones pecuniarias impuestas a los moradores de su inmueble".***

31. De lo anterior se debe concluir que la infracción urbanística que generó el sellamiento de las obras y que generó que no se pudieran entregar a tiempo, le es imputable también a los demandantes.
32. El Despacho consideró que la solidaridad que impone la ley frente a las sanciones urbanísticas no era un argumento válido para excluir un incumplimiento de sus obligaciones:

> *"Ahora, tampoco resulta válido que la demandada se escude en la solidaridad del propietario, en tanto que las mejoras locativas corresponden al arrendatario y las mejoras no locativas pueden ser realizadas por el arrendatario con el permiso del arrendador y reembolsadas por éste tal como lo exponen los artículos 1993 y 1994 del Código en concordancia con el decreto 1077 de 2015, pues salvo modificación de las partes.*
> *Y ello demuestra que no hay solidaridad entre arrendador y arrendatario y no hay solidaridad porque no hay pluralidad de sujetos pasivos y no hay pluralidad de sujetos activos. Dos o más frente a uno o varios acreedores o dos o más frente a uno o varios deudores.*
> *Tampoco le es aplicable el artículo 825 del Código de Comercio que predica la solidaridad de los negocios mercantiles. Esto es en contratos de carácter comercial pero cuando obligan a una misma posición.*

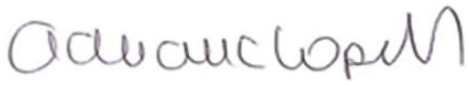
> *Y además cabe recordar que los administradores responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que con dolo o culpa ocasionen a la sociedad u ocasionen a los miembros de la misma y esto implica que claramente quién ha debido sacar la licencia? Pues le correspondía a la administración del edifico de Comcel, quien la tomó y quien no niega "la tuvimos porque teníamos a disposición todo el edificio.*
> *A punto tal que la licencia fue otorgada el 16 de agosto de 2018, posteriormente, y en ella también se dice que se da porque hay obras de carácter común."*

33. No tuvo en cuenta el Despacho las pruebas y normas expuestas, que dan cuenta de las omisiones de los deberes de los demandantes como arrendadores, propietarios y copropietarios, y de la incidencia que el incumplimiento de esos deberes tuvo en el retraso de las obras pactadas para la restitución del inmueble.
34. Por lo anterior, erró el Despacho al considerar que Comcel fue el único responsable por la demora en la restitución de las obras.

III. Conclusiones y solicitudes

35. Teniendo en cuenta, como se probó en el proceso, que el Contrato celebrado entre las partes se encuentra terminado, que los arrendadores se encuentran en mora de recibir los inmuebles, y que son corresponsables de la demora en la entrega de las obras para la restitución de los inmuebles, la Sentencia Apelada debe ser revocada y deben ser negadas las pretensiones de la demanda.

Atentamente,



ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ
C. C. No. 52.051.679
T. P. No. 85.250 del C. S. de la J

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CRUZ MIRANDA RV: SUSTENTACIÒN RECURSO DE APELACIÒN COMPLEMENTARIO Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 11/08/2023 8:37 AM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (768 KB)

ESCRITO SUSTENTACION RECURSO COMPLEMENTACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CRUZ MIRANDA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: NADIA RUBI MARTINEZ <nadia.rubi@hotmail.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 8:01
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Alejandro Acosta <alejandroacostagutierrez@gmail.com>; lealarse@gmail.com <lealarse@gmail.com>; gabrielcastrocuellar@yahoo.es <gabrielcastrocuellar@yahoo.es>; mateolaminco@gmail.com <mateolaminco@gmail.com>; WBECERRA@ALIANZA.COM.CO <wbecerra@alianza.com.co>; INVER DAZA G <inverdazag@yahoo.com>; Luz D <luce019@hotmail.com>
Asunto: SUSTENTACIÒN RECURSO DE APELACIÒN COMPLEMENTARIO Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01

Doctora
MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
E. S. D.

REF: PROCESO DECLARATIVO VERBAL
DEMANDANTE: JUAN CARLOS DAZA GAITÁN
DEMANDADOS: CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ WALTEROS Y OTROS
RADICADO: Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN - COMPLEMENTARIA

NADIA RUBI MARTÍNEZ, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.150.037 y T. P. No. 93.548 del C. S. de la Judicatura, actuando como apoderada de la parte actora, de manera respetuosa y oportuna, en atención a lo previsto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 y lo dispuesto por su Despacho en proveído calendado 28 de julio de 2023, notificado por estado de 31 de julio del año en curso, me permito adjuntar la Sustentación al Recurso de Apelación complementario en el proceso de la referencia, por lo que agradezco tener en cuenta este archivo final.

Respetuosamente,

NADIA RUBI MARTINEZ
Apoderada Demandante.

Doctora
MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
E. S. D.

REF: PROCESO DECLARATIVO VERBAL
DEMANDANTE: JUAN CARLOS DAZA GAITÁN
DEMANDADOS: CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ WALTEROS Y OTROS
RADICADO: Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

NADIA RUBI MARTÍNEZ, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.150.037 y T. P. No. 93.548 del C. S. de la J., actuando como apoderada de la parte actora, de manera respetuosa y oportuna, en atención a lo previsto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 y lo dispuesto por su Despacho en proveído calendado 28 de julio de 2023, notificado por estado de 31 de julio del año que avanza, presento a su Despacho la sustentación del recurso de apelación propuesto contra la sentencia anticipada calendada agosto 24 de 2022 proferida por el Juzgado 43 Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso de la referencia.

Como prolegómeno de este puntal valga anotar que el predio objeto del proceso estuvo en posesión y tenencia del señor Álvaro Román Ignacio de Jesús Daza González (QEPD) hasta el momento de su fallecimiento y, posteriormente, de sus herederos hasta cuando la Fiscalía General de la Nación en investigación propuesta y adelantada justamente por los verdaderos propietarios se ordenó, en discutida decisión, el 1° de octubre de 2014, la entrega al presunto comprador Gabriel Castro Cuellar, quien se abstuvo de iniciar la correspondiente acción civil para obtener la transferencia material del bien raíz.

Hecho relevante que se destaca para enfáticamente afirmar que el real dominus, una vez se enteró de la “estafa” de la cual había sido víctima acudió a la jurisdicción y a los entes administrativos [por la pérdida en la Notaría del falso poder que sirvió para consolidar la defraudación del patrimonio del señor Daza González], actuar del cual lógicamente se infiere, para los efectos del asunto debatido, que jamás hubo abandono del derecho, por el contrario, desplegó una ingente “lucha” para rescatar la propiedad jurídica de su inmueble.

Su confianza en la justicia penal, presentó dos denuncias, se evidencia en el material probatorio allegado al plenario.

A su fallecimiento, sus herederos, una vez se enteraron de la problemática, de la cual no tenían conocimiento por residir en el extranjero, procedieron a ejercer las acciones correspondientes en defensa de la masa sucesoral, porque, valga decirlo, encontraron varias demandas infundadas, basadas en documentos no atribuibles a su progenitor, a más del conflicto por el bien raíz cuya propiedad aquí se debate y que, como antecedentemente se anotara, se encontraba bajo el señorío de Álvaro Román Ignacio Daza González (QEPD), para lo cual, entre otras, adelantaron conversaciones con los aquí demandados, sin lograr un acuerdo, razón por la cual se propuso esta demanda, contexto que inequívocamente conduce a señalar que nunca ha existido el abandono que reclama la prescripción para su prosperidad.

Ahora bien, como se expusiera al interponer el recurso de alzada, la prescripción extintiva de las acciones pretende dar certeza a las relaciones jurídicas, pero

también se ha visto en ella una presunción de abandono o renuncia al derecho, regulación que tiende a solucionar las diferencias de manera razonable y justa.

Con esa finalidad, no puede olvidarse que el proceso está concebido para garantizar los derechos sustanciales y que corresponde a la función judicial administrar justicia, que no fundar su decisión en la ocurrencia de "devenires del proceso" ajenos a la parte y por ese camino quebrantar su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia para, en cambio, brindar protección a quienes no han acomodado sus actuaciones a la ley.

Como emerge de las pruebas y de las constancias procesales jamás existió abandono, renuncia o situación similar en punto al derecho de la parte actora, por el contrario, de manera constante se ha acudido en demanda de una tutela judicial efectiva para el mismo, lo que de suyo evita que se consolide la institución de la prescripción extintiva y se imponga al titular del derecho la sanción de su pérdida.

En este evento es lo cierto que antes del tiempo fijado por la ley se introdujo a la jurisdicción civil la correspondiente demanda, lo que traduce la vigencia del derecho subjetivo que sostiene la acción. Los artículos 2512 y 2535 del Código Civil exigen para que se configure esta figura que no se haya ejercido la acción correspondiente durante el lapso de tiempo legal concedido con ese efecto, hipótesis legal que no tiene presencia en este litigio.

Presentada oportunamente la demanda, la parte actora actuó diligentemente y realizó todos los actos procesales que le correspondían, es decir, cumplió con las cargas que eran de su resorte, de donde como lo han sostenido las Altas Cortes la negligencia, retardos, etc. en que incurra el juzgado no le son atribuibles y por ende no pueden ser el origen o la causa de la declaratoria de la prescripción.

De las constancias procesales emerge, sin hesitación, que el extremo activo se condujo acuciosamente y efectuó pronta y eficazmente las actuaciones necesarias para realizar las notificaciones al extremo pasivo, sólo que ante la imposibilidad de conseguir a CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ WALTEROS, quien torticeramente se desapareció para los efectos del proceso, correspondió acudir a la figura del curador ad-litem, cuyo nombramiento y aceptación escapan a la labor que debe desplegar la parte interesada y la "demora" en la intimación de éste, atribuible a la función judicial y a las personas designadas por el juez, es el origen de la prescripción declarada por el a-quo, contexto que es ajeno a las exigencias requeridas para que opere esta figura y por ende de la pena que ésta conlleva, cual es la pérdida del derecho.

Viene, entonces, que la sentencia que se apela no solo efectúa una indebida interpretación de las circunstancias que originaron la tardanza en la notificación al curador ad-litem de uno de los demandados, sino que desconoce jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

Así se reconoció en la sentencia SC5755-2014 (M.P. Ariel Salazar Ramírez), entre otras, en la cual se expuso:

"Partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad imposibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la inteligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de ésta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio a que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de

paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiando al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas éstas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad. (…)

"La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse oportunamente, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausentan del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación." (SC de 19 de noviembre de 1976)

La Corte Constitucional en sentencia C-666 de 1996 al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la no interrupción de la prescripción prevista en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, la condicionó para que constitucionalmente fuera admisible, a que *"(…) únicamente en el entendido de que la ineficacia de la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad, en su caso (…) provenga de hechos o de causas imputables al demandante (…)".* En el mismo sentido, por ejemplo, se encuentra la sentencia C-227 de 2009, entre otras. (Se resaltó)

Siguiendo la jurisprudencia y la ley resulta que en este preciso evento no tiene cabida la prescripción extintiva declara por el juzgado en la sentencia anticipada apelada, por lo que debe ser revocada.

Igualmente desconoce el fallador constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en punto al momento a partir del cual debe empezar el conteo del término prescriptivo tratándose de la acción ejercida por un heredero, sin que al respecto se esboce argumento alguno para tal determinación, en tanto que la alusión que efectúa a que el señor Álvaro Román Daza González tuvo conocimiento de los hechos "a tan sólo 5 días de la inscripción del documento público en el registro inmobiliario", citando también la denuncia que por estos hechos, en su momento, aquél formuló, no es pertinente en tanto que no corresponde a quien ejerce la acción en su calidad de heredero y presentó la correspondiente demanda.

Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

"*la Corte tiene definido que cuando la acción de simulación corresponde al heredero o cónyuge sobreviviente, es decir, cuando se inicia por las consecuencias directas*

para ellos, por afectar la masa social o de la herencia, el fallecimiento del causante hace que estos adquieran, desde ese momento, iure proprio-la legitimación para actuar- y el término prescriptivo contará desde ahí. (CSJ, S. Civil, Sent. 119972016, ago. 29/16, entre muchas otras).

"Se explica que, como se había indicado desde 1955 y reiterado en sentencia del 20 de octubre de 1959, "la acción de simulación, cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acción de simulación es requisito

indispensable la existencia de un interés jurídico en el actor. Es la aparición de tal interés lo que determina la acción de prevalencia. Mientras él no exista, la acción no es viable. De consiguiente, el término de la prescripción extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el interés jurídico del actor. Sólo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 2535 del C. C". (Negrilla fuera del texto)

"Así tratándose de una compraventa simulada, el interés del vendedor aparente, para destruir los efectos del contrato ostensible cuando el comprador aparente pretende que tal contrato es real y no fingido, desconociendo la eficacia de la contraestipulación, nace sólo a partir de este agravio a su derecho, necesitado de tutela jurídica".

"La Sala entiende que "es más acorde con la justicia considerar que mientras esté vigente el pacto simulatorio entre las partes, no puede empezar a correr la prescripción y, por consiguiente, la exigibilidad que demarca el hito para ese efecto, conforme al art. 2535 del C.C., solo puede surgir desde el momento en que una de las partes, o sus herederos, desconoce el pacto. En otros términos, mientras el 'deudor' en la simulación, esto es, quien tiene el derecho objeto del negocio oculto, no desconozca los atributos del otro contratante, éste no estaría compelido a 'obrar' con el inicio de la acción simulatoria, y por eso mismo, en el entretanto no podría contarse el término de la prescripción extintiva. Sólo desde el alzamiento en rebeldía del deudor, podría iniciarse el fatal plazo prescriptivo".

Cabe anotar que para cuando sucedieron los hechos que sirven de fundamento a la demanda el ahora actor vivía en el extranjero y por razones familiares sólo vino a tener conocimiento de las mismas hasta el año 2015, oportunidad a partir de la cual ha tenido que sostener diferentes procesos, varios de ellos sin justificación alguna, todos dirigidos a proteger los bienes integrantes de la masa sucesoral del señor Álvaro Román Daza, de la cual se han querido "apoderar" terceros, privando del justo derecho que le asiste a sus sucesores.

De lo dicho viene, entonces, que si la prescripción extintiva o liberatoria, que es la que interesa a este asunto, es aquél fenómeno por el cual se extinguen las acciones o derechos ajenos por no ejercerlos su titular en el tiempo establecido en la ley, se requiere para que se consolide, inexorablemente, el transcurso del período que la ley establezca y la inactividad o pasividad del titular del derecho, exigencias que no se satisfacen en este debate jurídico, la última de ellas, porque una vez se enteró el señor Álvaro Román Ignacio de Jesús Daza González (QEPD) del proceder torticero empleado para privarlo, de manera ilegítima, del inmueble de su propiedad, procedió a poner en movimiento la jurisdicción, ejerciendo su derecho de acción ante la autoridad penal correspondiente.

Cabe anotar que el titular del derecho de dominio del predio objeto de este proceso no era un experto en derecho, de donde su iniciativa de acudir a la especialidad penal debió obedecer a las reglas de la experiencia que indican que cuando se comete un ilícito, como él consideró estaba sucediendo con la tramoya armada para indebidamente sustraer de su patrimonio un bien de su exclusiva propiedad, la defensa de su derecho competía a aquélla, desplegando su actividad para que lograr justicia.

Cuando se encontraba en ese empeño, una prueba de trascendental importancia, el poder que se le atribuía para realizar la transferencia de su inmueble, misteriosa e insólitamente "desapareció" del protocolo notarial. Las probanzas arrimadas a este proceso dan cuenta de las diligencias que adelantó para que se le respondiera por ese peregrino insuceso.

Sólo que pese a su esfuerzo y a la evidencia de los hechos no obtuvo solución judicial a su conflicto. Y, se encontraba en ese batallar para cuando falleció, sin que, por razones familiares, le hubiera comunicado a sus herederos las circunstancias

conflictivas en que se encontraban sus bienes, razón por la cual, únicamente con posterioridad al deceso del señor Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González y con ocasión de las averiguaciones propias para adelantar el correspondiente proceso de sucesión se enteraron de la problemática que rodeaba la propiedad del bien raíz involucrado en este litigio, procediendo a ejercer, oportunamente, el heredero, en esa calidad, la acción civil correspondiente, a más de continuar con la penal que muchos años atrás se había iniciado.

En este orden de ideas emerge que la parte actora jamás abandonó el derecho que reclama, que no hubo negligencia en la defensa del mismo, lo que excluye el requisito de inactividad que exige la prescripción extintiva y por tanto, como comedidamente lo solicito, se debe revocar la sentencia anticipada impugnada, máxime si se observa, en cambio, que quien no tuvo iniciativa alguna para reclamar su “supuesto” derecho fue el “presunto” comprador. Su inactividad a ese respecto fue absoluta, total pasividad. Y su “hipotético” vendedor se “desapareció”.

Necesario es destacar que los aquí demandados tuvieron conocimiento de la averiguación penal y actuaron en las diligencias que allí se realizaron.

En punto al transcurso del tiempo fijado por la ley para que se consolide la prescripción, tampoco se acomoda a la ley y a la jurisprudencia la interpretación del juez de primera instancia al iniciar el cómputo del término prescriptivo desde el momento en que se llevó a cabo la defraudación a los intereses patrimoniales del padre del aquí demandante, en tanto que la regla general es que el plazo establecido en la ley debe contabilizarse a partir de cuando podía ejercerse la acción o el derecho, interés que sólo surge en el heredero actor con posterioridad al fallecimiento de su progenitor, luego erróneo resulta retrotraer a época anterior a este hecho jurídico el conteo del término prescriptivo.

Luego, presentada oportunamente la demanda, esto es, antes de cumplirse el término de 10 años, efectuados los actos procesales que eran del resorte de la parte actora con prontitud, como surge de las constancias procesales, habiendo mediado la suspensión de términos por la pandemia y obedeciendo la posible demora procesal a actuaciones exclusivas de la jurisdicción, pese a los requerimientos que se formularon para que se designara y notificara al curador ad-litem del “presunto” vendedor demandado, claro resulta que no puede sancionarse a la parte demandante con la declaratoria de prescripción, la que, respetuosamente se reitera, se impetra sea revocada para que el proceso continúe su curso normal.

Es unánimemente aceptado por doctrina y jurisprudencia que el fundamento de la prescripción extintiva no es otro que el de garantizar, dar certeza, claridad y seguridad a las relaciones jurídicas, bajo el entendido que éstas han consultado los principios de la buena fe y de legalidad, que no para aquéllas que se han fraguado

contrariando la ley para injustamente despojar a su legítimo propietario de sus bienes.

Finalmente, y a pesar de los innumerables esfuerzos para que la Fiscalía General de la Nación realizara una idónea y seria investigación, prescribieron los delitos por los cuales curso la investigación, quedando la vía civil como única alternativa para hacer justicia y que mis representados nos sean despojados de los bienes que les pertenece al ser los verdaderos titulares de derecho de propiedad del inmueble que es objeto de este litigio.

En conclusión en este litigio no se satisfacen las exigencias legales, ni de justicia y equidad, para declarar próspera la excepción de prescripción, como tampoco se

atiende a los principios de buena fe y lealtad procesal que deben gobernar las actuaciones procesales.

De la Señora Magistrada,



NADIA RUBI MARTINEZ

C.C. No. 52.150.037 de Bogotá

T.P. No. 93.548 C.S. de la Judicatura

Anexo: Sentencia condenatoria del 8 de mayo de 2023 Rad. 252866000000201900005-NI 361608 contra Ruth Angelica López Gil, `relacionada con uno de los procesos penales que buscaban dejar sin patrimonio a los herederos del señor Alvarado Daza González.

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CUI: **252866000000201900005 – NI 361608**
Procesada: **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL**
Delito: **Falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso y fraude procesal**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a dictar la sentencia condenatoria anunciada contra Ruth Angélica López Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.406.781 de Bogotá, en calidad de coautora de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso y fraude procesal, en virtud del preacuerdo celebrado por las partes y aprobado por este Despacho.

2. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Según la fiscalía, el 1º de abril de 2016, a través de apoderado, el ciudadano Juan Carlos Daza Gaitán solicitó se investiguen las conductas punibles adelantadas sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, propiedad de su progenitor Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González (QEPD), porque en el certificado de tradición aparecen diferentes anotaciones que dan cuenta que mediante sentencias de pertenencia ese predio fue adjudicado a Henry Díaz Cárdenas, Ruth Angélica López Gil, Alba Marina Gamboa Rojas y Pablo León Castañeda, demandas que tachó de falsas por cuanto en los Juzgados no aparecen radicadas esas demandas, los números de radicados no correspondían a la numeración que utilizaban, así como tampoco el nombre del Juez correspondía al que ejercía el cargo.

Se estableció que en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, en la anotación No. 13 aparece inscrita la adjudicación mediante proceso de pertenencia adelantado en el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, a favor de Ruth Angélica López Gil, respecto de un área de terreno de 3815 m^2. Hechas las verificaciones ante el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá se pudo establecer que el proceso en donde se declaró la adjudicación, la demanda no fue radicada, por lo tanto, la sentencia que se radicó en la oficina de registro de instrumentos públicos- zona centro, es falsa.

Mediante escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, Ruth Angélica López Gil enajenó el terreno a Jorge Ricardo Angulo Valencia, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PROCESADA

Ruth Angélica López Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.406.781 de Bogotá, nacida en la misma ciudad el 12 de octubre de 1971, su plena identidad quedó establecida en el informe sobre consulta web de la Registraduría nacional del Estado Civil- Dirección Nacional de Identificación.

4. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

El 20 de junio de 2019, ante el Juzgado 3° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se formuló imputación a Ruth Angélica López Gil en calidad de presunta coautora de los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y estafa con circunstancias de agravación, tipificadas en los artículos 246, 267 -1, 287, 288, 289 y 453 del Código Penal, cargos que no fueron aceptados en dicha oportunidad.

Radicado el escrito de acusación, el asunto fue asignado por reparto a este Despacho Judicial. La audiencia de formulación de acusación se efectuó el 28 de abril de 2021, la Fiscalía acusó formalmente a Ruth Angélica López Gil como presunta coautora de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo (artículos 287, 288, 289 y 453 del Código Penal).

Citadas las partes para celebración de audiencia preparatoria el 19 de agosto de 2022, las partes solicitaron la variación del sentido de esta para socializar un preacuerdo. La negociación consistió en que la procesada aceptaba los cargos que le fueron imputados a título coautora y, a cambio, se le concedería como único beneficio, para efectos únicamente de la tasación de la pena, la imposición de la pena correspondiente a la de cómplice.

Ese mismo día, el Despacho constató que la acusada entendía, comprendía y aceptaba el acuerdo y las consecuencias de la aceptación de responsabilidad penal de manera libre, consciente y voluntaria, previamente asesorado de su abogado de confianza. No obstante, debido al gran volumen de archivos trasladados por la Fiscalía, el Despacho suspendió la diligencia a efectos de verificar si el ente acusador contaba con las pruebas mínimas para desvirtuar la presunción de inocencia de la procesada.

El 15 de noviembre de 202, luego de hacer la respectiva verificación de prueba mínima, se impartió legalidad a la negociación y se anunció sentido del fallo de carácter condenatorio, por lo que se

procedió a correr traslado de lo dispuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.

La Fiscalía. - solicitó se imponga la pena mínima, dado que la procesada no cuenta con antecedentes penales. Respecto a los subrogados penales, peticionó se estudie la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria porque la acusada ostenta la condición de madre cabeza de familia, además, porque el *quantum* de la pena no superaría los 8 años de prisión.

Igualmente, con fundamento en los artículos 22 y 101 del Código de Procedimiento Penal, peticionó la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente contenidos en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905, concretamente la anotación No. 13, y la cancelación o cierre del folio de matrícula inmobiliaria abierto con base en la inscripción de la falsa sentencia con la que la procesada se adjudicó el inmueble 50C-1928734.

La representación de víctimas. - solicitó la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente, además la notificación de la sentencia a la oficina de registro e instrumentos púbicos zona centro. Respecto al *quantum* punitivo lo dejo a consideración del despacho y la forma en cómo se cumplirá la respectiva pena.

La defensa. - solicitó partir de la pena mínima a imponer. Indicó, su representada está a cargo de una hija menor de edad “con discapacidades”. Peticionó que se conceda la prisión domiciliaria, con base en el artículo 38 B, por cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos, tales como la carencia de antecedentes penales y el *quantum* de la pena no superaría los 8 años de prisión; asimismo los delitos por los cuales se emite condena, no se encuentran en la prohibición del artículo 68 A del Código Penal.

Posteriormente, en Auto de fecha 19 de enero de 2023, este Juzgado decretó la nulidad de lo actuado, desde la audiencia celebrada el 19 de agosto de 2022, en donde se verbalizó el preacuerdo, tras considerar que los terceros de buena fe, Jorge Ricardo Ángulo Viracachá, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez, a quienes Ruth Angélica López Gil transfirió el derecho del dominio mediante compraventa conforme la anotación No.2 con fecha del 18 de marzo de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734, debían ser citados para que se enteraran del trámite procesal adelantado en relación con el inmueble que adquirieron de buena fe, pero que estaba viciado de irregularidades por ser fruto de varios delitos y pudieran hacer valer sus derechos y fueran escuchados. Esta decisión fue recurrida por la delegada de la Fiscalía.

Después, mediante Auto del 7 de marzo de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., revocó el precitado Auto del 19 de enero de 2023 y, en su lugar, ordenó proferir la sentencia respectiva con base en el preacuerdo que aprobó el 15 de noviembre de 2022, en razón de que “el restablecimiento del derecho procede en favor de la víctima y para que esta y los terceros con

interés puedan debatir la responsabilidad civil derivada del delito, en el incidente de reparación integral o ante la jurisdicción ordinaria civil, la sentencia condenatoria debe estar ejecutoriada. Por este motivo, resulta incluso más beneficioso que se defina cuanto antes la responsabilidad penal de Ruth Angélica".

5. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

5.1. Competencia

Este despacho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36-2 y 43 de la Ley 906 de 2004, es competente para emitir el presente fallo, dado el lugar de ocurrencia de los hechos y el delito por el que se formuló acusación.

5.2. Fundamentación fáctica jurídica y probatoria.

El artículo 250 de la Constitución Política, establece en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal, sentó las bases para la constitución del rito procesal que, más adelante fue instituido por la Ley 906 de 2004, el cual se caracteriza por ser un sistema mixto con tendencia acusatoria que, con influencias importantes de la doctrina y jurisprudencia anglosajona, incorporó algunas bases de la llamada justicia premial.

Normativamente, los preacuerdos y las negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, tienen su origen en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004. Este artículo, junto con el 349, autorizan la celebración de los preacuerdos siempre que se cumpla con alguna de las finalidades allí previstas y toda vez que se cumplan con una serie de parámetros mínimos, a saber: (i) que se respete el núcleo fáctico de la imputación; (ii) que se observen las pautas trazadas en las directivas de la Fiscalía General de la Nación como política criminal y (iii) que reintegre, por lo menos, el 50% del incremento patrimonial percibido como consecuencia del delito.

En la finalidad de obtener pronta y cumplida justicia, se debe tener en cuenta que los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, cumplidos bajo los parámetros de seriedad, rectitud y justicia, siempre contribuyen de manera eficaz a la evitación del adelantamiento de procesos penales con dilaciones indebidas.

Es importante tener en cuenta que, el acuerdo de voluntades, por supuesto, debe ser libre, consciente y debidamente informado, y supondrá la declaración de responsabilidad respecto del delito por el que se le investiga, a cambio de que el ente acusador elimine de la acusación un tipo penal o circunstancia de mayor punibilidad o de agravación, modifique la adecuación típica con miras a disminuir la pena u otorgue un descuento punitivo sobre la sanción a imponer.

No obstante lo anterior, en atención a lo consagrado en los artículos 7° y 381 del Código de Procedimiento Penal, esta sentencia siendo condenatoria, debe cumplir con el examen de responsabilidad que el recaudo probatorio arroje, con el fin de arribar al conocimiento más allá de duda razonable, sobre la existencia del delito y la responsabilidad del encartado. Además, el artículo 9º de la Ley 599 de 2000 consagra que para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable.

En la medida que los preacuerdos no pueden afectar la presunción de inocencia, es preciso contar con la evidencia suficiente para respaldar una inferencia razonable de autoría o participación. Al plantear el preacuerdo celebrado con su contraparte, el delegado del ente de persecución penal puso de presente los siguientes elementos materiales probatorios, con los cuales habría acreditado su pretensión punitiva en el evento de haber llegado a juicio:

1. Denuncia instaurada (y anexos) por Nadia Rubí Martínez apoderada judicial de Juan Carlos Daza Gaitán, del 01 de abril de 2016.
2. Poder de Juan Carlos Daza Gaitán otorgado a Nadia Rubí Martínez.
3. Auto del 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de Notariado y Registro “por medio del cual se inicia una actuación administrativa en virtud de la instrucción No. 11 de 30 de julio de 2015…”, firmado por la registradora principal Janeth Cecilia Díaz Cervantes y el coordinador del grupo de gestión jurídica registral Camilo Andrés Antolínez Flórez.
4. Poder especial de Juan Carlos Daza Gaitán otorgado a Nelson Alberto Barrera González y Jenny Johana Raigoso Díaz, para actuar dentro del proceso de sucesión con radicado 11001311000201400566 9, ante el Juzgado 2° de Familia del Circuito de Bogotá.
5. Registro Civil de Nacimiento de Juan Carlos Daza Gaitán hijo de Álvaro Daza González y Lucrecia Gaitán, de la Notaría Octava del Círculo de Bogotá.
6. Memorial dirigido al Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., donde allega documentación solicitada, firmado por Nelson Barrera González.
7. Respuesta a derecho de petición proferida por el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., del 21 de junio de 2016, en donde asegura que “no se cursó acción de pertenencia adelantada por Alba Marina Gamboa Rojas, contra Pablo León Castañeda, en relación con el inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-301905, y que la sentencia dictada dentro del citado inexistente trámite, fechada 30 de julio de 2015, no fue proferida por este Despacho”, firmado por la Juez Jenny Carolina Martínez Rueda.
8. Respuesta a petición de la Superintendencia de Notariado y Registro proferida por el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., del 14 de abril de 2016, en donde asegura que “no se avizora sentencia de pertenencia alguna… decisión de tal especie adiada junio 30 de 2015” firmado por la Juez Jenny Carolina Martínez Rueda.
9. Reporte de declaraciones y pagos del impuesto predial unificado cancelados por Álvaro Daza

González desde el año 1994 hasta el año 2010.

10. Recibo de pago de valorización por beneficio general de la Alcaldía de Bogotá de febrero de 2016, del inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 a nombre de Álvaro Ramón Daza González, el cual se encuentra en mora con 12 cuotas pendientes con deuda total de $42.359.600.
11. Certificado de tradición y libertad, del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905.
12. Escritura pública No. 1130 del 1° de junio de 1985, de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá D.C.
13. Copia de 5 contratos de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá, a nombre de Álvaro Daza González.
14. Registro Civil de defunción de Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González del 26 de agosto de 2010.
15. Certificado de tradición y libertad, del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1931094.
16. Certificado de crédito aprobado a Alba Marina Gamboa Rojas, firmado por Julio Cesar Aguirre Cabrera.
17. Escritura pública No. 1708 del 28 de julio de 2015, de la Notaría 20 de Bogotá, suscrita por Alba Marina Gamboa Rojas y Julio César Aguirre Cabrera, sobre el inmueble identificado con matricula inmobiliaria 50C-1931094, ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá.
18. Certificado de tradición y libertad, del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734.
19. Constancia del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, del 22 de septiembre 2015, donde indica, entre otras cosas, que en ese Juzgado no se llevó acabo proceso de pertenencia No. 11001400302637412007-2007 de Alba Marina Gamboa Rojas en contra de Álvaro Ignacio Ramón Daza González y demás personas determinadas, además el CUI correcto del Juzgado es el 110014003024; que la sentencia está firmada por Hugo Carmelo Ortiz Clavijo, quien fue titular de ese Juzgado pero falleció el 16 de abril de 2013.
20. Sentencia del 28 de enero de 2015, del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso “Ordinario Pertenencia” No. 374120007-2007, demandante: Alba Marina Gamboa Rojas, demandado: herederos indeterminados de Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González.
21. Constancia del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, del 29 de enero de 2015.
22. Edicto del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 11001400302637412007-2007 “ordinario de pertenencia”, del 5 de enero de 2019.
23. Oficio No. 0111 del 29 de enero de 2015 del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 11001400302637412007-2007 “ordinario de pertenencia”.
24. Informe de investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 30 de marzo de 2017, en donde se realiza interrogatorio a Alba Marina Gamboa Rojas y Pablo León Castañeda, firmado por la investigadora Rosalba Arguello García.

25. Acta de comparecencia a audiencia de conciliación No. 2273-2010, del 29 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Inspecciones de la Alcaldía Local de Fontibón.
26. Copia de servicio público domiciliario de "Codensa", de noviembre de 2003, del inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 22-95.
27. Copia del impuesto predial unificado del año 2016, del predio ubicado en la Carrera 120 No. 22-85, a nombre de Alba Marina Gamboa Rojas.
28. Consulta de procesos de la Rama Judicial del radicado No 11001310300220140035200.
29. Poder otorgado por Pablo León Castañeda y Alba María Gamboa Rojas al abogado Santiago Lema Cortés.
30. Contrato de arrendamiento del 24 de marzo de 2004, celebrado entre Pablo León Castañeda y Alba María Gamboa Rojas (arrendatarios) y Álvaro Ramón Daza González (arrendador), sobre el lote de terreno ubicado en la Carrera 120 No. 22-85, interior 5, de Bogotá D.C.
31. Interrogatorio de indiciado FPJ-27, del 16 de marzo de 2017, en donde se interroga a Pablo León Castañeda, firmado por Rosalba Arguello García.
32. Interrogatorio de indiciado FPJ-27, del 16 de marzo de 2017, en donde se interroga a Alba María Gamboa Rojas, firmado por Rosalba Arguello García.
33. Informe investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 24 de julio de 2017, en donde, entre otras cosas, se solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil la tarjeta decadactilar de (entre otros) Ruth Angélica López Gil; recolección de documentos originales entregados a la oficina que dieron origen a las anotaciones No 12, 13, 14 y 15 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, firmado por Rosalba Arguello García.
34. Informe investigador de laboratorio FPJ-13 y anexos, del 10 de julio de 2017, en donde se solicita establecer la uniprocedencia de las huellas dactilares de Pablo León Castañeda, Alba María Gamboa Rojas y Luis Fernando Tello González que obran en la escritura pública No. 7051 del 31 de octubre de 2014 de la Notaría 9° del Círculo de Bogotá y, la uniprocedencia de la huella dactilar de Henry Díaz Cárdenas, firmado por Sthefanie Andrea Cañon Cifuentes.
35. Escritura No. 7051 del 31 de octubre de 2014, de la Notaría 9° de Bogotá D.C., donde aparece como vendedor Henry Díaz Cárdenas y como compradores Pablo León Castañeda y Alba María Gamboa Rojas, del inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá, de la superficie de 2410 m^2.
36. Oficio No. SD-134-17, de la Notaría 20 de Bogotá D.C., del 26 de mayo de 2017, donde envía copia de la escritura pública No. 1708 del 28 de febrero de 2015.
37. Escritura pública No. 1708 del 28 de julio de 2015, en donde se eleva a escritura pública "constitución de hipoteca abierta sin límite de cuantía" al lote de terreno junto con las mejoras ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá, con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1931094, por Alba Marina Gamboa Rojas a Julio César Aguirre Cabrera.
38. Informe investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 04 de junio de 2019, en donde se solicita estudio para establecer las huellas dactilares de quienes suscriben la escritura pública No. 1182 del 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9° de Bogotá, de, entre otras personas,

Ruth Angélica López Gil, firmado por Rosalba Arguello García.

39. Informe de investigador de laboratorio FPJ-13 y anexos, del 14 de mayo de 2019, en donde se realiza el cotejo dactilar de las huellas dactilares de quienes suscriben la escritura pública No. 1182 del 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9° de Bogotá, de, entre otras personas, Ruth Angélica López Gil.
40. Escritura Pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015, de la Notaría 9° de Bogotá, en donde se relaciona a Ruth Angélica López Gil como vendedora y a Jorge Ricardo Angulo Viracacha, José Ignacio Parra Rodríguez y Wilmar González Aldana.
41. Oficio dirigido al registrador de instrumentos públicos zona centro, del 20 de junio de 2016, en donde se solicita informar el nombre y documento de identidad de los funcionarios que ordenaron las anotaciones 12, 13, 14 y 15 dentro del folio con matricula inmobiliaria 50C-301905, firmado por Rosalba Arguello García.
42. Oficio del 6 de marzo de 2017 y anexos, en donde se da contestación al oficio del 20 de junio de 2016, firmado por la directora de Talento Humano Lina Marcela Mejía Álvarez.
43. Acta de inspección a lugares FPJ-9 del 14 de junio de 2017, en donde se recolectan documentos pendientes dentro de la Matricula Inmobiliaria 50C-301905, firmado por Rosalba Arguello García.
44. Sentencia del 21 de febrero de 2014, proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, con No. 40801-2004, dentro del asunto “ordinario de pertenencia”.
45. Oficio No. 1374 del 29 de abril de 2014, del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá D.C., en donde indica que ese Despacho mediante sentencia de pertenencia de esa misma fecha proferida dentro del radicado 110014003050006-2006, de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ignacio Ramón Daza González y demás personas indeterminadas, firmado por Diana Carolina Mejía Peña (secretaria).
46. Sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá D.C., dentro del radicado 110014003050006-2006, de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ignacio Ramón Daza González y demás personas indeterminadas, suscrita por el Juez Marco Antonio Álvarez Gómez.
47. Certificado del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, del 23 de enero de 2017, en donde aclaró que allí no se adelantó proceso de pertenencia con radicado 50006-2006, sobre el área parcial de 3815m^2 de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ramón Daza González, respecto al inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-301905 y “en lo que tiene que ver con el radicado, no corresponde al código designado al Juzgado 50 Civil Municipal (…) la señora DIANA CAROLINA MEJÍA PEÑA, en ningún momento ha ejercido el cargo de secretaria de este Estrado Judicial”. firmado por el secretario Duván Alexis Espitia Ramírez.
48. Informe investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 04 de junio de 2019, en donde se solicitó a perito en lofoscopia para establecer las huellas dactilares de quienes suscriben escritura pública 1182 del 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9° de Bogotá, frente a las huellas dactilares en las tarjetas decadactilares de Ruth Angélica López Gil, Jorge Ricardo Ángulo

Viracacha, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez, firmado por Rosalba Arguello García.

49. Informe investigador de laboratorio FPJ-13, del 14 de mayo de 2019, en donde se realiza el cotejo en lofoscopia y se establece la uniprocedencia de las impresiones dactilares, firmado por Rafael Alberto Mejía Gross.
50. Escritura Pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015 de la Notaría 9° del Círculo de Bogotá, en donde se protocoliza la compraventa realizada por Ruth Angélica López Gil (vendedora) y Jorge Ricardo Angulo Viracacha, José Ignacio Parra Rodríguez y Wilmar González Aldana (compradores).

Entonces, analizado ese conjunto probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, se concluye que Ruth Angélica López Gil, con una sentencia de pertenencia falsa, supuestamente proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 110014003050006-2006, inscribió la anotación No. 13 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, respecto de un área de terreno de 3815 m^2 y; posteriormente, mediante escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9 del Circulo de Bogotá, Ruth Angélica López Gil enajenó el terreno a los ciudadanos Jorge Ricardo Angulo Valencia, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

Siendo ello así, se tiene que el comportamiento se tipifica en el delito de falsedad material en documento público cuando Ruth Angélica López Gil, en compañía de otras personas, con la finalidad de hacerse ilícitamente del derecho de dominio del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, falsificó la sentencia de pertenencia presuntamente dictada por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, según la anotación No. 13.

Además, la falsedad en documento privado se configuró cuando la procesada falsificó un poder para darle apariencia de legalidad a la compraventa del inmueble otorgado presuntamente por el adjudicatario. El delito de obtención de documento público falso, se concretó cuando utilizaron el poder falso ante el Notario 9° de Bogotá, para que éste otorgara la escritura pública No. 7051 de 2014 y; cuando enajenó la cuota parte del terreno consistente en 3815 m^2 a Jorge Ricardo Viracacha, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez, mediante escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015.

Finalmente, el delito de fraude procesal se tipificó cuando, por un lado, solicitaron al registrador de instrumentos públicos de la zona centro de Bogotá la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905 de la falsa declaración de pertenencia parcial de 3815 m^2 a nombre de Ruth Angélica López Gil, concretamente en la anotación No. 13 y; por el otro, cuando le solicitaron al mismo funcionario la inscripción de la escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015, obtenida ilícitamente, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734, con base en la anotación No. 13

del folio matriz.

Así las cosas, los comportamientos realizados por Ruth Angélica López Gil, ciertamente se ajustan a los tipificados en los artículos 287, 288, 289 y 453 del Código Penal del Código Penal; además, con esos comportamientos contradijo la prohibición contenida de manera implícita en dicha normativa y, lesiono los bienes jurídicos de la fe pública y eficaz y recta impartición de justicia. Finalmente, no se plantearon situaciones que hubiesen puesto en riesgo la capacidad de esta ciudadana de comprender la ilicitud de su comportamiento y determinarse de conformidad con ese entendimiento.

A lo anterior se agrega que, a través del preacuerdo, Ruth Angélica López Gil aceptó los cargos que le fueron imputados, con ello, además de renunciar a su derecho a la no autoincriminación, lo hizo también al de tener un juicio oral, público, contradictorio y concentrado, en el cual pudiese ofrecer explicaciones alternativas a la hipótesis delictiva de la Fiscalía.

En tanto se cumplieron con los estándares probatorios mínimos para la acreditación del delito, el Despacho no puede formular consideraciones adicionales en este punto, por lo que se reúnen los requisitos para emitir sentencia condenatoria en contra Ruth Angélica López Gil en calidad de coautora de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo; empero, en virtud de la aprobación del preacuerdo celebrado y para efectos de la tasación de la pena, se impondrá la que corresponde a cómplice.

Ahora, el segundo requerimiento de la delegada Fiscal consistió en que se ordene la cancelación de los registros fraudulentos, específicamente la anotación No. 13 del 14 de enero de 2015, dentro del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905, con especificación “declaración judicial de pertenencia parcial 3.815 M2” y; la cancelación del certificado de tradición y libertad del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734 que se originó con base a esa anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905. Debe indicarse que el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal dispone:

> “En cualquier momento, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
>
> En la sentencia se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.”

Bajo esa disposición normativa se entiende que, al Juez de Conocimiento, a través de providencia que ponga fin al proceso penal, le fue asignada competencia para cancelar los títulos y registros

cuando exista ese convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la suspensión del poder dispositivo en cuestión. La Corte Constitucional en sentencia C-060 de 2008 al respecto aclaró:

> "…la Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el "convencimiento más allá de toda duda razonable" sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables…"

Así mismo, la precitada corporación judicial en providencia C-395 de 2019 concluyó:

> "la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente es un instrumento a través del cual se busca garantizar los derechos de las víctimas, principalmente aquellos relacionados con la reparación y el restablecimiento del derecho, mediante la restitución de los bienes que son el objeto material de la conducta al estado anterior a la comisión del delito y evitar que se aumenten los perjuicios causados con el ilícito".

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha indicado de manera insistente que, en casos en los que entren en conflicto los derechos de las víctimas del comportamiento delictivo y los intereses de terceros de buena fe, los primeros deben primar sobre los segundos. Al respecto, dicha corporación en sentencia con radicado 42.317, del 11 de diciembre de 2013, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, que dada su importancia, será citada *in extenso*, precisó respecto a este tópico:

> «En efecto, desde antaño el máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que si bien la Carta Política consagra en su artículo 58 la protección en favor de la propiedad privada, aquella sólo ampara a los bienes y demás derechos adquiridos con justo título y de conformidad las leyes civiles, por tanto "el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos".
>
> En la sentencia C-245 de 1993 que menciona el casacionista, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, que en esa codificación regulaba la medida de cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sobre el tema expuso:
>
> "Desde otro punto de vista, la Carta Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos adquiridos en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles…
> (…)
> Sin duda alguna, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos, y la Constitución no autoriza romper el principio de la proscripción de la causa ilícita de los mismos; por tanto, la ley no puede patrocinar la protección de aquellos títulos, ni la de los registros de aquellos en contra de los derechos del titular, mucho menos cuando se adelanta la actuación de los funcionarios judiciales encargados de poner en movimiento las competencias punitivas del Estado.

Posteriormente, en la sentencia C-060 de 2008 que declaró inexequible el término "condenatoria" del inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, y exequible de manera condicionada la expresión "En la sentencia" de la misma norma, en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se puede adoptar en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal, la Corte Constitucional se refirió nuevamente a la citada facultad como una medida efectiva a fin de lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas al interior del proceso penal.

Expresó en esa ocasión dicha Corporación.

"Pero este cambio normativo implica un inconstitucional retroceso en la protección de los auténticos titulares del derecho, que ha de ser restablecido por mandato de un principio rector del mismo Código de Procedimiento Penal (art. 22 L. 906 de 2004), el cual debe prevalecer y aplicarse obligatoriamente sobre cualquier otra disposición de tal Código (art. 26 ib.), "para hacer cesar los efectos producidos por el delito" y procurar que "las cosas vuelvan al estado anterior" a la perpetración criminosa, de modo que, si ello fuere posible, quede como si no se hubiere atentado contra el respectivo bien jurídico, lo cual debe realizarse "INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL" (no está en mayúsculas ni negrilla en el texto original).

Del contenido de las sentencias citadas, se advierte que el restablecimiento del derecho (i) tiene su fundamento en la Carta Política (art. 250-6); (ii) su consagración legal como principio rector en el procedimiento penal de 2004 (art. 22) no sólo impone su aplicación obligatoria y prevalente sobre cualquier otra norma, sino que además irradia toda la normativa en mención y orienta la interpretación de las disposiciones que la integran; (iii) es intemporal y procede al margen de la responsabilidad penal que se establezca en la actuación; (iv) la cancelación de títulos de propiedad y registros obtenidos fraudulentamente (art. 101 ibídem) es una medida eficaz y adecuada para restablecer el derecho y garantizar la indemnización integral de las víctimas; (v) ésta se debe adoptar en la sentencia o en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal, cuando aparezca demostrado más allá de toda duda razonable el carácter fraudulento de los títulos de propiedad; y, (vi) quienes resultaren afectados por la cancelación de los registros pueden concurrir al proceso penal para hacer valer su derecho, pero de todas formas el justo título que detenten se entenderá desvirtuado "al alcanzarse el 'convencimiento más allá de toda duda razonable' sobre el carácter fraudulento de dichos títulos".
(…)
En ese entendido, demostrada la tipicidad objetiva de la conducta punible que da origen a la expedición de los títulos espurios y que a su vez posibilita la fraudulenta inscripción en el registro, el derecho del tercero a que se mantenga su titularidad sobre determinado bien, desaparece y, por ende, pierde cualquier relevancia frente al que le asiste a la víctima del injusto de que cesen los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, esto es, a como se encontraban antes de cometerse aquél.
(…)
Ahora bien, contrario a lo sostenido por el libelista, la Sala se ha referido en no pocas oportunidades a la tensión que surge entre los derechos de la víctima del delito y los de terceros que resultan afectados patrimonialmente a consecuencia de la medida de restablecimiento del derecho que se concreta, cuando de bienes sometidos a registro se trata, en la cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente, donde de manera consistente y pacífica ha mantenido el criterio según el cual, sin excepción, prevalecen los derechos de aquella sobre los del tercero adquirente de buena fe.

Así en la sentencia con radicación 35675 del 30 de mayo de 2011, dijo:

"A conclusión diferente no puede llegar la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que asumir que le asiste la razón a la casacionista, con el argumento que su representado es tercero adquirente de buena fe y, por lo tanto, debe salvaguardarse su derecho a la propiedad, conduciría a darle efectos al múltiple proceder delincuencial que

precede la adquisición del bien y, más grave aún, a desconocer los derechos de la víctima.

El delito, se reitera, no puede ser fuente válida de derechos en este tipo de eventos, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-245 del 24 de junio de 1993, al declarar la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, el cual consagraba la todavía vigente facultad del instructor de cancelar los registros obtenidos de manera fraudulenta.

Para esa Corporación, la Constitución Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos y bienes que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles, pues, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos.
(…)
Por su importancia frente al tema materia de análisis, conviene citar lo que esta Corporación señaló en la sentencia con radicación 39858 de 21 de noviembre de 2012, en un asunto con similar sustrato fáctico, donde casó parcialmente el fallo impugnado en tanto el ad quem erró al interpretar el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, que en la citada codificación prevé la medida de cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, privilegiando los derechos del tercero adquirente de buena fe frente a los de la víctima del delito, con lo cual desconoció mandatos constitucionales y principios rectores de obligatorio cumplimiento. …Dijo la Corte:

"Ahora bien, no puede la Sala dejar de reconocer que la decisión que afecta el derecho a la propiedad privada de quien adquiere bienes de buena fe, necesariamente genera una tensión irreconciliable entre sus derechos y los de la víctima del injusto, quien tiene a su favor la garantía del restablecimiento del derecho.

Pero en este enfrentamiento correlativo de derechos, esta Corte ha sido del criterio que al ponderarlos se han de preferir los intereses de la víctima sobre los del tercero incidental, pues además de que el delito no puede ser fuente lícita de derechos, es forzoso dar alcance a los principios de justicia y reparación, como se reconoció en los fallos de casación del 30 de mayo de 2011, radicado No. 35.675, y del 16 de enero de 2012, radicado No. 35.438.
(…)
Se concluye, entonces, que el restablecimiento del derecho y, por contera, las medidas que en su aplicación se adopten, como la prevista en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, atendida su consagración constitucional y legal como principio rector del procedimiento penal, (i) es de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo el proceso; (ii) procede su aplicación en cualquier fase de la actuación a condición de que se cumplan las previsiones del citado precepto y las consignadas en la sentencia C-060 de 2008 de la Corte Constitucional; y, (iii) en todos los casos, sin excepción, prima el derecho de la víctima del delito a que se privilegie el título obtenido justamente, sobre el del tercero a que se mantenga un título derivado de un acto fraudulento, sin importar su condición, vale decir, si es de buena o mala fe, exenta o no de culpa.»

Con fundamento en la jurisprudencia citada, aunque en el presente hay personas que razonablemente podrían tener la calidad de terceros de buena fe, lo cierto es que el delito original definió a Juan Carlos Daza Gaitán como víctima, al ser heredero legítimo de Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González legítimo propietario del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-301905.

De manera concreta, se estableció que la sentencia de pertenencia, supuestamente proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 110014003050006-2006, con la que se

inscribió la anotación No. 13 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, era falsa, conforme el certificado del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, del 23 de enero de 2017, en donde aclaró que allí no se adelantó proceso de pertenencia con radicado 50006-2006, sobre el área parcial de 3815m^2 de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ramón Daza González, respecto al inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-301905 y "en lo que tiene que ver con el radicado, no corresponde al código designado al Juzgado 50 Civil Municipal (…) la señora DIANA CAROLINA MEJÍA PEÑA, en ningún momento ha ejercido el cargo de secretaria de este Estrado Judicial". De ahí que, desde el punto de vista objetivo, el título traslaticio de dominio (sentencia judicial), en efecto, fue fraudulento.

Así las cosas, se accederá a petición de la delegada fiscal y, en consecuencia, se ordenará que por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, se oficie a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, para que se disponga la cancelación de**: i)** la anotación No. 13 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905 y; **ii)** la cancelación de la anotación No. 1 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734. Se aclara, en tanto Ruth Angélica López Gil no fue propietaria legítima del inmueble en cuestión, la cancelación de esta anotación deja también sin efecto las anotaciones número 2 y subsiguientes, correspondientes a la compraventa del inmueble a favor de Jorge Ricardo Angulo Virachara, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

6. DOSIFICACIÓN PUNITIVA

Los delitos de falsedad material en documento público y de obtención de documento público falso, comportan una pena de prisión que oscila entre los cuarenta y ocho (48) y los ciento ocho (108) meses de prisión. El delito de falsedad en documento privado, comprende una pena de prisión dieciséis (16) a los ciento ocho (108) meses de prisión. Y, el delito de fraude procesal contempla las penas de seis (6) a doce (12) años de prisión, o lo que es lo mismo de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años, o lo que es lo mismo de sesenta (60) a noventa y seis (96) meses. Sin embargo, en tanto a través del preacuerdo se estableció que su participación fue la de un cómplice, en aplicación del inciso tercero del artículo 30 del Código Penal, este rango punitivo debe ser disminuido de una sexta parte a la mitad, así:

1. <u>Falsedad material en documento público:</u>

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**

24 a 40.5 meses de prisión	40.5 a 57 meses de prisión	57 a 73.5 meses de prisión	73.5 a 90 meses de prisión

2. Obtención de documento público falso:

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**
24 a 40.5 meses de prisión	40.5 a 57 meses de prisión	57 a 73.5 meses de prisión	73.5 a 90 meses de prisión

3. Falsedad en documento privado:

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**
8 a 28.5 meses de prisión	28.5 a 49 meses de prisión	49 a 69.5 meses de prisión	69,5 a 90 meses de prisión

4. Fraude procesal:

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**
36 a 57 meses de prisión	57 a 78 meses de prisión	78 a 99 meses de prisión	99 a 120 meses de prisión
100 a 283.5 SMLMV	283.5 a 467 SMLMV	467 a 650,5 SMLMV	650,5 a 834 SMLMV
30 a 42.5 meses de inhabilitación	42.5 a 55 meses de inhabilitación	55 a 67.5 meses de inhabilitación	67.5 a meses 80 de inhabilitación

Así las cosas y dado que, en el presente caso a Ruth Angélica López Gil, no le fueron aducidas circunstancias de mayor punibilidad, ni tampoco concurren a su favor circunstancias de menor

punibilidad de acuerdo con lo previsto en los artículos 55 y 58 del Código Penal, y aplicando los criterios de ponderación, razonabilidad y proporcionalidad a la luz de los parámetros que ofrece el artículo 61 de la misma codificación, la pena a dosificar deberá estar dentro del cuarto mínimo y, como no hay elementos que justifiquen la separación del extremo inferior, se impondrán las penas de: **VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISIÓN**, para el delito de falsedad material en documento público; de **VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISIÓN**, para cada uno de los dos eventos, por el delito de obtención de documento público falso; de **OCHO (08) MESES DE PRISIÓN**, por el delito de falsedad en documento privado y; de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN** y **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DE MULTA** para cada uno de los dos eventos por el delito de fraude procesal.

Asimismo, **SE INHABILITARA PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL MISMO LAPSO DE LAS PENAS PRINCIPALES** exceptuando el delito de fraude procesal que le corresponderá la pena de inhabilitación descrita por **TREINTA (30) MESES.**

Por otra parte, debido a que se presentó modalidad de concurso de delitos y de acuerdo a las reglas predispuestas en el artículo 31 del Código Penal[1], se partirá de la pena más grave, esto es **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN**, **CIEN (100) SMLMV** y **TREINTA (30) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS** por el delito de fraude procesal y; se aumentará en otro tanto por los otros delitos, dicho aumento corresponderá, tanto a la pena de prisión como a la de inhabilitación, a: **CINCO (5) MESES** por el delito de falsedad material en documento público; **CINCO (5) MESES**, para cada uno de los dos eventos del delito de obtención de documento público falso; **TRES (3) MESES** por el delito de falsedad en documento privado y; fraude procesal, en el evento restante, por **SEIS (6) MESES** y **SEIS (6) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**.

En conclusión, la pena definitiva a imponer a Ruth Angélica López Gil, será de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN, MULTA DE CIENTO SEIS (106) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** y **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS**, en su condición de coautora penalmente responsable de las conductas punibles ya referidas.

7. MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, según el artículo 63 del Código Penal, deben cumplirse los siguientes requisitos: i) que la pena impuesta no sea superior a cuatro

[1] **Artículo 31. Concurso de conductas punibles:** "El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas"

(4) años, ii) que la persona condenada carezca de antecedentes penales, iii) que no se trate de los delitos contemplados en el inciso segundo del artículo 68 A del Código Penal y iv) que en el evento de que existan antecedentes penales, las condiciones personales, sociales y familiares del sentenciado aconsejen que no existe necesidad de ejecutar la pena en establecimiento carcelario.

Entonces, a pesar que algunos de los requisitos los satisface la procesada, lo cierto es que el requisito objetivo concerniente a que la pena de prisión no debe superar los 4 años acá no se satisface, razón por la cual no es procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Por otro lado, para otorgar la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, a la luz del art. 38B del C.P., los requisitos por cumplir consisten en que, i) la pena mínima de la conducta punible no sea superior a 8 años; ii) no se trate de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A del C.P.; iii) se demuestre arraigo social y familiar del condenado y; iv) se garantice mediante caución el cumplimiento de ciertas obligaciones.

En el presente, ninguno de los delitos por los que se está condenando a Ruth Angélica López Gil contemplan una pena mínima superior a ocho (8) años como rasero máximo de índole objetivo para su concesión y; tampoco se trata de uno de los delitos contenidos en el artículo 68 A del C.P., razones por las que se puede superar el análisis del requisito objetivo.

Frente al arraigo familiar, encontramos que la defensa aportó un contrato de arrendamiento de vivienda urbana del 1º de mayo de 2020, suscrito por Clara Aponte Rivera con C.C. 41.561.570 en calidad de arrendadora y Ruth Angélica López Gil con C.C. 52.406.781 en calidad de arrendataria, del inmueble ubicado en la **Calle 36 H sur 6 B 39 este** de esta ciudad, por lo que el Despacho encuentra demostrado este requisito subjetivo.

Así las cosas, la sustitución de la pena por prisión domiciliaria es procedente en el caso concreto en favor de Ruth Angélica López Gil, previa suscripción del acta de compromiso y otorgamiento de caución prendaria por el equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente, la cual puede estar garantizada mediante póliza, que debe presentar mediante título judicial ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C.

Adicionalmente, se le hace saber que la comisión de una nueva conducta delictiva, el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, o el hecho de no acudir a suscribir la diligencia de compromiso dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del fallo, conllevará a la revocatoria del sustituto y en ese evento deberá cumplir la sanción que aquí corresponde de manera intramural en el establecimiento de reclusión que para ese efecto disponga el INPEC, por conducto del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

8. OTRAS DETERMINACIONES

En firme el fallo se comunicará del proferimiento de esta sentencia a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal y luego se remitirá el expediente ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital por competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 459 de la Ley 906 de 2004.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTITRÉS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PENALMENTE RESPONSABLE y como consecuencia de ello **CONDENAR** a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.406.781 de Bogotá, como **COAUTORA** de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo, a las penas principales de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE CIENTO SEIS (106) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL** a la pena accesoria de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS**.

TERCERO: NEGAR a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL** el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

CUARTO: **CONCEDER** a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL**, la sustitución de prisión domiciliaria de la pena de prisión que deberá cumplirla en la **Calle 36 H sur 6 B 39 este** de esta ciudad, la procesada deberá suscribir acta de compromiso y otorgamiento de caución prendaria por el equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente, la cual puede estar garantizada mediante póliza, que debe presentar mediante título judicial ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C.

QUINTO: ORDENAR que, por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, **SE OFICIE** a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá

Zona Centro, para que se disponga**:**

1. La cancelación de la anotación No. 13 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905.

2. La cancelación de la anotación No. 1 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734. Se aclare que, en tanto Ruth Angélica López Gil no fue propietaria legítima del inmueble en cuestión, la cancelación de esta anotación deja también sin efecto las anotaciones número 2 y subsiguientes, correspondientes a la compraventa del inmueble a favor de Jorge Ricardo Angulo Virachara, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

SEXTO: DAR CUMPLIMIENTO al acápite otras determinaciones.

En firme el fallo se comunicará del proferimiento de esta sentencia a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal y luego se remitirá el expediente ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital por competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 459 de la Ley 906 de 2004.

SÉPTIMO: Las partes quedan notificadas de esta decisión en estrados y contra la misma procede el recurso de apelación, que deberá interponerse en el acto y sustentarse de manera inmediata, o por escrito, dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Sandra Janneth Lugo Castro
Juez
Juzgado De Circuito
Penal 023 Función De Conocimiento
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3287115aa28abd34cac800451340dcf26198bcb926abdeca0c563abd4cc8a00f**
Documento generado en 08/05/2023 03:39:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CRUZ MIRANDA RV: SUSTENTACIÒN RECURSO DE APELACIÒN Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 8/08/2023 4:24 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (758 KB)

Sustentaciòn del Recurso de Apelaciòn TSB.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CRUZ MIRANDA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: nadia rubi martinez <nrubi1974@hotmail.com>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 16:18
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Alejandro Acosta <alejandroacostagutierrez@gmail.com>; lealarse@gmail.com <lealarse@gmail.com>; gabrielcastrocuellar@yahoo.es <gabrielcastrocuellar@yahoo.es>; mateolaminco@gmail.com <mateolaminco@gmail.com>; WBECERRA@ALIANZA.COM.CO <wbecerra@alianza.com.co>; INVER DAZA G <inverdazag@yahoo.com>; Luz D <luce019@hotmail.com>
Asunto: SUSTENTACIÒN RECURSO DE APELACIÒN Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01

Doctora
MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
E. S. D.

REF: PROCESO DECLARATIVO VERBAL
DEMANDANTE: JUAN CARLOS DAZA GAITÁN
DEMANDADOS: CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ WALTEROS Y OTROS
RADICADO: Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

NADIA RUBI MARTÍNEZ, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.150.037 y T. P. No. 93.548 del C. S. de la Judicatura, actuando como apoderada de la parte actora, de manera respetuosa y oportuna, en atención a lo previsto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 y lo dispuesto por su Despacho en proveído calendado 28 de julio de 2023, notificado por estado de 31 de julio del año en curso, me permito adjuntar la Sustentación al Recurso de Apelación en el proceso de la referencia.

Respetuosamente,

NADIA RUBI MARTINEZ
Apoderada Demandante.

Enviado desde Outlook

Doctora
MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
MAGISTRADA
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
E. S. D.

REF: PROCESO DECLARATIVO VERBAL
DEMANDANTE: JUAN CARLOS DAZA GAITÁN
DEMANDADOS: CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ WALTEROS Y OTROS
RADICADO: Expediente No. 11001 31 03 043 2018 00239 01
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

NADIA RUBI MARTÍNEZ, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.150.037 y T. P. No. 93.548 del C. S. de la J., actuando como apoderada de la parte actora, de manera respetuosa y oportuna, en atención a lo previsto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 y lo dispuesto por su Despacho en proveído calendado 28 de julio de 2023, notificado por estado de 31 de julio del año que avanza, presento a su Despacho la sustentación del recurso de apelación propuesto contra la sentencia anticipada calendada agosto 24 de 2022 proferida por el Juzgado 43 Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso de la referencia.

Como prolegómeno de este puntal valga anotar que el predio objeto del proceso estuvo en posesión y tenencia del señor Álvaro Román Ignacio de Jesús Daza González (QEPD) hasta el momento de su fallecimiento y, posteriormente, de sus herederos hasta cuando la Fiscalía General de la Nación en investigación propuesta y adelantada justamente por los verdaderos propietarios se ordenó, en discutida decisión, el 1° de octubre de 2014, la entrega al presunto comprador Gabriel Castro Cuellar, quien se abstuvo de iniciar la correspondiente acción civil para obtener la transferencia material del bien raíz.

Hecho relevante que se destaca para enfáticamente afirmar que el real dominus, una vez se enteró de la “estafa” de la cual había sido víctima acudió a la jurisdicción y a los entes administrativos [por la pérdida en la Notaría del falso poder que sirvió para consolidar la defraudación del patrimonio del señor Daza González], actuar del cual lógicamente se infiere, para los efectos del asunto debatido, que jamás hubo abandono del derecho, por el contrario, desplegó una ingente “lucha” para rescatar la propiedad jurídica de su inmueble.

Su confianza en la justicia penal, presentó dos denuncias, se evidencia en el material probatorio allegado al plenario.

A su fallecimiento, sus herederos, una vez se enteraron de la problemática, de la cual no tenían conocimiento por residir en el extranjero, procedieron a ejercer las acciones correspondientes en defensa de la masa sucesoral, porque, valga decirlo, encontraron varias demandas infundadas, basadas en documentos no atribuibles a su progenitor, a más del conflicto por el bien raíz cuya propiedad aquí se debate y que, como antecedentemente se anotara, se encontraba bajo el señorío de Álvaro Román Ignacio Daza González (QEPD), para lo cual, entre otras, adelantaron conversaciones con los aquí demandados, sin lograr un acuerdo, razón por la cual se propuso esta demanda, contexto que inequívocamente conduce a señalar que nunca ha existido el abandono que reclama la prescripción para su prosperidad.

Ahora bien, como se expusiera al interponer el recurso de alzada, la prescripción extintiva de las acciones pretende dar certeza a las relaciones jurídicas, pero

también se ha visto en ella una presunción de abandono o renuncia al derecho, regulación que tiende a solucionar las diferencias de manera razonable y justa.

Con esa finalidad, no puede olvidarse que el proceso está concebido para garantizar los derechos sustanciales y que corresponde a la función judicial administrar justicia, que no fundar su decisión en la ocurrencia de "devenires del proceso" ajenos a la parte y por ese camino quebrantar su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia para, en cambio, brindar protección a quienes no han acomodado sus actuaciones a la ley.

Como emerge de las pruebas y de las constancias procesales jamás existió abandono, renuncia o situación similar en punto al derecho de la parte actora, por el contrario, de manera constante se ha acudido en demanda de una tutela judicial efectiva para el mismo, lo que de suyo evita que se consolide la institución de la prescripción extintiva y se imponga al titular del derecho la sanción de su pérdida.

En este evento es lo cierto que antes del tiempo fijado por la ley se introdujo a la jurisdicción civil la correspondiente demanda, lo que traduce la vigencia del derecho subjetivo que sostiene la acción. Los artículos 2512 y 2535 del Código Civil exigen para que se configure esta figura que no se haya ejercido la acción correspondiente durante el lapso de tiempo legal concedido con ese efecto, hipótesis legal que no tiene presencia en este litigio.

Presentada oportunamente la demanda, la parte actora actuó diligentemente y realizó todos los actos procesales que le correspondían, es decir, cumplió con las cargas que eran de su resorte, de donde como lo han sostenido las Altas Cortes la negligencia, retardos, etc. en que incurra el juzgado no le son atribuibles y por ende no pueden ser el origen o la causa de la declaratoria de la prescripción.

De las constancias procesales emerge, sin hesitación, que el extremo activo se condujo acuciosamente y efectuó pronta y eficazmente las actuaciones necesarias para realizar las notificaciones al extremo pasivo, sólo que ante la imposibilidad de conseguir a CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ WALTEROS, quien torticeramente se desapareció para los efectos del proceso, correspondió acudir a la figura del curador ad-litem, cuyo nombramiento y aceptación escapan a la labor que debe desplegar la parte interesada y la "demora" en la intimación de éste, atribuible a la función judicial y a las personas designadas por el juez, es el origen de la prescripción declarada por el a-quo, contexto que es ajeno a las exigencias requeridas para que opere esta figura y por ende de la pena que ésta conlleva, cual es la pérdida del derecho.

Viene, entonces, que la sentencia que se apela no solo efectúa una indebida interpretación de las circunstancias que originaron la tardanza en la notificación al curador ad-litem de uno de los demandados, sino que desconoce jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

Así se reconoció en la sentencia SC5755-2014 (M.P. Ariel Salazar Ramírez), entre otras, en la cual se expuso:

"Partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad imposibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la inteligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de ésta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio a que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de

paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiando al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas éstas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad. (…)

"La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse oportunamente, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausentan del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación." (SC de 19 de noviembre de 1976)

La Corte Constitucional en sentencia C-666 de 1996 al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la no interrupción de la prescripción prevista en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, la condicionó para que constitucionalmente fuera admisible, a que *"(…) únicamente en el entendido de que la ineficacia de la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad, en su caso (…) provenga de hechos o de causas imputables al demandante (…)".* En el mismo sentido, por ejemplo, se encuentra la sentencia C-227 de 2009, entre otras. (Se resaltó)

Siguiendo la jurisprudencia y la ley resulta que en este preciso evento no tiene cabida la prescripción extintiva declara por el juzgado en la sentencia anticipada apelada, por lo que debe ser revocada.

Igualmente desconoce el fallador constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en punto al momento a partir del cual debe empezar el conteo del término prescriptivo tratándose de la acción ejercida por un heredero, sin que al respecto se esboce argumento alguno para tal determinación, en tanto que la alusión que efectúa a que el señor Álvaro Román Daza González tuvo conocimiento de los hechos "a tan sólo 5 días de la inscripción del documento público en el registro inmobiliario", citando también la denuncia que por estos hechos, en su momento, aquél formuló, no es pertinente en tanto que no corresponde a quien ejerce la acción en su calidad de heredero y presentó la correspondiente demanda.

Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

"*la Corte tiene definido que cuando la acción de simulación corresponde al heredero o cónyuge sobreviviente, es decir, cuando se inicia por las consecuencias directas*

para ellos, por afectar la masa social o de la herencia, el fallecimiento del causante hace que estos adquieran, desde ese momento, iure proprio-la legitimación para actuar- y el término prescriptivo contará desde ahí. (CSJ, S. Civil, Sent. 119972016, ago. 29/16, entre muchas otras).

"Se explica que, como se había indicado desde 1955 y reiterado en sentencia del 20 de octubre de 1959, "la acción de simulación, cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acción de simulación es requisito

indispensable la existencia de un interés jurídico en el actor. Es la aparición de tal interés lo que determina la acción de prevalencia. Mientras él no exista, la acción no es viable. De consiguiente, el término de la prescripción extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el interés jurídico del actor. Sólo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 2535 del C. C". (Negrilla fuera del texto)

"Así tratándose de una compraventa simulada, el interés del vendedor aparente, para destruir los efectos del contrato ostensible cuando el comprador aparente pretende que tal contrato es real y no fingido, desconociendo la eficacia de la contraestipulación, nace sólo a partir de este agravio a su derecho, necesitado de tutela jurídica".

"La Sala entiende que "es más acorde con la justicia considerar que mientras esté vigente el pacto simulatorio entre las partes, no puede empezar a correr la prescripción y, por consiguiente, la exigibilidad que demarca el hito para ese efecto, conforme al art. 2535 del C.C., solo puede surgir desde el momento en que una de las partes, o sus herederos, desconoce el pacto. En otros términos, mientras el 'deudor' en la simulación, esto es, quien tiene el derecho objeto del negocio oculto, no desconozca los atributos del otro contratante, éste no estaría compelido a 'obrar' con el inicio de la acción simulatoria, y por eso mismo, en el entretanto no podría contarse el término de la prescripción extintiva. Sólo desde el alzamiento en rebeldía del deudor, podría iniciarse el fatal plazo prescriptivo".

Cabe anotar que para cuando sucedieron los hechos que sirven de fundamento a la demanda el ahora actor vivía en el extranjero y por razones familiares sólo vino a tener conocimiento de las mismas hasta el año 2015, oportunidad a partir de la cual ha tenido que sostener diferentes procesos, varios de ellos sin justificación alguna, todos dirigidos a proteger los bienes integrantes de la masa sucesoral del señor Álvaro Román Daza, de la cual se han querido "apoderar" terceros, privando del justo derecho que le asiste a sus sucesores.

Finalmente, y a pesar de los innumerables esfuerzos para que la Fiscalía General de la Nación realizara una idónea y seria investigación, prescribieron los delitos por los cuales curso la investigación, quedando la vía civil como única alternativa para hacer justicia y que mis representados nos sean despojados de los bienes que les pertenece al ser los verdaderos titulares de derecho de propiedad del inmueble que es objeto de este litigio.

En conclusión en este litigio no se satisfacen las exigencias legales, ni de justicia y equidad, para declarar próspera la excepción de prescripción, como tampoco se atiende a los principios de buena fe y lealtad procesal que deben gobernar las actuaciones procesales.

De la Señora Magistrada,



NADIA RUBI MARTINEZ

C.C. No. 52.150.037 de Bogotá

T.P. No. 93.548 C.S. de la Judicatura

Anexo: Sentencia condenatoria del 8 de mayo de 2023 Rad. 252866000000201900005-NI 361608 contra Ruth Angelica López Gil, `relacionada con uno de los procesos penales que buscaban dejar sin patrimonio a los herederos del señor Alvarado Daza González.

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CUI: **252866000000201900005 – NI 361608**
Procesada: **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL**
Delito: **Falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso y fraude procesal**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a dictar la sentencia condenatoria anunciada contra Ruth Angélica López Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.406.781 de Bogotá, en calidad de coautora de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso y fraude procesal, en virtud del preacuerdo celebrado por las partes y aprobado por este Despacho.

2. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Según la fiscalía, el 1º de abril de 2016, a través de apoderado, el ciudadano Juan Carlos Daza Gaitán solicitó se investiguen las conductas punibles adelantadas sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, propiedad de su progenitor Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González (QEPD), porque en el certificado de tradición aparecen diferentes anotaciones que dan cuenta que mediante sentencias de pertenencia ese predio fue adjudicado a Henry Díaz Cárdenas, Ruth Angélica López Gil, Alba Marina Gamboa Rojas y Pablo León Castañeda, demandas que tachó de falsas por cuanto en los Juzgados no aparecen radicadas esas demandas, los números de radicados no correspondían a la numeración que utilizaban, así como tampoco el nombre del Juez correspondía al que ejercía el cargo.

Se estableció que en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, en la anotación No. 13 aparece inscrita la adjudicación mediante proceso de pertenencia adelantado en el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, a favor de Ruth Angélica López Gil, respecto de un área de terreno de 3815 m^2. Hechas las verificaciones ante el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá se pudo establecer que el proceso en donde se declaró la adjudicación, la demanda no fue radicada, por lo tanto, la sentencia que se radicó en la oficina de registro de instrumentos públicos- zona centro, es falsa.

Mediante escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, Ruth Angélica López Gil enajenó el terreno a Jorge Ricardo Angulo Valencia, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PROCESADA

Ruth Angélica López Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.406.781 de Bogotá, nacida en la misma ciudad el 12 de octubre de 1971, su plena identidad quedó establecida en el informe sobre consulta web de la Registraduría nacional del Estado Civil- Dirección Nacional de Identificación.

4. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

El 20 de junio de 2019, ante el Juzgado 3° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se formuló imputación a Ruth Angélica López Gil en calidad de presunta coautora de los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y estafa con circunstancias de agravación, tipificadas en los artículos 246, 267 -1, 287, 288, 289 y 453 del Código Penal, cargos que no fueron aceptados en dicha oportunidad.

Radicado el escrito de acusación, el asunto fue asignado por reparto a este Despacho Judicial. La audiencia de formulación de acusación se efectuó el 28 de abril de 2021, la Fiscalía acusó formalmente a Ruth Angélica López Gil como presunta coautora de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo (artículos 287, 288, 289 y 453 del Código Penal).

Citadas las partes para celebración de audiencia preparatoria el 19 de agosto de 2022, las partes solicitaron la variación del sentido de esta para socializar un preacuerdo. La negociación consistió en que la procesada aceptaba los cargos que le fueron imputados a título coautora y, a cambio, se le concedería como único beneficio, para efectos únicamente de la tasación de la pena, la imposición de la pena correspondiente a la de cómplice.

Ese mismo día, el Despacho constató que la acusada entendía, comprendía y aceptaba el acuerdo y las consecuencias de la aceptación de responsabilidad penal de manera libre, consciente y voluntaria, previamente asesorado de su abogado de confianza. No obstante, debido al gran volumen de archivos trasladados por la Fiscalía, el Despacho suspendió la diligencia a efectos de verificar si el ente acusador contaba con las pruebas mínimas para desvirtuar la presunción de inocencia de la procesada.

El 15 de noviembre de 202, luego de hacer la respectiva verificación de prueba mínima, se impartió legalidad a la negociación y se anunció sentido del fallo de carácter condenatorio, por lo que se

procedió a correr traslado de lo dispuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.

La Fiscalía. - solicitó se imponga la pena mínima, dado que la procesada no cuenta con antecedentes penales. Respecto a los subrogados penales, peticionó se estudie la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria porque la acusada ostenta la condición de madre cabeza de familia, además, porque el *quantum* de la pena no superaría los 8 años de prisión.

Igualmente, con fundamento en los artículos 22 y 101 del Código de Procedimiento Penal, peticionó la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente contenidos en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905, concretamente la anotación No. 13, y la cancelación o cierre del folio de matrícula inmobiliaria abierto con base en la inscripción de la falsa sentencia con la que la procesada se adjudicó el inmueble 50C-1928734.

La representación de víctimas. - solicitó la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente, además la notificación de la sentencia a la oficina de registro e instrumentos púbicos zona centro. Respecto al *quantum* punitivo lo dejo a consideración del despacho y la forma en cómo se cumplirá la respectiva pena.

La defensa. - solicitó partir de la pena mínima a imponer. Indicó, su representada está a cargo de una hija menor de edad “con discapacidades”. Peticionó que se conceda la prisión domiciliaria, con base en el artículo 38 B, por cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos, tales como la carencia de antecedentes penales y el *quantum* de la pena no superaría los 8 años de prisión; asimismo los delitos por los cuales se emite condena, no se encuentran en la prohibición del artículo 68 A del Código Penal.

Posteriormente, en Auto de fecha 19 de enero de 2023, este Juzgado decretó la nulidad de lo actuado, desde la audiencia celebrada el 19 de agosto de 2022, en donde se verbalizó el preacuerdo, tras considerar que los terceros de buena fe, Jorge Ricardo Ángulo Viracachá, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez, a quienes Ruth Angélica López Gil transfirió el derecho del dominio mediante compraventa conforme la anotación No.2 con fecha del 18 de marzo de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734, debían ser citados para que se enteraran del trámite procesal adelantado en relación con el inmueble que adquirieron de buena fe, pero que estaba viciado de irregularidades por ser fruto de varios delitos y pudieran hacer valer sus derechos y fueran escuchados. Esta decisión fue recurrida por la delegada de la Fiscalía.

Después, mediante Auto del 7 de marzo de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., revocó el precitado Auto del 19 de enero de 2023 y, en su lugar, ordenó proferir la sentencia respectiva con base en el preacuerdo que aprobó el 15 de noviembre de 2022, en razón de que “el restablecimiento del derecho procede en favor de la víctima y para que esta y los terceros con

interés puedan debatir la responsabilidad civil derivada del delito, en el incidente de reparación integral o ante la jurisdicción ordinaria civil, la sentencia condenatoria debe estar ejecutoriada. Por este motivo, resulta incluso más beneficioso que se defina cuanto antes la responsabilidad penal de Ruth Angélica".

5. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

5.1. Competencia

Este despacho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36-2 y 43 de la Ley 906 de 2004, es competente para emitir el presente fallo, dado el lugar de ocurrencia de los hechos y el delito por el que se formuló acusación.

5.2. Fundamentación fáctica jurídica y probatoria.

El artículo 250 de la Constitución Política, establece en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal, sentó las bases para la constitución del rito procesal que, más adelante fue instituido por la Ley 906 de 2004, el cual se caracteriza por ser un sistema mixto con tendencia acusatoria que, con influencias importantes de la doctrina y jurisprudencia anglosajona, incorporó algunas bases de la llamada justicia premial.

Normativamente, los preacuerdos y las negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, tienen su origen en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004. Este artículo, junto con el 349, autorizan la celebración de los preacuerdos siempre que se cumpla con alguna de las finalidades allí previstas y toda vez que se cumplan con una serie de parámetros mínimos, a saber: (i) que se respete el núcleo fáctico de la imputación; (ii) que se observen las pautas trazadas en las directivas de la Fiscalía General de la Nación como política criminal y (iii) que reintegre, por lo menos, el 50% del incremento patrimonial percibido como consecuencia del delito.

En la finalidad de obtener pronta y cumplida justicia, se debe tener en cuenta que los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, cumplidos bajo los parámetros de seriedad, rectitud y justicia, siempre contribuyen de manera eficaz a la evitación del adelantamiento de procesos penales con dilaciones indebidas.

Es importante tener en cuenta que, el acuerdo de voluntades, por supuesto, debe ser libre, consciente y debidamente informado, y supondrá la declaración de responsabilidad respecto del delito por el que se le investiga, a cambio de que el ente acusador elimine de la acusación un tipo penal o circunstancia de mayor punibilidad o de agravación, modifique la adecuación típica con miras a disminuir la pena u otorgue un descuento punitivo sobre la sanción a imponer.

No obstante lo anterior, en atención a lo consagrado en los artículos 7° y 381 del Código de Procedimiento Penal, esta sentencia siendo condenatoria, debe cumplir con el examen de responsabilidad que el recaudo probatorio arroje, con el fin de arribar al conocimiento más allá de duda razonable, sobre la existencia del delito y la responsabilidad del encartado. Además, el artículo 9º de la Ley 599 de 2000 consagra que para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable.

En la medida que los preacuerdos no pueden afectar la presunción de inocencia, es preciso contar con la evidencia suficiente para respaldar una inferencia razonable de autoría o participación. Al plantear el preacuerdo celebrado con su contraparte, el delegado del ente de persecución penal puso de presente los siguientes elementos materiales probatorios, con los cuales habría acreditado su pretensión punitiva en el evento de haber llegado a juicio:

1. Denuncia instaurada (y anexos) por Nadia Rubí Martínez apoderada judicial de Juan Carlos Daza Gaitán, del 01 de abril de 2016.
2. Poder de Juan Carlos Daza Gaitán otorgado a Nadia Rubí Martínez.
3. Auto del 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de Notariado y Registro “por medio del cual se inicia una actuación administrativa en virtud de la instrucción No. 11 de 30 de julio de 2015…”, firmado por la registradora principal Janeth Cecilia Díaz Cervantes y el coordinador del grupo de gestión jurídica registral Camilo Andrés Antolínez Flórez.
4. Poder especial de Juan Carlos Daza Gaitán otorgado a Nelson Alberto Barrera González y Jenny Johana Raigoso Díaz, para actuar dentro del proceso de sucesión con radicado 11001311000201400566 9, ante el Juzgado 2° de Familia del Circuito de Bogotá.
5. Registro Civil de Nacimiento de Juan Carlos Daza Gaitán hijo de Álvaro Daza González y Lucrecia Gaitán, de la Notaría Octava del Círculo de Bogotá.
6. Memorial dirigido al Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., donde allega documentación solicitada, firmado por Nelson Barrera González.
7. Respuesta a derecho de petición proferida por el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., del 21 de junio de 2016, en donde asegura que “no se cursó acción de pertenencia adelantada por Alba Marina Gamboa Rojas, contra Pablo León Castañeda, en relación con el inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-301905, y que la sentencia dictada dentro del citado inexistente trámite, fechada 30 de julio de 2015, no fue proferida por este Despacho”, firmado por la Juez Jenny Carolina Martínez Rueda.
8. Respuesta a petición de la Superintendencia de Notariado y Registro proferida por el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., del 14 de abril de 2016, en donde asegura que “no se avizora sentencia de pertenencia alguna… decisión de tal especie adiada junio 30 de 2015” firmado por la Juez Jenny Carolina Martínez Rueda.
9. Reporte de declaraciones y pagos del impuesto predial unificado cancelados por Álvaro Daza

González desde el año 1994 hasta el año 2010.

10. Recibo de pago de valorización por beneficio general de la Alcaldía de Bogotá de febrero de 2016, del inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 a nombre de Álvaro Ramón Daza González, el cual se encuentra en mora con 12 cuotas pendientes con deuda total de $42.359.600.
11. Certificado de tradición y libertad, del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905.
12. Escritura pública No. 1130 del 1° de junio de 1985, de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá D.C.
13. Copia de 5 contratos de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá, a nombre de Álvaro Daza González.
14. Registro Civil de defunción de Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González del 26 de agosto de 2010.
15. Certificado de tradición y libertad, del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1931094.
16. Certificado de crédito aprobado a Alba Marina Gamboa Rojas, firmado por Julio Cesar Aguirre Cabrera.
17. Escritura pública No. 1708 del 28 de julio de 2015, de la Notaría 20 de Bogotá, suscrita por Alba Marina Gamboa Rojas y Julio César Aguirre Cabrera, sobre el inmueble identificado con matricula inmobiliaria 50C-1931094, ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá.
18. Certificado de tradición y libertad, del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734.
19. Constancia del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, del 22 de septiembre 2015, donde indica, entre otras cosas, que en ese Juzgado no se llevó acabo proceso de pertenencia No. 11001400302637412007-2007 de Alba Marina Gamboa Rojas en contra de Álvaro Ignacio Ramón Daza González y demás personas determinadas, además el CUI correcto del Juzgado es el 110014003024; que la sentencia está firmada por Hugo Carmelo Ortiz Clavijo, quien fue titular de ese Juzgado pero falleció el 16 de abril de 2013.
20. Sentencia del 28 de enero de 2015, del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso “Ordinario Pertenencia” No. 374120007-2007, demandante: Alba Marina Gamboa Rojas, demandado: herederos indeterminados de Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González.
21. Constancia del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, del 29 de enero de 2015.
22. Edicto del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 11001400302637412007-2007 “ordinario de pertenencia”, del 5 de enero de 2019.
23. Oficio No. 0111 del 29 de enero de 2015 del Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 11001400302637412007-2007 “ordinario de pertenencia”.
24. Informe de investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 30 de marzo de 2017, en donde se realiza interrogatorio a Alba Marina Gamboa Rojas y Pablo León Castañeda, firmado por la investigadora Rosalba Arguello García.

25. Acta de comparecencia a audiencia de conciliación No. 2273-2010, del 29 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Inspecciones de la Alcaldía Local de Fontibón.
26. Copia de servicio público domiciliario de "Codensa", de noviembre de 2003, del inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 22-95.
27. Copia del impuesto predial unificado del año 2016, del predio ubicado en la Carrera 120 No. 22-85, a nombre de Alba Marina Gamboa Rojas.
28. Consulta de procesos de la Rama Judicial del radicado No 11001310300220140035200.
29. Poder otorgado por Pablo León Castañeda y Alba María Gamboa Rojas al abogado Santiago Lema Cortés.
30. Contrato de arrendamiento del 24 de marzo de 2004, celebrado entre Pablo León Castañeda y Alba María Gamboa Rojas (arrendatarios) y Álvaro Ramón Daza González (arrendador), sobre el lote de terreno ubicado en la Carrera 120 No. 22-85, interior 5, de Bogotá D.C.
31. Interrogatorio de indiciado FPJ-27, del 16 de marzo de 2017, en donde se interroga a Pablo León Castañeda, firmado por Rosalba Arguello García.
32. Interrogatorio de indiciado FPJ-27, del 16 de marzo de 2017, en donde se interroga a Alba María Gamboa Rojas, firmado por Rosalba Arguello García.
33. Informe investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 24 de julio de 2017, en donde, entre otras cosas, se solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil la tarjeta decadactilar de (entre otros) Ruth Angélica López Gil; recolección de documentos originales entregados a la oficina que dieron origen a las anotaciones No 12, 13, 14 y 15 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, firmado por Rosalba Arguello García.
34. Informe investigador de laboratorio FPJ-13 y anexos, del 10 de julio de 2017, en donde se solicita establecer la uniprocedencia de las huellas dactilares de Pablo León Castañeda, Alba María Gamboa Rojas y Luis Fernando Tello González que obran en la escritura pública No. 7051 del 31 de octubre de 2014 de la Notaría 9° del Círculo de Bogotá y, la uniprocedencia de la huella dactilar de Henry Díaz Cárdenas, firmado por Sthefanie Andrea Cañon Cifuentes.
35. Escritura No. 7051 del 31 de octubre de 2014, de la Notaría 9° de Bogotá D.C., donde aparece como vendedor Henry Díaz Cárdenas y como compradores Pablo León Castañeda y Alba María Gamboa Rojas, del inmueble ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá, de la superficie de 2410 m^2.
36. Oficio No. SD-134-17, de la Notaría 20 de Bogotá D.C., del 26 de mayo de 2017, donde envía copia de la escritura pública No. 1708 del 28 de febrero de 2015.
37. Escritura pública No. 1708 del 28 de julio de 2015, en donde se eleva a escritura pública "constitución de hipoteca abierta sin límite de cuantía" al lote de terreno junto con las mejoras ubicado en la Carrera 120 No. 17-85 de Bogotá, con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1931094, por Alba Marina Gamboa Rojas a Julio César Aguirre Cabrera.
38. Informe investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 04 de junio de 2019, en donde se solicita estudio para establecer las huellas dactilares de quienes suscriben la escritura pública No. 1182 del 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9° de Bogotá, de, entre otras personas,

Ruth Angélica López Gil, firmado por Rosalba Arguello García.

39. Informe de investigador de laboratorio FPJ-13 y anexos, del 14 de mayo de 2019, en donde se realiza el cotejo dactilar de las huellas dactilares de quienes suscriben la escritura pública No. 1182 del 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9° de Bogotá, de, entre otras personas, Ruth Angélica López Gil.
40. Escritura Pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015, de la Notaría 9° de Bogotá, en donde se relaciona a Ruth Angélica López Gil como vendedora y a Jorge Ricardo Angulo Viracacha, José Ignacio Parra Rodríguez y Wilmar González Aldana.
41. Oficio dirigido al registrador de instrumentos públicos zona centro, del 20 de junio de 2016, en donde se solicita informar el nombre y documento de identidad de los funcionarios que ordenaron las anotaciones 12, 13, 14 y 15 dentro del folio con matricula inmobiliaria 50C-301905, firmado por Rosalba Arguello García.
42. Oficio del 6 de marzo de 2017 y anexos, en donde se da contestación al oficio del 20 de junio de 2016, firmado por la directora de Talento Humano Lina Marcela Mejía Álvarez.
43. Acta de inspección a lugares FPJ-9 del 14 de junio de 2017, en donde se recolectan documentos pendientes dentro de la Matricula Inmobiliaria 50C-301905, firmado por Rosalba Arguello García.
44. Sentencia del 21 de febrero de 2014, proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, con No. 40801-2004, dentro del asunto “ordinario de pertenencia”.
45. Oficio No. 1374 del 29 de abril de 2014, del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá D.C., en donde indica que ese Despacho mediante sentencia de pertenencia de esa misma fecha proferida dentro del radicado 110014003050006-2006, de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ignacio Ramón Daza González y demás personas indeterminadas, firmado por Diana Carolina Mejía Peña (secretaria).
46. Sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá D.C., dentro del radicado 110014003050006-2006, de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ignacio Ramón Daza González y demás personas indeterminadas, suscrita por el Juez Marco Antonio Álvarez Gómez.
47. Certificado del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, del 23 de enero de 2017, en donde aclaró que allí no se adelantó proceso de pertenencia con radicado 50006-2006, sobre el área parcial de 3815m^2 de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ramón Daza González, respecto al inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-301905 y “en lo que tiene que ver con el radicado, no corresponde al código designado al Juzgado 50 Civil Municipal (…) la señora DIANA CAROLINA MEJÍA PEÑA, en ningún momento ha ejercido el cargo de secretaria de este Estrado Judicial”. firmado por el secretario Duván Alexis Espitia Ramírez.
48. Informe investigador de campo FPJ-11 y anexos, del 04 de junio de 2019, en donde se solicitó a perito en lofoscopia para establecer las huellas dactilares de quienes suscriben escritura pública 1182 del 5 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9° de Bogotá, frente a las huellas dactilares en las tarjetas decadactilares de Ruth Angélica López Gil, Jorge Ricardo Ángulo

Viracacha, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez, firmado por Rosalba Arguello García.

49. Informe investigador de laboratorio FPJ-13, del 14 de mayo de 2019, en donde se realiza el cotejo en lofoscopia y se establece la uniprocedencia de las impresiones dactilares, firmado por Rafael Alberto Mejía Gross.
50. Escritura Pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015 de la Notaría 9° del Círculo de Bogotá, en donde se protocoliza la compraventa realizada por Ruth Angélica López Gil (vendedora) y Jorge Ricardo Angulo Viracacha, José Ignacio Parra Rodríguez y Wilmar González Aldana (compradores).

Entonces, analizado ese conjunto probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, se concluye que Ruth Angélica López Gil, con una sentencia de pertenencia falsa, supuestamente proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 110014003050006-2006, inscribió la anotación No. 13 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, respecto de un área de terreno de 3815 m^2 y; posteriormente, mediante escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015 otorgada en la Notaría 9 del Circulo de Bogotá, Ruth Angélica López Gil enajenó el terreno a los ciudadanos Jorge Ricardo Angulo Valencia, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

Siendo ello así, se tiene que el comportamiento se tipifica en el delito de falsedad material en documento público cuando Ruth Angélica López Gil, en compañía de otras personas, con la finalidad de hacerse ilícitamente del derecho de dominio del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, falsificó la sentencia de pertenencia presuntamente dictada por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, según la anotación No. 13.

Además, la falsedad en documento privado se configuró cuando la procesada falsificó un poder para darle apariencia de legalidad a la compraventa del inmueble otorgado presuntamente por el adjudicatario. El delito de obtención de documento público falso, se concretó cuando utilizaron el poder falso ante el Notario 9° de Bogotá, para que éste otorgara la escritura pública No. 7051 de 2014 y; cuando enajenó la cuota parte del terreno consistente en 3815 m^2 a Jorge Ricardo Viracacha, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez, mediante escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015.

Finalmente, el delito de fraude procesal se tipificó cuando, por un lado, solicitaron al registrador de instrumentos públicos de la zona centro de Bogotá la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905 de la falsa declaración de pertenencia parcial de 3815 m^2 a nombre de Ruth Angélica López Gil, concretamente en la anotación No. 13 y; por el otro, cuando le solicitaron al mismo funcionario la inscripción de la escritura pública No. 1182 del 05 de marzo de 2015, obtenida ilícitamente, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734, con base en la anotación No. 13

del folio matriz.

Así las cosas, los comportamientos realizados por Ruth Angélica López Gil, ciertamente se ajustan a los tipificados en los artículos 287, 288, 289 y 453 del Código Penal del Código Penal; además, con esos comportamientos contradijo la prohibición contenida de manera implícita en dicha normativa y, lesiono los bienes jurídicos de la fe pública y eficaz y recta impartición de justicia. Finalmente, no se plantearon situaciones que hubiesen puesto en riesgo la capacidad de esta ciudadana de comprender la ilicitud de su comportamiento y determinarse de conformidad con ese entendimiento.

A lo anterior se agrega que, a través del preacuerdo, Ruth Angélica López Gil aceptó los cargos que le fueron imputados, con ello, además de renunciar a su derecho a la no autoincriminación, lo hizo también al de tener un juicio oral, público, contradictorio y concentrado, en el cual pudiese ofrecer explicaciones alternativas a la hipótesis delictiva de la Fiscalía.

En tanto se cumplieron con los estándares probatorios mínimos para la acreditación del delito, el Despacho no puede formular consideraciones adicionales en este punto, por lo que se reúnen los requisitos para emitir sentencia condenatoria en contra Ruth Angélica López Gil en calidad de coautora de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo; empero, en virtud de la aprobación del preacuerdo celebrado y para efectos de la tasación de la pena, se impondrá la que corresponde a cómplice.

Ahora, el segundo requerimiento de la delegada Fiscal consistió en que se ordene la cancelación de los registros fraudulentos, específicamente la anotación No. 13 del 14 de enero de 2015, dentro del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905, con especificación “declaración judicial de pertenencia parcial 3.815 M2” y; la cancelación del certificado de tradición y libertad del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734 que se originó con base a esa anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905. Debe indicarse que el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal dispone:

> “En cualquier momento, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
>
> En la sentencia se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.”

Bajo esa disposición normativa se entiende que, al Juez de Conocimiento, a través de providencia que ponga fin al proceso penal, le fue asignada competencia para cancelar los títulos y registros

cuando exista ese convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la suspensión del poder dispositivo en cuestión. La Corte Constitucional en sentencia C-060 de 2008 al respecto aclaró:

> "…la Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el "convencimiento más allá de toda duda razonable" sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables…"

Así mismo, la precitada corporación judicial en providencia C-395 de 2019 concluyó:

> "la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente es un instrumento a través del cual se busca garantizar los derechos de las víctimas, principalmente aquellos relacionados con la reparación y el restablecimiento del derecho, mediante la restitución de los bienes que son el objeto material de la conducta al estado anterior a la comisión del delito y evitar que se aumenten los perjuicios causados con el ilícito".

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha indicado de manera insistente que, en casos en los que entren en conflicto los derechos de las víctimas del comportamiento delictivo y los intereses de terceros de buena fe, los primeros deben primar sobre los segundos. Al respecto, dicha corporación en sentencia con radicado 42.317, del 11 de diciembre de 2013, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, que dada su importancia, será citada *in extenso*, precisó respecto a este tópico:

> «En efecto, desde antaño el máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que si bien la Carta Política consagra en su artículo 58 la protección en favor de la propiedad privada, aquella sólo ampara a los bienes y demás derechos adquiridos con justo título y de conformidad las leyes civiles, por tanto "el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos".
>
> En la sentencia C-245 de 1993 que menciona el casacionista, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, que en esa codificación regulaba la medida de cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sobre el tema expuso:
>
> "Desde otro punto de vista, la Carta Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos adquiridos en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles…
> (…)
> Sin duda alguna, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos, y la Constitución no autoriza romper el principio de la proscripción de la causa ilícita de los mismos; por tanto, la ley no puede patrocinar la protección de aquellos títulos, ni la de los registros de aquellos en contra de los derechos del titular, mucho menos cuando se adelanta la actuación de los funcionarios judiciales encargados de poner en movimiento las competencias punitivas del Estado.

Posteriormente, en la sentencia C-060 de 2008 que declaró inexequible el término "condenatoria" del inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, y exequible de manera condicionada la expresión "En la sentencia" de la misma norma, en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se puede adoptar en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal, la Corte Constitucional se refirió nuevamente a la citada facultad como una medida efectiva a fin de lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas al interior del proceso penal.

Expresó en esa ocasión dicha Corporación.

"Pero este cambio normativo implica un inconstitucional retroceso en la protección de los auténticos titulares del derecho, que ha de ser restablecido por mandato de un principio rector del mismo Código de Procedimiento Penal (art. 22 L. 906 de 2004), el cual debe prevalecer y aplicarse obligatoriamente sobre cualquier otra disposición de tal Código (art. 26 ib.), "para hacer cesar los efectos producidos por el delito" y procurar que "las cosas vuelvan al estado anterior" a la perpetración criminosa, de modo que, si ello fuere posible, quede como si no se hubiere atentado contra el respectivo bien jurídico, lo cual debe realizarse "INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL" (no está en mayúsculas ni negrilla en el texto original).

Del contenido de las sentencias citadas, se advierte que el restablecimiento del derecho (i) tiene su fundamento en la Carta Política (art. 250-6); (ii) su consagración legal como principio rector en el procedimiento penal de 2004 (art. 22) no sólo impone su aplicación obligatoria y prevalente sobre cualquier otra norma, sino que además irradia toda la normativa en mención y orienta la interpretación de las disposiciones que la integran; (iii) es intemporal y procede al margen de la responsabilidad penal que se establezca en la actuación; (iv) la cancelación de títulos de propiedad y registros obtenidos fraudulentamente (art. 101 ibídem) es una medida eficaz y adecuada para restablecer el derecho y garantizar la indemnización integral de las víctimas; (v) ésta se debe adoptar en la sentencia o en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal, cuando aparezca demostrado más allá de toda duda razonable el carácter fraudulento de los títulos de propiedad; y, (vi) quienes resultaren afectados por la cancelación de los registros pueden concurrir al proceso penal para hacer valer su derecho, pero de todas formas el justo título que detenten se entenderá desvirtuado "al alcanzarse el 'convencimiento más allá de toda duda razonable' sobre el carácter fraudulento de dichos títulos".
(…)
En ese entendido, demostrada la tipicidad objetiva de la conducta punible que da origen a la expedición de los títulos espurios y que a su vez posibilita la fraudulenta inscripción en el registro, el derecho del tercero a que se mantenga su titularidad sobre determinado bien, desaparece y, por ende, pierde cualquier relevancia frente al que le asiste a la víctima del injusto de que cesen los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, esto es, a como se encontraban antes de cometerse aquél.
(…)
Ahora bien, contrario a lo sostenido por el libelista, la Sala se ha referido en no pocas oportunidades a la tensión que surge entre los derechos de la víctima del delito y los de terceros que resultan afectados patrimonialmente a consecuencia de la medida de restablecimiento del derecho que se concreta, cuando de bienes sometidos a registro se trata, en la cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente, donde de manera consistente y pacífica ha mantenido el criterio según el cual, sin excepción, prevalecen los derechos de aquella sobre los del tercero adquirente de buena fe.

Así en la sentencia con radicación 35675 del 30 de mayo de 2011, dijo:

"A conclusión diferente no puede llegar la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que asumir que le asiste la razón a la casacionista, con el argumento que su representado es tercero adquirente de buena fe y, por lo tanto, debe salvaguardarse su derecho a la propiedad, conduciría a darle efectos al múltiple proceder delincuencial que

precede la adquisición del bien y, más grave aún, a desconocer los derechos de la víctima.

El delito, se reitera, no puede ser fuente válida de derechos en este tipo de eventos, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-245 del 24 de junio de 1993, al declarar la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, el cual consagraba la todavía vigente facultad del instructor de cancelar los registros obtenidos de manera fraudulenta.

Para esa Corporación, la Constitución Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos y bienes que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles, pues, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos.
(…)
Por su importancia frente al tema materia de análisis, conviene citar lo que esta Corporación señaló en la sentencia con radicación 39858 de 21 de noviembre de 2012, en un asunto con similar sustrato fáctico, donde casó parcialmente el fallo impugnado en tanto el ad quem erró al interpretar el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, que en la citada codificación prevé la medida de cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, privilegiando los derechos del tercero adquirente de buena fe frente a los de la víctima del delito, con lo cual desconoció mandatos constitucionales y principios rectores de obligatorio cumplimiento. …Dijo la Corte:

"Ahora bien, no puede la Sala dejar de reconocer que la decisión que afecta el derecho a la propiedad privada de quien adquiere bienes de buena fe, necesariamente genera una tensión irreconciliable entre sus derechos y los de la víctima del injusto, quien tiene a su favor la garantía del restablecimiento del derecho.

Pero en este enfrentamiento correlativo de derechos, esta Corte ha sido del criterio que al ponderarlos se han de preferir los intereses de la víctima sobre los del tercero incidental, pues además de que el delito no puede ser fuente lícita de derechos, es forzoso dar alcance a los principios de justicia y reparación, como se reconoció en los fallos de casación del 30 de mayo de 2011, radicado No. 35.675, y del 16 de enero de 2012, radicado No. 35.438.
(…)
Se concluye, entonces, que el restablecimiento del derecho y, por contera, las medidas que en su aplicación se adopten, como la prevista en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, atendida su consagración constitucional y legal como principio rector del procedimiento penal, (i) es de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo el proceso; (ii) procede su aplicación en cualquier fase de la actuación a condición de que se cumplan las previsiones del citado precepto y las consignadas en la sentencia C-060 de 2008 de la Corte Constitucional; y, (iii) en todos los casos, sin excepción, prima el derecho de la víctima del delito a que se privilegie el título obtenido justamente, sobre el del tercero a que se mantenga un título derivado de un acto fraudulento, sin importar su condición, vale decir, si es de buena o mala fe, exenta o no de culpa.»

Con fundamento en la jurisprudencia citada, aunque en el presente hay personas que razonablemente podrían tener la calidad de terceros de buena fe, lo cierto es que el delito original definió a Juan Carlos Daza Gaitán como víctima, al ser heredero legítimo de Álvaro Ramón Ignacio de Jesús Daza González legítimo propietario del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-301905.

De manera concreta, se estableció que la sentencia de pertenencia, supuestamente proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, dentro del radicado 110014003050006-2006, con la que se

inscribió la anotación No. 13 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-301905, era falsa, conforme el certificado del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, del 23 de enero de 2017, en donde aclaró que allí no se adelantó proceso de pertenencia con radicado 50006-2006, sobre el área parcial de 3815m^2 de Ruth Angélica López Gil en contra de Álvaro Ramón Daza González, respecto al inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-301905 y "en lo que tiene que ver con el radicado, no corresponde al código designado al Juzgado 50 Civil Municipal (…) la señora DIANA CAROLINA MEJÍA PEÑA, en ningún momento ha ejercido el cargo de secretaria de este Estrado Judicial". De ahí que, desde el punto de vista objetivo, el título traslaticio de dominio (sentencia judicial), en efecto, fue fraudulento.

Así las cosas, se accederá a petición de la delegada fiscal y, en consecuencia, se ordenará que por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, se oficie a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, para que se disponga la cancelación de**: i)** la anotación No. 13 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905 y; **ii)** la cancelación de la anotación No. 1 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734. Se aclara, en tanto Ruth Angélica López Gil no fue propietaria legítima del inmueble en cuestión, la cancelación de esta anotación deja también sin efecto las anotaciones número 2 y subsiguientes, correspondientes a la compraventa del inmueble a favor de Jorge Ricardo Angulo Virachara, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

6. DOSIFICACIÓN PUNITIVA

Los delitos de falsedad material en documento público y de obtención de documento público falso, comportan una pena de prisión que oscila entre los cuarenta y ocho (48) y los ciento ocho (108) meses de prisión. El delito de falsedad en documento privado, comprende una pena de prisión dieciséis (16) a los ciento ocho (108) meses de prisión. Y, el delito de fraude procesal contempla las penas de seis (6) a doce (12) años de prisión, o lo que es lo mismo de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años, o lo que es lo mismo de sesenta (60) a noventa y seis (96) meses. Sin embargo, en tanto a través del preacuerdo se estableció que su participación fue la de un cómplice, en aplicación del inciso tercero del artículo 30 del Código Penal, este rango punitivo debe ser disminuido de una sexta parte a la mitad, así:

1. <u>Falsedad material en documento público:</u>

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**

24 a 40.5 meses de prisión	40.5 a 57 meses de prisión	57 a 73.5 meses de prisión	73.5 a 90 meses de prisión

2. Obtención de documento público falso:

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**
24 a 40.5 meses de prisión	40.5 a 57 meses de prisión	57 a 73.5 meses de prisión	73.5 a 90 meses de prisión

3. Falsedad en documento privado:

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**
8 a 28.5 meses de prisión	28.5 a 49 meses de prisión	49 a 69.5 meses de prisión	69,5 a 90 meses de prisión

4. Fraude procesal:

Cuarto mínimo	**1er cuarto medio**	**2do cuarto medio**	**Cuarto máximo**
36 a 57 meses de prisión	57 a 78 meses de prisión	78 a 99 meses de prisión	99 a 120 meses de prisión
100 a 283.5 SMLMV	283.5 a 467 SMLMV	467 a 650,5 SMLMV	650,5 a 834 SMLMV
30 a 42.5 meses de inhabilitación	42.5 a 55 meses de inhabilitación	55 a 67.5 meses de inhabilitación	67.5 a meses 80 de inhabilitación

Así las cosas y dado que, en el presente caso a Ruth Angélica López Gil, no le fueron aducidas circunstancias de mayor punibilidad, ni tampoco concurren a su favor circunstancias de menor

punibilidad de acuerdo con lo previsto en los artículos 55 y 58 del Código Penal, y aplicando los criterios de ponderación, razonabilidad y proporcionalidad a la luz de los parámetros que ofrece el artículo 61 de la misma codificación, la pena a dosificar deberá estar dentro del cuarto mínimo y, como no hay elementos que justifiquen la separación del extremo inferior, se impondrán las penas de: **VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISIÓN**, para el delito de falsedad material en documento público; de **VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISIÓN**, para cada uno de los dos eventos, por el delito de obtención de documento público falso; de **OCHO (08) MESES DE PRISIÓN**, por el delito de falsedad en documento privado y; de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN** y **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DE MULTA** para cada uno de los dos eventos por el delito de fraude procesal.

Asimismo, **SE INHABILITARA PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL MISMO LAPSO DE LAS PENAS PRINCIPALES** exceptuando el delito de fraude procesal que le corresponderá la pena de inhabilitación descrita por **TREINTA (30) MESES.**

Por otra parte, debido a que se presentó modalidad de concurso de delitos y de acuerdo a las reglas predispuestas en el artículo 31 del Código Penal[1], se partirá de la pena más grave, esto es **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN**, **CIEN (100) SMLMV** y **TREINTA (30) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS** por el delito de fraude procesal y; se aumentará en otro tanto por los otros delitos, dicho aumento corresponderá, tanto a la pena de prisión como a la de inhabilitación, a: **CINCO (5) MESES** por el delito de falsedad material en documento público; **CINCO (5) MESES**, para cada uno de los dos eventos del delito de obtención de documento público falso; **TRES (3) MESES** por el delito de falsedad en documento privado y; fraude procesal, en el evento restante, por **SEIS (6) MESES** y **SEIS (6) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**.

En conclusión, la pena definitiva a imponer a Ruth Angélica López Gil, será de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN, MULTA DE CIENTO SEIS (106) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** y **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS**, en su condición de coautora penalmente responsable de las conductas punibles ya referidas.

7. MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, según el artículo 63 del Código Penal, deben cumplirse los siguientes requisitos: i) que la pena impuesta no sea superior a cuatro

[1] **Artículo 31. Concurso de conductas punibles:** "El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas"

(4) años, ii) que la persona condenada carezca de antecedentes penales, iii) que no se trate de los delitos contemplados en el inciso segundo del artículo 68 A del Código Penal y iv) que en el evento de que existan antecedentes penales, las condiciones personales, sociales y familiares del sentenciado aconsejen que no existe necesidad de ejecutar la pena en establecimiento carcelario.

Entonces, a pesar que algunos de los requisitos los satisface la procesada, lo cierto es que el requisito objetivo concerniente a que la pena de prisión no debe superar los 4 años acá no se satisface, razón por la cual no es procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Por otro lado, para otorgar la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, a la luz del art. 38B del C.P., los requisitos por cumplir consisten en que, i) la pena mínima de la conducta punible no sea superior a 8 años; ii) no se trate de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A del C.P.; iii) se demuestre arraigo social y familiar del condenado y; iv) se garantice mediante caución el cumplimiento de ciertas obligaciones.

En el presente, ninguno de los delitos por los que se está condenando a Ruth Angélica López Gil contemplan una pena mínima superior a ocho (8) años como rasero máximo de índole objetivo para su concesión y; tampoco se trata de uno de los delitos contenidos en el artículo 68 A del C.P., razones por las que se puede superar el análisis del requisito objetivo.

Frente al arraigo familiar, encontramos que la defensa aportó un contrato de arrendamiento de vivienda urbana del 1º de mayo de 2020, suscrito por Clara Aponte Rivera con C.C. 41.561.570 en calidad de arrendadora y Ruth Angélica López Gil con C.C. 52.406.781 en calidad de arrendataria, del inmueble ubicado en la **Calle 36 H sur 6 B 39 este** de esta ciudad, por lo que el Despacho encuentra demostrado este requisito subjetivo.

Así las cosas, la sustitución de la pena por prisión domiciliaria es procedente en el caso concreto en favor de Ruth Angélica López Gil, previa suscripción del acta de compromiso y otorgamiento de caución prendaria por el equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente, la cual puede estar garantizada mediante póliza, que debe presentar mediante título judicial ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C.

Adicionalmente, se le hace saber que la comisión de una nueva conducta delictiva, el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, o el hecho de no acudir a suscribir la diligencia de compromiso dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del fallo, conllevará a la revocatoria del sustituto y en ese evento deberá cumplir la sanción que aquí corresponde de manera intramural en el establecimiento de reclusión que para ese efecto disponga el INPEC, por conducto del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

8. OTRAS DETERMINACIONES

En firme el fallo se comunicará del proferimiento de esta sentencia a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal y luego se remitirá el expediente ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital por competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 459 de la Ley 906 de 2004.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTITRÉS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PENALMENTE RESPONSABLE y como consecuencia de ello **CONDENAR** a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.406.781 de Bogotá, como **COAUTORA** de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo, a las penas principales de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE CIENTO SEIS (106) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL** a la pena accesoria de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS**.

TERCERO: NEGAR a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL** el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

CUARTO: **CONCEDER** a **RUTH ANGÉLICA LÓPEZ GIL**, la sustitución de prisión domiciliaria de la pena de prisión que deberá cumplirla en la **Calle 36 H sur 6 B 39 este** de esta ciudad, la procesada deberá suscribir acta de compromiso y otorgamiento de caución prendaria por el equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente, la cual puede estar garantizada mediante póliza, que debe presentar mediante título judicial ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C.

QUINTO: ORDENAR que, por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, **SE OFICIE** a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá

Zona Centro, para que se disponga**:**

1. La cancelación de la anotación No. 13 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-301905.

2. La cancelación de la anotación No. 1 del 14 de enero de 2015 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1928734. Se aclare que, en tanto Ruth Angélica López Gil no fue propietaria legítima del inmueble en cuestión, la cancelación de esta anotación deja también sin efecto las anotaciones número 2 y subsiguientes, correspondientes a la compraventa del inmueble a favor de Jorge Ricardo Angulo Virachara, Wilmar González Aldana y José Ignacio Parra Rodríguez.

SEXTO: DAR CUMPLIMIENTO al acápite otras determinaciones.

En firme el fallo se comunicará del proferimiento de esta sentencia a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal y luego se remitirá el expediente ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital por competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 459 de la Ley 906 de 2004.

SÉPTIMO: Las partes quedan notificadas de esta decisión en estrados y contra la misma procede el recurso de apelación, que deberá interponerse en el acto y sustentarse de manera inmediata, o por escrito, dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Sandra Janneth Lugo Castro
Juez
Juzgado De Circuito
Penal 023 Función De Conocimiento
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3287115aa28abd34cac800451340dcf26198bcb926abdeca0c563abd4cc8a00f**
Documento generado en 08/05/2023 03:39:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica